

| | |
|--|-------------------|
| Es lógico que una sociedad agredida se defienda : recopilación de artículos 2003-2007. Volumen II | Título |
| Palau, Tomás - Autor/a; | Autor(es) |
| Asunción | Lugar |
| Fundación Rosa Luxemburgo DIAKONIA BASE-IS | Editorial/Editor |
| 2013 | Fecha |
| | Colección |
| Seguridad alimentaria; Corrupción; Elecciones; Economía; Estado; Políticas públicas; Política; Pensamiento crítico; Discriminación; Derecho a la tierra; Paraguay; | Temas |
| Libro | Tipo de documento |
| "http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/base-is/20170330034842/pdf_66.pdf" | URL |
| Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es | Licencia |

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences

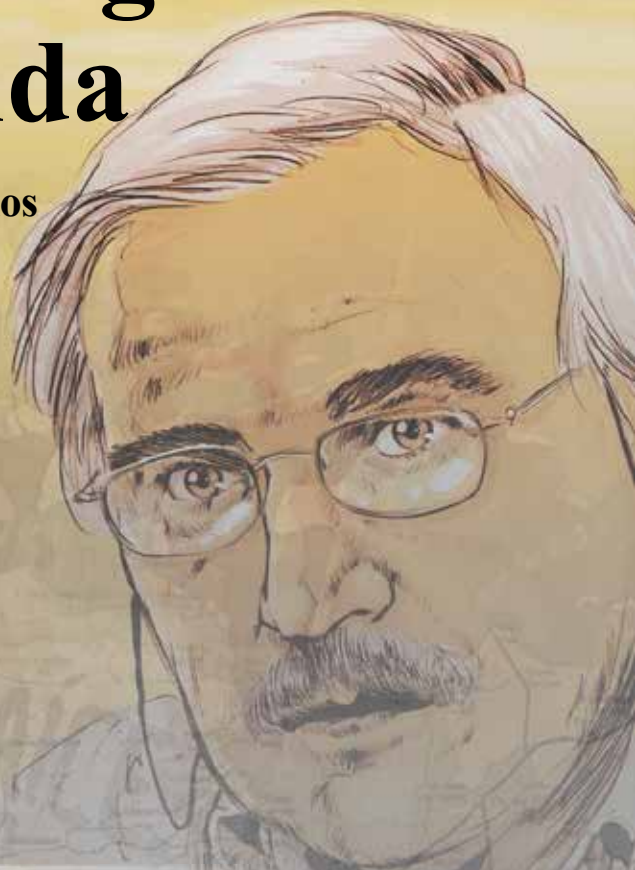


Es lógico que una sociedad agredida se defienda

**Recopilación de artículos
2003-2007**

Volumen II

Tomás Palau Viladesau



investigaciones sociales

Tomás Palau Viladesau

Es lógico que una sociedad agredida se defienda

Recopilación de artículos
2003-2007

Volumen II



investigaciones sociales





investigaciones sociales

BASE Investigaciones Sociales

Ayolas 807 esq. Humaitá

Tél. (595–21) 451 217 Fax. (595–21) 498 306

baseis@baseis.org.py

www.baseis.org.py

Asunción, Paraguay

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo solidario de
DIAKONIA y Fundación Rosa Luxemburgo.



Es lógico que una sociedad agredida se defienda. Volumen II
(Asunción, BASE IS, diciembre 2013).

Ilustración de tapa: Enzo Pertile

ISBN 978-99967-749-2-8



Copyleft.



Esta edición se realiza bajo la licencia de uso creativo compartido o Creative Commons. Está permitida la copia, distribución, exhibición y utilización de la obra bajo las siguientes condiciones.



Atribución: se debe mencionar la fuente (título de la obra, autor, editorial, año).



No comercial: se permite la utilización de esta obra con fines no comerciales.



Mantener estas condiciones para obras derivadas: Sólo está autorizado el uso parcial o alterado de esta obra para la creación de obras derivadas siempre que estas condiciones de licencia se mantengan para la obra resultante.

Índice

| | |
|--------------------------|----------|
| Presentación..... | 9 |
|--------------------------|----------|

2003

| | |
|---|-----|
| “Políticas” agrarias en el Paraguay. Instrumentos de la discriminación.. | 17 |
| La izquierda ante las elecciones..... | 44 |
| En el Paraguay se habla mucho de política y poco de poder..... | 51 |
| La IIRSA: tan desconocida como devastadora | 54 |
| El doble discurso: nueva arma del neoliberalismo en el cono sur. Reflexiones sobre la breve estancia de Nicanor en el Palacio de los López..... | 60 |
| Antecedentes de la corrupción en el Paraguay. Casos que comprometen al endeudamiento externo en los 80s..... | 68 |
| Seguridad alimentaria: cada vez menos segura, cada vez menos alimentaria | 81 |
| Situación de los migrantes en el país | 89 |
| La gestión de Duarte Frutos hasta ahora..... | 104 |

2004

| | |
|---|-----|
| Capitalismo agrario, transgénicos y expulsión campesina | 113 |
| Previsibles impactos sociales del ALCA..... | 118 |
| Tanto va el cántaro a la fuente que por fin se rompe..... | 133 |
| ¿Conservadores o atrasados? Pistas para entender lo que no está haciendo el gobierno con los campesinos..... | 137 |
| La reacción campesina y popular ante la soja..... | 140 |
| Caracterización del país | 146 |
| Nicanor, 15 de abril, Ginebra..... | 151 |
| De cómo podría una republiqueta sojera atraer inversiones productivas..... | 155 |
| La madre de los imbéciles está siempre embarazada..... | 158 |

| | |
|--|-----|
| Promesas incumplidas, consecuencias previsibles | 161 |
| Despotismo, poder y pobreza..... | 164 |
| Las entidades caóticas ingobernables (ECIs)..... | 167 |
| Por qué hay pobreza en el Paraguay | 170 |
| La insensatez de la violencia equivale a la insensatez de los políticos | 173 |
| El derecho a la tierra | 176 |
| Pérdida de soberanía y transferencia de activos nacionales. La funcionalidad de la administración Duarte Frutos para los intereses neoliberales..... | 179 |
| En manos de quiénes estamos y hacia dónde nos están queriendo llevar | 185 |
| El gabinete de crisis y sus tribulaciones | 188 |
| Violencia y tierra: el poder despótico de la propiedad..... | 191 |
| Dinastía, faraones y esclavos | 196 |
| La tierra, de bien natural a objeto de acumulación | 199 |
| Sobre el paro cívico | 204 |
| Diez años después, más pobres y más oprimidos. Breve recuento | 206 |
| La aprobación de transgénicos, privatizaciones y el recalentamiento social..... | 222 |

2005

| | |
|---|-----|
| La entrega del territorio Pto. Casado: ofensiva neoliberal y caducidad de lo propio..... | 227 |
| Ocultar la verdad es una forma de mentir | 232 |
| Rumsfeld en Paraguay. Ni puntadas sin hilo, ni visitas sin motivo | 237 |
| La discriminación a personas migrantes | 242 |
| El Estado nacional paraguayo, ¿un anacronismo? | 251 |
| Hipótesis plausibles acerca de estrategias geopolíticas poco perceptibles | 255 |
| Soja transgénica, Monsanto y Derechos Humanos en el Paraguay | 261 |
| Comida y petróleo. Otro escenario de la ofensiva neoliberal | 265 |

| | |
|--|-----|
| Las tropas norteamericanas y la geografía del saqueo. | |
| América Latina, MERCOSUR y Paraguay en la mira..... | 271 |
| Hay 995 años por delante..... | 275 |
| El movimiento campesino en el Paraguay. Conflictos, planteamientos y desafíos | 280 |

2006

| | |
|--|-----|
| Apuntes para una interpretación de la coyuntura agraria..... | 297 |
| La sequía, de fenómeno climático a instrumento de sometimiento | 301 |
| A Nicanor le asoma el fantasma de la alternancia | 306 |
| Segunda Contra-Conferencia de Mesas Redondas sobre “Soja Sustentable” | 311 |
| Nuevo Mesías para viejos pobres, el algodón transgénico | 315 |
| Paraguay: La destrucción de la vida campesina a manos de la soja | 320 |
| El Foro de la Triple Frontera, su importancia | 323 |
| MERCOSUR, la ofensiva no conservadora..... | 326 |
| ¿Qué es Comercio Justo? | 330 |

2007

| | |
|--|-----|
| Bush, extraviado en los laberintos asiáticos | 339 |
| Hacia una mejor comprensión de las funciones de la agricultura..... | 344 |
| Las buenas intenciones no bastan. ¿Es el proyecto Lugo sólo un nuevo intento? | 346 |
| Algunas cosas que no se dicen sobre la situación económica mundial y sus impactos sobre el Paraguay. De cómo la caída del dólar podría causar enormes problemas a nuestra desfalleciente economía | 360 |
| Todos los incendios son provocados..... | 365 |

2008

| | |
|---|-----|
| Intereses económicos fuertemente entrelazados | 371 |
| La reforma agraria en el Paraguay ¿una promesa electoral más? | 375 |
| Paraguay en la incertidumbre o, cuando las elecciones no garantizan gran cosa..... | 378 |

2009

| | |
|--|-----|
| Comunicación y poder, estadísticas y política | 385 |
| Sobre el territorio y la desterritorialización | 388 |
| Extranjerización del territorio paraguayo. Presentación | 391 |
| La recuperación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay. En el marco de Políticas de Estado de energía..... | 394 |
| Agronegocios: el control del sistema agroalimentario..... | 399 |
| Si quieres el perro, acepta las pulgas | 412 |

2010

| | |
|--|-----|
| ¿Cuál agricultura, la de las máquinas y agrotóxicos o la de las personas? | 417 |
| Disparen contra el SENAVE. El agronegocio patatea | 420 |
| El valor de un Plan..... | 423 |
| Luguista de la primera hora | 425 |
| ¿Usted es del PCC? Más que eso, yo soy una señal de estos tiempos... | 428 |

2011

| | |
|--|-----|
| Se aprobó el algodón transgénico | 435 |
| La chipa y la soja. La pugna gastro-política en la frontera agroexportadora del Este paraguayo. Prólogo | 437 |
| Los procesos socioeconómicos determinantes de los movimientos migratorios | 441 |
| La emigración paraguaya a la Argentina..... | 441 |
| “El modelo agrario paraguayo es anticampesino” | 449 |
| Sobre la cantidad (probable) de campesinos sin tierra en el país | 454 |

2012

| | |
|---|-----|
| “Paraguay puede convertirse en Narco-República si la sociedad paraguaya no toma en serio el peligro de retroceso en el 2013” | 459 |
|---|-----|

Presentación

El presente libro es un sentido homenaje al compañero y maestro Tomás Palau, a dos años de su partida física. Fue un vigoroso pensador crítico de la realidad social paraguaya y regional, cuya obra teórico-práctica es un aporte fundamental para los esfuerzos orientados a la comprensión y transformación social del país. La vasta obra escrita por Tomás, en su mayor parte desarrollada desde la década de 1970 hasta el año 2011, mantiene una notable actualidad y vigencia, dado que los elementos que le dieron origen, la sustancia que lo nutrió, es decir, la propia realidad económica, social, política y cultural del Paraguay, mantiene vigentes y arraigados sus elementos estructurales y organizadores.

En la actualidad los agronegocios están mostrando su cara más violenta y excluyente, promoviendo la expulsión de la población campesina e indígena, así como la criminalización y represión de sus luchas y sus sueños, tal como en diversas ocasiones Tomás lo había anticipado. Él presenció a fines de los años 70, en la zona de Alto Paraná, lo que denominó la segunda oleada del capitalismo en el campo, o el tercer proceso de colonización del país. Aquellas observaciones las sistematizó en diversos documentos de gran relevancia histórica y riqueza analítica. Uno de los estudios derivados de aquel trabajo en la zona fronteriza con Brasil fue el libro ‘Los campesinos, el Estado y las empresas en la frontera agrícola’, en coautoría con María Victoria Heikel, publicado por BASE ISEC en 1987, donde se describían, con una amplia base documental, los dramáticos cambios que se verificaron en la zona Este del país, a partir de la masiva penetración de productores brasileños, quienes introdujeron el modelo de la agricultura mecanizada del tipo *farmer* y la soja como principal rubro de renta.

Desde aquellos años y a través de esos estudios de campo, Tomás desató un largo y decidido combate contra el modelo productivo y especulativo que se iba instalando en el país, alistándose en la batalla de ideas desde su sencillo escritorio y sus escritos, desde la cátedra universitaria o desde la charla y el análisis en innumerables asentamientos campesinos, tomando partida decididamente por los campesinos y campesinas, por los que soportaban los rigores de un sistema productivo excluyente e inhumano.

Con toda la fuerza de sus principios denunció, una y otra vez, la extrema desigualdad en la tenencia de la tierra, el deterioro creciente de las condiciones de vida en el campo, la complicidad y el servilismo permanente del Estado para con los terratenientes, “empresaurios”, mafiosos y multinacionales, la brutalidad del poder político y económico para con los disconformes, los pobres en lucha, la devastación ambiental y la profundidad de sus impactos para generaciones futuras, la pérdida de la soberanía y la rica cultura alimentaria del pueblo cada vez más amenazada por el sistema agroalimentario mundial, entre muchos otros aspectos de la realidad sobre los que pudo reflexionar.

Tomás fue un intelectual comprometido con las luchas por la justicia y la igualdad social, convencido de que la llave para salir de la pobreza y el subdesarrollo del país estaba en la lucha por la tierra y la realización de la reforma agraria, que democratice el acceso a la misma y permita desarrollar experiencias productivas sustentadas en la fecunda historia, la cultura y experiencia del campesinado y las comunidades indígenas. Su palabra siempre fue coherente y firme en función a sus principios y convicciones, con una honestidad intelectual poco habitual, por lo cual siempre expresó sus puntos de vista, sea quien sea el receptor de su palabra, sea cual sea el auditorio frente al que hablaba, sea el que sea el medio de comunicación que lo entrevistara.

En su largo camino, cual campesino que reparte semillas en la tierra y cosecha sus frutos, Tomás fue un sembrador de ideas, de inquietudes, de certezas, de pensamientos, que encontraron tierra fértil en sus compañeros y compañeras, sus estudiantes, sus oyentes, sus lectores, sus amigos y amigas, sus colegas y colaboradores, su pueblo. Esa larga y paciente siembra ha dado múltiples frutos, ha nutrido el caminar de mo-

vimientos sociales, de organizaciones populares, de militantes y gente comprometida, que en la palabra de Tomás ha encontrado pistas, ha encontrado una luz para ver mejor el camino, tanto el recorrido como el por recorrer.

Al mismo tiempo, decenas de investigadores sociales se han formado en el ejemplo y la estela dejada por este riguroso y agudo científico social. La paciente reflexión de Tomás buscaba siempre y lograba trascender la superficie de los hechos sociales, económicos, culturales y políticos de relevancia, para fijar la mirada y el análisis en los elementos de fondo, en los determinantes estructurales, en las causas profundas de esos hechos, para que una vez realizado esto, ensayar una explicación sobre la dinámica vinculante entre causas y efectos, de una manera pedagógica y simple.

Su escritura se caracterizó por su simplicidad, su capacidad explicativa, un estético barniz literario y una creativa ironía cuando era necesario. Además de ello, su rigurosidad le permitía proyectar escenarios futuros a partir de las dinámicas sociales y el análisis dialéctico, y anticiparse a sucesos que posteriormente ocurrirían. En muchos de sus escritos se vislumbra una sustancia profética: sólo como ejemplo reciente, en un artículo escrito en el mes de marzo de 2009, cuando el gobierno de Fernando Lugo aún no cumplía un año, Tomás advertía: “... de seguir este rumbo, en 2013 la ciudadanía apelará a la fórmula más vale mal conocido que bien por conocer y volverán las oscuras golondrinas que durante seis décadas expoliaron nuestra dignidad como nación”. El tiempo confirmó lamentablemente esa predicción, así como la capacidad anticipatoria del análisis de Tomás.

Este libro contiene artículos escritos entre los años 2003 y 2007, pero además se agregan algunos de los últimos años (2008-2012) que no fueron publicados en el primer volumen de esta antología. Por la relevancia de los temas, hemos incluido también algunas entrevistas concedidas a distintos medios de comunicación. Debemos hacer la salvedad que hay artículos que no tienen fuente pues ha sido imposible identificarlas; otros, han sido escritos (en la misma fecha) para dos medios diferentes, por lo cual en esta publicación se optó por transcribir sólo uno de ellos, y otros, escritos conjuntamente con colegas investigado-

res. El material se encuentra ordenado según año de publicación de los diferentes artículos.

Finalmente, desde el equipo de BASE IS con el apoyo de agencias amigas, compartimos con ustedes este valioso e histórico material, que como todo lo que Tomas analizó y escribió, tiene como único propósito contribuir a las luchas y la emancipación de nuestro pueblo.

Equipo de compañeras y compañeros de BASE IS

Asunción, marzo 2014

2003

“Políticas” agrarias en el Paraguay

Instrumentos de la discriminación*

Prioridades: los temas de una agenda incumplida

En el Paraguay no existe una “política agraria” como tal. De hecho, no existe siquiera una política nacional de desarrollo. Y así como no hay desarrollo nacional, tampoco puede haber desarrollo rural. Se presenta a continuación la situación agraria del país, según un esquema de temas-problema que debieran haber sido abordados por el gobierno para atender la cuestión rural, describiéndose brevemente la situación actual de cada uno de ellos.

La reforma agraria

Cuando en 1963 el Instituto de Reforma Agraria es sustituido por Ley N° 852 creándose el Instituto de Bienestar Rural, el gobierno del entonces Gral. Stroessner había dado por sentado que los campesinos ya habían recibido la tierra que debían recibir y que ahora empezaba, no la etapa de la reforma agraria sino la del bienestar rural. Nada más contrario a la realidad. Es a partir de entonces que se agudizan los problemas para una sociedad campesina agobiada por la corrupción, la ineptitud administrativa y las políticas económicas socialmente excluyentes.

* Revista NOVAPOLIS Edición N° 2 - Febrero 2003. GEO en: <http://novapolis.pyg-lobal.com/>

La distribución de la tierra y la problemática de los sin tierra

El Cuadro de abajo resume la distribución de la tierra en el país por tipo de unidades de producción, donde se puede apreciar la formidable concentración.

**Cantidad de explotaciones y superficie detenida
según grandes sistemas de producción**

| Tipo de unidades | Cantidad de fincas | % | Superficie en has. | % |
|---|--------------------|------|--------------------|------|
| Indígenas | 389* | | | |
| Unidades de producción menor de 20 has. | 247.617 | 80,6 | 1.466.768 | 6,2 |
| <i>Farmers</i> con tractor propio o ajeno (50-200 has.) | 4.370 | 1,4 | 395.061 | 1,7 |
| Gran empresa agrícola (mayor de 500 has.) | 354 | 0,1 | 1.440.181 | 6,0 |
| Ganadero (mayores de 500 has.) | 4.627 | 1,5 | 18.808.256 | 79,0 |

* Se trata de establecimientos y/o reservas indígenas - Fuente: FAO (1996 a.)

El Índice de Gini¹, que está estimado por la FAO como el más alto del mundo para el caso de la tierra rural, muestra (para los últimos datos disponibles, ya que el Censo Agropecuario que debía realizarse en el 2001 no se realizó por falta de presupuesto) que lejos de orientarse hacia una desconcentración, la tierra rural en el Paraguay tiende a irse concentrando cada vez más.

Sin existir un censo confiable, se estima que no son menos de 200 mil las familias ya constituidas o jóvenes adultos que no tienen y que buscan tierra. Hay pues una fuerte presión sobre dicho mercado y un grave problema social que se deriva de esa problemática.

La regularización de la tenencia

Se estima (FAO, 1996) que en el país existen no menos de 120 mil pequeñas propiedades rurales ocupadas, sin que se ostente el título de propiedad respectivo, la mayoría de las cuales son explotadas y poseídas desde larga data “sin que se haya regularizado su dominio” (p. 61). Aunque el Código Civil norma sobre la usucapión en ocupaciones de

¹ Mide la concentración de factores. El valor 0 supone equidistribución perfecta; en este caso, todas las familias tienen igual cantidad de tierra. El valor 1 implica que un solo propietario detenta toda la tierra.

buena fe por 10 o 20 años, no hay legislación que permita un sistema administrativo rápido al acceso de los campesinos, para garantizar el adecuado derecho a defensa de los eventuales perjudicados y que permita normalizar en el corto plazo estas situaciones. Por lo demás, no existen mecanismos legales que posibiliten un proceso de saneamiento de la propiedad de los predios rurales que permita saber cuál es la situación real en cada zona del país. La falta de regularización en la tenencia de la tierra es un estímulo al desarraigo y la descampesinización.

La provisión de infraestructura social en asentamientos

No es posible fomentar el arraigo en comunidades campesinas en las que hay dificultades de acceso al agua potable para la población, en las que no hay electricidad o ésta es sólo monofásica, en las que no hay escuelas o su acceso es difícil, en las que no hay Puestos o Centros de Salud debidamente equipados y con personal idóneo, en las que no hay telecomunicaciones, y falta o es irregular el servicio de transporte público. Otro tanto puede decirse respecto de las vías de comunicación (caminos vecinales y troncales) que no son caminos practicables todo el año.

La gran mayoría de las comunidades campesinas no cuentan con todos los bienes y servicios mencionados más arriba. Esta es una tarea que deben realizarla diferentes reparticiones estatales en mutua coordinación. La insuficiente dotación de infraestructura social en ellas fomenta el proceso de desarraigo y forma parte de un programa político y económico anticampesino.

La provisión de infraestructura productiva en asentamientos

Otro tanto ocurre con la infraestructura productiva necesaria: el crédito formal público (proveído a la pequeña agricultura por el CAH o el BNF) no llega sino al 7% de los productores; se ha desmantelado la red de almacenaje de granos y otros productos agrícolas que disponía el MAG; la asistencia técnica es de deficiente cobertura, sólo existe para rubros de exportación y desde hace unos tres años ha empezado a ser terciarizada, proceso que ha obtenido hasta el momento muy magros re-

sultados con los pequeños productores; la red de comercialización está en manos de los intermediarios, acopiadores, camioneros, almaceneros, lo cual redundará en una expropiación de los escasos excedentes de los productores dados los precios pagados en finca; la educación agrícola de nivel medio está siendo desmontada y la universitaria está direccionada sólo para ciertos rubros. Sin los insumos técnicos de crédito y comercialización no es viable ninguna producción agraria. La agricultura *farmer*, en este sentido, sobrevive gracias a las prestaciones ofrecidas por las grandes cooperativas a las cuales se encuentra asociada.

Cuestiones medioambientales

La agricultura familiar en el país se ha desarrollado históricamente en ecosistemas degradados. Las tierras a las que tuvo acceso ya habían sido previamente explotadas, principalmente en sus recursos forestales aunque también estaban agrícolamente agotadas. Históricamente el agricultor familiar ha sido también utilizado como fuerza de trabajo para convertir montes raleados en tierra agrícola. Este fenómeno se intensificó especialmente a partir de mediados de la década de los '60s.

La recuperación de suelos

Como resultado del proceso mencionado, los suelos se encuentran en estos momentos con graves problemas de fertilidad. Una estimación efectuada recientemente por la Industria Nacional del Cemento afirma conservadoramente, que de manera urgente, la región Oriental del país requiere al menos 2 millones de toneladas de cal agrícola, sólo para corregir los más acuciantes problemas de acidificación del suelo. Algunas organizaciones campesinas, como la MCNOC, han incorporado en su agenda el planeamiento productivo de sus organizaciones integrantes, promover la recuperación de los suelos, a los efectos de aumentar la productividad.

Expansión del área sembrada vs. Productividad

En estas últimas tres décadas se han dado paralelamente tres procesos de perjudicial gravitación para la agricultura familiar. Por un lado, una

notable expansión del área de siembra de cultivos de exportación (algodón y soja) y en general del área dedicada a agricultura (con escaso aumento de la productividad). Por otro lado, un aumento del área destinada a la ganadería², con particular énfasis en el área cultivada. Con pasturas para engorde de ganado, los dos procesos anteriores generaron un formidable proceso de deforestación. No se registran aumentos importantes en los rindes por hectárea de los principales cultivos, los aumentos de producción, principalmente de los cultivos de exportación, se han hecho a expensas del área sembrada y no del aumento de la productividad. Esta es una lógica perversa que desembocará necesariamente en agudos procesos de desertificación, una vez llegado al límite de explotación del área agrícola apta.

El problema de la deforestación

El desarrollo de una agricultura extractiva en las últimas décadas explica cómo, de la inmensa masa boscosa original, queda sólo un 32,3% de has. Esta agricultura degradadora del medio natural pone en peligro la biodiversidad y el equilibrio ecológico. El Paraguay destruye anualmente un área de bosques y pastos equivalente al 1,44% de su territorio, lo que ubica al país como el máximo deforestador del mundo en términos proporcionales: deforesta anualmente 5.888 Km². Con este ritmo de destrucción, teóricamente el bosque se acabará en los próximos 20 años. El impacto de esta agricultura aniquiladora resulta asombroso en la región Oriental, que perdió el 73% de sus bosques en menos de 50 años (de 8.8 millones de has. en 1945 a 2,4 millones de has. en 1991). Sus consecuencias en el ámbito de la erosión genética de los suelos, secamiento y contaminación de las aguas, son evidentes.

² La carga ganadera en general es baja. A nivel nacional, sobre el total de hectáreas de las explotaciones agropecuarias, el ganado mantenía las siguientes proporciones (cabezas/total de hectáreas agropecuarias): 1956, 0,27; 1981, 0,29; 1991, 0,33. El paulatino incremento de este índice es resultado de la expansión de las pasturas cultivadas y de otras prácticas que permiten elevar la carga por Ha, pero el incremento es muy lento y los valores se mantienen (FAO:1992).

El problema del agua (acuíferos, contaminación, riego agrícola)

Como resultado de los procesos antes mencionados y el uso cada vez más intensivo del suelo, especialmente por vía de la aplicación de agro-tóxicos, la casi totalidad de los cursos y espejos de agua de la región Oriental del país se encuentran contaminados y/o colmatados.

Los recientes descubrimientos acerca del acuífero Guaraní han puesto de manifiesto el efecto contaminante a mucha mayor escala que pueden llegar a tener sobre esta reserva de agua dulce, las actuales prácticas agropecuarias que son en buena medida, el resultado de un modelo de crecimiento basado en la especialización productiva en el que se fomenta el monocultivo.

La enorme disponibilidad de agua del país, a su vez, no se corresponde con la cobertura de agua potable, tanto en zonas rurales como urbana, para la población (que es una de las más bajas en América Latina), ni con la necesidad –en casos de cultivos intensivos– de disponer de riego agrícola.

Las prácticas de cultivo

Al igual que la tradicional agricultura indígena, la familiar campesina hace un uso hasta si se quiere destructivo de la roza y quema, práctica como se sabe, supone un gran desperdicio de madera, la pérdida de plantas de valor que no estorban mayormente a los cultivos, se pierde un rompevientos o sombra natural, útil para algunos cultivos. La quema de la roza hace perder fertilidad al suelo reduciéndose la posibilidad de hacer más de una cosecha al año de ciertas plantas; por el contrario, la roza sin quema conserva el monte y la selva, posibilita más tiempo de uso de una misma parcela, y al permitir un cultivo cada vez más intensivo, la superficie necesaria para una familia es menor, de modo que la expansión demográfica de la finca tendrá efectos menos expulsivos. Pero como lo afirma el propio Bertoni, la ventaja directa más importante, es sin duda la conservación indefinida de la fertilidad del suelo. La quema entonces, practicada en casi todos los casos en que el campesino hace rozados, es uno de los principales factores de degradación y pérdida de fertilidad del suelo. Evidentemente, la quema incorpora a

través de sus cenizas, diversos minerales que estarán a disposición de las plantas cultivadas de manera inmediata. Sin embargo, la práctica continua de la quema desnuda a los suelos y si éstos son frágiles, la erosión hídrica y eólica en el mediano plazo induce a su degradación.

A lo anterior debe agregarse la creciente artificialización en el uso del suelo (como se vio son suelos ya magros), uso de arados, en algunos casos tractorización, uso de pesticidas y la inexistencia de prácticas conservacionistas como curvas de nivel, uso de abono verde, siembra directa y el acortamiento o desaparición de los tiempos de descanso de la tierra dentro de determinadas rotaciones de cultivos. Quizá la práctica conservacionista más difundida sea la de los cultivos combinados, que es también una herencia de la agricultura indígena.

Sobre estos aspectos, los gobiernos de las últimas décadas no han tomado la menor iniciativa de capacitar a los pequeños agricultores, quienes, agobiados por la creciente pobreza se vuelven, sin pretenderlo, en agentes de destrucción medioambiental, aunque sin compararse en envergadura con la depredación causada por las grandes empresas agrícolas y el latifundio ganadero extensivo.

La ganaderización del suelo agrícola

La mayor parte del ganado nacional es criado en establecimientos extensivos de mediano y gran tamaño (FAO, 1992). La superficie total con pasturas cultivadas (que en 1996 casi no existían) alcanzaban en 1991 (último dato disponible) a 2.2 millones de has. Las praderas naturales (en general de muy baja productividad) llegaban ese año a 12 millones, por expansión de la frontera ganadera (eran sólo 10 millones de has. 10 años antes). Estas cifras dan una idea de la expansión de esa frontera, especialmente de las de pasturas cultivadas, muchas de las cuales se han establecido en Departamentos como los de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú de neta y exclusiva vocación forestal y en menor medida agrícola.

La carga ganadera es baja: la evolución, según la FAO, es la siguiente: 1956, 3.7 has. por cabeza de ganado; 1981, 3.4 has, por cabeza; 1991, 3 has. por cabeza. El rinde promedio de leche por cabeza del ganado

lechero es de 3 litros por día. Esta información indica: fuerte expansión de la frontera ganadera (más tierra para la ganadería) a costa incluso de la frontera agrícola y sobre todo, de la destrucción de montes naturales; baja carga por unidad (extensividad) y bajos rendimientos lecheros.

El ordenamiento territorial

Las constataciones derivadas del modelo de colonización implantado durante las últimas décadas muestran que: (i.) la colonización sólo parcialmente pudo cumplir con el cometido de descongestionar áreas minifunditarias antiguas, (ii.) los objetivos estrictamente económicos arrojan resultados aún más negativos; la mayoría de los campesinos asentados se vio sujeta a fuertes procesos de diferenciación, (iii.) tampoco fueron favorables los logros en los planos de la integración y organización social y política, como resultado –entre otros factores– del modelo físico adoptado y de la escasa autonomía y participación de los beneficiarios en la implementación de los planes de colonización, (iv.) los resultados medioambientales fueron asimismo negativos, por la distribución no apropiada de los suelos y recursos hídricos al interior de los asentamientos (FAO, 1996 b.).

En resumen, no se han utilizado métodos de asentamiento que produzcan la posibilidad de arraigo. Predominaron los métodos de colonización que no permitieron el desarrollo de procesos organizativos, comunes en otros países y propios de la vida social campesina. Además, el modelo de asentamiento –basado en el diseño cuadricular– ha contribuido para el mal manejo de los recursos naturales y la no preservación del medio ambiente.

Aspectos institucionales y jurídicos

La obsolescencia del sistema institucional del sector

Los arreglos institucionales dispuestos por el gobierno paraguayo, además de desactualizados³, son altamente ineficientes y dilapidadores de recursos. Ya en 1990, una Misión Interagencial organizada por la FAO y reunida en Asunción, al hacer un diagnóstico sobre el tema (FAO, 1996), ha enfatizado la necesidad de una adecuación y fortalecimiento institucional, en especial del MAG y del IBR, los cuales deben “introducir cambios sustantivos e inmediatos” para garantizar una eficacia mínima en su accionar. Entre los problemas que entorpecen más directamente el desempeño institucional, se menciona la descoordinación y la tendencia a la disolución de responsabilidades, la falta de jurisdicción del IBR para hacer cumplir los planes de trabajo, la escasez de recursos financieros con los que opera el conjunto del sistema, así como la baja consistencia de la información disponible sobre las características socio-demográficas, catastrales y jurídicas de la sociedad campesina en general, y en particular, de los beneficiarios del programa de apertura de nuevos asentamientos⁴.

La reforma del marco institucional y jurídico está expresando, administrativa y jurídicamente, los fuertes intereses de tipo político que giran en torno a la gran propiedad de la tierra, los precios agrícolas y la comercialización, la canalización de los flujos financieros y el negocio de la agroexportación (Palau y Teófilo E., 1992).

Los problemas de la legislación agraria

En buena medida, el marco institucional inadecuado es resultado del marco legal existente en el país con el que se rige la sociedad agra-

³ La disposición legal que regula al Ministerio de Agricultura y Ganadería por ejemplo, es el Decreto Ley N° 13681 que data del 4 de agosto de 1950. Según uno de los titulares de la cartera durante el gobierno de Andrés Rodríguez, “la actual estructura orgánica no permite un desarrollo rural acorde con las expectativas del pueblo paraguayo”.

⁴ Estos rasgos están tratados con más detalle en Palau (1991).

ria⁵. El mismo es incompleto, en la medida que no ha reglamentado varios artículos constitucionales y en particular los referidos al derecho de todo campesino a la tierra propia y el que se refiere a la libertad de agremiación. Estas omisiones contrastan con la profusión de leyes, decretos y reglamentaciones que amparan al sector empresarial y semi-empresarial con intereses en el sector agrícola.

Por lo demás, aún cuando existe en la letra, ya sea por las características políticas del régimen, ya sea por los patrones (normalmente especulativos) de acumulación predominantes, la vigencia del legalismo proclamado forma parte de la lógica del doble discurso. Las demandas legales o legítimas del campesinado no son normalmente procesadas por los organismos administrativos correspondientes.

Aspectos económico/productivos

El crédito agrícola

Datos del Censo Agropecuario 1991 revelan que sólo el 34% de los productores censados cuentan con créditos. Al cotejar las fuentes, se tiene que el 21% del total de productores obtiene crédito de acopiadores y comerciantes, mientras que el 6% tiene acceso a la banca privada, ya sea directamente o a través de cooperativas. La cobertura de la banca pública apenas llega al 7% de los productores y a diferencia del crédito informal, el crédito oficial se distribuye preferentemente entre productores con más de 20 hectáreas (Dietze, 1992).

El crédito al que acceden mayoritariamente los campesinos es el informal, a través de acopiadores. Este es un crédito de muy alto costo financiero, atado a un cultivo y no a la capitalización de la finca, al mejoramiento del suelo o a otra finalidad de desarrollo, lo cual refuerza el monocultivo.

⁵ Constituido básicamente por algunos artículos de la Constitución hasta ahora vigente (Nº. 106 al 110, 129 y 132), y las leyes 622 y 662 de 1960 y la 853 de 1963 que establece el Estatuto Agrario, además de otras leyes y dispositivos que crean o reforman las diferentes reparticiones públicas encargadas de la cuestión agraria, y los planes sectoriales elaborados por el MAG y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

Los campesinos pobres del país tropiezan con múltiples problemas para acceder al crédito: carencia de garantías reales o poco valor de las mismas, montos bajos e incompletos, trámites burocráticos engorrosos y préstamos de corto plazo, es decir, de pronta recuperación. La carencia de crédito diversificado, otorgado oportunamente para actividades de corto, mediano y largo plazo en las UPF imposibilita la construcción de infraestructura (silos, galpones, depósitos) para preservar en condiciones adecuadas sus cosechas, niega también la posibilidad de incursionar en cultivos permanentes (frutales, reforestación, etc.), de igual manera impide la conservación y recreación del medio (terrazas, curvas de nivel, rompevientos, etc.).

Debe tenerse en cuenta que el acceso al crédito está constitucionalmente garantizado. En efecto, en el Art. 115, inc. 6 se lee: “Garantía de crédito: el otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios”.

La comercialización y el almacenamiento

La modalidad más común de acceso de los campesinos es a través de agentes del mercado que llegan al productor por medio de eslabones sucesivos de intermediación, entre los cuales el acopiador local ocupa un rol privilegiado, ellos son quienes controlan todos los tipos de vínculos entre el productor y el mercado. Son problemas típicos, los bajos precios pagados en finca, y la compra anticipada que traslada al productor los costos de comercialización (costo de flete, ensilaje y otros). En cuanto a los rubros destinados al mercado interno, se identifican los siguientes problemas: estrechez del mercado, deficiente infraestructura, falta de apoyo a la producción y comercialización, falta de desarrollo de la demanda, y la falta de una estrategia productiva nacional. Todos estos problemas en relación al capital y la tecnología, hacen que la capacidad de la familia productora descansa principalmente en la disponibilidad de mano de obra familiar y eventualmente en la capacidad de contratar a terceros.

La diversificación productiva

Los entes públicos de crédito, las instituciones ligadas a la política agropecuaria (MAG) y desarrollo rural (IBR) no están enmarcados en un solo sistema coherente que oriente y priorice el desarrollo, considerando las políticas diferenciadas, la diversificación agrícola y como eje la agricultura sostenible. El estado actual del crédito profundiza la pérdida de la seguridad alimentaria, por cuanto estimula sólo ciertos cultivos de exportación, debilitando en consecuencia la estrategia campesina de la diversificación agrícola. Esto implica a su vez una visión no integrada de las unidades productivas familiares en términos de sus relaciones y complejidades. Tan importante como mirar y reflexionar por qué un alto porcentaje del campesinado es considerado “inviabile”, es reflexionar sobre la tipología de los “viables” y comprender qué les sucedió, cómo la diversificación y la combinación agricultura-ganadería explican mejores niveles de ingreso y cómo la productividad del trabajo es superior a las otras fincas. Ahí están los elementos para una verdadera política diferenciada de la que tantos hablan, pero que no son considerados en la formulación de las políticas públicas supuestamente dirigidas a los agricultores familiares campesinos.

La autosuficiencia alimentaria: ¿una utopía?

El patrón tradicional del sistema productivo campesino está basado en la diversificación productiva. Según éste, la prosperidad campesina no es percibida como la producción en gran escala de un cultivo de renta, sino ajustada a un modelo de seguridad alimentaria y de estabilidad ante las contingencias climáticas y del mercado agrícola, por medio de la diversificación agropecuaria. Este modelo está condicionado al nivel de tecnología y a la mano de obra familiar disponible en cada finca.

El estado actual de los servicios que llegan a la pequeña agricultura de base familiar (crédito, asistencia técnica, circuitos de comercialización, facilidades de almacenamiento y otros) regidos por el modelo de crecimiento “hacia fuera” con exportación de productos primarios, disminuye la seguridad alimentaria y, en consecuencia, agrava las con-

diciones de empobrecimiento, no sólo de la población rural, sino la de los consumidores urbanos.

Las prácticas de diversificación productiva y seguridad alimentaria están íntimamente unidas. Se constata en el Paraguay rural actual, que las acciones sectoriales atentan directamente contra ellas, quizás con el propósito deliberado de aumentar la dependencia alimentaria, el arma más eficaz de control político de la población.

El contrabando de productos agropecuarios

Según los informes del BM, de todo el comercio exterior paraguayo, sólo el 49,5% está registrado, el resto es contrabando (tanto en mercaderías ingresantes como salientes). Entre los rubros que ingresan, un importante porcentaje está compuesto por rubros agrícolas o son productos industrializados de origen agrícola (harina, chacinados, azúcar y otros).

Desde comienzos de la década de los setenta el problema se agudizó, hasta el punto que ha sido uno de los mecanismos más efectivos de desmantelamiento de la agricultura campesina. El Paraguay, desde esa fecha, ha operado en la práctica como un país “integrado”, en el sentido de integración regional (sin MERCOSUR y sin ALCA). La producción hortícola, frutícola, de tubérculos (incluyendo la mandioca y el almidón) y granos, se arruinó por efecto del ingreso ilegal de dichos productos desde los países vecinos.

Los temas pendientes con Cancillería (el comercio agrícola y los organismos multilaterales)

Son variadas y ricas las relaciones que podrían existir entre los productores agrícolas y la Cancillería nacional. Sin embargo, pueden enumerarse al menos los siguientes elementos disfuncionales:

Por un lado, se requiere del *saneamiento de las embajadas paraguayas en el exterior*. Actualmente las legaciones diplomáticas paraguayas son de corte eminentemente político (salvo algunas excepciones). Las representaciones comerciales en las mismas cumplen un papel apenas

figurativo y no están puestas en función de apertura de nuevos mercados para la producción nacional. Adolecen además de falta de personal calificado, un exiguo presupuesto operativo (cuando existe) y notables deficiencias en materia de manejo de información actualizada. En no pocos casos el criterio político-partidario con el que es nombrado el personal diplomático, hace que estas representaciones se conviertan en espacios de reproducción de la corrupción imperante en el país. En estas condiciones es muy limitado el alcance de las mismas como “sensores remotos” para la activación productiva nacional.

Por otro lado, se constata una fuerte *corrupción de los organismos internacionales*. El Paraguay es un país que por sus niveles de pobreza, es elegible para un importante volumen de ayuda no reembolsable, para la aplicación de proyectos que apunten al desarrollo de los sectores más vulnerables de la población, entre los cuales se encuentra, obviamente, el campesinado. Esta ayuda no es aprovechada, ya que los encargados de gestionar la cooperación internacional prefieren apelar a créditos, los cuales generan importantes “comisiones” para sus gestores políticos a nivel local.

Además, buena parte de los proyectos de la cooperación internacional, como se vio, casi todos ellos reembolsables (y por lo tanto formando parte de la deuda externa del país) incorporan la presencia de “expertos” extranjeros (normalmente funcionarios o amigos de esos organismos) que abultan innecesariamente los préstamos que posteriormente deben devolverse. La malversación de buena parte de esos fondos por las autoridades locales, no podría comprenderse sin la complicidad de estos funcionarios internacionales y sus instituciones. En este sentido, debe señalarse que la ejecución de esos proyectos (muchos de los cuales son perfectamente prescindibles y aceptados sólo por la presión que los mismos organismos ejercen para aceptarlos), es absolutamente irregular. No existen mecanismos efectivos de fiscalización y seguimiento que garanticen el uso correcto de esos recursos.

Finalmente, el desarrollo rural paraguayo implica la realización de un estrecho seguimiento de los acuerdos y tratados internacionales en los que el Paraguay está involucrado, especialmente los que se refieren al: ALCA, UE, OMC, WEF (transnacionales) y otros. El trabajo de la

Cancillería y otras dependencias especializadas del gobierno (tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo) no cuentan con los recursos –humanos y presupuestarios– para llevar a cabo un trabajo de seguimiento permanente, ni de formulación de políticas explícitas sobre la posición que el gobierno debiera adoptar ante estos organismos. La posición paraguaya es siempre cortoplacista y oportunista, vale decir, tratando de sacar el mejor provecho posible de circunstancias coyunturales, y/o desarrollando un comportamiento institucional obsecuente con respecto a las directrices apuntadas por embajadas importantes o intereses privados o corporativos.

Aspectos culturales

Según Meliá (1999), en el Paraguay han subsistido dos modelos de economía que conviven y se desbaratan mutuamente; la economía de la producción (sea ésta destinada o no al mercado) y la de succión (vulgo: picardía, zoquete). Es a esta forma de economía extractiva que se achaca, y con razón, la privación, el despojo, la escasez y en general, todas las carencias. Estas formas de economía se pueden contraponer como la economía del agricultor y la del cazador. Lo que el autor hace con ello es criticar las formas de apropiación teóricamente ilimitada y prácticamente excluyente de las economías coloniales de mercado. Para él, “la corrupción económica hay que buscarla inicialmente en la alteración y trastrueque de las formas de economía incluyentes, para dar paso al modelo y prácticas excluyentes. La política del Estado real permite la acumulación de bienes en unos a costa de la exclusión de otros”. En este sentido, la cultura expresa de varias formas simbólicas esa apropiación indebida e injusta y la distribución con falta de equidad.

Referidos a formas tradicionales y alternativas de ocupación de la tierra

En esa mezcla de prácticas agrícolas reales (cultura productiva) con el bagaje simbólico de lo extractivo (cultura cazadora), enmarcado en “valores” recientemente incorporados como los del individualismo y la propiedad privada, es que se debate infructuosamente el campesinado: sin tecnología, sin acceso a mercados, con imágenes culturales invia-

bles hoy en día, sin protección y culturalmente avasallado por los *mass media*.

Parte de esa imaginería es la del lote propio. Pero resulta claro que, con una Tasa Global de Fecundidad de la mujer rural de 4.7 hijos, con la apropiación fraudulenta y/o especulativa de la tierra y con la descampesinización, el futuro del campesinado no pasa precisamente por “el lote propio para cada familia campesina”⁶. Es necesario que la familia rural vaya haciéndose a la idea de formas alternativas de propiedad u ocupación. Propiedad comunal, propiedad cooperativa, en fin, formas de apropiación y explotación comunitaria de la tierra y la producción de sus derivados. Por el momento, tales planteamientos resultan culturalmente chocantes, pero será la realidad del futuro inmediato la que modifique esas pautas, esperablemente por la vía del convencimiento y no por la de la descampesinización completa.

La juventud rural: entre el paternalismo y la exclusión

La sociedad rural paraguaya, además de ser profundamente machista es también gerontocrática; los y las jóvenes (hasta la formación de una pareja estable) no son sujetos de plena confianza. Este acendrado paternalismo, junto a los factores de tipo socioeconómico e institucionales, generan condiciones predisponentes de vulnerabilidad que exponen a la juventud rural a la exclusión social (Caputo y Palau, 2002). Si a esto se agrega la falta de tierra (con el potencial simbólico que ello representa en términos de autorrealización), la falta de oportunidades laborales, la temprana deserción escolar, las restricciones para el acceso a la salud y otros factores adversos, es posible advertir que la juventud rural está expuesta a un futuro, por decir lo menos, incierto.

⁶ “El individualismo es un factor que obstaculiza la conformación y consolidación de la asociación, hemos perdido todos esos valores de la solidaridad, el famoso minga, el ojopói y compañía. Hay que volver a inculcar todos esos valores que tenía el paraguay para que pueda entender la importancia de la asociación y finalmente el tema de la propiedad individual que está promocionada por todos los medios y por todas las instituciones en donde también se mezcla con cuestiones ideológicas, para que la gente pueda entender que esta también es una propiedad privada solamente con una función social y no totalmente privada e individual”. Entrevista a Tomás Zayas.

La marginación y explotación de la mujer rural: machismo y atraso

De acuerdo a declaraciones de organizaciones de mujeres rurales e indígenas (CONAMURI), los principales problemas que afectan a la mujer rural son los siguientes: i. falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en la producción, ii. no reconocimiento de sus derechos por discriminación, iii. falta de apoyo efectivo del gobierno para las productoras: no hay apoyo técnico, créditos, comercialización, artesanía y otras industrias, iv. falta de atención eficiente en salud a mujeres y niños y niñas, v. no priorización del gobierno a la educación campesina y con programas de alfabetización, vi. falta de valorización de la cultura y la identidad propia en lo referido a salud alternativa, germoplasma, medio ambiente. Se mencionan también las dificultades de la participación de la mujer en las organizaciones y actividades de capacitación, falta de confianza en las mujeres en la organización, liderazgos masculinos autoritarios en las organizaciones, sobrecarga laboral en tareas productivas y reproductivas, falta de autoestima de la mujer rural, división producida por los partidos políticos, al igual que por las sectas religiosas, falta de escolaridad.⁷

La alteración de los patrones de consumo

En un trabajo ya relativamente antiguo (Heikel, 1991), se mostró documentadamente que en la población de barrios marginales de Asunción, la mayoría de ellos migrantes recientes de zonas rurales, los patrones de consumo tanto de alimentos como de combustibles, habían cambiado de manera sustantiva. Se observaban alteraciones en el patrón de consumo alimentario de la población, tanto en los estratos altos (con caída de la demanda por rubros de producción campesina tradicional, como maíz, poroto, maní, batata, mandioca) y su sustitución por producción alimentaria industrial, como en los estratos bajos, sustituyendo aquellos rubros tradicionales por otros de cocción más rápida⁸. En resumen, se pasa de combustibles renovables (leña) a GLP, o a una combinación

⁷ Parte de estas reivindicaciones han sido expuestas también en CPC (1996).

⁸ Debido a la rápida inserción de la mujer popular al mercado de trabajo y su menor disponibilidad de tiempo para cocinar, así como por el encarecimiento de los combustibles domésticos (Heikel: 1991).

que incluye gas. En alimentos, de productos de cocción lenta (porotos, tubérculos) a aquellos de cocción rápida (en base a hidratos de carbono, o chacinados baratos). Esto implica una caída en la ingesta calórico-proteica (se pasa del payagua mascada a la hamburguesa, al decir de B. Meliá), lo cual a su vez supone una sensible pérdida en la calidad alimentaria de la población.

Así como se ha alterado el consumo de alimentos y combustibles, también la población rural experimenta cambios en el consumo de bienes culturales: música, tipo de distracción, de vestimenta, de materiales de construcción, de insumos productivos agrícolas.

Estos cambios tienen en común el hacer más dependiente al consumidor rural de bienes y servicios no producidos por ellos mismos. Este aumento de la dependencia consumista exacerba la necesidad de dinero efectivo, lo cual impulsa –en el mejor de los casos– a insertarse en planes productivos de cultivos de renta, o a formas anómicas de comportamiento social.

El escenario futuro de arrastrarse las tendencias recientes

Las tendencias observadas muestran:

- un creciente empobrecimiento de la población rural, principalmente campesina.
- un incremento de la migración rural-urbana.
- una marcada tendencia al deterioro de los suelos (desertificación).
- deforestación masiva.
- riesgo probable de aumento del autoritarismo.

Como puede fácilmente apreciarse, el futuro de mediano plazo del Paraguay, de no haber un expresivo cambio de orientación política en el gobierno y una radical reorientación de las políticas económicas, se asemeja notoriamente a la situación hoy vivida por varios países del África sub-sahariana.

La coyuntura agraria en el país

Expresada de la manera más general, la coyuntura agraria del país⁹ es el reflejo de una estructura, de un modelo. El esqueleto de esa estructura y los componentes del modelo tienen piezas, o si se quiere, determinantes, que están tanto dentro como fuera del país. En este apartado no se hace referencia a los factores externos (que tienen que ver con la aplicación a escala mundial del capitalismo neoliberal). No obstante, se asume como principio, el planteamiento de los Calcagno (2002) en el sentido que los políticos que hoy conducen el gobierno son gerentes de los verdaderos dueños del país¹⁰. En el caso paraguayo los dueños son: el capital financiero, el gobierno norteamericano (y más específicamente el FMI), las multinacionales instaladas en el país (principalmente en el agro), los que dominan el contrabando y tráfico de sustancias y la oligarquía ganadera.

En el ámbito *político*, el actual gobierno se debate ante una gran deslegitimidad por parte de la ciudadanía y una manifiesta situación de ingobernabilidad. La principal fuente de esta deslegitimación y desgobierno es la generalizada *corrupción*. No es este el lugar para detallar el funcionamiento de este mal en el país, pero sólo en lo que se refiere a la situación agraria, se ha manifestado de diferentes maneras afectando al sistema institucional y a los fondos disponibles. Considérese por ejemplo las múltiples denuncias de organizaciones campesinas e incluso políticos locales acerca de la proliferación de funcionarios coimeros de IBR, las denuncias del parlamentario Llano sobre la “fábrica de planilleros” que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde se contabilizan al menos mil funcionarios que “cobran sin hacer nada”.

⁹ Se trata de una coyuntura larga cuyos trazos empezaron a insinuarse a partir de los acontecimientos de 1989.

¹⁰ “Hasta ahora, sólo se plantea que se vayan los gerentes, con lo que la situación no cambiará mucho. Incluso a los dueños no les interesa ahora mantener a gerentes ineficientes y corruptos, aunque en el pasado dieron muestras de lealtad infinita. Si se van los gerentes y no ocurre nada más, los dueños pondrán a otros para que sigan defendiendo sus intereses. Es la base del discurso que limita el problema a la ética en términos de personas: pongamos gente honesta que todo mejorará. No es así. Porque la corrupción no es un efecto perverso del modelo, sino la instancia política necesaria para su reproducción en el tiempo. No se trata de poner gerentes éticos al frente del saqueo, sino de cambiar de esquema y echar a los dueños” (4).

El negociado con la compra de los tubos matapicudos para el algodón por parte de este mismo Ministerio, o las fuertes dudas y suspicacias que despierta la aplicación de las facilidades impositivas a la maquila en el sector agrícola, que es considerada una maniobra para la evasión de impuestos por parte de ciertas empresas beneficiadas por el tráfico de influencias.

Asimismo, durante los últimos meses han sido innumerables las denuncias acerca de la intensificación del *contrabando*. Una publicación reciente del diario brasileño O Globo menciona que “el contrabando de Paraguay hacia Brasil cuadruplica a las exportaciones”. Según esta publicación el valor de las mercaderías ingresadas a Brasil de contrabando desde nuestro país asciende a U\$ 1.200 millones a través de Ciudad del Este. Esta es sin embargo, la preocupación brasileña, la del productor paraguayo se centra en el contrabando desde el Brasil y la Argentina.

En efecto, el contrabando afectó este año a productores cañeros (aunque aumenta exportación de azúcar orgánica, 95% de la exportada es orgánica), a los industriales lácteos, criadores de aves, productores de almidón, productores frutihortícolas (53% de productos frutihortícolas que se consumen en el país son de origen extranjero). Todos estos sectores han sido muy duros en sus críticas hacia el MAG, organismo al que se le atribuye la principal responsabilidad de este ilícito.

Al aumento del contrabando durante el año 2002 ha contribuido además la fuerte devaluación del peso argentino, y más recientemente la devaluación del real (meses antes de la elección de Lula). Además de hacer crecer el contrabando se ha registrado una fuerte caída en las exportaciones paraguayas.

Esta corrupción que se manifiesta en su dimensión económica, tiene su correlato en el plano político con la manipulación político-partidaria que hacen los partidos tradicionales (principalmente el partido de gobierno) de las necesidades de un pueblo empobrecido y en buena medida desmoralizado, entre el cual el campesinado es mayoría. Esta situación se viene acentuando durante los últimos meses del 2002 debido a la proximidad de las elecciones internas de los partidos y la general de abril del 2003.

En el ámbito más estrictamente *económico*, el encuadre general que permite interpretar la coyuntura está dado por las fuertes presiones del FMI para la profundización en la aplicación de políticas de “liberalización” económica. El gobierno tuvo que retroceder en junio, en sus intentos de privatizar dos de las principales empresas públicas del país y en modificar la ley de Bancos, pero las acciones en esta dirección continúan. Por exigencias del FMI en agosto el Ejecutivo lanza la idea de hacer aprobar una “Ley de transición económica”, de reducción de gastos, una nueva movilización popular vuelve a pararla, al menos en sus artículos más dañinos para la producción agraria (precio del gasoil, impuesto a las exportaciones y otros).

En este contexto, el empresariado paraguayo da muestras de una gran miopía corporativa al apoyar dicha ley (a excepción de la AIP), aunque percibe la desastrosa situación de las finanzas públicas, debido sobre todo a las presiones presupuestarias ejercidas por el pago de los servicios de la deuda externa (con atrasos de U\$ 25 millones a julio pasado). Así, propone tibiamente una operación de *swapping*, canjear parte de la deuda externa con productos agropecuarios.

Las políticas neoliberales producen –tal como está demostrado para América Latina– recesión. La combinación neoliberalismo + corrupción conduce necesariamente a ella. Se observa así durante el año un crecimiento del gasto público en 14% (hasta agosto), los ingresos globales del gobierno cayeron 0,6%, aumentó el déficit fiscal (por aumento en servicios personales, compra de bienes y servicios principalmente) que se estima será del 2,4% del PIB al finalizar el año.

Por otro lado, en el ciclo 2001/02 las pérdidas en el sector agrícola se estimaron en U\$ 130 millones, según la Capeco (cámara de productores de semillas oleaginosas). Los ganaderos (sector altamente privilegiado) nucleados en la ARP llegaron incluso a pedir un refinanciamiento de sus deudas contraídas con la banca pública. En materia de crédito, fuentes autorizadas del CAH han ya adelantado que este banco no podrá recuperar Gs. 20 mil millones debido a la fuerte descapitalización de sus prestatarios. Por otra parte, los importadores de maquinarias agrícolas informaron que la venta de tractores y cosechadoras cayó un 75% en los últimos años. Con lo cual están afirmando que incluso la agricultura

farmer y mecanizada ha caído en una importante recesión. Sobre este punto, la FECOPROD intervino diciendo que los costos elevados de los insumos por efecto de la suba del dólar son los que están impidiendo la inversión en maquinarias. En el ámbito campesino se manifestó también un conflictivo malestar entre los cañeros de Iturbe por el no pago por parte de la caña entregada por los productores quienes llegaron a bloquear el acceso a la fábrica. Otros cañeros protestaron también en diversos puntos del país por los bajos precios. En Katueté, una zona de agricultura *farmer*, los productores agrícolas reclamaron no estar recibiendo apoyo alguno para la producción agrícola. En síntesis, según un técnico ligado al MAG, la crisis institucional es la que está frenando al agro.

Aún a riesgo de ser reiterativo, las políticas económicas adoptadas por el gobierno hacia la agricultura están llevando al desmantelamiento productivo del sector. Considérese para el efecto los siguientes datos: el propio MAG estima que el crecimiento agrícola descenderá en el ciclo agrícola 01/02, ya que la producción de soja cayó de 3.2 millones de toneladas a 2.9. Algo similar ocurrió con el algodón. Para el próximo ciclo, que se inicia en octubre 2002, el Ministerio del ramo considera que también se reducirá el cultivo de soja. Un meta conservadora de 1.7 millones de has. no podrá alcanzarse, apenas se llegará a 1.5 (esto implica entre 180 y 200 millones de U\$ menos para los productores). Las estadísticas del MAG revelaron que siete rubros agrícolas registraron durante el 2002 una fuerte caída: soja, maíz, algodón, maní, girasol, arroz y tabaco.

Aún cuando pudiera pensarse que la suba del dólar iría a beneficiar a los exportadores, la realidad muestra otra cosa: el componente importado de las exportaciones es tan alto que la pérdida en compra de insumos compensa las ganancias en la venta. Hay algunas excepciones a esto en el caso de pequeños productores que no requieren de insumos importados, tal fue el caso de los productores de banana que lograron ubicar importantes partidas en el mercado uruguayo.

Otros hechos muestran el carácter netamente anti-productivo del gobierno y de las políticas que implementa. Este es el caso del dictamen negativo del Ministerio de Industria y Comercio a adoptar medidas a

favor de la producción de biodiesel, la cual hubiera tenido un efecto notable de reactivación productiva, no sólo de la producción primaria sino –y sobre todo– de la industrialización de la *commodity*. No hace falta imaginación para ver por detrás, el fuerte dominio de las transnacionales del petróleo para tal determinación. El desmantelamiento productivo se acentúa con el cierre de fábricas que procesan productos primarios de origen agrícola, como en el caso del cierre de la Hilandería Genovese. Mientras tanto, la corporación de industriales, reunidos en la UIP, sigue haciendo gala de su orfandad intelectual, afirmaron al respecto que, a pesar de todo, “no creemos en el modelo de sustitución de importaciones ni en la protección de ciertos sectores productivos”.

Como resultado de este cuadro recesivo provocado por las medidas de corte neoliberal, se verifica también una *reducción del gasto social y las inversiones públicas*, aunque estos recortes abarcan la generalidad de los servicios sociales (salud, compra de tierra, vivienda, fondos destinados a indígenas, y otros), durante los últimos meses ha abundado la información acerca de la desprotección de la educación rural y agrícola (la que se imparte en los bachilleratos diversificados): trascendió así que el MAG y el Ministerio de Educación han llevado a una literal crisis a las escuelas agrícolas. Desde marzo de 2002 éstas no reciben ningún desembolso, se anunció igualmente que tendrán un recorte del 70% a partir de agosto y que para el 2003 tendrán un recorte adicional del 41%. Por otra parte la prensa es pródiga en informaciones acerca del lamentable estado de las escuelas rurales en varios puntos del país (hay especial referencia a las del Departamento de San Pedro y a la zona de Curuguaty).

Además de lo referido a la educación, la situación de abandono de los asentamientos es constante, tal es el caso concreto que trascendió, del reclamo de asistencia en el asentamiento Cruce Tacuara, Calle 10.000, Santaní realizado por la FNC. Pero esta situación puede considerarse generalizada.

Abandono a los asentamientos e *inseguridad jurídica* sobre la tenencia de la tierra por parte de la sociedad campesina, indican (por misión) políticas públicas explícitamente destinadas a desalojar el campo de campesinos. La tierra rural y la producción de alimentos y *commodi-*

ties son mercancías altamente valoradas por el capitalismo especulativo neoliberal. Desde hace varios años el país está presenciando este desalojo de sus tierras al campesinado para proceder a la ocupación empresarial del campo.

Durante los últimos meses los casos de desalojos han sido cada vez más frecuentes: en Mil Palos (R.A. Oviedo), en Yuty, en Alto Verá y otros casos aún más graves de desalojos en los que los campesinos, ya sea por necesidad, ya sea instigados por políticos locales, han ocupado o reservas ecológicas (caso de la colonia Yvypytá en Ygatimí) o asentamientos indígenas (como el caso de Arroyo Claro en Itapúa). Coincidentemente este aumento en el número de desalojos sucede durante el período en que el IBR anunció que no podrá usar la ampliación de Gs. 16 mil millones obtenida en el 2001 para compra de tierra por falta de desembolso de Hacienda. Esta es también una reducción del gasto social. El renunciado exministro de Agricultura, Lino Morel, había sido bastante claro al respecto: “Falta seguridad jurídica, por esto no hay inversión. Los campesinos solucionarán sus problemas sólo si ocurre un milagro”. Ese milagro faltante es el del diseño e implementación de políticas sociales rurales a favor del campesinado.

Como se apuntó más arriba, lo anterior tiene sus éxitos para el gobierno y el capital especulativo: el desarraigo continúa (se estima que anualmente unas 100 mil personas abandonan el campo y migran a algún centro urbano).

En cuanto a los *factores ambientales adversos*, debe apuntarse que, más allá de la prolongada sequía que afectó al país durante casi todo el año en algunas zonas y que produjo sensibles pérdidas en la producción principalmente campesina, continúa la depredación de los recursos naturales. La última noticia espectacular al respecto es la venta de parte de las reservas del Cerro Chovoreca en el Chaco a un estanciero particular. La compra de unas 400 mil hectáreas por parte de una empresa perteneciente a la secta Moon también en el Chaco, o la invasión de que fue objeto el Parque Defensores del Chaco en el distrito de Filadelfia, Chaco, por parte del Cnel. (SR) Dionisio Chávez Altumán. El nivel de deforestación a que llegó el país se refleja en un dato dado por el gremio de los madereros: Paraguay importó en el 2001 productos forestales por

US\$ 2 millones, exportó por US\$ 69 millones. Esto es, el país empieza a importar madera. La degradación del suelo, quizás el más importante efecto de la agricultura intensiva, de la práctica de la roza y quema, del uso intensivo de agrotóxicos, de la deforestación, sigue siendo uno de los principales temas técnicos abandonados por el gobierno y las políticas sectoriales. Como si fuera poco, un proyecto orientado a paliar este problema fue puesto en el tapete. La cooperación alemana exigió transparencia en el uso de los fondos en el caso del proyecto Mejoramiento de la Fertilidad del Suelo, que el gobierno negoció con la GTZ por un valor de US\$ 7 millones.

Todo este saqueo, al decir de los Calcagno, motivó que durante el año las organizaciones campesinas y gremios de productores medianos y grandes se movilizaran. Dichas *movilizaciones* tuvieron, durante el 2002, bastante más éxito que en años anteriores. Se realizaron varias, entre ellas:

Marcha campesina de la MCNOC, el 20 de febrero. FNC marcha en 20 marzo por la banca pública. Marcha campesina de la MCNOC, el 17 de abril. Conformación, el 15 de mayo del Congreso Democrático del Pueblo, quizás el hito histórico más importante de los últimos años en lo que a organización social se refiere, en el país. Marcha conjunta de la FNC con la MCNOC por el rechazo a las privatizaciones, a la reforma de la banca pública y a otras demandas, durante la segunda quincena de mayo y principios de junio. Esta marcha conjunta frenó las privatizaciones de COPACO y ESSAP. En esa ocasión, el PE dispuso que el ejército salga a las calles si fuese necesario. En agosto se firma un compromiso de unidad entre organizaciones campesinas de San Pedro. En octubre la Plenaria Popular realiza una Campaña para la reforma del Presupuesto General de Gastos de la Nación y contra el ALCA. En este contexto se realiza una movilización de CONAMURI contra el ALCA.

Por su parte los agricultores *farmers*, nucleados en la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) solicitaron, semanas antes de que se produjera, la renuncia de Lino Morel y la del viceministro de Agricultura Carmelo Peralta. Esta Coordinadora consideraba que los fondos para el financiamiento de soja son insuficientes. Proclamaban que si el gobierno pretende recaudar más, que roben menos. Se oponía a la suba

del gasoil. Denunció el mal uso de las letras de regulación monetaria. Manifestó su oposición a la suba del IVA agropecuario. Por todas estas demandas se realizó el III Tractorazo la semana del 23 de setiembre hasta el jueves 26, terminó con una fuerte represión en Edelira. Aglutinó a 60 organizaciones.

Además de estas movilizaciones mayores, continuaron las de los afectados por la represa de Yacyretá, que no cobran las debidas indemnizaciones. Continuaron también los problemas con los campesinos de Cordillera por la destitución de un alto funcionario de la Gobernación perteneciente a una organización campesina. Además, ya durante octubre, la MCNOC empieza a solicitar la aprobación de una ley de protección territorial contra brasileños, que había sido presentada por un diputado al Parlamento.

El clima social de las organizaciones de productores rurales, campesinos o no, es pues de efervescencia; resultado directo de la desastrosa gestión de la administración González Macchi en materia de atención a los problemas del sector. El desenlace más probable de esta situación de desgobierno, de corrupción, aplicación irreflexiva de políticas neoliberales, inseguridad jurídica sobre la ocupación de la tierra, destrucción imparable de los recursos naturales y creciente conflictividad social, pasa necesariamente por un aumento de la represión¹¹ cuando no, de una vuelta al autoritarismo como régimen de gobierno.

Bibliografía

Caputo, L. y T. Palau (2002). Juventud y exclusión social en el Paraguay, Informe Final, Asunción, BASE- Investigaciones Sociales/BM/PNUD.

Dietze, R. y otros (1992). Hacia una política de uso de la tierra en Paraguay, Asunción, Proyecto de Planificación del Manejo de los Recursos Naturales, GT/MAG/GTZ, 2ª. Ed.

FAO (1992). Ganadería bovina y producción de carne en Paraguay, 1960-2010: análisis y proyecciones, Asunción, STP/MAG/FAO, Proyecto TCP/PAR/153 “Apoyo a la formulación del Plan Agropecuario y Forestal”.

¹¹ Al respecto, la CODEHUPY denunció hace poco tiempo un verdadero terrorismo policial en asentamientos de S. José del Norte y Resquín. Casos similares se registraron en varios otros puntos del país.

FAO (1996). PROYECTO TCP/FAO/PAR/4553. Asistencia técnica al IBR, Documento Técnico Final, Asunción, FAO/IBR.

FAO (1996 a.). Legislación agraria y titulación de tierras, Borrador Tercera Misión, Asunción.

FAO/IBR, Programa de Cooperación Técnica: Apoyo a la Reestructuración del Instituto de Bienestar Rural.

Heikel, M.V. (1991). Hacer el fuego. La mujer suburbana y las técnicas de cocción de alimentos, Asunción, Base-IS/IDRC.

Meliá, B. (1999). Cómo imaginamos la economía paraguaya. En, Revista Acción, N° 181, 10-13, marzo.

Palau, T. (1991). Nuevos asentamientos rurales y crisis de la sociedad campesina en el Paraguay. Asunción, BASE-IS, Documento de Trabajo N° 32, julio.

Palau, T. y E. Teófilo (1992). Qué ocurrirá con el campesinado, Asunción, BASE-IS, Documento de Trabajo N° 36, enero.

La izquierda ante las elecciones*

Una pregunta que se escucha frecuentemente es, qué pasa con la izquierda en el Paraguay. Sin embargo, nadie se hace la pregunta de qué pasa con la derecha en el país. ¿Es el Partido Colorado un partido de derechas, o el PLRA, o el Encuentro Nacional? La dificultad en articular proyectos políticos estratégicos tanto para unos como para otros tiene una raíz histórica común: la burguesía paraguaya nunca se constituyó como clase y los trabajadores tampoco.

Así como el pensamiento conservador (muy acendrado en la sociedad paraguaya) está equitativamente presente en todos los partidos políticos tradicionales (ANR, PLRA) e incluso en varios de los no tradicionales (PEN, Patria Querida) sin que ninguno de ellos represente programáticamente los intereses de la derecha propiamente tal, así también, el pensamiento progresista está presente en todos los pequeños partidos del espectro de la izquierda, sin que ninguno de ellos represente, como tal, el pensamiento de la izquierda paraguaya.

Es en esta ausencia de definición ideológica de los proyectos político-partidarios que debe entenderse la desidentidad programática que caracteriza a los partidos conservadores, así como la dificultad de los

* Revista ACCIÓN N° 232. Abril, 2003. CEPAG.

partidos progresistas en sacar partido de un período de cuasi vacío de poder político que caracterizó la administración González Macchi, y de las condiciones –claramente propicias– para el crecimiento de fuerzas políticas que respondan a las crecientes demandas sociales generadas por el empobrecimiento, la corrupción y la ineptitud de los gobiernos colorados de la transición.

Así pues, aquella misma debilidad que ciertos sectores imputan a la izquierda paraguaya, es imputable a un proyecto doctrinariamente de derechas. Históricamente, la ausencia de una burguesía industrial fuerte (no hablamos de la débil burguesía comercial, o la muy primaria proyección de la oligarquía terrateniente) y de un proletariado industrial de alguna significación, parecería estar dándonos la clave para entender esta gaseosa conformación ideológica de los partidos conservadores por un lado, y la dificultad de planteamientos unitarios de los partidos progresistas por otra. Esta amorfa conformación programática es altamente funcional a un sistema de dominación política basada en el tradicionalismo, el compadrazgo y el liderazgo carismático.

| | Partido Político | Movimiento | Movimiento social | Frente electoral |
|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Participan | Partido de los Trabajadores Patria Libre | MIL M. 19 de Abril | Corriente Gremial Campesina | Izquierda Unida |
| | | Movimiento Patriótico Tetaguá (*1) | | Frente Amplio |
| | Partido Humanista | | | |
| Se abstienen | Convergencia Popular Socialista/ Partido Comunista del Paraguay/ M.R. Paraguay Pyahurá/ Partido de la Unidad Popular/ Partido Socialista de los Trabajadores/ Partido Socialista Paraguayo | | | |

(*1) Sólo presenta candidaturas regionales (Gobernación, Intendencia y Diputación) en el Departamento de San Pedro

Participación electoral

En el recuadro de arriba se presenta de manera esquemática la participación (o abstención) electoral para abril próximo de los partidos de la izquierda paraguaya.

Lo primero que llama la atención de este mapa es la posición abstencionista de dos de los tres partidos o movimientos de izquierda con mayor penetración en sectores sociales. En efecto, ni Paraguay Pyahurá (con importante base social en la Federación Nacional Campesina, la OTEP, la CNT, y otros grupos que conforman el Frente por la Defensa de los Bienes Públicos), ni Convergencia Popular Socialista (con un importante sector de la MCNOC y otras organizaciones que conforman la Plenaria Popular), se presentan a las elecciones. Sólo el Movimiento Patriótico Tetaguá (con una disciplinada base social conformada por la CPA-SPN) decidió participar con candidaturas regionales en el Departamento de San Pedro, aliado al Frente Amplio (por lo demás, relativamente huérfano de sustento social).

Un segundo hecho llamativo es que hay una relativa mayor presencia electoral de grupos progresistas en estas próximas elecciones. Desde luego, esto no necesariamente significa una significativa mayor presencia de los sectores populares dado lo anteriormente apuntado, la relativa orfandad de bases sociales de la izquierda participacionista.

Puede mencionarse como de interés igualmente, la irrupción del Movimiento Patriótico Tetaguá, que sí tiene una importante base popular, pero que emerge como la primera fuerza política de izquierda a nivel regional. Su no reconocimiento como partido político, forzó a los dirigentes a aceptar una alianza, en San Pedro, con un Frente Amplio muy debilitado como consecuencia de tempranas deserciones en su proceso de constitución.

Las dificultades para la construcción de un frente unitario de izquierda

La izquierda no pudo consolidar una política de inserción que le permita una presencia unitaria efectiva a nivel nacional debido a que existen visiones diferentes en la construcción de un proyecto progresista por

parte de los actores políticos y sociales. Estas visiones diferentes, más la falta de inserción social de algunos de los partidos pueden apuntarse como factores decisivos.

A partir de esos problemas, que son los problemas de fondo, los partidos de la izquierda pueden clasificarse en dos tipos. Aquellos que apuntan a una acción sobre la coyuntura, sin una política estratégica de construcción y aquellos que, si bien piensan actuar sobre la coyuntura, lo hacen con una política más estratégica, más de largo plazo.

Lo que la izquierda hizo en los últimos 15 años es tratar de convocar, movilizar y tratar de dirigir pero sin una base social que le permita tener una autoridad política y moral. Por eso no es extraño que la izquierda a veces haga actos con muy escasa concurrencia, si ni siquiera se tiene esa capacidad es difícil pretender participar de elecciones con éxito. Si aún así participa, el resultado repercute contra la propia izquierda ya que en vez de acumular, resta. En síntesis, la izquierda no tiene una base social importante.

Además de lo anterior, deben considerarse las diferencias ideológicas existentes al interior de ella. Como es de esperar, la cuestión ideológica es muy importante para darle una identidad a los movimientos y partidos políticos. Históricamente tales diferencias han pesado mucho: la intolerancia y el sectarismo, resultado de lecturas dogmáticas de textos clásicos, han hecho que en el pasado la izquierda prácticamente desapareciera. No obstante, desde el golpe de 1989 han existido varias experiencias de superación de las viejas fronteras ideológicas. En 1991, para la Asamblea Nacional Constituyente se hizo un gran frente de movimientos sociales y partidos políticos que se llamó el Frente Paraguay Pyahurá. Si bien es cierto que era otra coyuntura, otro escenario, no dejó de ser una importante experiencia. También lo fue la Unidad de los Trabajadores del Pueblo que participó en las elecciones nacionales de 1993, en donde por primera vez una rama del Partido Comunista hace una alianza con el PT (con una orientación vinculada en ese momento a la LIT, la 4a Internacional) y el PDP. Posteriormente, en la lucha social eso se ha seguido superando, en este sentido hay un gran avance.

Existen visiones diferentes en la construcción de un proyecto progresista por parte de los actores políticos y sociales

El ejemplo más claro de superación es la creación relativamente reciente de la Plenaria Popular Permanente, el Frente por la Defensa de los Bienes Públicos, y la acción conjunta de ambos: el Congreso Democrático del Pueblo. Esto supone un gran avance, ya no existen esas viejas discusiones sobre sutilezas ideológicas de manera tan aguda como antes, hay mucho más madurez aunque aún falta un largo camino por andar.

En el caso de Izquierda Unida, hay muchas diferencias entre Patria Libre y el PT (véase la posición de PL con respecto al proceso venezolano o la posición del PT en relación al proceso cubano), pero el valor está en que, en el sentido electoral, han encontrado un punto de unidad. Se espera que no sea oportunista desde el punto de vista electoral. Pero, el hecho que hayan acordado, y si mantienen un discurso coherente, también es un paso que contribuye aunque haya marcadas diferencias entre ellos.

En el caso de MRP Pyahurá, así como en el de Convergencia (dos de las fuerzas con importante base social), sus mismos dirigentes han aclarado que tomaron la decisión política de no participar de estas elecciones. Paraguay Pyahurá ha dado un paso con esta definición, van a participar de las elecciones cuando crean realmente que eso va a favorecer al movimiento popular, al movimiento progresista y a la izquierda, pero no en las condiciones actuales.

En otras palabras, la unidad de la izquierda en la lucha social se dio hace mucho tiempo, falta la unidad política electoral, para después completar una unidad estratégica que sería un tercer paso. Existe la convicción en algunos dirigentes de la izquierda paraguaya que falta poco por andar, pocos años probablemente para lograr una articulación real, “la unidad no se da porque uno quiere nomás, sino que hay una serie de factores en el proceso de acumulación de fuerza que determina que esas cuestiones se produzcan”, expresaba uno de sus dirigentes.

Se debe proponer un registro genérico, como un movimiento de todas las organizaciones políticas de izquierda, progresistas y del movimiento social

Condiciones para un éxito electoral de la izquierda

Tres son las principales condiciones para que pueda darse un avance de la izquierda en el plano electoral:

1. Que la participación electoral sea producto de la continuidad del proceso de construcción unitaria demostrada en el Congreso Democrático del Pueblo. De modo que esa maduración del movimiento social, popular y su articulación como movimiento político se dé también electoralmente. Lo que impidió esta articulación hasta el momento es que la izquierda que no tiene base social salga sola al terreno electoral. La disyuntiva parecería ser, se siguen repitiendo esquemas viejos y que fracasaron o se apunta a una cosa más seria (que puede o no salir) que sea diferente en cuanto a la política de construcción. Si la izquierda sale sola no aliada con el movimiento social que participó del CDP, no es seguro pero, corre mucho riesgo de desacumular fuerzas.
2. No participar con el registro de un partido. Se debe proponer un registro genérico, como un movimiento de todas las organizaciones políticas de izquierda, progresistas y del movimiento social. Esto no se dio, y lo que resultó, cada uno de los partidos con registro electoral tuvo sus razones para enarbolarlo.
3. Debe haber un acuerdo, basado en la delimitación previa de criterios, para la elección de los candidatos. Criterios que deben estar basados –entre otras cosas– en la calidad humana de los mismos.
4. Debe haber una unidad programática y la proyección de dicho programa debiera ir más allá de una mera propuesta electoral, sino que debiera constituir las bases de un frente de izquierda.

El movimiento campesino [...] generará más presión sobre los proyectos políticos existentes. Sólo eso determinará la unidad, más allá de los acuerdos programáticos o del método para elegir candidatos

Hacia fines del 2002, cuando había conversaciones sobre la posible constitución del frente, ninguna de estas tres condiciones se habían dado.

Mientras la izquierda no tenga alguna presión que venga de las masas, no habrá progresos. La praxis política por excelencia está en la presencia de las bases. La cuestión ideológica o la voluntad para aliarse o hacer alianzas no son definitivas. Si los partidos tienen una base importante a quien informar y rendir cuentas, no negociarán entre bambalinas. La izquierda organizada deberá responder a los requerimientos de esa masa que crece y pide.

Hay un avance importante de una parte del movimiento social. Juega un papel importante el movimiento campesino. En la medida en que ese sector madure, se generará más presión sobre los proyectos políticos existentes. Sólo eso determinará la unidad, más allá de los acuerdos programáticos o del método para elegir candidatos.

En el Paraguay se habla mucho de política y poco de poder*

En la superficie todo es bla bla, se parlamenta demasiado. Mientras, en el fondo se cuecen las habas (oñembojy kumandá). En otras palabras, los que mandan no están en la política, o al menos, los que están en la política mandan por mandado, mandan para otros.

Pongo primero cuatro ejemplos generales para pasar luego a los detalles. Paraguay es uno de los países con más alto índice de producción de kilowatts por persona del planeta, sin embargo uno de los dos principales rubros de importación es el petróleo, no se utiliza la electricidad para el transporte de carga y pasajeros ni domésticamente. Paraguay (o al menos la parte más densamente poblada de él) está literalmente asentado sobre una de las mayores reservas de agua del planeta, sin embargo, es el tercer país de América Latina con menor cobertura de agua potable para la población y no tiene riego agrícola. Paraguay es un país productor neto de alimentos (se puede producir casi de todo excepto algunas exquisiteces como caviar), sin embargo, hace ya casi una década pasó a ser un país importador neto de alimentos (importa más alimentos de los que exporta). Paraguay tiene una densidad poblacional que no llega a 15 habitantes por kilómetro cuadrado, sin embargo tiene más de 250 mil familias de campesinos sin tierra.

* Esta frase fue aplicada a la Argentina por el historiador italiano Paride Rugafiori citado por Ema Cibotti en Sin Espejismos. Diario La Nación, 15-04-2003.

Estos cuatro ejemplos nos muestran las insensateces que se cometen y que tienen –desde luego– un costo. Un costo social. Pero, ¿por qué se las comete?

Porque a los que tienen el poder real en el país les conviene. El poder es, en manos de cierta gente, un verdadero peligro. Es algo así como un mono con hojitas de afeitar.

¿Quiénes tienen el poder en nuestro país?: son aproximadamente cuatro grupos. Por un lado, las transnacionales que tienen aliados poderosos; la Embajada norteamericana, los organismos multilaterales (tipo FMI, BM, BID), los bancos y otros actores financieros y los alfiles técnico-administrativos domésticos (altos funcionarios de gobierno). Por otro, la oligarquía terrateniente, principalmente ganadera, pero crecientemente también una oligarquía no productiva que especula con la propiedad de la tierra. Tercero, los narcos, dedicados tanto al tráfico como a la producción de sustancias psicotrópicas (principalmente cocaína y marihuana respectivamente). Finalmente, los *empresaurios* (con u entre medio), dedicados principalmente al negocio de la import/exportación, a captar contratos de obras públicas, evasores, mercachifles de alto vuelo y delincuentes de guantes blancos en general.

Estas son las cuatro variedades de fauna rapaz que gobiernan el país. Los políticos son puestos donde están para representar a alguno de los intereses de esos cuatro grupos (lógico que hay excepciones, pero sólo para confirmar la regla). Es casi obvio que esta gente existe con el principal objetivo de degradar la política, para hacer que en la política no se traten los temas importantes para el país y su gente, sino que se traten intrascendencias. De este modo, los intereses de los que realmente tienen el poder, no se ventilan, no entran en la órbita de lo debatible, de lo parlamentable, no entran en el ámbito de lo democrático.

Tomemos el caso concreto de la forma como se está imponiendo la ley de adecuación fiscal. No hubo una explicación previa del Ejecutivo sobre sus objetivos y alcance (no se intentó crear consenso, al decir de Miriam Yore). A último momento, un encumbrado Pdte. de partido, representante de los intereses de una de las variedades de la fauna rapaz, dice a Nicanor que su bancada apoyará en senadores el mentado

proyecto de ley (donde el gobierno no tiene mayoría) siempre y cuando se suprima de esa ley el artículo referido al impuesto a los productores agropecuarios, en realidad a los grandes productores de soja que usan semillas de las transnacionales y exportan su producción a través de empresas también transnacionales. Así nomás se zanján las cuestiones políticas, estimado lector. Cuando de defender los intereses de las multinacionales de semillas y de la agroexportación se trata, siempre aparece un “iluminado” político a hacerles el favorcito.

Tenemos la ilusión de que vivimos en una democracia porque cada cinco años metemos un papelito en una urna (ahora se diría, apretamos un numerito en una computadora), mientras los que tienen el poder lo ejercen cotidianamente, fijando el tipo de cambio (así usurpan lo que hubiera podido quedar de excedentes a los productores de algodón), fijando las tasas de interés bancario (para que el crédito sea sólo para los que ya tienen plata), manipulando el Índice de Precios al Consumidor (para no incrementar los salarios), en fin, de miles de maneras y todos los días. En resumen, tenemos dictadura económica funcionando durante cinco años, por un día nos hacen creer que elegimos, y los que tienen el poder siguen ejerciéndolo despóticamente por otros cinco años, y así.

Como decía el historiador Rugafiori, creo que en el Paraguay tenemos que empezar a hablar más del poder. De lo que hacen los que realmente tienen el poder. Así podremos entender un poco más las causas de la miseria de un pueblo que se merece otros gobernantes, otro Código Electoral, otra ley de partidos políticos. El poder de la gente humilde cuando se organiza es muy superior al de esos cuatro grupos de fauna rapaz que tenemos como reales gobernantes.

La IIRSA: tan desconocida como devastadora*

La Integración de la Infraestructura Regional para SudAmérica (IIRSA)¹, es el equivalente al Plan Puebla Panamá (PPP) para el área centroamericana.

Ambos son proyectos complementarios al ALCA los cuales, a diferencia de este último, que está orientado principalmente al comercio y la invasión de productos y servicios norteamericanos a toda América Latina, se ocupa de proveer la infraestructura vial, fluvial, ferroviaria y comunicacional para facilitar el transporte y dorar de fluidos mecanismos de circulación a los productos que el neocolonialismo norteamericano impone e impondrá a los países sudamericanos

No son pocos los empresarios paraguayos que defienden ardientemente el paso por nuestro país de corredores bioceánicos (carreteras asfaltadas) que, partiendo del Atlántico brasileño, lleguen hasta el Pacífico boliviano o peruano. Del mismo modo, mucho se ha hablado desde hace unos años de la ferrovía de la soja, ferrocarril que una las regiones productoras de dicha oleaginoso y tenga como destino final algún

¹ Informe parcial sobre el IIRSA puede ser encontrado en <http://www.iirsa.org/esp/plan/plan.shtml>

puerto de los Estados brasileños de Paraná o San Pablo. Más polémica, pero igualmente defendida por numerosos empresarios es la iniciativa de empezar la “construcción” de la hidro vía Paraguay-Paraná². El argumento indefectiblemente usado es que “ampliara nuestros mercados”.

Pero ni el empresariado nacional, ni –mucho menos– la ciudadanía en general, tiene una cabal idea del por qué y de las consecuencias de iniciativas como la de la IIRSA.

La empresa Monsanto, con casa matriz en los EEUU, ha producido durante el 2002 la totalidad de la soja transgénica, además de otras semillas como las de maíz y la colza también genéticamente modificadas. En ese año se cultivaron en todo el mundo 36,5 millones de hectáreas de la soja GM, lo cual representa algo más de la mitad de toda la soja cultivada en el mundo. Las semillas proveídas *por esta única empresa* han generado rindes que alcanzaron los US 22 mil millones (llévase en cuenta que esa cifra es un poco más de tres veces el PIB paraguayo). La Monsanto es a su vez la única productora del glifosato utilizado como herbicida para dicho cultivo.

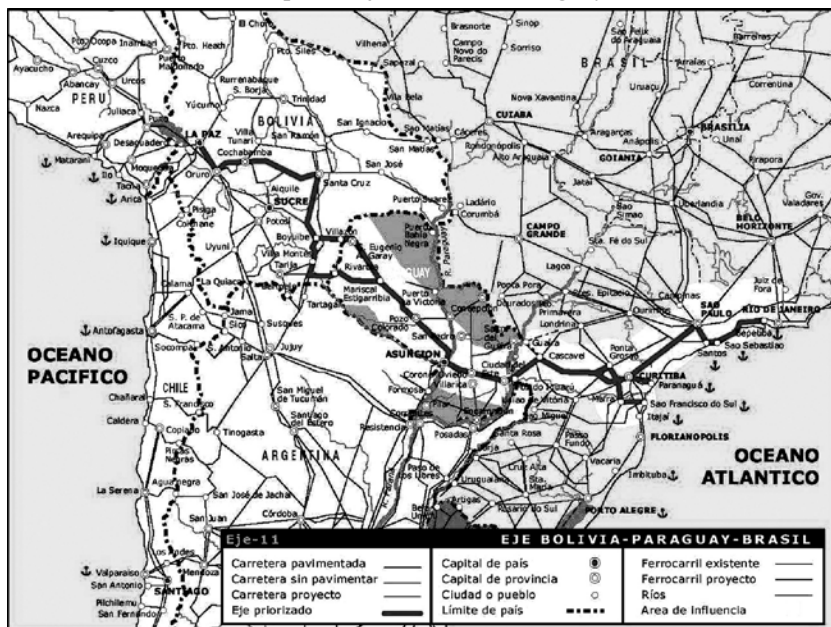
Con los productos de esta empresa como cascarón de proa, el imperio norteamericano pretende invadir los mercados mundiales y llegar al control total, monopolico, de la producción de un insumo que no es sólo utilizado para la elaboración de balanceado para animales, sino que es componente del 60% –en promedio– de todos los productos exhibidos en las principales cadenas de supermercados del mundo. Es, por lejos, el grano más versátil del que hoy se dispone.

Así como Irak contiene en su territorio el 12% de las reservas mundiales de petróleo, lo que lo hizo altamente apetecible para su anexión a Norteamérica, así también la mitad sur del territorio sudamericano contiene no sólo la totalidad del acuífero Guaraní, sino el mayor potencial para la producción de la soja mundial. Desde el Estado brasileño de Goiás al norte, hasta la provincia de Tucumán argentina al sur, y

² Iniciativa ésta que ha suscitado la alianza de redes de ONG, académicos y algunos pocos sectores políticos de los cinco países de dicha cuenta que apelaron a organismos internacionales para denunciar documentalmente la irracionalidad ambiental y social de dicho emprendimiento.

desde las proximidades del Atlántico, al Departamento de Santa Cruz boliviano, tal territorio (que incluye a todo el Paraguay) está destinado al monocultivo de soja transgénica (con algunos enclaves de productos regionales).

IIRSA: mapa del Eje 11, Bolivia-Paraguay-Brasil



Fuente: Google. Imágenes de IIRSA.

El IIRSA al igual que el PPP se suma a la capacidad expulsora de población de la soja transgénica. En esta circunstancia, el campesinado y las poblaciones indígenas están destinadas a emigrar, a dejar el campo. Se cumple así la utopía neoliberal, el campo no es para los campesinos.

A diferencia del PPP que fue dado a conocer por el presidente mexicano Vicente Fox el 12-02-01 y que fuera divulgado públicamente los días 26 y 27 de junio de 2002 en una reunión de presidentes centroamericanos y funcionarios del Banco Mundial (BM) el proyecto del IIRSA sigue manteniéndose en el más estricto hermetismo. Ni Roberto Salinas que es el coordinador nacional del IIRSA, ni los otros representantes

paraguayos a las reuniones de dicho organismo Antonio Adam Nill y Elianne Cibils Wilson Smith han hecho declaración pública alguna. La prensa paraguaya –siempre ajena a los temas de profundo interés nacional– tampoco ha dado la menor cobertura al tema (¿ignorancia o complicidad?).

El por qué, debe haber quedado ya relativamente claro: los intereses norteamericanos estratégicos pasan por el control monopólico, no sólo de la producción de bienes y servicios (lo que se conseguirá con el ALCA) latinoamericanos, sino por el control de los alimentos, y muy en particular, de la producción de soja, el alimento por excelencia.

Veamos ahora qué contiene la IIRSA. Según sus declaraciones oficiales “implica no sólo mejorar la infraestructura en sí (vial, portuaria, aeroportuaria, fluvial, etc.) sino concebir un proceso logístico integral que incluya el mejoramiento de los sistemas y regulaciones aduaneras, de telecomunicaciones, la tecnología de información, los mercados de servicios de logística (fletes, seguros, almacenamiento y procesamiento de permisos, entre otros) y el desarrollo sostenible a nivel local”. El BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y FONPLATA son sus principales financiadores.

Los “ejes de integración y desarrollo” que fueron identificados por estos estrategias de la entrega planificada del territorio sudamericano a los intereses transnacionales de las empresas norteamericanas son: i. el Eje Mercosur (San Pablo-Montevideo-Buenos Aires-Santiago; ii. el Eje Andino (Caracas-Bogotá-Quito-Lima-La Paz); iii. el Eje Interoceánico Brasil-Bolivia-Perú-Chile (San Pablo-Campo Grande-Santa Cruz-La Paz-Ilo Matarani-Arica-Iquique); iv. el Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam; v. el Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata; vi. el Eje Multimodal del Amazonas (Brasil-Colombia-Ecuador-Perú); vii. el Eje Marítimo del Atlántico; viii. el Eje Marítimo del Pacífico; ix. el Eje Neuquén-Concepción; x. el Eje Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta; xi. el Eje Bolivia-Paraguay-Brasil y xii. el Eje Perú-Brasil (Acre-Rondonia).

Si aquellos son los “ejes”, los “procesos” son los siguientes: i. sistemas operativos de transporte multimodal; ii. sistemas operativos de transporte aéreo; iii. facilitación de pasos de frontera; iv. armonización

de Políticas Regulatorias, de interconexión, de espectro, de estándares técnicos y de universalización de Internet; v. instrumentos para el financiamiento de proyectos de integración física regional y vi. marcos normativos de mercados energéticos regionales³.

Sobre este último punto, la IIRSA propone la interconexión eléctrica de los países menos industrializados con países más industrializados, los cuales aprovechan la hidroenergía y el gas de países como Bolivia, Ecuador (o Paraguay) para abastecer de energía a economías más electro intensivas como Brasil y Perú⁴. Glenn Switkes, miembro del equipo permanente del *International Rivers Network*⁵ es explícito al afirmar que “los proyectos de la IIRSA se están realizando sin ninguna consulta y con mínima información dada al público sobre cómo será mantenido el medio ambiente y los niveles sociales de la región”.

Las consecuencias que tendrá para la región son múltiples y son mejor conocidas por el mayor avance de la agresión del PPP. En Tapachula, Chiapas, en marzo de 2001; en Xelajú, Guatemala en noviembre del mismo año; en Managua, Nicaragua en julio de 2002⁶; así como en México el 1 de febrero de este año⁷ (2003), se han realizado multitudinarias protestas campesinas e indígenas. Según un sindicalista de la sierra Loxicha en México “al imponer el PPP el propio Estado mexicano crea las condiciones para el surgimiento de grupos guerrilleros”. Gouverneur agrega: “En efecto, como megaproyecto de inversión totalmente inadaptado a regiones donde todavía reinan los caciques y los pistoleros, este plan no puede más que reforzar la corrupción, la expoliación y el paramilitarismo” (ibídem, 13).

Así como el PPP, la IIRSA pretende “sacar a la gente de la pobreza” al estilo norteamericano. Los planes *American style* vienen implemen-

³ Extraído del “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur”, IIRSA.

⁴ Aguirre, Monti (2002) “Latin American rivers endangered by regional development schemes”. En, *World Rivers Review*, Vol. 17, N° 5-6, 12-13, December.

⁵ Para consultas ampliatorias, remitirse a www.irn.org

⁶ Moro, Braulio (2002) “Una recolonización disfrazada”, *Le Monde diplomatique*, Buenos Aires, noviembre.

⁷ Gouverneur, Cédric (2003) “Resistencia indígena en Oaxaca”. *Le Monde diplomatique*, Santiago de Chile, julio.

tándose desde principios de los años 1960 a partir del proyecto de la Alianza para el Progreso; después de éste han habido decenas de planes oficiales para resolver el flagelo del subdesarrollo, a pesar de los cuales el número de pobres no ha dejado de aumentar en toda América Latina.

Recursos naturales a ser apropiados, soja transgénica, acuíferos, gas natural, hidroelectricidad, uranio, yacimientos petrolíferos propositadamente cerrados en el gran Chaco americano, son algunas de las pocas riquezas de las que el nuevo imperio pretende apropiarse a través de una nueva colonización (500 y tantos años después). La colonización por el ALCA y la IIRSA expresan esa voluntad imperial de seguir creciendo a costa de la desgracia y la pobreza de millones de latinoamericanos.

El doble discurso: nueva arma del neoliberalismo en el cono sur*

**Reflexiones sobre la breve estancia de Nicanor
en el Palacio de los López**

El triunfo del Partido Colorado, de nuevo, en las elecciones de abril pasado ha dejado en claro varias características del sistema político paraguayo. Entre ellas, puede apuntarse que dicho sistema es medularmente resistente a los intentos de alternancia, lo cual equivale a decir que el Partido Colorado retiene su poder de convocatoria electoral más allá de los planteamientos doctrinarios, sean éstos conservadores (como fueron las propuestas del PLRA y de Patria Querida) o progresistas. Muestra también las limitaciones políticas y estratégicas de la oposición, incapaz de aglutinar una masa suficientemente importante de electores ya sea porque no ofrece alternativas, ya sea porque no es confiable. Los resultados de abril son asimismo elocuentes para calibrar la verdadera profundidad del voto más como expresión de creencias, que como expresión de una opción política informada por parte del electorado paraguayo.

A poco más de un mes de haber asumido el control del gobierno, la administración Duarte Frutos ha dado pasos ciertos para cumplir algunas de sus promesas electorales. Ciertos sectores, sobre todo subalternos en la jerarquía administrativa han sido afectados (controles ruteros, uso de espacios verdes en Ciudad del Este, etc.) y otras medidas, más ra-

* Revista NOVAPOLIS N° 4 – Agosto 2003.

dicales, esperan los plazos y procedimientos jurídicos necesarios (caso renovación de la Corte Suprema). No puede soslayarse, no obstante, un cierto grado de satisfacción o al menos de simpatía, por parte de la ciudadanía.

Satisfacción que debe ser inmediatamente relativizada. Por cierto, cambios más sustantivos para superar el pésimo período económico que vive el país desde hace años, no están siendo abordados en la dirección que presumiblemente debiera tomarse. El literal estado de cesación de pagos del fisco (tanto en cuanto al gasto social, como de la deuda interna y externa) está siendo abordado con medidas tradicionales de corte neoclásico, llámese: neoliberales. En este aspecto, la imperiosa necesidad de reducir la corrupción apunta básicamente al aumento de la recaudación, la desesperación financiera de las autoridades económicas se expresa en una actitud genuflexa ante los organismos multilaterales de crédito, que no significan sino empeorar las cosas para el mediano plazo. En suma, no se observa un cambio de sistema. Es el mismo, pero con menos corrupción y –sobre todo– mayor utilización de los impactos mediáticos.

Lo que resulta claro es que ni la administración Duarte Frutos sola, ni la ANR sola, podrán encarar satisfactoriamente el recrudescimiento del ajuste económico que parece cernirse –esta vez con mayor intensidad– sobre los algo más de dos millones y medio de pobres en el país. No lo podrán hacer solas, ni por la profundidad de las medidas de limpieza interna al sistema que deben tomarse, ni por las consecuencias sociales que la implementación de los ajustes desatará. La cruda constatación del Presidente al día siguiente de la elección fue la de que tendrá una Cámara de Senadores con clara minoría de la ANR.

Surge así como primera prioridad del nicanorismo (enfrentado internamente en su partido a los argañistas y otras fracciones menores), la de construir a la brevedad posible un “consenso conservador” para los tiempos que se avecinan. Puesto de otra manera, la fracción del presidente se enfrenta a la necesidad de superar ambas crisis; la económica y la política que existen desde hace varios años entre los sectores hegemónicos, tratando de conformar una unidad de criterio político, no sólo con la oposición sino con otros sectores (principalmente empresariales)

a fin de remontar la cuesta de las deudas y de las divisiones entre conservadores. La insistencia en la aprobación de una ley antiterrorista, las amenazas a los campesinos por bloqueos de caminos, la salida a la calle de los para paraí, serían ensayos para nuevas formas de autoritarismo.

Por el momento, el Sr. Presidente se encuentra realizando lo que cree que debe; apariciones sorpresivas en instituciones sensibles a la opinión pública que le dan un cierto “yo no sé qué” progresista, su mismo discurso del 15 de agosto ante los mandatarios extranjeros, su origen popular reiterativamente exaltado, su no extracción stronista también reivindicada, etc., forman parte de aquel impacto mediático mencionado y que busca adhesión. Todo ello es sin embargo, excesivamente cosmético, para ablandar, convencer, enternecer, o menos aún, exaltar, a un pueblo saturado de fastidio por los políticos a los cuales se ve obligado a votar quinquenio tras quinquenio.

En el contexto político paraguayo actual se ve como muy difícil que el Presidente pueda desprenderse (o quiera desprenderse) del legado de poder que le vino dado, y que a la postre, explica su candidatura dentro del coloradismo y su asunción misma a la presidencia. Es el legado de los verdaderos dueños del poder en el Paraguay, cuyos intereses necesariamente deberá respetar. En efecto, cuatro grupos (sólo analíticamente distinguibles) se reparten ese poder: los latifundistas, el de los “empresarios” (mafia blanca), el de la mafia pesada dedicada a la producción y negocio de la droga y, la Embajada norteamericana que defiende el patrimonio de las corporaciones multinacionales de origen norteamericanas, mayormente financieras y comerciales afincadas o por afincarse en el país. Esto es, Nicanor no se desprendió de ninguno de los grupos corruptos (pero habla contra ellos). Pactó con todos. Habría que preguntarse ¿cómo paga la factura?

Combatir la corrupción y sanear la administración pública supone afectar los intereses de estos cuatro grupos de dueños del país, que son quienes lo apoyaron electoralmente. Pero implica también algo más, y de mucho riesgo para quien pretenda hacerlo, supone desmontar la histórica relación de poder Partido/Estado. El observador menos avisado tiene pues derecho a preguntarse ¿contra quiénes encarará Duarte Frutos la lucha contra la corrupción?

El dilema no es menor, ya que si bien los poderosos tienen su apuesta hecha y sus alfiles en puestos políticos claves, las presiones que vienen de Washington no esperan, o por lo menos no esperan cuando encuentran interlocutores tan blandos como Borda, maleable y con poca “cancha” en esos avatares de lidiar con tiburones. La mayor recaudación es un imperativo para el equipo económico y aparentemente nada detendrá la promulgación de sucesivos paquetes con que intentarán ajustar el imponente déficit fiscal de casi el 3% del PIB de una economía postrada.

Lo interesante de constatar en esta clara tensión entre la demanda interna de los grupos de poder y las exigencias del FMI, es que las propuestas neoliberales aparecen como directamente contradictorias con el pacto Partido/Estado corrupto. Los caminos a seguir por Duarte Frutos no están precisamente pavimentados.

Uno de esos senderos, el que se dibuja con alguna nitidez y que parece estar siendo ensayado por el gobierno, es el de intentar construir un proyecto para, y con la “burguesía honesta”. Las comillas expresan las reservas sobre la existencia de la tal burguesía en el Paraguay, y sobre todo de su capacidad de construir un proyecto político de largo plazo. Pero en fin, la política de alianzas desplegada desde El Paraguay Independiente y Ayolas, parece apuntar a apoyarse en los únicos grupos de algún poder económico (por cierto, muy inferior al de los otros cuatro grupos antes mencionados), que aparentan ser lo suficientemente modernos sin perder el conservadurismo.

Una obvia ventaja de este variopinto grupo (compuesto por opositores de derecha y social demócratas, empresarios, menonitas, técnicos formados en el extranjero, profesionales liberales, agricultores semipresariales y otros) es que no está tan salpicado por hechos recordados de corrupción y que —en país de ciegos el tuerto es rey— proyectan una cierta imagen de ser “eficientes”.

Como se apuntó más arriba, la alianza con sectores extrapartidarios era necesaria por razones políticas, pero como puede intuirse, es también necesaria por razones económicas. En todo caso, la imagen de “eficiencia” es un ingrediente importante para el logro de ese mayor respaldo que Duarte Frutos y su equipo necesitan. Se encara así una reforma

de algunas instituciones estatales (MAG, IPS), se eliminan costosos Consejos de entes públicos (lo que ya le está ocasionando no pocas deserciones de lealtad partidaria), se habla de capitalización de ciertos servicios y tercerización de otros. En suma, la idea de las privatizaciones sigue merodeando en el inconsciente colectivo de los conservadores y es la base del “consenso” antes aludido.

El peligro del populismo tardío (a lo Bucaram, Collor de Mello, Lucio Gutiérrez y otros) es que mientras se apela a él en lo discursivo se sigue cargando sobre el pueblo el costo de la crisis. Como quien dice: “a Dios rogando –ahora en la iglesia Raíces– y con el mazo dando”. Los anunciados aumentos de impuestos al gasoil, la apelación a la caridad de las dos binacionales para dotar de servicios básicos a entidades públicas, la reducción del gasto social anunciado, son medidas ejemplarizadoras: los contribuyentes rasos, aquellos a quienes afecta la estructura regresiva de los impuestos que existe en el país, ellos serán quienes pagarán el despilfarro de ésta y las anteriores administraciones.

Así pues, el populismo del que está haciendo gala el novel presidente es una herramienta a la que se apela para contrarrestar las presiones antes aludidas con cierto respaldo popular. Debe tenerse en cuenta que el populismo no excluye el uso de la represión, a la que se podrá echar mano en caso que las medidas disuasivas y el discurso efectista no resulten.

Este es el tercer elemento que explica la necesidad de aquel “consenso conservador”. El primero era político (consenso en las cámaras para la reforma del Estado), el segundo económico (para implementar las medidas de ajuste), éste es social: tener consenso para asegurar el control social sobre las mayorías que serán golpeadas.

Este control social empezará con algo que ya lo estamos viendo; debilitar al movimiento social popular. El presidente Duarte Frutos se ha autodefinido como “el aliado natural de los movimientos populares”, tratando de anticiparse a la protesta y mostrándose él mismo, dispuesto a atender los reclamos, pero no es la presidencia la que debe atenderlos, sino la estructura administrativa existente para ello, para atender la demanda social. Duarte Frutos se erige así en el “resolvedor personal de los problemas sociales”.

El debilitamiento del movimiento popular, expresado por ahora en la sustitución de las organizaciones sociales por el fortalecimiento de la red de seccionales y subseccionales coloradas en todo el país (el plan es afiliar a 300 mil nuevos colorados en los dos primeros años de gobierno), preanuncia el continuismo del esquema clientelístico en la política doméstica. Quizás un ejemplo paradigmático de ellos sea que el ministro de Agricultura haya lanzado su programa agrario en el local de la Seccional Colorada N° 24 de Asunción y no en un foro del que participen los futuros beneficiarios o afectados. En caso que la ejecución partidizada de la política social no resulte, se prepara la utilización de la represión directa por vía de la criminalización de la lucha social (hay que recordar la “mano dura” prometida en la campaña electoral) y el apoyo al actual proyecto de ley antiterrorista, lápiz al que le están sacando la punta los ultraconservadores profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, antes de volver a ser presentada para su tratamiento al Parlamento.

Algunas reflexiones regionales y locales

Los precursores del neoliberalismo en el cono sur empiezan a actuar allá por 1973/76; son los *Chicago boys* de Pinochet y los artilugios de Martínez de Hoz en una Argentina destrozada. A ya casi 30 años de la implantación del modelo neoliberal no se puede decir que éste esté terminado, pero sí está debilitado y con pocas posibilidades de pasar a la ofensiva ante los pueblos latinoamericanos. Hay descreimiento hacia él. En América Latina, pero específicamente en el cono sur, ya nadie puede ganar una elección con un discurso neoliberal: ni Lula, ni Kirchner, ni Nicanor.

Pero hay otras trampas que se están preparando (piénsese en el caso argentino, con su presidente adoptando un discurso casi de izquierda y su vicepresidente y su ministro de economía renegociando y firmando acuerdos con el FMI) y por las que probablemente transitará Nicanor. ¿Qué queda del Lula sindicalista? Ciertamente estamos en presencia de un reacomodo táctico del neoliberalismo, según el cual éste renuncia a su discurso hueco, lo sustituye por uno “progresista”, pero sigue imperterritito implementando sus políticas. Puesto en términos casi grotescos,

la idea es convertir a Lula, Kirchner, Nicanor (¿será que lo consiguen también con Tabaré Vázquez?) en Felipes González, o Tonies Blair sudamericanos.

El Paraguay de Nicanor no escapa a esta lógica. En mayo y junio del 2002 en nuestro país se le dio un golpe fuerte al neoliberalismo (derogación por presión popular de la ley de privatizaciones) y a los sectores privatistas. Acá tampoco Nicanor disponía del discurso neoliberal. Ahora ya tiene una invitación para visitar al sumo pontífice norteamericano el 26 de noviembre, cita para la cual probablemente deje la administración del país por tres días, para ser recibido durante 18 minutos (tiempo que Bush le dedicó a Kirchner). Los cortesanos de siempre están eufóricos por tal deferencia de Su Santidad George W. Al vicepresidente (casi tan conservador como sus pares argentino y brasileño) Castiglioni le da facultades importantes; relaciones con el Parlamento, manejo del tema energético, relaciones internacionales. La idea de Nicanor es –por ahora– preservar su imagen populista.

Por último

La mentira institucionalizada bajo la forma de doble discurso es la receta política del momento.

- hay doble discurso cuando en el ámbito de las relaciones internacionales Duarte Frutos adopta posturas progresistas, pero se sabe que no es ni una fuerza nueva ni diferente dentro del Partido Colorado. Frontera para afuera progresista, frontera para adentro mano dura. Estaríamos ante la pieza de recambio del neoliberalismo para aparecer con otro rostro.
- hay doble discurso cuando se declara aliado natural de los pobres, pero debilita al movimiento social y amenaza con represión a campesinos que demandan equidad.
- hay doble discurso cuando manifiesta ser un defensor de la soberanía nacional pero pacta y negocia con el FMI.

- hay doble discurso cuando se declara un cruzado contra la corrupción, pero ataca sólo los eslabones más débiles de la cadena de mando administrativa.
- hay doble discurso cuando afirma que luchará contra la pobreza, pero descarga sobre el pueblo los costos del ajuste fiscal, o continúa con el modelo primario exportador con especialización productiva en el algodón y la soja, ahora transgénica.

En este contexto, hay unos cuantos paraguayos y paraguayas que están ilusionados con el nuevo presidente, hay una mayoría que está confundida, y hay una minoría dentro de la que me incluyo que está muy preocupada por el uso de piel de cordero por parte de algunos lobos.

El momento exige que cualquier atisbo de ilusión (psicológicamente necesaria para un pueblo desmoralizado) vaya acompañado de una mayor vigilancia del sentido crítico. Para ser más directo: la ilusión de algunos es inoportuna.

Antecedentes de la corrupción en el Paraguay

Casos que comprometen al endeudamiento externo en los 80s*

Entre las formas de corrupción administrativa más comunes bajo el régimen stronista, estaba la de contratar créditos externos para construcción de obras públicas sin aprobación parlamentaria, situación que permitía el manejo discrecional de dichos recursos por parte de los ejecutores de proyectos sobredimensionados para las necesidades del país (llamados “elefantes blancos”). Ello resultaba habitualmente en el enriquecimiento ilícito de los gobernantes y agentes del exterior y el endeudamiento creciente del país. Buena parte de los servicios de aquel endeudamiento siguieron siendo desembolsados durante el período de la transición.

En la década de los años 80 el énfasis de la actividad de aquel régimen al interior de la administración pública se da a través de la ampliación –desmedida e injustificada– de empresas públicas, así como la ejecución de obras de infraestructura básica sobredimensionadas. En todos los casos se ha procedido a la contratación indiscriminada de préstamos externos, sin llamados a licitación pública ni estudio de factibilidad, como establecen las leyes del país y para proyectos del tipo “llave en mano”, de muy alto costo financiero.

* Este apartado es una síntesis de los casos publicados por Palau T., Lugo E y G. Estragó (1990) en Palau, Tomás et. al. 2003 Deuda externa versus Deuda social. Asunción: El Lector..

Delitos

Deuda externa

Quizás el hecho delictivo de mayor envergadura y perjuicio incalculable para toda la población, sea el relacionado con la DEUDA EXTERNA, tanto en la parte de su contratación como en la de su utilización.

El robo por parte de los prestamistas constituidos preferentemente por entidades bancarias privadas de los países desarrollados e incluso algunas oficiales de dichos países, como también de los gobiernos de los propios países subdesarrollados, ha sido tan extraordinariamente grande que supera con creces, cualquier otro en toda la historia económica del país.

Todas las inversiones públicas de los últimos 20 años se han realizado con préstamos externos: Itaipú, Yacyretá, Puente Remanso, Aeropuerto Internacional de Asunción; algunas edificaciones como las del Palacio de Justicia, del Banco Central, Municipal, Hospital Nacional y construcciones como ACEPAR, INC; pavimentación asfáltica de miles de kilómetros de rutas; las destinadas a la provisión de determinados servicios básicos como: agua, luz, transporte y comunicación (CORPOSANA, ANDE, ANTELCO, FLOTA MERCANTE, LÍNEAS AÉREAS PARAGUAYAS, etc.). Con estos ejemplos que constituyen una pequeña muestra de un conjunto mayor, es fácil comprender la magnitud de la estafa a que ha dado lugar la deuda externa.

Si se procura cuantificar aproximadamente lo que, en relación a la deuda externa, ha gastado el Paraguay en las dos últimas décadas, se tendría, para fines de 1989, el siguiente cuadro demostrativo.

Son 7.200 millones de dólares corrientes de 1989, lo gastado y comprometido en las dos décadas mencionadas. Si se evaluara lo que costarían en este año todas las obras públicas realizadas con financiamiento de préstamos externos, es probable que ellas no cuesten más de 4.000 millones de dólares. En consecuencia, la malversación ascendería a US\$ 3.200 millones de dólares, alrededor del 50% del PIB del país, correspondiente al año 1988. Por esto se ha calificado a la Deuda Externa, como el Gran Robo.

Paraguay. Gastos en relación a la deuda externa, décadas de 1970 y 1980

| | |
|---|-------------------|
| Saldo de la deuda con el exterior | \$ 2.000 millones |
| Amortización e intereses pagados | \$ 2.100 millones |
| Aporte local | \$ 600 millones |
| Conversión a valores actuales de las amortizaciones e intereses pagados en 20 años, al 6% anual como inflación promedio en los EEUU, en dicho lapso | \$ 2.500 millones |
| Saldo deudor más total de gastos | \$ 7.200 millones |

La evasión de divisas

Este ilícito constituye otro de los grandes robos cometidos en el transcurso de casi toda la década del 80.

Consistía en la obtención fraudulenta de dólares del Banco Central, al tipo oficial de cambio, mucho menor al de la “calle”, simulando un negocio de importación, para luego venderlos en el mercado libre a un precio 100% mayor al comprado, o bien, se los depositaba en una cuenta bancaria del exterior (exportación de ahorros internos).

La gravedad de este delito está dada en función al enorme y generalizado daño ocasionado al país con dicha acción, frenándole e impidiéndole su crecimiento económico. Según un cálculo somero, se estima que el monto de la evasión en la década de los 80 excede fácilmente los US\$ 500 millones, es decir, más de un 25% del saldo de nuestra deuda externa.

La materialización de otros delitos contra los bienes públicos, siguió el mismo patrón con diversidad de variantes: (i) sobrefacturación de precios de obras públicas; (ii) ejecución de obras públicas sin llamado a licitación o a través de licitaciones fraudulentas; (iii) sobornos; (iv) cobro indebido de salarios estatales ya sea por los Jefes de reparticiones públicas, destinados a supuestos funcionarios inexistentes, o por personas que figuran en planilla sin prestar ningún servicio a la institución; (v) créditos externos sin aprobación parlamentaria; (vi) evasión de divisas; (vii) desvío de fondos públicos; (viii) fraude y evasión tributaria (contrabando); (ix) usurpación de bienes públicos (luz, agua, teléfono, combustible, vehículos, etc.); (x) adulteración de datos oficiales.

Así, el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos públicos, la defraudación y el fraude al fisco, la asociación ilícita para delinquir, son los delitos que con más frecuencia se cometieron en toda la Administración Pública causando graves e irrecuperables daños a la economía nacional y produciendo enormes fortunas malhabidas a los funcionarios y jerarcas del régimen.

Algunos de esos casos fueron los de las empresas publicas Aceros del Paraguay SA (ACEPAR), la Industria Nacional del Cemento (INC); y obras públicas dependientes de la Administración Central, tales como el Aeropuerto del Este, el puente de Concepción sobre el río Paraguay y el Gran Hospital Nacional.

Casos

Banco Central del Paraguay

En el último trimestre de 1985 estalla con fuerza, produciendo una verdadera conmoción política, el escándalo de la descomunal evasión de divisas del Banco Central del Paraguay, considerado como “el peor escándalo financiero en la historia del Estado paraguayo”.

Unos U\$ 35 millones se evaporaron mediante maniobras dolosas de las reservas de divisas del BCP, de los cuales se recuperaron sólo U\$ 7 millones. 18 Sociedades de Responsabilidad Limitada fantasmas, estuvieron involucradas en los ilícitos y envolvieron en el fraude a Bancos nacionales y extranjeros y a importantes funcionarios, como el Pte. del Banco Central y altas personalidades del gobierno, tanto políticos como militares.

Esto ocurrió en los 3 últimos años del stronismo y puede considerarse como el símbolo de la corrupción del régimen en los años 80, dada la diversidad de sectores involucrados tanto del sector privado, como público y del poder político.

Aceros del Paraguay SA (ACEPAR)

En el caso de esta planta siderúrgica se ha cuestionado desde la necesidad misma de su montaje en relación con la demanda del mercado interno, el alto costo financiero, el sobre costo final del proyecto, los problemas técnicos de la fábrica y las irregularidades administrativas detectadas por una auditoría luego del golpe de Estado del '89.

El proyecto nace a finales de los setenta pero se concreta a partir de 1981, con una capacidad de producción de 150.000 toneladas/ año de laminados livianos de acero, “a pesar de que la demanda interna ascendía en 1981 a sólo unas 25 mil toneladas/año (en la actualidad [se refiere al año 1990] alcanza a unas 30 mil toneladas anuales)”;

“la presencia de otras dos plantas laminadoras privadas, con capacidad para producir 66 mil toneladas/año”; y “la inexistencia de mercados externos”.¹

Las condiciones leoninas para el país del financiamiento y montaje de la obra, ilustradas por Campos, son elocuentes:

“Una consultora privada se encargó de ‘prever’ un crecimiento de la demanda interna, en el caso ‘menos favorable’ (sic) de nada menos que 17% anual compuesto. La planta fue montada por la empresa brasileña Tenenge, gracias a un crédito atado de la CACEX (Banco do Brasil). Lógicamente la casi totalidad de los servicios, materiales, equipos y maquinarias fueron proveídos por el Brasil, a pesar de la existencia de capacidad nacional para la construcción y provisión de ciertos equipos”. En cuanto al sobre costo de la siderúrgica, refiere que el costo inicial fue estimado en unos U\$ 48 millones, pero “las sucesivas ampliaciones y los intereses acumulados por el no pago de la deuda, han elevado el costo final del proyecto, a la astronómica suma de U\$ 358 millones.

¹ Dictadura, corrupción y transición, Asunción, BASE-IS, Documento de Trabajo N° 24, junio 2. Campos, Luis A. (1990). Crisis económica del régimen autoritario. Asunción, CEDES, Doc. de Trabajo y discusión. Un trabajo más actualizado sobre el tema es el realizado por Martini, C. y M. Yore (1998). La corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo. Asunción, CIDSEP/K. Adenauer.

Este monto equivale al 82% de la deuda global del Paraguay con su principal acreedor externo: el Brasil”.

A todo lo anterior se suman “los graves problemas técnicos que le impiden (a la planta) su funcionamiento a plena capacidad” y las “serias irregularidades administrativas” detectadas por una auditoría efectuada en la empresa luego del golpe de Estado de 1989 (Ibíd. 27).

Industria Nacional del Cemento (INC)

El caso de la ampliación innecesaria de la Industria Nacional del Cemento, representa uno de los más grandes desfalcos cometidos contra el Estado por administradores paraguayos en connivencia con acreedores franceses. La investigación vincula a altos exfuncionarios paraguayos con Jacques Soustelle, ciudadano francés, y una empresa asesora fantasma llamada Latin American Building Co. S.A (LABCO) que fue canal para una evasión de divisas que alcanzó aproximadamente US\$ 16.213.531 y el pago extraordinario de US\$ 22 millones reclamado por el Consorcio Francés a la INC luego de la recepción provisoria de la planta. LABCO funcionó en Panamá como compañía offshore que opera a través de un estudio jurídico suizo, hasta julio de 1988, meses después de haberse recibido el ultimo pago de US\$ 11 millones del BCP.

De acuerdo a la relación que hace Campos, al principio de los años 80, la vieja INC (creada en 1950) disponía “de una capacidad instalada de 200.000 toneladas/año de cemento, frente a una demanda interna de unas 300.000 toneladas anuales”. En 1982, el Gobierno de Stroessner acomete simultáneamente la construcción de una nueva planta cementera con una capacidad de 600.000 toneladas/año, recomendada por la empresa consultora española ASLAND S.A., y la transformación de la antigua planta, que pasa del denominado proceso húmedo al seco y a un aumento de su capacidad de producción a 460.000 toneladas anuales.

“En síntesis –dice Campos–, la capacidad instalada de la INC que dispone de uno de los yacimientos calcáreos más ricos e importantes del continente se eleva, en la actualidad [se refiere a 1990] a 1.060.000 toneladas de cemento al año, frente a un mercado interno que, en el mejor

de los casos, absorbe la misma cantidad de cemento que en 1982 (es decir, unas 300 mil toneladas/año)” (Ibíd. 27-28).

Independientemente de lo innecesario de la ampliación de la cementera, numerosas irregularidades rodearon al proceso: El Consejo de Coordinación Económica contrata directamente sobre la base de un ‘crédito atado francés al Consorcio BUREAU CENTRAL D’ETUDES POUR LES EQUIPEMENTS D’UTREMER (BCEOM) a fin de ejecutar el proyecto ‘llave en mano’, sin llamado a licitación pública y en las condiciones financieras más duras del mercado financiero internacional. Todo el proceso de ampliación de la INC ha dado lugar a un enorme desfaldo que sobredimensionó inútilmente el esquema financiero de la operación, en directo perjuicio del patrimonio nacional”. El monto inicial de la obra era de US\$ 148,5 millones, pero finalmente resultó ser igual a US\$ 250,5 millones en forma directa a BCEOM.

Sólo después de la caída del gobierno de Stroessner, se conoció el costo financiero real de la ampliación de la INC: US\$ 400,6 millones. Sumado a ello, la auditoría efectuada en la empresa, detectó “un fraude del orden de los US\$ 100 millones en forma de: sobreprecios, sobrecargas de fletes, tasas de cambios preferenciales, reclamos adicionales injustificados, etc. El fraude en cuestión afectó no solamente a los funcionarios administrativos paraguayos (...), sino también a los acreedores franceses que financiaron el emprendimiento (también montado por empresas francesas)” (Ibíd. 28-29).

Como hace notar Campos, la deuda externa contraída por el país para ambos proyectos (el de ACEPAR e INC), ascendió a US\$ 759 millones, suma equivalente entonces al 38% de la deuda externa global del Paraguay.

Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL)

Es un ente autárquico dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Con respecto a la APAL se habla de una multimillonaria defraudación por valor de unos US\$ 10 millones, por sobrefacturaciones durante la construcción de la planta de alcohol absoluto y de vinaza, en la localidad de Mauricio José Troche.

En esta defraudación estarían implicados Gustavo Stroessner y su empresa de Construcciones ALFA BETA, el exministro Delfín Ugarte Centurión, y los anteriores administradores de la APAL Absalón Arias y Hans Wemer Thielmann. La empresa francesa DEGREMONT, que fue adjudicada por la APAL para construir la planta de tratamiento de vinaza, ofreció ese trabajo por U\$ 5 millones y medio, U\$ 2,5 millones más que la oferta más barata presentada por firmas brasileñas. Finalmente el Sr. Thielmann dijo que la planta costó U\$ 7 millones, otros U\$ 2 millones más que la oferta por la que se adjudicó la obra, a la empresa francesa. Para las obras civiles fueron contratados los servicios de la constructora nacional ALFA BETA. La deuda externa de la APAL, a diciembre de 1989, era de U\$ 11 mil millones, cuando que sus directivos aseguraban que era de U\$ 3 mil millones. La gran diferencia de U\$ 8 mil millones de subvaluación, se debe a la utilización arbitraria de una cotización irreal del franco francés y del dólar norteamericano.

Puente de Concepción

Esta obra de infraestructura vial en la zona norte del país representa otro caso típico de sobre costo. Iniciada en 1982 a un costo de US\$ 35,8 millones, terminó costando, mediante sucesivas ampliaciones a la Empresa Entrecanales y Tavora (emparentada con el entorno de poder), “nada menos que US\$ 89.2 millones. El gran inconveniente del emprendimiento fue, que finalizada la construcción del puente, no existían rutas de acceso a él.

Aeropuerto del Este

Ubicado a 300 kilómetros al este de Asunción, el proyecto original se basó en un préstamo contratado en 1980, con 6 años de gracia, de U\$ 161 millones, concedido por un grupo mixto, conformado por OECF del gobierno japonés, Banco de Tokio, Marubeni y Banco Holandés. Luego de un tiempo de ejecución, la obra fue paralizada debido a que el Banco de Tokio y el Grupo Marubeni Panamá suspendieron los créditos acordados a causa de los atrasos en pagos de créditos anteriores (de INC y de CORPOSANA).

Después del golpe de Estado, el presupuesto fue redimensionado y se acordó proseguir su ejecución, por etapas, de acuerdo a los recursos que se tuvieran, según declaraciones del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Las obras civiles y arquitectónicas fueron adjudicadas a la empresa Entrecanales y Tavora, de España, por la suma de US\$ 60 millones. Existen indicios de un sobre costo de aproximadamente US\$ 30 millones, relacionado fundamentalmente con la modificación del contrato en sus aspectos relacionados con la fórmula de reajuste. Además el Contratista fue indemnizado con una cantidad cercana a los US\$ 4 millones, quedando la diferencia establecida en la modificación, a cargo del Estado paraguayo, debido a que la OECF no reconoció dichos ajustes por lo que no pudieron ser incluidos en el financiamiento de la obra.

Luego del redimensionamiento presupuestario, esta empresa, así como su filial en Asunción, cederían sus derechos y obligaciones a su par paraguayo, el Consorcio Enrique Díaz Benza ‘si es que no les conviene el nuevo plazo de terminación de las obras porque deberá adecuarse a las disponibilidades financieras’. Surgen cuestionamientos también sobre ilícitos realizados por esta empresa durante la ejecución de la obra: excesivo adelanto inicial en el Contrato, doble facturación en la adquisición de equipos, sobre facturación en el precio de los trabajos, etc.

Gran Hospital Nacional

Para la construcción de este sobredimensionado centro hospitalario, se contrató un crédito exterior sin aprobación del Congreso Nacional (en violación de la Constitución entonces vigente). Dicho hospital formaba parte, originalmente, del Centro Médico Nacional (CMN), que si bien dependía del MSPyBS, tenía la autonomía y el poder suficiente para competir y superponerse al propio Ministerio. La sobre facturación de las obras dio lugar a un fraude al fisco de grandes proporciones. Con la construcción del GHN, cuyo contrato era ilegal, debido a que no se realizó ninguna licitación pública, fue favorecida la empresa constructora francesa “Societe Générale D’Entreprises”.

Este Contrato se firmó en setiembre de 1983 y las obras se iniciaron en junio de 1984. Fue gestor ante el gobierno stronista, el cuestionado

exministro francés Jacques Soustelle. Con la obra, parientes del entonces ministro de Salud, Adán Godoy Jiménez, consiguieron millonarias sumas de dinero en concepto de comisiones. Terminó costando unos US\$ 130 millones. Finalizando ya su construcción, no se sabía aún cómo proceder para su funcionamiento, pues no existían los fondos necesarios para ello. Se llegó a la conclusión que la tecnología adquirida para la fastuosa obra del GHN no es la más adecuada y tiene cuatro problemas graves:

- Está mal ubicado, en lugar de difícil acceso para el personal y los usuarios.
- Está sobredimensionado, con 560 camas de internación y 51 consultorios, capaces de producir entre 1.500 y 2.000 consultas por día.
- Está equipado con tecnología inadecuada para un país en vías de desarrollo.
- Requiere para su correcto funcionamiento un costo operativo entre los US\$ 16,5 y los US\$ 25 millones por año.

El Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo (IPVU)

Fue creado en el año 1961 como ente autárquico, sobre la base de un préstamo del BID de US\$ 3.400.000, financiación que formaba parte de la “Alianza para el Progreso”, con el objetivo de “facilitar a las familias, principalmente a las de más escasos recursos, la satisfacción de sus necesidades de vivienda”.

Entre sus funciones más importantes se encontraban además, otorgar consentimiento y acuerdo a los planes reguladores de los municipios y juntas locales. El IPVU ejecutó varios programas de construcción de viviendas en la capital y otras ciudades. Las viviendas construidas bajo su responsabilidad hasta el año 1989 llegan a 4.500 unidades.

Los ilícitos cometidos en esta institución se desarrollan en varios aspectos:

- apropiación ilegal de préstamos.
- corrupción administrativa en la contratación de funcionarios con sueldos excesivamente altos.
- provisión de contratos de construcción, muchas veces a empresas fantasmas, sin licitación previa.
- concesión de viviendas a cambio de sobornos.

Entre otras, hubo irregularidades relacionadas con un contrato de préstamo externo de U\$ 10 millones, para el financiamiento del “Programa de Viviendas”. Se desembolsaron más de U\$ 5 millones para una ejecución de apenas el 8% del proyecto. Durante 4 años consecutivos, la entidad no hizo rendición de cuentas al Ministerio de Hacienda. A enero de 1989 no se conocía el destino de G. 965.333.325.

Préstamos otorgados al IPVU

| | | | |
|-----------------------|-----|------|-----------------------|
| AID | Año | 1961 | U\$ 3.400.000 |
| BID | Año | 1966 | U\$ 4.495.000 |
| Lloyds Bank | Año | 1974 | U\$ 4.015.024 |
| OEA | Año | 1974 | U\$ 100.000 |
| Sudáfrica | Año | 1975 | U\$ 1.610.000 |
| Banco Exterior | Año | 1982 | U\$ 10.000.000 |
| Total | | | U\$ 23.620.957 |

Aeropuerto Silvio Pettirossi

La construcción de la principal estación aérea de nuestro país (inaugurada en marzo de 1980), tenía un costo inicial de U\$ 17 millones, que finalmente llegó a la suma de U\$ 55 millones y con un atraso de entrega de obras, de cuatro años.

La obra fue realizada por la empresa constructora argentina Benito Roggio e Hijos, bajo la supervisión técnica del MOPC. A menos de 10 años de su inauguración, el edificio del aeropuerto registraba ya serios deterioros, cuya reparación ya ha costado varios millones de guaraníes a la Administración Nacional de Aeropuertos Civiles, por desprendimientos de revestidos de las paredes, filtraciones de humedad, retracción del te-

cho de hormigón, fisuras y otros desperfectos. La empresa constructora no realizó la entrega oficial de los trabajos, pero reclamó la suma de US\$ 600.000 que aún se le adeudaba. Alegó que los desperfectos son resultado de la falta de mantenimiento del edificio por parte de la ANAC.

Reflexiones

Estos casos reflejan algunas de las formas de corrupción más graves por sus consecuencias económicas y sociales, que rodeaban la ejecución de los emprendimientos públicos típicamente sobredimensionados del régimen stronista, que respondían más bien a la voracidad del entorno de poder que a las necesidades del país. Empresas conocidas como “elefantes blancos” y proyectos faraónicos y deficientes, han tenido un enorme costo para el pueblo, contribuyendo a elevar, casi siempre en forma ilegal e ilegítima, la deuda externa del país, enriqueciendo sin embargo, a la cúpula de burócratas del Estado (altos directivos de empresas estatales).

A criterio de Campos, la ejecución de éstas y otras obras públicas fue posible merced: “(1) al vaciamiento de las reservas monetarias del país en el período 1982-1988; (2) a la utilización intensiva de la capacidad de endeudamiento externo del país que, como se viera, era elevada a principios del decenio actual; (3) la adopción de un sistema cambiario múltiple que se convirtió en un fantástico instrumento de subvención de los cuantiosos gastos estatales; (4) al acaparamiento masivo de los créditos subvencionados generados por el Banco Central del Paraguay (por debajo de la tasa de inflación), en detrimento directo de los sectores productivos del país; y (5) el atraso considerable de las remuneraciones salariales de empleados de la administración pública, en especial el personal médico, paramédico y de la enseñanza pública” (Ibíd. 30).

De los ejemplos presentados se pueden relevar algunas formas muy comunes de corrupción en los más altos niveles de la administración pública del régimen stronista, que habitualmente implicaban la toma de decisiones influenciadas vía los grandes sobornos o comisiones ilícitas pagados fundamentalmente por empresas extranjeras, por contratos para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura económico-

social desproporcionados a las verdaderas necesidades de la población y del desarrollo del país.

Entre otras: (i) la ampliación o instalación innecesaria de empresas públicas porque convenía no a los intereses colectivos de los paraguayos, sino a los intereses privados del alto funcionario o grupo de funcionarios stronistas, así como de las instituciones de créditos, privadas y oficiales de los países desarrollados y empresas constructoras o vendedoras de bienes y servicios del exterior; (ii) la ejecución de obras públicas sobredimensionadas por la sobrefacturación correspondiente de precios, en los que estaban involucrados altos jerarcas del régimen en connivencia con contratistas extranjeros y/o nacionales; (iii) la contratación de préstamos externos para construcciones de obras públicas, decidida a discreción por los altos funcionarios y burócratas sin contar con la aprobación parlamentaria requerida, en muchos casos, se trataba de “préstamos atados” (“vinculados o condicionados”) en condiciones extremadamente desventajosas para el país; (iv) la ejecución de obras públicas sin llamado a licitación o siendo las licitaciones fraudulentas; y (v) los desvíos masivos de fondos públicos.

Seguridad alimentaria: cada vez menos segura, cada vez menos alimentaria*

“Cualquiera que pueda hacer que crezcan dos espigas de cereal o dos hojas de hierba en un suelo donde antes solamente crecía una, merecerá mayor agradecimiento de la humanidad y hará mejor servicio a su país que toda la raza de políticos juntos”.

Johnathan Swift (1667-1745)

Introducción

Debe quedar claro que la salud alimentaria no es sólo un problema de acceso al alimento, sino que básicamente es un problema de acceso a alimentos de mínima calidad.

En el Informe de Derechos Humanos del año 2002 ya se había mencionado una realidad que se acentúa con el paso de los años mientras siguen aplicándose las mismas medidas de tipo económico: el neoliberalismo y la seguridad alimentaria de los pueblos son incompatibles.

En un informe relativamente reciente se sostiene que una de las razones de fondo que explica el constante aumento de los subsidios a la agricultura de los países ricos (que no es precisamente un instrumento

* CODEHUPY, 2003. Informe de Derechos Humanos en Paraguay 2003.

de política neoliberal) es la seguridad alimentaria. Mientras gobiernos como el paraguayo continúan desregulando las relaciones económicas, laborales y adoptando posturas aperturistas acríticas en materia de comercio exterior, la pobreza se acentúa y, naturalmente, la inseguridad con respecto al acceso al alimento crece.

En efecto, pocos días después de asumir el nuevo gobierno en agosto de este año, la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República dio a conocer datos poco alentadores con respecto al número de personas que en el país son consideradas pobres. Nada menos que una cuarta parte (1.324.700 personas) de la población es considerada pobre extrema, vale decir, tiene dificultades de acceso al alimento. Esta situación es peor y se agrava más rápidamente en las zonas urbanas. La razón principal mencionada por la dependencia gubernamental como causa del deterioro es “la disminución del ingreso y la recesión económica”.

Deflación y pobreza. Los problemas de acceso estructural al alimento

Si bien resulta obvio que la pobreza aumenta cuando cae el ingreso de las personas, y el ingreso cae porque hay recesión económica, los datos conocidos en mayo (proveídos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay - BCP) sobre cómo se comportó la economía paraguaya durante el 2002 fueron contundentes: una caída del 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB), considerada la peor recesión desde el año 1983, o sea, en 20 años. El monto del indicador es de apenas US\$ 5.389 millones. De este modo el ingreso por habitante (téngase en cuenta que la concentración del ingreso en el país es una de las más altas en América Latina) cayó a apenas US\$ 940, como estaba hace 17 años.

Hasta aproximadamente abril de 2003 el guaraní tuvo un comportamiento errático con respecto al dólar, situación propicia para que los comerciantes en general remarcaran precios hacia el alza en prácticamente todos los rubros.

Cuando el dólar, a pesar de las fluctuaciones (con una cotización máxima de Gs. 7.400 en enero), empieza a caer y situarse a partir de mayo en

la franja de Gs. 6.000 - 6.200, los precios no disminuyen. Esto hace caer notablemente el valor real de los ingresos de la población trabajadora y su capacidad de acceso al alimento. El desempleo abierto en áreas urbanas, mientras tanto, se situaba a comienzos de año en el 15,0%.

A comienzos de abril, el BCP publicaba la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostrando un dato de máximo interés para afirmar la creciente inseguridad alimentaria de la población: mientras el costo de vida había aumentado en el período enero-abril 2003 en un 7,7%, el índice sólo para alimentos lo había hecho en 14,4% (el interanual abril 2002-abril 2003 fue respectivamente de 20,2% y 29,6%).

Entre los alimentos, además de los aumentos en aceites, huevos, hortalizas y azúcar, los incrementos más notorios fueron los de productos lácteos, que entre diciembre de 2002 y enero de 2003 se incrementaron en nada menos que 22%. Según un periódico local, la segunda quincena de enero fue la quincena más cara en 20 años para el consumidor paraguayo. Hasta fines de abril, de hecho, la prensa local se dedicó profusamente a documentar tanto el drama de la suba del precio de los alimentos como la creciente dificultad de la población por mantener sus estándares alimentarios.

A partir del mes de mayo, el escenario cambiario da un vuelco. El dólar empieza a caer y se estabiliza. De acuerdo al BCP, en junio el IPC cae 1,5%. De nuevo en este caso fueron los alimentos los que tuvieron un mayor descenso en sus precios. Sin embargo, esta caída no puede considerarse relevante en términos de consumo ya que según la misma fuente “el resultado se dio principalmente por la caída del dólar pero se siente en términos marginales en la economía de los consumidores por los efectos de la fuerte caída del poder adquisitivo en los últimos años, la misma inflación, la devaluación del guaraní y el bajo nivel de la economía, que impidió mejores pagas a los asalariados”. En suma, esta situación de deflación momentánea no ha beneficiado a la población.

En medio de esta generalizada situación de desesperanza de la población en general, la asunción de las nuevas autoridades el 15 de agosto trajo una cierta recuperación de la confianza para algunos. Se llegó a escuchar incluso algunos planteamientos sensatos (muy escasos duran-

te la administración González Macchi), como los del nuevo gobernador del Departamento de San Pedro, quien se mostró convencido de que la pobreza en el país se superará “con ayuda a los campesinos”. En la zona quizás más conflictiva del país, el nuevo gobernador considera que se debe apoyar a las organizaciones campesinas en sus proyectos productivos, y “promover el cultivo del algodón y el sésamo”. Esto es: mantiene una orientación hacia el mercado de exportación, la cual ha sido precisamente una de las causas principales del abandono de rubros de autoconsumo por parte de la sociedad campesina.

Los consumidores casi sin derechos

Además de los problemas estructurales de pobreza que vuelven cada vez más difícil el acceso de los pobres al alimento y la producción de los mismos por parte de las familias campesinas, otro tema relevante del año en el análisis de la situación alimentaria es la indefensión en que se encuentran los consumidores paraguayos.

La vulnerabilidad sanitaria quedó manifestada en el entredicho surgido a mediados de setiembre entre la Asociación de Amas de Casa del Paraguay y el Centro de Regulación, Normas y Estudios de Comunicación (CERNECO). La primera había manifestado el interés de que los supermercados y locales de expendio de alimentos sigan comercializándolos a granel y al menudeo, tal como algunos de ellos venían haciéndolo. Esta solicitud fue hecha al ministro de Industria y Comercio ante la presentación de CERNECO a la Dirección General de Defensa del Consumidor que se regule tal forma de venta, ya que implica un “alto costo sanitario... atendiendo que los productos se encuentran expuestos al manoseo de los consumidores, a la contaminación y sobre todo a la adulterabilidad”. Las Amas de Casa sostienen que esa forma de venta favorece a los pobres. Es cierto lo apuntado por CERNECO y lo solicitado por los consumidores, pero también es cierto que el empaquetamiento de productos supone un valor agregado por parte de industriales (nacionales, extranjeros o multinacionales) y todo valor agregado supone mayor costo.

Debe quedar claro que la seguridad alimentaria no es sólo un problema de acceso al alimento, sino que es también un problema de acceso a alimentos de mínima calidad. Pues bien, a pesar de haberse aprobado en 1998 la Ley N° 1334 de Defensa al Consumidor, las falencias en su implementación son múltiples. Parte del problema surge de la misma falta de información del consumidor acerca de sus derechos.

Pero la mayoría de los problemas hacen relación a la inmoralidad de los proveedores:

- éstos están obligados por dicha ley a entregar las facturas de consumo por lo menos 10 días antes de su vencimiento;
- la obligación de atender los reclamos por parte del consumidor en casos de sobrefacturación;
- la obligatoriedad de que los productos y servicios ofertados tengan informaciones claras y visibles en idioma español;
- la prohibición explícita que el vendedor se aproveche del desconocimiento de las personas para hacer que compren un determinado producto o servicios; la prohibición de hacer propaganda engañosa, y varios otros.

En resumen, la falta de información del consumidor y la mala saña de los proveedores acentúan los problemas de seguridad alimentaria en el país.

Desnutrición en la infancia paraguaya

A raíz de los problemas de acceso a una alimentación adecuada, la prensa se hizo eco durante el año del aumento de la desnutrición infantil. Quizás el caso más dramático (conocido, que no es lo mismo que existente) es el de las localidades de Nanawa, Puerto Elsa y Falcón. De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 11% de la población menor de 4 años presenta desnutrición aguda y el 25% tiene talla inferior a la edad (síntoma de desnutrición crónica). El mal afecta principalmente a los menores de dos años. Si bien se trata sólo de dos localidades, puede suponerse que el resto del país no está mejor. Por otra parte, la directora del Programa

de Salud Integral de la Niñez dio a conocer a mediados de año que la tasa de mortalidad infantil es de 19 por mil nacidos vivos en menores de un año, y de 25 en menores de cinco años. Son tres las principales causas de la mortalidad infantil en el país: las infecciones respiratorias agudas, las diarreas y la desnutrición. Estas tres disfunciones explican el 63% de las muertes infantiles. El total de muertes de niños por año es de 2.038.

Al parecer, las autoridades tienen alguna noción del problema, pero los intentos gubernamentales de abordarlo son escasos. El mismo proyecto antes mencionado del UNICEF y el PNUD manifiesta en su parte central que la malnutrición extrema de 35 mil niños paraguayos puede ser solucionada sólo con el 5% de las regalías (royalties) que el país recibe por las hidroeléctricas, equivalentes a unos US\$ 11.4 millones anuales. Si se invirtiera el doble durante 11 años, la cobertura en materia de salud y alimentación alcanzaría a toda la infancia del país.

Como gotas en el desierto

La intensificación agrícola, presentada como la única alternativa productiva, si bien generó y genera beneficios a unos pocos, supone también la desaparición de paisajes enteros (piénsese en el San Rafael), desaparición de pequeñas fincas campesinas, pérdida de la diversidad productiva (caída del cultivo de rubros de autoconsumo), inaccesibilidad de los sectores sociales más vulnerables a los productos de la canasta básica de alimentos, dependencia y pérdida de la capacidad gerencial del productor, pérdidas de información y formación adecuada, aceleración de los procesos degradatorios, muchas veces ocultos detrás de las variedades de altos rendimientos. A principios de año se anunció oficialmente la apertura de la oficina nacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el Paraguay. El nuestro era uno de los pocos países en América Latina que no contaba con oficinas de ese organismo. Es de esperar que a pesar de la precariedad de recursos con la que ha operado durante este primer año, dicha oficina promueva –con apoyo del gobierno– proyectos que apunten directamente al restablecimiento de ciertos niveles mínimos de garantía alimentaria para la población más pobre.

Por lo demás, son escasísimas las medidas que el gobierno adopta: algún programa de repartición de semillas de autoconsumo, algún apoyo dado a familias de áreas de frontera por el programa de OPS sobre municipios fronterizos saludables o algún programa de alguna gobernación, como la de Itapúa, que puso en marcha el proyecto de “fortalecimiento de la seguridad alimentaria” a través del cual se benefició a 500 familias con semillas para huertas y frutas.

Por parte del gobierno, es mucho lo que se dice pero prácticamente nada lo que se hace sobre el tema de la seguridad alimentaria, avasallada estructuralmente por el avance de la frontera de la soja transgénica. El gobierno no ha manifestado tener conciencia de los perjuicios que manejos altamente intensivos pueden generar en la base de recursos del país. Los pequeños, medianos y grandes productores (soja, algodón, caña de azúcar) no se percatan de que si bien sus ingresos aumentan año a año con buenos rendimientos o arrendamientos, sus campos se degradan cosecha tras cosecha con el actual uso intensivo del suelo. La “sojización” del modelo, eliminando la diversificación productiva, está transformando al país en un área de cuasi monocultura sojera.

Recomendaciones

Existe una necesidad en el país de una Política Agropecuaria Nacional que debe constituirse en el verdadero desafío en esta materia para el nuevo gobierno. En ella, lo importante es que contemple un horizonte de largo plazo y las múltiples demandas de todos los actores del sector y la sociedad, que dé un marco de protección y sostenibilidad a los recursos involucrados y que no sólo refuerce y satisfaga demandas de la agroexportación de soja y algodón. Es necesario que el gobierno ponga freno a la expansión descontrolada hacia cultivos que interesan a los mercados, pero pueden ser perjudiciales para los productores y el conjunto de la sociedad. Asimismo, se debe frenar el creciente monopolio de los *traders*, las agroquímicas y las compañías de semillas que continúan su marcha.

En suma, el gobierno debe hacerse cargo de la necesidad de resolver el problema asegurando el apoyo a las economías campesinas,

sosteniendo al pequeño productor en el campo, rescatando el concepto de multifuncionalidad de la agricultura, considerando adecuadamente la amplitud de los impactos por la utilización masiva de organismos genéticamente modificados y, por cierto, reconstruyendo un sistema productivo que mire también hacia el mercado interno.

Situación de los migrantes en el país*

Las condiciones de residencia de la mayoría de los migrantes en el país están sujetas a no pocas arbitrariedades, debido a la confusa trama institucional y legal en que se ven atrapados.

El soporte legal del tema migratorio en el país

Como se mencionó en el informe del año 2002, la Constitución Nacional sancionada en 1992 contiene 82 artículos (de los 291 que la componen) relacionados directa o indirectamente con extranjeros o migrantes y sus derechos. No obstante, las condiciones de residencia de la mayoría de los migrantes en el país están sujetas a no pocas arbitrariedades, debido a la confusa trama institucional y legal en que se ven atrapados.

El régimen legal e institucional administrativo vigente se basa fundamentalmente en:

- la Constitución Nacional;
- la competencia del Ministerio del Interior;
- la competencia del Consejo Nacional de Coordinación Económica;

* CODEHUPY 2003. Informe de Derechos Humanos en Paraguay 2003.

- las funciones y organización de la Dirección General de Migraciones;
- las funciones complementarias de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Trabajo;
- las funciones complementarias de otros órganos del Estado, entre ellos la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, el Instituto de Bienestar Rural y la Secretaría de Repatriación de Connacionales.

La normativa vigente, en principio, cubre todos los aspectos y los temas de una regulación migratoria. En ella están contemplados, programáticamente, los objetivos, los propósitos, los lineamientos generales y las regulaciones de una política nacional migratoria. En la letra, es el Estado paraguay el que orienta, conduce y administra el gobierno de las migraciones. Armoniza e incorpora las disposiciones originadas en las convenciones internacionales en materia de seguridad jurídica, estableciendo procedimientos administrativos y judiciales para la atención de derechos controversiales. En conjunto, se constituye en un instrumento jurídico hábil para que el Estado administre eficazmente las migraciones en sus diferentes facetas. Sin embargo, se evidencian serias deficiencias en la aplicación de dicho instrumento jurídico.

Como se dijo, los órganos estatales encargados de la aplicación de la normativa migratoria en distintos niveles se encuentran asignados a los Ministerios del Interior a través de la Dirección General de Migraciones, Justicia y Trabajo, Relaciones Exteriores y el Instituto de Bienestar Rural.

La concentración de las facultades en un solo órgano, la Dirección General de Migraciones, deviene en un obstáculo insalvable a la hora de una implementación eficaz tanto de las políticas como de la administración migratorias. Esta dirección, por estructura, personal y práctica administrativa, no está en condiciones sino de cumplir sólo una parte del gobierno de las migraciones. Las pocas facultades concurrentes y de competencias entre los ministerios no tienen correspondencias de articulación orgánica ni instancias ordenadas reglamentariamente para su actuación conjunta.

Frente a este panorama, es necesario diseñar un ordenamiento jurídico-administrativo de articulación de competencias y la creación de una instancia de conducción política y de gobierno de las migraciones. Sin estos requisitos, a los que parece estar ahora abocado el gobierno, el tratamiento de los problemas de los migrantes continuará siendo caótico y expuesto a las arbitrariedades y la corrupción.

Los cambios en la administración migratoria

La última administración de la Dirección General de Migraciones del gobierno de González Macchi estuvo marcada por las características generales de esa administración: una directora con escasa capacidad de mando sobre sus subordinados, una constante interferencia e injerencia de criterios político-partidarios en la designación del personal y una exacerbación de los casos de corrupción alrededor del proceso de documentación a los migrantes que solicitaban los carnés de radicación.

Ante la falta de iniciativas de la Dirección General de Migraciones para innovar en este terreno, la Cancillería Nacional solicitó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la realización de un proyecto para perfilar los lineamientos para una futura política migratoria para el país. Sus resultados fueron dados a conocer a mediados de septiembre. En dicho documento se abordan efectivamente los principales problemas que afectan a los migrantes: las debilidades institucionales, los problemas referidos al marco normativo, así como las deficiencias en materia de disponibilidad de información sobre el problema. Se fijan criterios y se dan recomendaciones sobre los cinco ejes de toda política migratoria: la necesidad de retener a la población en su lugar de origen, la conveniencia de generar cierto tipo de migraciones, la intervención para regular los flujos, la conveniencia de reintegrar a los migrantes paraguayos en el exterior al país y la necesidad de integrar social y culturalmente a los migrantes extranjeros ya establecidos en la sociedad nacional. Este proyecto, según se anunció, tendrá su continuidad con la elaboración de la política migratoria nacional y con la eventual creación de un Consejo Nacional de Migraciones. Los responsables de la continuidad de los trabajos no descartan la posibilidad de tener que modificar la actual Ley 978/96 o la reglamentación de varios de sus artículos.

Por otro lado, con motivo del cambio de gobierno asumió también un nuevo Director en la Dirección General de Migraciones, quien tiene el mandato de “transparentar” el funcionamiento institucional (esto es, reducir los niveles de corrupción) y dedicarse de lleno a la modernización institucional. En el poco tiempo que lleva en funciones, la actual dirección muestra señales de reencauzamiento institucional que serán decisivas para llevar adelante una política migratoria acorde con los derechos humanos de los migrantes.

La Cancillería y las visas

Con respecto a las visas, sobre cuya expedición la prensa ha informado de un sinnúmero de irregularidades, se ha comprobado la existencia de varios desafíos en mayor o menor medida, urgentes. Por un lado, falta una base de datos de visas expedidas. Esto es, la dirección respectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores debe comportarse como un organismo generador de estadísticas migratorias. Por otro, falta capacitación de los funcionarios del servicio exterior sobre actuaciones consulares, en especial sobre visas y pasaportes. Asimismo, debe encararse con prontitud a los problemas de falsificación de documentos, ya sean visas o pasaportes.

Por otro lado, existe un vacío legal que vuelve necesario elaborar un instrumento legal que permita la cancelación de la radicación en caso de incumplimiento de leyes por parte de migrantes¹. Para el efecto, se considera que los migrantes que buscan radicación en el país deberían firmar una declaración jurada en donde se comprometen al conocimiento de las leyes de la nación y a su cumplimiento. Se asume al respecto que el Estado democrático debe posibilitar el debido proceso, que es la única garantía para la precautelación de los derechos fundamentales, pero falta instrumentarlo. Si se quiere cancelar la radicación permanente, debe haber una reglamentación, mediante juicio sumarísimo, en

¹ Cuando el que se radica pide la radicación permanente, está firmando una declaración jurada de que va a cumplir todas las leyes de la República, de lo que se deduce que tiene que conocer dichas leyes, en caso que no la cumpliera, debe ser posible la cancelación de la misma. Actualmente eso lo hace el estrado judicial no siendo una atribución administrativa.

24 o 72 horas, y el fuero específico que se encargue de ello. Como eso falta, nunca se reglamentó, con lo cual se deja a la administración migratoria sin recursos, cayéndose en la inacción estatal. En resumen, la Cancillería parece ahora estar dispuesta a actualizar la ley de visas con el propósito de agilizar su concesión y extender su período de validez para ciertas categorías.

Se supone que la nueva ley que vaya a someterse a aprobación contemple la armonización de las categorías migratorias y de visas con los demás países de la región, cosa que ahora no se da, con lo cual se crea todo tipo de situaciones irregulares que tienden a perjudicar tanto al migrante como al propio país. En este sentido, la Cancillería se halla abocada a un proceso que permitirá agilizar la emisión de visas sin descuidar los aspectos de seguridad. Según se conoció, dicho plan de trabajo incluye: informatizar la expedición de visas; establecer categorías a las visas, definir plazos de concesión (90 a 180 días) y analizar la problemática de la seguridad interna.

La corrupción en la administración migratoria (antes y después de agosto)

Como se mencionó más arriba, debe señalarse la existencia de un corte entre la administración anterior y la actual en la Dirección General de Migraciones. Al menos esto es lo que se espera.

En lo que respecta a la corrupción conocida, hasta el 15 de agosto se había continuado denunciando una importante cantidad de casos referidos a cobros de aranceles indebidos, retención dolosa de documentación ya procesada (y no entregada a los interesados), proliferación de “gestores” que encarecen los trámites. Se llegó al límite de que los funcionarios de la Dirección General de Migraciones “controlaban” camiones al solo efecto de pedir coimas. Han salido a la luz también casos de contratación de personajes por su solo peso político, como lo fue el caso del novio de la fiscal Basilisa Vázquez.

Con la disposición del gobierno de Duarte Frutos de sacar a los inspectores móviles que operaban en las rutas y en la zona primaria del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, las denuncias de corrupción han dis-

minuido notablemente a partir de entonces. Es de esperar que estas medidas gubernamentales –más la remozada gestión del nuevo director de la Dirección General de Migraciones– hagan abandonar paulatinamente la práctica de la corrupción, que implica uno de los mayores problemas para los migrantes que ingresan a nuestro país.

La penetración del capitalismo agrario y la nueva ola de migrantes brasileños

Sin embargo, el tema que abarcó la principal atención en materia migratoria fue el de la nueva avanzada de la agricultura capitalista (de tipo *farmer*, principalmente), personalizada en el ingreso de migrantes brasileños que se instalan en zonas de agricultura campesina expulsando a la población nativa con la compra o alquiler a precios sobrevaluados. Debe señalarse que esta “invasión” se verifica también por parte de la comunidad de menonitas en el país.

Los daños causados al medio ambiente por esta nueva oleada migratoria en el sector rural han sido profusamente documentados por la prensa ya desde el año pasado. Llegó incluso a motivar la presentación de un polémico proyecto de ley de franja de seguridad fronteriza, que fue posteriormente desestimado por el Parlamento y que se amplía más abajo.

Lo concreto es que se incrementó la velocidad de la deforestación en todo el país: los cursos de agua de la región Oriental afectados por el avance de la agricultura de la soja transgénica han sido contaminados, tierras con vocación ganadera (ñu o praderas naturales) de textura agrológica frágil han sido mecanizadas, se han registrado múltiples casos de intoxicación² y hasta de muerte de personas por aspersión de herbicidas. Se documentaron casos extremos de cierre de escuelas por la penetración de ese cultivo.

Estos hechos motivaron la formación de comisiones distritales y departamentales con participación de autoridades administrativas e incluso

² Hasta el punto de que una organización campesina ha solicitado recientemente a la gobernación de Itapúa la adquisición y puesta en funcionamiento de laboratorios móviles de toxicología para atender los innumerables casos que afectan en particular a la región nordeste de ese departamento.

religiosas que plantean frenar la “invasión”. Ya se han dado casos de enfrentamiento directo de campesinos con los tractoristas que han impedido la continuidad de las tareas en algunas zonas (caso del distrito de Juan E. O’Leary). De continuar la inacción gubernamental sobre el tema pueden esperarse hechos violentos mucho más graves.

La Embajada de Brasil decidió tomar cartas en el asunto, solicitando a las autoridades migratorias del país la aceleración de los trámites de radicación de residentes brasileños antiguos.

Indocumentación de los migrantes residentes en el país

Efectivamente, el problema de la indocumentación de brasileños sigue siendo la gran preocupación de esa comunidad. Se estima que de los 400 mil brasileños en el país, apenas el 10% cuenta con su documentación en regla.

La situación irregular de los migrantes al país no se limita a los brasileños que se dedican a la agricultura. Lo mismo ocurre con los trabajadores diarios que van y vienen del otro lado de la frontera (casos de Ciudad del Este y P. J. Caballero), así como en el departamento de Itapúa. En su momento, la Dirección General de Migraciones había anunciado un estricto control sobre la documentación de estos trabajadores, pero la iniciativa terminó diluyéndose.

Lo cierto es que con motivo del ya mencionado proyecto sobre los lineamientos para la formulación de una política migratoria para el país y del funcionamiento del grupo interinstitucional para las migraciones constituido por dicho proyecto, las autoridades nacionales han empezado a tomar cabal conciencia de la magnitud de la indocumentación de extranjeros en el país y parece que han empezado a considerar la gravedad del problema. Debe a su vez recordarse que durante la visita del canciller brasileño Celso Amorim al país, en abril, ya había comprometido a las autoridades paraguayas de la Dirección General de Migraciones a acelerar la documentación migratoria que debería alcanzar al menos a 300 mil migrantes de ese país. Durante marzo, ya las autoridades federales de Curitiba y las de Canindeyú se habían comprometido a

impulsar esa regularización. Se llegaron a firmar incluso convenios de cooperación para subsanar dicha irregularidad.

Del mismo modo, se está empezando a conocer (y se espera que se tomen las medidas pertinentes) que existe una muy alta proporción de migrantes paraguayos en el extranjero, principalmente en la Argentina, pero no sólo ahí, que sufren las consecuencias de su irregular residencia o permanencia en dichos países. Hasta el momento no hay ninguna reacción concreta por parte de Cancillería, que es la institución que debiera ocuparse del problema.

Polémica en torno al proyecto de ley de franja de seguridad fronteriza

A comienzos de año fue presentado al Parlamento el proyecto de ley de la referencia que contempla, entre otras cosas, el establecimiento de una zona de seguridad de 50 km. en toda la zona fronteriza del país, en la que los extranjeros no pueden tener propiedades. Contempla, a su vez, que aquellos extranjeros que ya poseen propiedades, deberán venderlas a paraguayos en un plazo de 10 años, pasados los cuales serán expropiadas. Prevé además que los escribanos que violen la ley perderán su registro y los funcionarios públicos serán cesados inmediatamente de sus funciones.

Este proyecto de ley en realidad data de muchos años atrás, pero fue revitalizado por el diputado colorado Benjamín Maciel Pasotti a finales de 2002 como represalia al cierre de fronteras impuesto por Brasil y Argentina a raíz del brote de fiebre aftosa en el Departamento de Canindeyú en la propiedad de un hacendado brasileño. El proyecto de ley fue sancionado positivamente sobre tablas por la Cámara Baja. El hecho despertó una verdadera polémica de parte de gremios empresariales, organizaciones de afectados e incluso autoridades gubernamentales. El Senado finalmente desestimó el proyecto de ley.

Paraguayos en el exterior

No son menores los problemas por los que atraviesan los connacionales residiendo en el exterior. En el marco del proyecto de los “lineamien-

tos” se han detectado los siguientes problemas, referidos principalmente a los que viven en la Argentina:

- Documentación: una muy alta proporción de paraguayos que residen en ese país está indocumentada en lo referido a papeles de residencia legal. Esto se debe principalmente a la temporalidad de alguno de los flujos, el alto costo de los trámites, la excesiva duración de los procedimientos. En no pocos casos se ha denunciado la presencia de “gestores”, que encarecen aún más los trámites e incluso se dan casos de entrega de documentos falsos.
- Informalidad laboral: la falta de documentación legal de residencia favorece la informalidad en las condiciones laborales de los empleos a que los connacionales tienen acceso. Esta informalidad incluye salarios menores de los que se pagan a los trabajadores nativos por el mismo empleo.
- Inseguridad en el tránsito interno: la falta de documentos los expone también a diferentes tipos de molestias y percances para el libre tránsito dentro de la Argentina, cuando se exponen a controles policiales.
- Discriminación: es frecuente la constatación de diferentes formas de discriminación –por razones étnicas, culturales (manejo del castellano), condición socioeconómica– a las que están expuestos los paraguayos en ese país, aunque esta discriminación puede hacerse extensiva a otros migrantes fronterizos a la Argentina.

Las autoridades nacionales pertinentes –como ya se mencionó– poco o nada han hecho al respecto, sino que más bien han vuelto los trámites aún más difíciles, al permitir la proliferación de gestores alrededor de los consulados paraguayos en la Argentina y al no acceder al pedido realizado por la comunidad paraguaya en ese país de reducir (o eliminar en casos especiales) los costosos aranceles solicitados por los consulados para los trámites pertinentes, como por ejemplo una cédula de identidad que en Paraguay tiene un costo aproximado de US\$ 2, en la Argentina ronda los US\$ 30-35.

Indocumentación de migrantes paraguayos en el exterior

Hacia mediados de año, el embajador argentino en el país afirmó que del millón y medio de paraguayos que vive en la Argentina (cifra que está evidentemente sobreestimada), poco más de la mitad, aproximadamente 800 mil, estaría indocumentada, lo cual constituye un hecho “preocupante y grave” según sus palabras. Aparentemente estas declaraciones forman parte del lobby de esa Embajada para presionar por la aprobación de un convenio migratorio entre ambos países que, tal como está actualmente redactado, es altamente lesivo para los intereses de los compatriotas radicados allá.

Sin embargo, la situación de indocumentación no se limita a los residentes en la Argentina. Se sabe también que es muy alta entre los paraguayos en Brasil y en Estados Unidos. Como se apuntó más arriba, este problema tiene incidencia directa en el padecimiento de violaciones a los derechos migratorios de los compatriotas. Sería deseable que la política migratoria a ser elaborada próximamente por el gobierno contemple de manera saliente la atención a esta problemática.

Participación en elecciones

Con motivo de la visita de políticos al exterior para la campaña proselitista que se vivió este año en el país por las elecciones de abril, se volvió a plantear por parte de las organizaciones de la comunidad paraguaya en Argentina la elaboración de un instrumento legal que permita el voto de los paraguayos residiendo en el exterior.

Debe señalarse que este reclamo ha sido también planteado por el grupo de trabajo interinstitucional sobre migraciones del proyecto para elaborar los lineamientos como parte de un eje estratégico de las políticas migratorias, que es el de mantener integrados a los connacionales residentes en el exterior con su país de origen.

Remesas

A principios de año, el Departamento de Estudios del Banco Central anunció que las remesas de los paraguayos residiendo en Argentina

habían caído durante el 2002 a sólo US\$ 24 millones de los US\$ 88 millones que se habían registrado durante el año anterior. La cantidad mencionada es remesada por 122 mil paraguayos que trabajan en ese país, lo cual da un promedio anual por trabajador de US\$ 770. Esta abrupta caída es el resultado de la crisis económica que explotó en el vecino país en diciembre de 2001.

Esta noticia, difundida en enero, fue contrarrestada por otra información, también suministrada por el Banco Central, según la cual las remesas de divisas por los migrantes paraguayos en el exterior había aumentado durante el primer trimestre de 2003 en 26% con respecto al igual período del año anterior. La fuente aclara que el registro de estos envíos se hace exclusivamente con los datos aportados por la “vía formal”, es decir, por empresas que se dedican a este negocio. Se sabe sin embargo, que la cifra puede ser mucho mayor si se consideran otros canales. Demás está decir que este aporte (que en el 2003 puede llegar a US\$ 105 millones) es una importante fuente de ingresos para familias que mayormente se encuentran en la pobreza, tendiendo en consecuencia a aliviar situaciones de necesidades crecientes.

El trabajo de la Secretaría de Repatriados

La Ley N° 223, sancionada por el Poder Ejecutivo el 28 de junio de 1993, crea la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales en reemplazo del Consejo que tenía el mismo nombre. El Artículo 2 le asigna las siguientes atribuciones:

- Definir políticas y estrategias en la materia, fiscalizar la aplicación de las políticas del sector, estudiar los fenómenos de la migración, retroalimentar los lineamientos políticos y sugerir mecanismos de operación-gestión, proponer pautas a la participación nacional e internacional en los problemas relativos a la materia.
- Si se observa bien a través de las atribuciones conferidas a esta secretaría, la ley que la crea no le ha dado un carácter ejecutivo. Podría decirse que el carácter de esta nueva instancia es más propio de un instituto que de una secretaría encargada de atender asuntos operativos relativos a repatriaciones.

El estudio de los fenómenos de la migración, por ley posterior N° 978/96, es una facultad asignada a la Dirección General de Migraciones.

Durante este año la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, además de participar activamente en el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre migraciones en la Cancillería, ha desarrollado una intensa labor a pesar de la estrechez de sus recursos y de sus atribuciones. Entre esas actividades se mencionan principalmente la tramitación de innumerables expedientes de opción por la nacionalidad paraguaya de hijos retornados de paraguayos que habían migrado. A mediados de año, dicha secretaría anunció que en los últimos meses había obtenido la nacionalidad para 211 personas nacidas en el extranjero. Ha realizado también trámites para el reconocimiento de títulos y credenciales educativas, y el otorgamiento de cédulas de identidad a hijos y cónyuges de paraguayos que nacieron en el extranjero.

La migración interna

Aún cuando al cierre de la edición de este informe no se conocen los datos del Censo de Población 2002 referidos al movimiento migratorio en el país, se puede estimar que los flujos internos continúan creciendo como consecuencia de la expulsión del campo de familias campesinas acosadas por la pobreza o por el avance de la frontera de la soja transgénica.

Otro flujo que ya había sido documentado por la Encuesta Integrada de Hogares del año pasado es el de la migración urbana-urbana, ocasionada principalmente por desplazamientos entre ciudades o entre municipios. Se presume igualmente que dicho flujo continúa debido a que no hay atisbos oficiales de encarar la inestabilidad residencial, en particular de aquellos que residen en municipios que rodean a las principales ciudades. Estos desplazamientos, si bien implican cambio de residencia, pueden ser de muy corta distancia, incluso dentro de un mismo departamento.

Se ha conocido también que durante el año continuó y se agravó la migración de indígenas, principalmente hacia Asunción. Este fenómeno,

que se ha venido agudizando durante los últimos años, es resultado del despojo de sus tierras, situación a la que los indígenas se ven sometidos por las pésimas políticas referidas a ellos implementadas por el gobierno. Para las parcialidades que residen en el este de la región Oriental del país, es de esperar que este problema se agudice debido al desmesurado incremento del precio de las tierras por el avance de la frontera de la soja, que está absorbiendo las tierras campesinas y degradando los pocos bosques nativos restantes.

Recomendaciones

La disponibilidad actual de los “lineamientos para la formulación de una política migratoria nacional” y el inicio a corto plazo de la formulación de la política migratoria propiamente tal, contemplan no sólo la revisión del actual marco normativo para las migraciones en el país, sino la revisión completa de la carta orgánica de la Dirección General de Migraciones, la reglamentación de la mayoría de los artículos de la actual Ley 978/96 de Migraciones, su eventual modificación o incluso su derogación y promulgación de una nueva y debe incluirse en esta revisión lo concerniente a la nueva ley de visas que la Cancillería parece estar elaborando.

El gobierno ha manifestado su intención de convertir este proceso de formulación de la política en uno participativo (como de hecho fue la formulación de los lineamientos). La política incluirá también un rediseño de la articulación de competencias y la creación de una instancia de conducción política y de gobierno de las migraciones, como la Comisión Nacional de Migraciones, cuya creación se está proponiendo.

Es la circunstancia adecuada para que los organismos de defensa de los derechos humanos, la pastoral migratoria de las iglesias y personas interesadas puedan hacer oír su voz e incluir sus planteamientos en la propuesta. Tanto la Organización Internacional para las Migraciones como el Fondo de Población de Naciones Unidas, que apoyarán esta iniciativa, tienen también sus planteamientos en esta dirección.

Por otro lado, se considera oportuno que organizaciones vinculadas a los derechos humanos de los migrantes establezcan un diálogo más flui-

do y permanente con las nuevas autoridades de la Dirección General de Migraciones que han asumido luego del cambio de gobierno de agosto pasado. La orientación más técnica, así como el funcionamiento transparente que intentan imprimir a la institución, merecen ser acompañados hasta que se muestre lo contrario.

En general, los problemas de corrupción por autoridades jerárquicas y de menor rango contra los migrantes son poco conocidos. Algunos estudios elaborados durante el año en el marco del proyecto de la Cancillería con la Organización Internacional para las Migraciones dieron a conocer que ciertos grupos migrantes pobres, principalmente bolivianos y peruanos, aunque no solamente ellos, son permanentemente acosados por esas autoridades. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los organismos encargados de velar por su cumplimiento debieran denunciar sistemáticamente tales hechos, que en no pocas ocasiones son ocultados por los propios damnificados por temor a represalias mayores.

Sobre el tema del avance de la agricultura capitalista por sobre la campesina (operada principalmente por brasileños y menonitas), las organizaciones sociales están empezando a analizar la situación, principalmente las organizaciones campesinas.

Una vez llegada a una posición de consenso, lo cual sería relativamente fácil ya que existe una simpatía generalizada en la opinión pública sobre la defensa de la soberanía nacional, debiera hacerse un trabajo de lobby para que el gobierno incluya el tema en el marco más amplio de las negociaciones con Brasil. Ciertamente, no bajo la forma de una ley de seguridad fronteriza (que sería más un problema que una solución). La defensa del campesinado nacional, frenar la emigración campo-ciudad, preservar el medio ambiente, y otros temas vinculados pueden, claramente, ser materia de debate con Brasil, del cual podrían sacarse, si se actúa inteligentemente, muchas ventajas.

El tema de la regularización migratoria de los extranjeros en el país y de los paraguayos en el exterior debe ser materia de preocupación prioritaria por parte de la Dirección General de Migraciones y la Can-

cillería respectivamente, así como tema de presión por parte de las organizaciones sociales (preferiblemente de los propios migrantes) y las no gubernamentales.

Finalmente, es de esperar que durante el próximo año se materialice el viejo sueño de los paraguayos en el exterior de no perder su ciudadanía cívica conquistando el derecho al voto. Para ello debiera apoyarse a las organizaciones de paraguayos en el exterior y trabajar acá con los nuevos parlamentarios electos.

La gestión de Duarte Frutos hasta ahora*

Los primeros meses de la gestión de Duarte Frutos están marcados por las siguientes características: i. profundización de la aplicación de la política neoliberal, ii. la continuidad de los cuadros políticos y tecno-administrativos, iii. el doble discurso, iv. el mayor valor dado a la lealtad de los amigos que a la capacidad de los técnicos, v. la fuerte influencia de la iglesia menonita Raíces en las decisiones políticas, vi. la necesidad de lograr acuerdo entre los conservadores, vii. la visión del pobre y sus organizaciones como criminales y, viii. la venta de la soberanía patria [...]

Al comienzo, la gente tenía esperanzas que una persona con espíritu joven, no tan salpicado por su participación histórica en la rosca de la cúpula colorada, etc., inauguraría una nueva época política para el país. Fueron esperanzas, tan sólo esperanzas defraudadas. A pocos meses de gestión, la administración de Duarte Frutos resulta un fiasco para la mayoría de las y los paraguayos, en particular para los pobres que son la mayoría.

Examinó rápidamente algunas de sus principales características:

* Diario Prensa Itaña. Noviembre, 2003.

Más neoliberalismo, igual servilismo. Cuando el presidente anunció que su equipo económico estaría presidido por técnicos de primer nivel, algunos habrán pensado que porque se trataba de gente con formación en EE.UU. iban a ser buenos y la economía empezaría a florecer. Por el contrario, se trataba de gente con el disco duro (cerebro) preformateado en las huecas tesis del Consenso de Washington. Pero además de ser gente que sólo piensa en clave neoliberal es bastante torpe y como se dice “más papista que el Papa”. Aplican lo peor de las recetas de manera bastante prosaica y con fanatismo, lo cual hace que hayan enderezado el timón del barco de la economía del país, directamente hacia el precipicio. No entro en detalles técnicos para no aburrir al lector, sólo digo algo que todos podemos entender: nadie saca un país adelante sin apoyar la producción, aplicando más impuestos y contrayendo mayor deuda externa. Parece cosa de oligofrénicos (débiles mentales) o de obsecuentes tembiguay de la Embajada norteamericana.

Continuismo: la no rotación de los cuadros políticos y tecno-administrativos que vienen del stronismo. No hubo un cambio real de personas, no se aprecia un cambio en la política económica, los empresarios zoqueteros de entonces siguen empotrados en los altos cargos y gozando de los mismos beneficios, la estructura de la corrupción está intacta como lo están los servicios represivos. La policía sigue siendo más eficiente para reprimir al pueblo que para combatir la corrupción. Las oficinas de gobierno siguen recaudando para los jefes en vez de prestar servicios a la población.

Doble discurso, colegas periodistas e imagen mediática. Como sabemos, don Nicanor antes de ser presidente y antes de ser ministro de Educación fue periodista del diario Última Hora. Esto hizo que aprendiera el oficio de informar y de dar imágenes. Ya siendo presidente se rodeó de sus excolegas tanto de ese diario como de otros. Por ejemplo, el exdirector de UH es ahora Presidente de Petropar, el que era jefe de redacción está propuesto como embajador en Chile, Pepe Costa que era jefe de sección tiene un alto cargo en la Presidencia, y así. Sus intervenciones en público están marcadas por ese “profesionalismo”, se asemejan más a un espectáculo (ahora se le dice “show mediático”, lo

de mediático viene de *media*¹, que en inglés quiere decir medios de comunicación) que a la de un presidente hablando a su pueblo. Él dice cosas...dice y dice, pero su discurso sólo por casualidad tiene algo que ver con lo que en la realidad va a hacer o hace. Esto le valió el mote de “presidente japú” por parte del sindicato de pescadores de Ayolas.

Vale más un amigo que alguien que sabe. Esta es una vieja fórmula de los gobiernos paraguayos desde fines de la Guerra Grande, en especial de los colorados desde Morínigo, su expresión popular se tradujo en el dicho “para los amigos todo, para los otros palo”. Nicanor la aplica a rajatabla. El concepto de “amigos” incluye por supuesto a los amigos propiamente tales, a los parientes y a los parientes de los amigos, a los socios de negocios, a los feligreses de la misma religión. El resultado administrativo para el gobierno de la aplicación de este criterio es la imprevisibilidad en las destituciones y nombramientos (piénsese en el caso Zayas o en el caso Nicolás Aguayo, para tomar sólo algunos ejemplos), la dificultad de aplicar una lógica estrictamente política para analizar los hechos políticos y, por supuesto, la casi completa falta de funcionamiento del Estado. Es el caldo de cultivo ideal para mantener la corrupción, aunque en lo retórico el gobierno no escatime recursos para mostrar los (magros) logros contra este flagelo².

*La influencia de la iglesia menonita Raíces en las decisiones políticas*³. Al parecer la iglesia a la que pertenece el Presidente de la República es de tronco menonita y se emparenta a otras religiones de origen cristianas de tipo radical, o fundamentalistas. Entre los mismos menonitas en el Paraguay existe aún un importante grupo de ellos que llegan a ser incluso endogámicos (grupos en los que se casan entre ellos, incluso existiendo algún grado de consanguinidad) para “no mezclar la sangre”. Lo que preocupa de esto no es que sea de ésa religión, porque por últi-

¹ Como se ve, no tiene nada que ver con la prenda de vestir que se usa dentro del zapato.

² Un caso típico del mucho ruido que hacen para decir que combaten la corrupción es el caso de las becas de Adrián Castillo. Se hace un escándalo mayúsculo por 11.000 euros mientras diariamente se siguen robando millones en evasiones, binacionales y desvíos de todo tipo.

³ Debo aclarar que en lo personal no profeso ninguna religión, por lo que si se piensa que sacho el tema de una religión no católica en lo referente a su influencia política para criticarla, es falso.

mo cualquiera puede ser de la religión que quiera o no ser de ninguna, pero sí su carácter excluyente, puritano y sus vínculos con otras religiones fundamentalistas, como es la derivación de la iglesia metodista a la que pertenece George W. Bush. En cuanto a excluyente, tómese los ejemplos de los nombramientos de la Secretaria de la Mujer y de la Secretaría de la Infancia y la Adolescencia, ambas señoras (por cierto muy cuestionadas) son de la misma iglesia. En cuanto al puritanismo, tómese el ejemplo de la importancia dada por oficiales del gobierno a la hora de cierre de discotecas y pubs y a la casi nula reacción ante la expulsión de campesinos y a las muertes e intoxicaciones que padecen por los agrotóxicos rociados por agricultores extranjeros y menonitas. En cuanto a las vinculaciones con otras denominaciones fundamentalistas cristianas, téngase en cuenta el detalle que mientras Bush recibió a Kirchner 18 minutos, con Nicanor habló durante 45 minutos y después lo sacó a pasear por el parque de la Casa Blanca, ¿es Paraguay más importante que Argentina para la geopolítica norteamericana?

La urgencia por formar un acuerdo entre los conservadores. Son varios los factores que hacen que el señor Duarte Frutos se acerque a políticos de la oposición (casi todos de derechas), empresarios, embajadas “amigas”, técnicos formados en el extranjero, agricultores empresariales y gremios de ganaderos. Las razones son i. políticas, ya que tiene que lograr cambios en los tres poderes, pero principalmente en la cúpula del Judicial, para lograr seguridad jurídica, ii. económicas, ya que tiene que tener un fuerte respaldo para implementar paquetes de ajuste neoliberales, como las leyes actualmente en curso, para equilibrar el déficit fiscal con más impuestos y, iii. sociales, ya que en el momento que así se requiera, tiene que tener apoyo para aplicar la “mano dura” anunciada contra los movimientos sociales que reclaman equidad y justicia. El acuerdo conservador es transpartidario y representa la garantía de control cuando deba aplicarse la represión.

El pobre y sus organizaciones como criminales. En efecto, si los militares, los latifundistas, la embajada americana y brasilera, los parlamentarios de cualquier color, la Corte Suprema no está de acuerdo con Nicanor, a éste le será difícil parar la protesta de los pobres por el impacto que sobre ellos tiene el programa neoliberal. Parar, entiéndase, significa

reprimir. Con ese propósito se está iniciando la primera fase de esa guerra geopolítica del Estado contra el pueblo: sindicarlo al pobre como maleante, como delincuente, como criminal. Si cierran una ruta “violando derechos de terceros”, si ocupan tierra “atentan contra la propiedad privada”, si quieren hacer una manifestación frente al Parlamento “transgreden la ley del marchódromo”. Como se ve, las organizaciones de los pobres sólo sirven para violar la Constitución y las leyes, o sea, avasallan el “orden legal constituido”, luego son delincuentes. Si son delincuentes hay que aplicarles la ley, reprimirlos, encarcelarlos, golpearlos. En agenda figura la presentación al Parlamento del proyecto de ley antiterrorista, que de aprobarse, sería la herramienta legal por excelencia para reprimir anticipadamente y “con la legalidad en la mano”.

La venta de la soberanía patria. Solamente el (des) gobierno de González Macchi y el del “exitoso empresario” Juanca habían sido tan vendepatrias como el actual. Privatizaron lo que pudieron, le dieron a la secta Moon la cantidad de tierra que quisieron, firmaron cuanto acuerdo lesivo a los intereses nacionales se hicieron en las binacionales. Ahora, para continuar en ese plan de hacer el gran Bingo nacional, hay muchos premios: está el cartón de la soberanía alimentaria (ningún apoyo a la agricultura campesina que produce para el autoconsumo y todo para los sojeros transgénicos que sirven a las transnacionales), el otro cartón muy cotizado es el de la soberanía territorial, cuanto agente de IBR anda repartido por ahí, hace de agente inmobiliario ofreciendo la tierra pública a extranjeros y menonitas, los políticos miran para otro lado, los fiscales y jueces forman parte de la comparsa con la que se decora la rifa de las riquezas nacionales. Pero el cartón que paga doble es el de la soberanía cultural, prensa antipopular, televisión basura, radiodifusión extranjera que copa el 70% del territorio nacional, cero apoyo a la cultura nacional, nivel educativo degradado a los suelos, desmoralización del pueblo, violencia contra el patrimonio arquitectónico.

Esto es lo que mostró la gestión de Duarte Frutos hasta ahora. Es cierto que es poco tiempo pero es suficiente.

La mentira institucionalizada como forma de doble discurso es la receta política del momento

- hay doble discurso cuando en el ámbito de las relaciones internacionales Duarte Frutos adopta posturas progresistas, pero se sabe que no es ni una fuerza nueva ni diferente dentro del Partido Colorado. Frontera para afuera progresista, frontera para adentro mano dura. Estaríamos ante la pieza de recambio del neoliberalismo para aparecer con otro rostro.
- hay doble discurso cuando se declara aliado natural de los pobres, pero debilita al movimiento social y amenaza con represión a campesinos que demandan equidad.
- hay doble discurso cuando manifiesta ser un defensor de la soberanía nacional pero pacta y negocia con el FMI.
- hay doble discurso cuando se declara un cruzado contra la corrupción, pero ataca sólo los eslabones más débiles de la cadena de mando administrativa.
- hay doble discurso cuando afirma que luchará contra la pobreza, pero descarga sobre el pueblo los costos del ajuste fiscal, o continúa con el modelo primario exportador con especialización productiva en el algodón y la soja, ahora transgénica.

2004

Capitalismo agrario, transgénicos y expulsión campesina*

La obtención de divisas, meta suprema de los gobiernos endeudados de orientación neoliberal, es el principal propulsor de la más devastadora ofensiva del capitalismo agrario sobre la economía y la sociedad campesina. El costo ecológico y social en aumento de la emigración, pobreza y marginación supera con creces los beneficios económicos, cosa que no importa a autoridades políticas y económicas sin pensamiento propio y sin proyecto viable para el país.

A modo de introducción

Para las autoridades económicas, el 15 de diciembre pasado fue una fecha gloriosa: se rompieron 40 años de mala comunicación con el FMI. Para el país puede considerarse otro día más de vergüenza. Para saldar compromisos de corto plazo (“honrar la deuda externa”) se continuó hipotecando al país. Vaya y pase que esto lo haya hecho gente como Wasmosy o González Macchi, presidentes no representativos, pero en la nueva administración esto resulta más que elocuente, ya que nos muestra que tendremos más de lo mismo por mucho tiempo.

La principal meta de las exigencias puestas por el FMI es que el país tenga dinero suficiente para pagar su deuda externa. Hay por supues-

* El Pueblo - Enero 2004.

to, muchos otros objetivos, pero no vienen al caso en este momento. Para pagar la deuda externa hace falta disponer de divisas (cualquier moneda “fuerte”), para ello Hacienda o el BCP o ambos, tienen que o comprarla en la calle u obtenerla como resultado de exportaciones que el país realiza cuyo pago pasa necesariamente por el BCP¹. Esta entidad se queda con las divisas y paga al exportador en moneda nacional (lo que el exportador hace luego con esos guaraníes es otro tema). De este modo el gobierno acumula fondos para “honrar en tiempo y forma” esa impagable hipoteca de la soberanía nacional, que está siendo irresponsablemente aumentada por el nuevo gobierno “democrático”.

Una de las exigencias que puso el FMI con la firma del *stand by* es lograr un crecimiento “de al menos el 2,5%”. En un país en literal estado de bancarrota como está el nuestro, la única actividad capaz de impulsar algún tipo de crecimiento es la agricultura y más específicamente la agricultura capitalista de exportación, o para hablar sin rodeos, la agricultura de la soja transgénica.

Se trata de una agricultura depredadora que deja poco o casi nada al país: las semillas son de la Monsanto (se importan), las maquinarias e implementos se compran del exterior, del mismo origen son los agro-tóxicos utilizados, no contrata casi mano de obra y cuando lo hace buena parte de ella es extranjera, las ganancias son depositadas en bancos del extranjero. Se pregunta uno ¿qué tiene de paraguaya la soja de exportación?: el suelo, la fertilidad del suelo sí es paraguaya y nos estamos quedando sin ella.

No es extraño que el gobierno se haga el distraído cuando se denuncian los estropicios que está haciendo, ecológica y socialmente, la expansión irracional de la superficie cultivada con esta especie genéticamente modificada. No es extraño, porque es lo único que le permitirá cumplir con las imposiciones del FMI de crecer al menos el 2,5%, para seguir “disfrutando” de los favores de este organismo mundialmente despreciado y socialmente responsable de la pobreza de millones de ciudadanos del mundo entero.

¹ También puede ser obtenida a través de otros mecanismos (inversiones de capital privado extranjero, y otras), pero éstas son las principales y más ordinariamente utilizadas.

Breve recuento histórico

El capitalismo, cuando ingresó a la agricultura, desplazó al campesinado. Lo hizo históricamente a través de dos formas, las que se conocen como la vía *junker*² y la vía *farmer*³. En el Paraguay, la vía principal fue la *farmer*, aunque se dan algunos casos también de grandes empresas dedicadas a la producción agrícola.

En nuestro país la agricultura capitalista se da:

- i. Desde que se inicia la colonización europea y japonesa en Itapúa, a partir de las décadas de los años 20 y 30. Es agricultura *farmer* pero queda circunscrita a esa región.
- ii. Un intento fallido de instalarla fue el Plan del Trigo de Stroessner, a comienzos de la década de los 60, aprovechando la “revolución verde” y el apoyo norteamericano después de la Reunión de Montevideo con Kennedy sobre la Alianza para el Progreso en 1961. Era un “apoyo norteamericano” para su plan continental anticomunista. Lo tomaron empresarios truchos. Las Ligas Agrarias empiezan precisamente en Misiones, donde se inicia el Plan del Trigo.
- iii. Durante la primera oleada de ingreso de brasileños por expansión de la frontera de la soja en los estados del sur de Brasil. Fines de los 60 y durante toda la década de los 70. Es la ofensiva más importante de la agricultura *farmer* sobre la campesina. Tuvo resultados ecológicos desastrosos.
- iv. La segunda oleada de la penetración del capitalismo agrario con la soja es la que estamos presenciando ahora, pero esta vez ya sobre la soja genéticamente modificada, a partir del ciclo 1999/2000 de manera masiva. Sin disponibilidad de tierras fiscales en esta ocasión,

² Que es la gran empresa, asentada sobre grandes extensiones, con exclusiva producción de cultivos de renta, con alta mecanización, y utilizando mano de obra exclusivamente asalariada.

³ Que se asienta en extensiones medianas, en las que hay una combinación de cultivos de renta y subsistencia, con alta mecanización y vinculación al mercado, utiliza mano de obra casi exclusivamente familiar con contratación esporádica y uso de insumos modernos.

la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos, sobre lo que resta de monte.

Los componentes del problema, tal como se plantea en este momento

Se hace acá un recuento apenas enumerativo de las diferentes facetas del tema, que por sus dimensiones y sobre todo por sus alcances sociales, ecológicos y económicos, es sin duda uno de los principales problemas que deberá afrontar el país.

- a. La conversión de la soja convencional a transgénica:
 - i. Creciente dependencia importada de las exportaciones.
 - ii. Intervención de la multinacional Monsanto en el control del principal rubro de exportaciones.
 - iii. Desconocimiento de los efectos sobre la salud humana.
 - iv. Incremento del precio de las tierras.
- b. La indolencia y complicidad en la acción gubernamental:
 - i. Falta de control sobre su uso por parte del gobierno, que equivale a una abdicación de sus funciones.
 - ii. Inoperancia de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
 - iii. Transgresiones a la legislación ambiental
 - iv. Complicidad del aparato de justicia con los grandes propietarios (jueces y fiscales principalmente).
 - v. El crecimiento de la economía de un 2,5% por lo menos, exigido por el FMI al gobierno en el acuerdo del 15 de diciembre, sólo podrá ser conseguido con las divisas generadas por la soja transgénica, de ahí el apoyo tácito.
 - vi. La complicidad de agentes regionales del IBR.

- c. El avance de la frontera del cultivo:
 - i. Penetración en gran parte del territorio de la región Oriental; expansión en praderas naturales. Presencia brasileña y menonita.
 - ii. Expulsión campesina.
 - iii. El crecimiento de la pobreza y aumento de la emigración.
- d. La reacción campesina:
 - i. La formación de coordinadoras por la defensa de las tierras.
 - ii. Las amenazas de ocupación campesina de las tierras.
 - iii. El bloqueo de acciones de siembra y/o fumigación.
- e. Intoxicación:
 - i. Muertes e intoxicación humanas.
 - ii. Mortandad de fauna terrestre e ictícola.
 - iii. Destrucción de cultivos de autoconsumo.
- f. Los problemas de soberanía:
 - i. Pérdida de la soberanía alimentaria.
 - ii. Pérdida de la soberanía territorial.
 - iii. Pérdida de la soberanía cultural.

Epílogo

No es que uno sea intrínsecamente desconfiado, es que la evidencia es tan abrumadoramente contundente que no podemos sino sentirnos preocupados como paraguayos. El actual gobierno “democrático” está terminando de dismantelar al país, productivamente, socialmente, ecológicamente, para entregárselo, atado de pies y manos a las transnacionales y a sus órganos financieros mundiales. Ciertamente, con el neoliberalismo no vamos a ningún lado como país.

Previsibles impactos sociales del ALCA*

“Deseo, más que ninguna otra cosa, ser testigo de la creación en América de la más grande nación del mundo, no tanto por su inmenso territorio y sus riquezas, sino por su libertad y su gloria”.

Simón Bolívar

En general, a las cosas de la realidad se las conoce tanto por lo que muestran, como por lo que encubren u ocultan. Pocas cosas en el mundo social son diáfanas.

Las cosas que se ocultan

- El ALCA nace siendo un "Acuerdo" sobre el que los pueblos de los países involucrados nada sabían. La reserva con que fueron seleccionados los Capítulos de que consta, la redacción misma, las negociaciones, todo esto permaneció oculto al público en general hasta hace relativamente poco tiempo. Nada bueno para los pueblos se trama a espaldas de él, y como se trata de un "acuerdo" básicamente comercial y económico-financiero puede presumirse que lo que trae aparejado es una mayor explotación del trabajo.
- Por otro lado, lo que hace que este Acuerdo sea particularmente lesivo a la población pobre latinoamericana es la ausencia de capítulos referidos a atender la cuestión de los derechos sociales, económicos y culturales. Derechos que han sido ya refrendados por innumerables Convenios, Convenciones, Declaraciones. Veamos algunos ejemplos:

* Este artículo está basado en el texto sobre las “Alternativas para las Américas”, elaborado por la Alianza Social Continental y fue publicado en Revista NOVAPOLIS. Edición N° 6 - Febrero 2004 GEO. En: <http://novapolis.pyglobal.com/06/impacto-socialalca.php>

- El comercio y la inversión no pueden ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable. Los ciudadanos y las ciudadanas deben tener derecho a participar en la formulación, implementación y evaluación de políticas sociales y económicas continentales y nacionales. Las metas centrales de estas políticas deberán ser la promoción de la soberanía económica, el bienestar social y la reducción de la inequidad en todos los niveles. Sobre esto el actual acuerdo del ALCA no tiene una palabra. El ALCA no busca el desarrollo justo, busca el mayor lucro posible de determinadas corporaciones transnacionales.
- Tampoco se dice nada sobre los Derechos Humanos: Una agenda común sobre derechos humanos tiene que ser la estructura que abarque todas las políticas continentales, y deberá incluir mecanismos e instituciones que garanticen su implementación. La agenda debería promover la más amplia definición de derechos humanos, cubriendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, la equidad de género y los derechos en torno a los pueblos y las comunidades indígenas. Al parecer, los creadores del ALCA y sus negociadores consideran que se puede hacer tabla rasa sobre el lento, penoso pero importante avance de la humanidad durante las últimas décadas en lo referido al resguardo de los inalienables derechos de las personas. Uno puede imaginarse qué derivaciones sociales puede tener un "acuerdo" comercial que no tome en cuenta estos derechos.
- Tampoco el ALCA menciona en ninguno de sus apartados la cuestión medioambiental. Se supone que los gobiernos deberían subordinar sus políticas de inversión y comercio a políticas que den prioridad a la sustentabilidad y protección ambiental. También deberían tener el derecho de dirigir inversiones hacia actividades ambientalmente sustentables, rechazar la privatización de recursos naturales, eliminar políticas que subvencionan o fomentan la energía de hidrocarburo. Creemos que si el Paraguay se va a meter en un acuerdo continental, el uso de recursos naturales debe preservarse y estar al servicio de las necesidades básicas de la gente, no exponer dichos recursos como si fuesen un mero objeto de transacciones del mercado. Ya bastante ha experimentado el

país en término de devastación de sus recursos como para hipotecar, por ejemplo, sus reservas acuíferas.

- Uno no alcanza a entender para qué debiera firmar el Paraguay un acuerdo que no tenga como prioridad el tema social, para lo cual es fundamental la característica de sustentabilidad de su desarrollo. Ya bastante inviable es el modelo que nos toca vivir como para volver aún más vulnerable la capacidad de la gente para sobrevivir. Un modelo regional para desarrollo democrático y sustentable requiere la incorporación del principio y objetivo de sustentabilidad en todos los aspectos y componentes que sean considerados. Estos asuntos deberían ser negociados con el objetivo de resolver —con el apoyo de políticas nacionales— los problemas serios de nuestra región: desigualdad; desempleo; degradación ambiental; y muchos otros problemas. Para que sean socialmente útiles, los acuerdos deben comprometer los países miembros a que cumplan con convenios y tratados internacionales diseñados para proteger el medio ambiente, minorías, derechos de trabajadores, derechos de mujeres y otras conquistas sociales. También deberían dar medios prácticos para llevar a cabo las medidas que hicieran esos acuerdos efectivos en un nivel nacional. De no contemplarse este aspecto, las consecuencias sociales del ALCA serían previsiblemente desastrosas.

- Otro tanto ocurre con el tema género. Los convenios internacionales sobre derechos de la mujer deberían ser centrales para todas las políticas continentales. Las mujeres deben tener mayores oportunidades para participar en la elaboración de políticas. Los gobiernos deberán establecer leyes nacionales que garanticen un cuidado de los hijos accesible; que ataquen el hostigamiento sexual laboral; la violencia doméstica, aspectos tan urticantes de la realidad social paraguaya, y que implementen la iniciativa 20/20 de la ONU para asignar el 20 por ciento de los presupuestos a programas sociales. Las mujeres deben tener un acceso equitativo al crédito, la educación y a otros recursos. Por supuesto, el ALCA ni menciona este tema, es más, allana el camino para que la pobreza aumente y las mujeres puedan seguir siendo mejor explotadas.

- Siendo el ALCA un "acuerdo" que pretende llevar a los países signatarios a los estándares de vida del primer mundo por obra y gracia del "libre" mercado, extraña sobremanera que no se mencione las con-

diciones de trabajo de la masa de asalariados (por no hablar de los desempleados) de toda América Latina. ¿Cómo se hará ese tránsito sin garantizar las condiciones laborales? Por esto el pueblo paraguayo debe exigir a su gobierno que las políticas continentales que vayan a firmarse garanticen los derechos básicos de hombres y mujeres trabajadores, exijan, de firmarse el ALCA, la creación de un fondo para brindar compensaciones a trabajadores y comunidades que padezcan la pérdida de empleos, y promover el mejoramiento de niveles de trabajo y de vida de los trabajadores y de sus familias.

- Otro tema de indudable impacto social, deliberadamente excluido de las negociaciones del ALCA es el tema migratorio. Podrán pasar las mercaderías, podrá pasar el capital, podrán pasar los ejecutivos de las empresas multinacionales, pero las fronteras no las podrán cruzar los trabajadores. Si el Paraguay aspira a ser copartícipe de un "acuerdo" como el ALCA, el gobierno deberá adherirse a convenciones internacionales sobre derechos de migrantes; garantizar derechos laborales a todos los trabajadores –sin importar su estatus migratorio– y penalizar severamente a los patrones que violen esos derechos; otorgar amnistía a todos los trabajadores indocumentados dentro de sus fronteras; desmilitarizar o impedir la militarización de zonas fronterizas como pretenden los norteamericanos en la triple frontera; y apoyar los subsidios internacionales para las áreas que sean grandes importadoras de mano de obra. De otra manera, se convertiría al país en una gran cárcel de trabajadores sin trabajo y de campesinos sin tierra.

- El ALCA tampoco dice nada sobre la educación, ni sobre lo que puede pasar con la ya raquitizada educación pública si se abre el mercado de los Servicios. Consideramos que la educación no es una mercancía; es un derecho social universal y fundamental que se debe asegurar mediante un servicio público financiado y bajo responsabilidad del Estado. La educación debe ser excluida de los acuerdos sobre la liberalización del comercio de servicios. La educación pública debe ser gratuita y plenamente accesible en todos los ámbitos y durante toda la vida, de otro modo condenamos socialmente al analfabetismo de hecho de millones de compatriotas.

- Otro aspecto, que como era de esperar está excluido del "acuerdo" es el del derecho a la comunicación que tiene el pueblo. El derecho a la comunicación hace referencia tanto al derecho de producir como de recibir información. La comunicación debiera ser considerada como un bien público y debiera ser preservada y regulada para el beneficio social y cultural de la sociedad. La comunicación y los medios deben ser regidos por principios de ética inspirados en una cultura de la vida y de lo humano. Este es un principio rector inalienable, con el ALCA lo que podrá esperarse es la ya completa desaparición de la capacidad de expresión del pueblo, hoy seriamente comprometida.
- Por último, pero no por eso menos importante, entre las cosas contra las que atenta el ALCA está la función del Estado. Una política continental como la del "acuerdo" no debería mermar la capacidad del Estado-nación para cubrir las necesidades sociales y económicas de sus ciudadanos. Los Estados-nación deben tener el derecho a mantener corporaciones del sector público y políticas de fomento propias que apoyen las metas de desarrollo nacional. La meta de las regulaciones nacionales en el sector privado deberá ser la de garantizar que las actividades económicas promuevan un desarrollo justo y sustentable. El ALCA atenta directamente contra el Estado y con ello deja al pueblo totalmente a expensas de los intereses de las empresas multinacionales.

El problema con las cosas que se muestran

- En relación a las Inversiones. La inversión extranjera (uno de los componentes centrales en la actual formulación del "acuerdo") podría ser bienvenida siempre que se adhiera a las regulaciones que vigilan el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, así como la sustentabilidad ambiental. La inversión extranjera directa (IED) puede jugar un papel positivo cuando se destina a actividades productivas más que especulativas, cuando transfiere tecnología apropiada y cuando facilita el acceso a mercados y genera empleos congruentes con la sustentabilidad y los planes nacionales de desarrollo determinados democráticamente. Pero tendrá efectos negativos cuando absorba ahorros locales, destruya industrias locales, contamine el medioambiente, o bien cuando los empleos que genera están en en-

claves desconectados de la economía nacional. También es altamente negativo el ingreso de grandes flujos de capitales golondrinas que a su salida desestabilizan las economías o especulan contra las monedas nacionales.

- El "acuerdo" tampoco hace referencia a que las regulaciones deben ser determinadas democráticamente por los gobiernos, en consulta con sus pueblos. Sin embargo un mínimo de regulaciones básicas deben ser acordadas multilateralmente para prevenir la competencia injusta entre los países. Cualquier competencia que provoque una caída de los niveles en la carrera hacia la cima es, por definición, injusta. Por ejemplo, si un gobierno bajara sus niveles o se negara a cumplir leyes laborales y ambientales mínimas para atraer la inversión extranjera, sería culpable de competencia desleal. Asimismo, en caso de conflictos, los derechos humanos, laborales y ambientales internacionalmente reconocidos deben quedar por encima de los derechos de los inversionistas.
- Para que sirvan a los intereses sociales de nuestro pueblo los acuerdos internacionales sobre regulación de inversiones deben tener en cuenta las asimetrías de poder y los distintos niveles de desarrollo que existen entre los países. Los acuerdos deben incluir concesiones no recíprocas por parte de los socios más poderosos y el reconocimiento de asimetrías y diferencias. Esto es particularmente importante para economías pequeñas y Estados aislados como el nuestro que necesitan un trato especial y diferenciado. De mismo modo, los acuerdos también deben respetar la diversidad de jurisdicciones políticas (como departamentos, municipalidades). Nada de esto está dicho en el "acuerdo", en consecuencia debe esperarse que socialmente las inversiones sólo traigan mayor pobreza y desestructuración productiva.
- Sobre los mecanismos de resolución de controversias. Es inadmisibles que haya mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y Estados en el ALCA y en cualquier otro acuerdo comercial. Los mecanismos inversionista-Estado deben ser anulados. Es inaceptable que se incorpore una definición amplia de inversión e inclusión de "medidas que equivalen a expropiación" o "equivalentes a expropiación" en las inversiones internacionales y los acuerdos comerciales. En particular,

resulta intolerable la inclusión de fondos culturales en la definición de inversión.

- Asimismo, se debe permitir la expropiación de activos corporativos que sirvan a necesidades vitales de la comunidad. La compensación por recursos expropiados deberá ser determinada por la ley nacional con la debida atención al valor de la inversión extranjera inicial; la valoración de propiedades con propósitos de impuestos y la cantidad de dinero que salió del país mientras duró la inversión. Los inversionistas deberán tener el derecho de apelar ante las cortes nacionales en casos en que consideren inadecuada una compensación. La apelación a tribunales internacionales podrá ocurrir sólo después de que se hayan agotado todos los procedimientos nacionales.
- Las disputas deberán ser resueltas primero por las leyes nacionales y los tribunales del país anfitrión y no como actualmente pretende Estados Unidos en el ALCA, donde los ciudadanos afectados por las decisiones tengan oportunidad de participar. Los grupos ciudadanos, los pueblos indígenas, las organizaciones de desarrollo comunitario locales, y todos los niveles de gobierno deberán tener derecho a demandar a los inversionistas por violaciones a este código de inversiones. Todos los procedimientos judiciales y pseudo-judiciales, tales como el arbitraje, deberán ser totalmente transparentes y abiertos a la observación pública. Un fondo de participación deberá estar disponible para que las comunidades indígenas y los grupos ambientalistas puedan participar en los procedimientos legales.
- En cuanto a las Finanzas, otro de los puntos de mayor interés para los Estados Unidos con el ALCA, lo contenido en el capítulo pertinente significaría el control total de la política monetaria, financiera y crediticia por parte de los organismos financieros multinacionales. Para que el sector financiero se adecue a las necesidades de un país como el Paraguay, debieran cumplirse al menos los siguientes criterios: *a.* el sistema financiero internacional deberá garantizar la estabilidad y distribuir capital con propósitos productivos; *b.* deben aplicarse medidas nacionales e internacionales para minimizar las consecuencias socialmente destructivas de la especulación y el flujo de capitales golondrinas; *c.* las instituciones financieras internacionales deben promover un

desarrollo económico y social sustentable en vez de las políticas de ajuste estructural y austeridad que empobrecen a los pueblos y dañan la salud, la educación y el ambiente; *d.* las deudas externas contraídas por dictaduras militares represivas son ilegítimas, son "deudas odiosas" que deben ser canceladas. Los pueblos no deberán ser responsables de saldar deudas contraídas con propósitos fraudulentos ni préstamos desperdiciados en proyectos que jamás los beneficiaron; *e.* la deuda pendiente de muchas naciones sigue siendo tan alta que hace imposible el desarrollo sustentable. Las deudas externas insostenibles que se acumularon debido a los altos intereses deben ser renegociadas y parcialmente canceladas, en el entendido de que el resto se pagará a largo plazo y con intereses bajos.

- En cuanto a los Derechos de Propiedad, las pretensiones norteamericanas de anexión para América Latina van un poco más allá de lo que puede ir la imaginación del común de nuestra gente. Para que pueda hablarse de propiedad y patentamiento, deben respetarse al menos los siguientes criterios: *a.* excluir de la posibilidad de patentar la vida y los materiales biológicos y genéticos. Especialmente excluir de las patentes los procesos biológicos y genéticos relacionados con la investigación en reproducción humana así como la manipulación, la investigación y el mercado de embriones y clones humanos; *b.* cada país debe ser libre para establecer las reglas de protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual que reflejen sus contextos sociales, culturales, económicos y ambientales específicos. Los países en desarrollo deben tener la libertad para desarrollar sistemas de propiedad intelectual que reflejen su nivel de desarrollo; *c.* los gobiernos nacionales tienen derecho a invocar las licencias obligatorias, la importación paralela y las provisiones de uso público no comercial con objeto de garantizar el acceso a medicinas esenciales. También tienen derecho a proteger la biodiversidad, los saberes de los indígenas y de las comunidades tradicionales y agrícolas. Estas salvaguardas son necesarias para proteger los derechos humanos básicos como son la vida, la alimentación y la salud, garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; *d.* no se debe permitir que ningún acuerdo comercial o de inversión pase por encima de las leyes nacionales que exigen al inver-

sionista extranjero transferir conocimiento y tecnología apropiada hacia el país anfitrión. Dichos acuerdos deberán facilitar la transferencia de tecnología en términos justos y más favorables, con objeto de reducir la enorme brecha que hay en conocimientos tecnológicos y científicos entre los países desarrollados y subdesarrollados y en los beneficios derivados de ellos. Este es un principio explícitamente establecido (aunque ignorado) en el Acuerdo sobre patentes de la OMC; *e.* los pactos internacionales que afirmen estos principios y que establezcan mecanismos de aplicación apropiados deberán ser negociados por medio de comités como la Conferencia de Partidos de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual (WIPO, p.s.s.i), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, p.s.s.i.), y no por medio de acuerdos comerciales; *f.* en ningún caso, las sanciones comerciales podrán obligar a los países a adoptar medidas que subordinen los intereses de la población nacional a aquellos de las corporaciones transnacionales o de sus subsidiarias nacionales. La Corte Internacional de Justicia habrá de revisar los posibles conflictos que haya entre acuerdos comerciales internacionales en materia de propiedad intelectual y leyes y políticas sobre derechos humanos internacionales, salud y ambiente, esto con objeto de garantizar que se logre, a nivel global, un balance apropiado entre intereses privados y públicos; *g.* cualquier regla que se proponga en torno a la protección y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual habrá de estar sujeta a una evaluación detallada de sus posibles.

- Con respecto a la Agricultura el "acuerdo" del ALCA de ser aplicado tendría repercusiones sociales negativas de la mayor importancia. La liberalización del comercio y de la inversión que persigue la forma dominante de globalización y el proceso del ALCA provocará severos problemas sociales y económicos a las comunidades rurales que se dedican a la agricultura; el abandono de tierras, la intensificación de las migraciones del campo a la ciudad (con la consiguiente presión sobre los gobiernos locales para proporcionar servicios básicos) y al exterior. Todo ello supone el crecimiento de la pobreza y el aumento de la marginación rural y urbana. Las compañías internacionales de granos y

otros alimentos que están impulsando el ALCA se encuentran ansiosas por aumentar su propio acceso a grandes cantidades de materias primas a precios bajos, que luego utilizan para deprimir los precios en el mercado internacional a través del "dumping" estratégico de alimentos a precios muy por debajo de los costos de producción. Esta manipulación de mercados socava la capacidad de los productores pequeños en todo el mundo de competir contra importaciones en sus propios mercados nacionales. En muchos países, las grandes compañías transnacionales integradas de manera vertical están construyendo mega-instalaciones para la producción masiva al estilo industrial de cerdos y otros animales de cría. Esta producción, concebida para exportar, está desplazando a los granjeros locales y amenaza a ecosistemas y comunidades rurales. Además, hay varios países donde las compañías gigantes están presionando para que les vendan o renten la tierra con miras a convertirla en plantaciones forestales o de soja, lo que resultaría en el desplazamiento de los productores de alimentos de sus tierras y en la pérdida permanente de los medios para alimentar a sus familias.

- Sobre este importante capítulo debe subrayarse que el Paraguay debe asumir la responsabilidad de garantizar la alimentación para su población, que significa dar los máximos beneficios a productores nacionales y mercados locales antes de buscar importaciones y/o promover exportaciones. En los acuerdos internacionales de comercio, deben mantener el derecho a proteger o excluir alimentos básicos para la dieta de sus pueblos (como maíz, tubérculos, poroto y otros) de cualquier pacto de liberalización socialmente destructivo.

- Es necesaria una reforma agraria. Ésta debe legitimar la propiedad y los derechos territoriales de los pequeños productores, los trabajadores rurales sin tierra, ya sean individuales o colectivos, tanto de hombres como de mujeres, y respetar los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a vivir colectivamente de sus tierras con integridad territorial. Debe revertirse la concentración de tierras agrícolas en cada vez menos y menos propietarios y debe haber un esfuerzo coordinado para mantener, y en muchos casos, restablecer la diversidad étnica en los sistemas de producción.

- El uso de patentes para controlar semillas agrícolas y plantas curativas debe prohibirse en los acuerdos comerciales, no sólo porque los procesos de patentes se han vuelto un ejercicio de robo flagrante por parte de empresarios, sino porque patentar formas de vida no tiene fundamento moral, ecológico o histórico. Se debe respetar a los pueblos agricultores que, a lo largo de generaciones, han desarrollado las variedades de semillas que se usan actualmente en todo el mundo. Si acaso hubiera beneficios del mercado de semillas y medicamentos deberían llegar primero a los pueblos que, junto con sus ancestros y por generaciones han criado esas semillas, han protegido a la fauna local y han cuidado y estudiado los efectos de las plantas medicinales.
- La mejor manera de promover el desarrollo sustentable y la protección ambiental es a través de un proceso de democratización que involucre a pequeños productores en la creación de políticas agrícolas, ganaderas, forestales y ambientales. Una reforma agraria que impulse la justicia y la dignidad sociales de los agricultores es un elemento vital para proteger la fertilidad de la tierra a futuro. Los agricultores, tanto hombres como mujeres, necesitan participar directamente en la elaboración de dichas políticas. La sociedad civil ya está desarrollando formas de autogobierno en zonas tanto urbanas como rurales, que deben ser respetadas como bases para el fortalecimiento de la democracia en los países de las Américas. Ningún elemento de los acuerdos internacionales en materia de integración debe limitar la capacidad de los Estados Nacionales de impulsar y consolidar este proceso.
- Con respecto a lo postulado en el ALCA sobre Acceso a Mercados y Reglas de Origen, el planteamiento neoliberal de los promotores del libre comercio han sostenido que aumentos en el acceso a mercados inevitablemente resultan en aumentos en crecimiento y prosperidad para los países participantes. En la declaración final de la Cumbre de las Américas de Miami, los líderes nacionales proclamaron que: "Una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras... La eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico". Naturalmente, esto es falso a menos que se respeten los siguientes criterios:

- Los distintos niveles de desarrollo entre los países que formarían parte del ALCA son la justificación para permitir un trato no recíproco y preferencial en el acceso a mercados. Las economías pequeñas deben poder mantener barreras comerciales sobre sectores estratégicos. Los artículos 2, 4, 17 y 18 de la Carta de Derechos Económicos y Deberes de los Estados de la ONU (1974) y la Cláusula de Habilitación de la Ronda de Tokio del 28 de noviembre de 1979 (L/4903) establecen las bases legales y socioeconómicas para exigir un trato equitativo (no igual). El trato igual entre desiguales conduce a la inequidad.
- Debe haber una estrategia de desarrollo multifacética que no trate al mercado externo como el único motor para el crecimiento y la prosperidad. Debe ser valorado apropiadamente el papel de los mercados nacionales en la generación de un "círculo virtuoso" que eleve los niveles de vida de las poblaciones y que intensifique su bienestar económico y social. Al vincular el desarrollo económico al bienestar social, se elevará inevitablemente el nivel de vida de la mayoría. La lucha contra la pobreza y la búsqueda de la justicia social han dejado de ser sólo demandas éticas; se han convertido en impulsoras del desarrollo. Cuando los países apoyan demandas nacionales y actividades económicas importantes que no dependen sólo de los mercados externos, tienen la capacidad de acercarse a negociaciones comerciales desde una posición de fuerza más que de sumisión.
- El acceso permanente y anunciado a los mercados extranjeros es importante para avanzar en el crecimiento de la capacidad productiva y para garantizar un equilibrio saludable de la balanza de pagos. Es decir, las importaciones necesarias son financiadas por medio de un sector de exportaciones fuerte y competitivo. Sin embargo, mientras las fuerzas del mercado tienden a eliminar productores no competitivos, la liberalización comercial no crea por sí misma una capacidad competitiva y productiva fuerte. El desarrollo y la competitividad requieren de políticas concretas con objetivos, metas e instrumentos claros. Los Estados tienen la responsabilidad de enfrentar ese desafío. Los acuerdos no deben afectar la capacidad de los Estados para establecer una política de

promoción y hasta de protección de ciertas industrias estratégicas, con miras a lograr un desarrollo nacional justo y sustentable.

- Por ahora, los obstáculos fundamentales para acceder a mercados de países desarrollados no son las barreras arancelarias sino las llamadas "barreras técnicas al comercio". Las negociaciones comerciales deberán atender este asunto mientras reconocen restricciones legítimas para proteger la salud y el medio ambiente.
- La meta de las negociaciones deberá ser establecer reglas claras y justas para un acceso permanente y anunciado a los mercados que beneficie a los consumidores, genere empleos y bienestar para la población, fortalezca la capacidad productiva y proteja el ambiente.
- En cuanto a las Reglas de Origen que hacen referencia a los criterios que debe cumplir un producto para que se le considere originario de un lugar determinado, afectan el trato que recibirá en el intercambio internacional bajo acuerdos de libre comercio. La tendencia de dichos acuerdos es establecer reglas de origen regionales que especifican un porcentaje de componentes o insumos que serán incluidos para poder calificar para la designación de origen. Si bien no excluimos requerimientos adicionales de contenido regional o subregional dentro del continente, nuestra opinión es que los países deberían ser capaces de establecer reglas de contenidos nacionales cuando el país considere que el desarrollo económico interno requiere de dicha designación. Esta demanda o principio complementa otras propuestas en el capítulo sobre inversiones en relación con el requerimiento para compañías extranjeras de adquirir un porcentaje de insumos en el país productor.
- Algunos países podrían considerar que, al no haber reglas de contenido nacional, la liberalización comercial sólo beneficia la integración intra-firma y conduce a la desintegración de los vínculos productivos nacionales. A falta de incentivos para intercambio de insumos de producción dentro del país productor, las grandes compañías exportadoras revierten las importaciones. Esto elimina el crecimiento económico, a pesar de la producción creciente. El modelo neoliberal asume que el sector de exportaciones es el motor del crecimiento económico. En la práctica, este "motor" se desconecta del resto del tren. Las reglas de

origen que sólo exigen un contenido regional transforman el aparato productivo de muchos países del sur en maquiladoras o en zonas de procesos de exportación.

- Finalmente, en cuanto a los Servicios debe tenerse en cuenta que las negociaciones de cualquier acuerdo de integración deben tener presente que la mayoría de los servicios básicos presentan características de *monopolio natural* o de *bienes públicos*. Además, muchos de los servicios están relacionados a la identidad cultural de un país o a la cohesión política y social del mismo (la educación, la salud o la previsión social, por ejemplo). En consecuencia, las normas que deben regular el comercio de servicios no pueden ser las mismas que se aplican a los bienes.
- Los Estados nacionales deben asumir la responsabilidad de garantizar a toda la población el suministro de los servicios básicos y de utilidad pública y, por ende, deben comprometerse a alcanzar objetivos regulatorios legítimos en el campo de las políticas públicas, tales como la protección al consumidor y el acceso universal a los servicios esenciales. Cualquier regulación internacional antimonopolio en el campo de los servicios debe tener en cuenta que los Estados Nacionales, cuando así lo exija el bien público, deben conservar la posibilidad de mantener empresas públicas proveedoras exclusivas de servicios vitales para la población.
- Cualquier negociación sobre servicios debe hacerse sobre la base de una perspectiva amplia que incluya los intereses nacionales y de la ciudadanía, junto a políticas vinculantes como las relativas a inversión extranjera, competencia o propiedad intelectual, entre otras. Dicho en otros términos, el destino de los servicios no puede entregarse al mercado ni a una política determinada desde una perspectiva de asignación eficiente de los recursos.
- Un verdadero acuerdo debe tener en cuenta las grandes diferencias en tamaño y nivel de desarrollo de los servicios existentes entre los países. Un trato especial y diferenciado es absolutamente necesario, y éste no se puede limitar a mayores plazos de implementación de los acuerdos.

- Las actividades financieras han continuado dominando la globalización de los servicios. La búsqueda de una estructura regulatoria adecuada para los flujos financieros debe ser contemplada en cualquier proceso de negociación. Debe ponerse especial atención a los capitales especulativos.
- Todo acuerdo de integración debe basarse en el respeto irrestricto a la soberanía nacional y la democracia. Los principios de "trato nacional" y de "acceso al mercado" que se incorporan en las negociaciones sobre servicios, no son aceptables debido a que no hacen más que buscar el libre acceso de las empresas extranjeras a los servicios locales, restringiendo o prohibiendo las políticas gubernamentales que aparentemente interfieren el mercado.
- La transparencia en toda negociación es esencial. Las negociaciones del ALCA y de otros acuerdos bilaterales o regionales se están llevando a cabo a puertas cerradas, bajo la presión corporativa pero lejos del control público y de los medios de comunicación; a pesar que la gran mayoría de los habitantes del hemisferio serán afectados por ella.
- Hasta acá, una recensión incompleta de lo que acarrearía la firma por parte de nuestros países de un "acuerdo" como el ALCA. Las negociaciones, en este momento, se encuentran empantanadas. El MERCOSUR ha tomado una posición uniforme (exceptuando quizás a Uruguay hasta noviembre cuando se va el conservador gobierno de Batlle). No sabemos cuánto de esta posición responde al interés por satisfacer las legítimas aspiraciones de sus pueblos y cuánto a la defensa de los intereses de los propios empresarios nacionales.
- En todo caso, hay mayor tiempo para reflexionar, organizarse y movilizarse en contra de un instrumento de avasallamiento económico que reduciría a escombros el aparato productivo latinoamericano con sus previsibles derivaciones sociales.

Tanto va el cántaro a la fuente que por fin se rompe*

Hace ya bastante más de un año, sectores campesinos organizados empezaron a denunciar casos de intoxicación e incluso de muertes por la aplicación masiva e irresponsable de potentes biocidas¹ en cultivos de soja transgénica. La paciencia campesina se está rompiendo a causa de la aún más irresponsable inacción gubernamental ante el problema, a pesar de los reiterados reclamos de las principales organizaciones y sus líderes.

Ante el desolador panorama económico del país, las autoridades respectivas de la administración Duarte Frutos (que apenas acaba de cumplir la décima parte de lo que va a durar su gestión) no han encontrado mejor escapatoria que firmar un vergonzoso acuerdo *stand by*, el 15 de diciembre pasado, con el Fondo Monetario Internacional. Todo “acuerdo” de este tipo tiene una larga lista de lo que se conoce como “condicionalidades”. Esto es, condiciones que el país signatario debe cumplir para que el FMI lo apoye.

¹ Nombre genérico para todo producto que “mata la vida”, específicamente aplicable a la amplia variedad de agrotóxicos utilizados en la agricultura.

Una de esas condiciones es que el PIB nacional crezca –durante el 2004– al menos un 2,8% (la población viene creciendo a un 2,7%), de modo a revertir el retroceso real de la economía paraguaya² durante los últimos ocho años. Completamente todos los sectores económicos del país están estancados (o en vías de destrucción), ¿cómo podría entonces crecer la economía nacional? Con la soja, específicamente con la soja transgénica.

La “vista gorda” que están haciendo las autoridades gubernamentales ante las increíbles barbaridades y estragos que está causando el frenesí químico de los sojeros, se explica porque para el gobierno, la única alternativa de cumplir y dar satisfacción al FMI, estriba en el ingreso de las divisas de las que momentáneamente dispondrá el Banco Central al percibir en dólares (o euros, o la divisa que sea) las exportaciones de la oleaginosa³. Mal podría entonces el gobierno proteger a la población de las áreas rurales de la agresividad de los sojeros, ya que tal protección implica necesariamente, o poner coto a la expansión del área sembrada, o sancionar las infracciones a la legislación ambiental, en ambos casos el volumen de la producción caería y con ello ingresarían menos divisas al BCP y no se alcanzaría el prometido de 2,8%.

Se llega así a la conclusión que el principal responsable de la destrucción ambiental del país, de las muertes de varias personas, de la intoxicación de muchas más, de la descampesinización que está produciendo el avance de la soja-t, de la represión a campesinos que intentan defender su vida, su *tekoha*, es el propio gobierno. Los campesinos heridos y muertos defienden su tierra, defienden su piel⁴, el gobierno agresor y antipopular defiende a los agroexportadores, al FMI. Paradojal situación la nuestra; en abril de 2003 hemos elegido voluntariamente a quien sería poco después nuestro verdugo. La reacción de los damnificados por el uso de estos biocidas puede clasificarse de tres formas. Por un

² Que tuvo un crecimiento del PIB siempre inferior al crecimiento poblacional.

³ Esas divisas son cambiadas a moneda local para el correspondiente pago al exportador. O sea, el BCP retiene en dólares y traspasa esa cantidad en guaraníes al cambio del día al exportador. El volumen de exportaciones es contabilizado en las cuentas nacionales y hace aumentar el PIB sectorial, en este caso agrícola.

⁴ Al decir del Padre Bartomeu Meliá en “El campesino, la tierra y su piel”. Revista *Acción*, marzo 2004.

lado está la de los conformistas o fatalistas, que se resignan a la situación y venden sus lotes o derechos y se mudan a algún pueblo o ciudad, normalmente a sus orillas para convertirse, a la corta o a la larga, en pobladores marginales, marginalizados, sin chance alguna de volver a tener un pedazo de tierra, sin perspectivas de volver a tener un futuro. En la mayoría de los casos, en este grupo se encuentran los campesinos no organizados.

Por otro lado, está la reacción que podría considerarse “institucional”. Se observa en muchos Departamentos del país la conformación —durante el último año— de “Coordinadoras por la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente”. Ya existen en San Pedro, Concepción, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y se están formando en otros. Estas coordinadoras están integradas no sólo por organizaciones campesinas, sino también por docentes, jóvenes, estudiantes, comunicadores, intendentes, miembros de juntas departamentales y municipales, religiosos y otros. El propósito de las mismas es hacer denuncias acabadas de la situación, coordinarse a nivel nacional y hacer planteamientos concretos de solución.

Por último, se da un tipo de reacción que puede considerarse de acción directa. Bloqueo de caminos para evitar el paso de equipos fumigadores, manifestaciones y más recientemente, quema y/o corpida de sojales en etapa de cosecha. Desde luego, este último es el tipo de comportamiento que preocupa al gobierno. El máximo encargado de la “seguridad interna” del país ha declarado recientemente que las autoridades del país, las fuerzas armadas y la policía, están para garantizar la seguridad de los ciudadanos, dejando con esto en claro que se protegerá a los propietarios de los sojales ante los “actos de vandalismo” llevados a cabo con “inconfesables propósitos”⁵. Llama la atención que estos aparatos represivos del Estado no estén presentes cuando aquellos mismos propietarios fumigan sus cultivos a escasos metros de viviendas o escuelas de los campesinos, quienes también y más frecuentemente ven amenazada su seguridad física por la aspersión de agrotóxicos que pueden considerarse verdaderas armas de destrucción masiva.

⁵ Declaraciones del Ministro del Interior. Nota del Canal 13 de TV, noticiero del mediodía del día 03/03/04.

Los sectores sociales afectados de manera directa por el modelo agroexportador, por el monocultivo, por la agresiva tecnología química que implica, así como los sectores sociales sensibilizados por la suerte de aquellos compatriotas, por el impacto sobre el medio ambiente y por las secuelas de pobreza y degradación que dicho modelo produce, no han intercambiado todavía lo suficiente, como para desarrollar una estrategia de resistencia conjunta. Las Coordinadoras departamentales, la Federación Nacional Campesina, la MCNOC reaccionan todavía aisladamente una de otra, sin embargo, la magnitud del problema crece día a día. La quema de sojales por parte de grupos campesinos desesperados, o por parte de los mismos propietarios que pretenden desalojar a los campesinos del vecindario por vía de la represión que desataría su presunta culpabilidad, implica una escalada en esta lucha entre el modelo capitalista depredador de la agricultura intensiva de exportación y la agricultura campesina. Es una lucha desigual que nos degrada a todos. A los más pobres porque los remite a situaciones de indigencia límite, a la enfermedad y al desarraigo. A los más ricos y a los opresores porque los convierte en verdugos de su propio pueblo, en depredadores de su propia tierra, en ladrones de la riqueza del país para entregársela a las multinacionales y a la banca privada extranjera. Los campesinos han apelado reiteradamente al diálogo, han llamado la atención sobre las graves consecuencias sobre la salud humana y medioambiental de la soja-t y su paquete tecnológico, han acudido y apelado a cuanto recurso institucional tenían a su alcance, pero toda paciencia termina por acabarse cuando la ceguera y la obsecuencia de las autoridades desoye legítimos reclamos. Al parecer las “autoridades democráticas” de la administración Duarte Frutos prefieren adular a los jerarcas financieros mundiales y dar la espalda a su pueblo. Igual que Malinche.

¿Conservadores o atrasados?

Pistas para entender lo que no está haciendo el gobierno con los campesinos*

“Érase una vez un lobito bueno, un príncipe malo y una bruja hermosa”.

Por momentos (que son cada vez más frecuentes) algunos tenemos la sensación de estar viviendo en el mundo al revés. Los pobres plantean lo que recomiendan hacer los organismos más serios y actualizados a nivel mundial, mientras el gobierno (con gente que presume ser muy instruida) se empeña en aplicar instrumentos de política económica neoliberal, completamente superados, ineficientes y probadamente excluyentes.

La referencia es con respecto al problema campesino. Recuerdo que allá por la baja década del 90 participé como consultor en un TCP de la FAO. Uno de los expertos extranjeros era especialista en producción ganadera y se encontraba analizando la evolución del hato ganadero en el país. En una rueda informal de conversación, comentaba con no poco buen humor que, de seguir evolucionando como venía, la proyección mostraba que para dentro de 25 años los paraguayos tendríamos que salir todos del país para que cupieran las vacas. Afortunadamente la tendencia cedió.

Una década después, el mismo fervor económico vuelve a envolver a entusiastas productores. Esta vez son sojeros. De cultivarse poco más

* Diario La Nación, 25 de marzo de 2004

del millón de hectáreas hace cuatro o cinco años, en el actual ciclo agrícola se han superado las 1,5 millones. Sólo entre el anterior y el actual ciclo agrícola se han incorporado al cultivo de la soja 350 mil has. según el Pdte. de la CAPECO, Jorge Jure. Si esta tasa de crecimiento se mantuviera –hipotéticamente– durante 15 años, se alcanzaría la superficie total de cultivos que existe hoy. O sea, en el campo paraguayo no habría otra planta que no sea soja. El *ratio tinio ad absurdum* de la vieja lógica aristotélico-tomista nos muestra que en el mediano plazo este modelo es inviable, aunque tan sólo sea por la lógica.

Lo es también desde el punto de vista político, pero principalmente desde el punto de vista social. ¿En qué se emplearían, o cómo vivirían los 2.1 millones de campesinos que hoy tenemos en el país si toda la tierra cultivable estuviera sembrada de soja? Esto, que parece ser el delirio de un grupo relativamente reducido de productores (no más de 30 mil sobre un total de 320 mil) es la realidad hoy. Pero ahí no acaba la cosa; las mismas autoridades sectoriales del gobierno (MAG), como las económicas (principalmente Hacienda), ven con fruición este “despegue” de un tipo de agricultura que hará crecer el PIB sectorial, estimativamente, en 14% durante 2004. Este crecimiento arrastraría al conjunto del Producto nacional que crecería por encima de la tasa de crecimiento poblacional. Esta es la tenebrosa fantasía fondomonetarista que fue puesta como una de las condiciones en el acuerdo *stand by* firmado por Borda en diciembre pasado.

Con este comportamiento económico, el gobierno está hipotecando el futuro del país. A corto plazo da réditos concretos: el FMI muestra la tarjeta verde, aprueba desembolsos de contingencia, aumenta, con esos Derechos Especiales de Giro, las reservas internacionales del país (momentáneamente), los bancos privados multinacionales vuelven a tener una cierta predisposición a prestar dinero. Pero, ¿y en el largo plazo?

Aumento de la deuda externa, mayor sujeción a las condiciones impuestas desde Washington por ciertos organismos multilaterales de crédito, pero sobre todo, reducción aún mayor de la inversión social (educación, salud, vivienda, tierra y otros), menor disponibilidad de crédito interno, en consecuencia, menor inversión productiva, y con ello disminución

de la oferta de empleos que equivale a desocupación y caída de los salarios y precios reales pagados a trabajadores y productores, disminución aún mayor del mercado interno, desmantelamiento del aparato productivo (por falta de circulante).

No menos crítica se presentará la situación en el agro con el avance de la soja. Previsiblemente asistiremos a un mayor número de muertes e intoxicaciones por el uso vandálico de potentes biocidas (entre los que se encuentra el tristemente célebre Roundup), abandono forzado del campo por parte de campesinos, creciente pérdida de soberanía territorial y cultural por el avance de la frontera física ocupada por productores de origen extranjero, destrucción aún mayor del medio ambiente (lo que queda de bosques, flora nativa, fauna terrestre e ictícola), total desgaste de los suelos agrícolas, intensificación del proceso de desertificación (ya presente en muchas zonas de la región Oriental), enajenación de grandes extensiones de tierra que pasarán a manos de empresas transnacionales (como ya es el caso con la empresa Victoria S.A. en Puerto Casado con 400 mil hectáreas en manos de la secta Moon), creciente dependencia alimentaria por el monocultivo de una *commodity* que suplanta la diversificación propia del autoconsumo, creciente dependencia de insumos importados para las exportaciones nacionales, y lo paradójico, el previsible monopolio que la empresa Monsanto (productora de las semillas transgénicas de soja y de los herbicidas en uso) tendrá sobre el comercio exterior paraguayo.

Éste es el modelo contra el cual se pronuncia la FNC, éstas son las políticas neoliberales aplicadas al agro que denuncia la MCNOC, ésta es la inconsciente propuesta gubernamental que motiva la formación de las Coordinadoras Departamentales. Ésta es la inconsciencia neoliberal que apaña un gobierno que el Paraguay no se merece.

Mientras los campesinos y los pobres del país buscan la vida, los poderosos de siempre buscan más lucro. La razón y la lucidez parece estar del lado de los desheredados, mientras que los que debieran hacer gala de estadistas, muestran la desvergüenza de la sumisión.

La reacción campesina y popular ante la soja*

El festín de algunos es para otros el adiós a su condición de agricultor.

El destemplado afán por aprovechar las oportunidades del precio internacional y la necesidad del gobierno –presionado por el FMI– de lograr un crecimiento del PIB por encima del crecimiento de la población, conjuga una situación extremadamente delicada para miles de agricultores campesinos que se resisten a abdicar de su condición de tales y de su histórica defensa de la identidad paraguaya. Un breve recuento histórico sobre el capitalismo en la agricultura paraguaya.

En nuestro país, las relaciones sociales de producción han estado siempre muy atrasadas y el capitalismo, sólo imperfectamente ha incursionado hasta hoy en el conjunto de nuestra economía, especialmente en la agricultura, en la que se da la coexistencia de una agricultura capitalista altamente mecanizada, de tipo *farmer*, con formas precapitalistas (además de la campesina) de explotación de la tierra y de la fuerza de trabajo¹.

¹ En efecto, tal como lo afirma Gilles de Staal, cuando una propiedad es más extensa que varios cantones franceses, u holandeses, o belgas, los habitantes de esas regiones son súbditos del dueño de la tierra o de la empresa que la posee, antes que ciudadanos.

Mientras en otros países de la región la agricultura capitalista ya estaba consolidada hacia fines del siglo 19, en el Paraguay la primera forma clara de presencia de dicha manera de explotación agrícola se inicia con la colonización europea y japonesa que se instala en Itapúa a partir de las décadas de los años 20 y 30. Es agricultura *farmer* pero queda circunscrita a esa región. No se expande y coexiste (aunque no sin problemas) con la escasa población campesina que la rodea. Eran épocas en que la densidad poblacional era baja y había sobreabundancia de tierra.

Una segunda forma de presencia de la agricultura capitalista en el país fue a través del Plan del Trigo impulsado por Stroessner a comienzos de la década de los 60. Aprovechando la “revolución verde” y el apoyo norteamericano después de la Reunión de Montevideo con Kennedy sobre la Alianza para el Progreso en 1961², la dictadura estima que el Paraguay debe ser autosuficiente en trigo. Stroessner reparte la tierra y asigna los fondos entre empresarios “amigos”, en realidad pseudo empresarios. El Plan fracasa a los pocos años. Las Ligas Agrarias empiezan a desarrollarse como reacción a la ocupación capitalista de los medios de producción, precisamente en Misiones donde se inicia dicho Plan.

Hasta finales de los años sesenta así, la agricultura capitalista apenas tenía presencia en el país, caracterizado en su estructura agraria por la dualidad latifundio/minifundio. Las primeras colonizaciones iniciadas por Juan Manuel Frutos desde el recientemente creado IBR (en 1963) en el Eje Este (Repatriación, O’Leary y J.L. Mallorquín) y en el Eje Norte (Choré), el latifundio ganadero y el latifundio forestal sería un intento fallido por desconcentrar la propiedad de la tierra. Pero esta colonización sienta las bases fundiarias para lo que vendría inmediatamente después.

En efecto, la primera oleada significativa (y devastadora) de la agricultura capitalista se da con el ingreso de brasileños por expansión de la frontera de la soja, en los estados del sur de Brasil, hacia fines de dicha década y durante toda la década de los 70. Es la ofensiva más importante de la agricultura capitalista *farmer* sobre la campesina, registrada

² Este apoyo norteamericano forma parte de la ofensiva anticomunista en toda América Latina por el reciente triunfo de la revolución cubana.

hasta la fecha. En los Departamentos de Alto Paraná, norte de Itapúa y la mitad oriental del de Canindeyú produce resultados ecológicos desastrosos. Colonias antiguas pobladas por campesinos paraguayos creadas por el Instituto de Reforma Agraria en décadas anteriores, y colonizaciones nuevas, como la de Minga Guazú, son ocupadas por brasileños y se expulsa a campesinos paraguayos, quienes se limitaron a ocupar precariamente la tierra hasta haberla desmontado de modo a que sean aptas para las labores mecanizadas. Esta ofensiva se atenúa durante la segunda mitad de la década de los 80 y primera de los 90. A partir de la segunda mitad de la década pasada, se empieza a insinuar un nuevo rebrote de la inmigración brasileña, esta vez hacia el Alto Paraguay, pero con fines principalmente pecuarios aunque igualmente ruinosos para los frágiles recursos naturales de esa zona chaqueña.

Ya a comienzos del nuevo siglo, se produce la segunda oleada de la penetración del capitalismo agrario con la soja, pero esta vez ya sobre la soja genéticamente modificada, a partir del ciclo agrícola 1999/2000. Sin disponibilidad de tierras fiscales en esta ocasión, la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte. Los efectos ambientales se agravan por la desaparición de los últimos bolsones de bosque en la región Oriental, así como por el uso indiscriminado de potentes herbicidas y pesticidas. Los efectos sociales, del mismo modo, resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión masiva de familias campesinas de sus tierras.

La situación hoy es mucho más compleja que la que se tenía hace 30 años, cuando se registra la primera expansión de la agricultura capitalista *farmer* sobre la agricultura campesina.

La reacción de los afectados

No se abordan aquí los aspectos económicos, ambientales o incluso estrictamente políticos de un problema que ya tiene alcance nacional; se intenta una clasificación de cuáles han sido las respuestas sociales de diferentes sectores ante esta verdadera invasión química y de la mecanización.

En principio se puede hablar de tres reacciones; la de la aceptación pasiva del desalojo, la institucional y la de la acción directa.

- Se trata de familias campesinas desalojadas por el poder del dinero. El ofrecimiento es en muchos casos en dólares, en efectivo. Los precios suelen oscilar entre U\$ 500 y U\$ 1.700 por hectárea y se paga ya sea por tierra titulada, con título provisorio o incluso por “derecheras”³. No existen datos oficiales sobre la magnitud del problema. Una estimación –excesivamente grosera– puede ser hecha sobre la base de la expansión del cultivo y las áreas sobre las cuales el mismo se expandió. Según la CAPECO⁴ entre el ciclo agrícola 2002/03 y el del 2003/04 el área sembrada con soja aumentó en 350 mil has. De éstas, puede estimarse que un tercio corresponden a tierras ganaderas reconvertidas a soja, ya sea por sus propietarios o dadas por éstos en arriendo a sojeros. Otro tercio serían tierras no campesinas de distintos tipos de propietarios, obtenidas ya sea por compraventa o por arriendo. Pero al menos un tercio corresponderían a tierras que anteriormente pertenecían a campesinos y que fueron adquiridas por sojeros. Reconocemos que esta estimación no tiene basamento en datos de ningún tipo, son meras estimaciones, pero aún conservadoramente puede hablarse de que aproximadamente 100 mil has. actualmente cultivadas con soja, han pertenecido en el ciclo agrícola previo al 2002/3 a familias campesinas; se trataría de unas 10 mil familias que habrían abandonado sus lotes y chacras (unas 70 mil personas) que ya no viven en el campo, que ya no producen comida, y cuya diversidad productiva se ha perdido.
- Un segundo grupo de afectados ha reaccionado de una manera que podría definirse como “institucional”, a través de sus organizaciones y en alianza con otras organizaciones sociales, de la Iglesia y de los gobiernos descentralizados. La MCNOC, con al menos tres obispos (y buena parte del clero de sus respectivas diócesis), no menos de una docena de intendentes, varios representantes de Concejos departamentales y municipales, unidos a organizaciones de

³ O sea, meras ocupaciones de tierra sin que el IBR haya iniciado trámites para su correspondiente legalización.

⁴ Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas.

docentes, estudiantes, radios comunitarias y otras, formaron lo que dio en llamarse las “Coordinadoras Departamentales por la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente”. De manera activa se encontrarían funcionando cuatro de ellas. En formación se encuentra también una Coordinadora Nacional de Coordinadoras Departamentales. La adhesión de una parte de la Iglesia jerárquica y de un número significativo de representantes de municipios, da un respaldo especial a las organizaciones campesinas. En conjunto, piensan realizar acciones de concientización a la población, denuncias documentadas de casos de violación a la normativa vigente por parte de los sojeros, así como un petitorio al gobierno que sería presentado próximamente.

- Otro tipo de reacción campesina es aquella que puede considerarse de “acción directa”. Consiste en detener, físicamente, las tareas propias exigidas por el cultivo de la soja. Desde la disuasión directa a los propietarios de no cultivar en determinadas parcelas, bloquear el paso al personal o vehículos que van a fumigar en caminos vecinales, hasta la quema de cultivos terminados y listos para la cosecha. Debe señalarse que hasta hoy nadie ha reconocido la autoría de las quemas: tanto podrían ser realizadas por integrantes de algunas bases de organizaciones campesinas exasperadas por la situación, como resultado de la instigación de políticos que buscan ventajas oportunistas, como realizadas por los mismos propietarios para cobrar sus pólizas de seguro ante otras adversidades que deben afrontar⁵, o podrían haber sido realizadas por mandato del propio gobierno para justificar acciones represivas contra los campesinos y sus organizaciones, ante la incapacidad del mismo por encontrar una salida democrática al problema.

⁵ Inminente aplicación de impuestos a la producción y/o exportación de soja, venta anticipada (a futuro) de la producción a precios muy inferiores a los actuales del mercado internacional, paro de camioneros por reclamos sobre fletes, paro de trabajadores en el puerto de Paranaguá, coimas solicitadas por autoridades políticas, gastos de “custodias” de cultivos (a policías o matones), y otros.

En conclusión, por razones que tienen que ver con la necesidad de lograr una cierta velocidad de crecimiento económico, o con el desprecio típico que ha caracterizado a las autoridades nacionales hacia el campesinado, o por ignorancia o por corrupción, las autoridades administrativas y los políticos muestran hasta el momento una criminal indolencia hacia el problema, cuando no complicidad, especialmente por parte de integrantes del Poder Judicial (fiscales y jueces) y de autoridades policiales y militares.

Es indudable sin embargo, que en poco tiempo la expansión del cultivo de la soja transgénica y el uso de la última generación de biocidas se ha convertido en una cuestión política de la mayor importancia en el país. La delicada situación planteada depende de los criterios que vaya a usar el gobierno para vérselas con la misma.

Caracterización del país*

Caracterización política

1. (Gilles de Staal) Es en la esfera de la relación política entre sociedad y poder donde deben producirse los verdaderos cambios para poder hablar de democratización.
2. Lo que estamos observando es una polarización de las fuerzas sociales, gremiales, patronales para aumentar los controles institucionales: los poderes políticos locales; los poderes de la justicia; la organización de las policías; el derecho a la propiedad de la tierra.
3. La cultura del monopolio y la cultura de elites estructuran todos los aspectos de la sociedad paraguaya. Cultura en este sentido se refiere a la concepción de cultura como conciencia, y no a la concepción de cultura como patrimonio.
4. El Estado paraguayo es reflejo e instrumento de esa cultura de elites. Las instituciones estatales están fragmentadas, se consolidaron “autarquías” institucionales que gozan de una notable autonomía: legislativa, ejecutiva, judicial, bancaria, mafiosa, y que se organizan corporativamente.

* Apuntes para un programa de televisión. Abril 2004.

5. De este modo las instituciones son enteramente instrumentadas por los grupos oligárquicos, dueños de la riqueza, que se reparten su monopolio y redistribuyen sus protecciones según su clientela, determinando así la geografía política, la geografía del poder del país.
6. En buena medida, el poder político real se limita al de los feudos clientelistas, muchas veces familiares, que reinan sobre regiones, pueblos o monopolios económicos enteros, desviando en su provecho el bien público, vendiendo su apoyo u oposición al poder central.
7. El desvío de fondos públicos, la evasión de capitales ilícitos, la proximidad con el comercio internacional de drogas, el contexto de descomposición y violencia social exacerbada, hicieron de esas elites políticas (pero al mismo tiempo terratenientes, financieras, judiciales), los socios cada vez más naturales para la delincuencia organizada a gran escala.
8. Hace falta algo más que textos de ley para reducir el poder de las oligarquías, para establecer un control democrático sobre las instituciones y los fondos públicos, para dar sentido a la cosa pública.
9. Hace falta incluso algo más que la movilización y vigilancia de los movimientos sociales y populares, que se manifiestan a diario contra las arbitrariedades, los abusos y los crímenes de esos feudos.
10. Ya que el gobierno no es el poder, esa indispensable movilización civil debe encontrar el apoyo de una fuerza pública que haga respetar la autoridad democrática del gobierno y el derecho de las personas.

Caracterización económica

1. Por lo dicho anteriormente, toda apertura del Estado hacia un nuevo modelo económico (ya que de algún modo las elites oligárquicas supieron adaptarse al neoliberalismo) requiere un profundo cambio de las instituciones y de las costumbres del poder político, una democratización de la nación.

2. Por el momento, se asiste todavía a la sujeción de aquellas elites oligárquicas a los mandatos del Consenso de Washington, debido a la fuerte influencia de la Embajada norteamericana, ángel tutelar de las transnacionales de ese país. Las elites locales no tienen capacidad ni interés de formular un proyecto propio y adoptan –para poder seguir actuando libremente a nivel local– lo que le viene dado por el FMI.
3. Sin apoyo a la producción nacional, apelan a la recesiva receta de aplicar más impuestos para poder pagar una deuda externa cada vez menos pagable. Mientras tanto las actividades financieras especulativas¹ hacen su agosto.

Caracterización social

1. El hecho que el Paraguay sea una de las sociedades con mayor y más desigual concentración de la riqueza, y en particular de la tierra, no es sólo el resultado de las políticas neoliberales. Es resultado

¹ Además de especulativas (el sistema bancario paraguayo está constituido principalmente por empresas de capital transnacional), muchas de sus prácticas caen directamente en la categoría de delitos. Entre ellas: i. los bancos cobran, además del diferencial entre lo que pagan a sus depositantes y lo que cobran a sus clientes (*spread*), comisiones, tasas y otros cargos adicionales por los servicios que prestan; ii. en muchos casos estos cargos no están especificados debidamente en las ofertas de servicios, lo cual da una versión distorsionada del costo final de los mismos; iii. en muchas ocasiones los servicios bancarios tienen deficiencias muy molestas y costosas para los usuarios, cuando éstos reclaman, se encuentran en inferioridad de condiciones para obtener las compensaciones que les corresponden; iv. los criterios de transparencia, seguridad jurídica y competencia leal, que generalmente esgrime el *establishment*, aparecen devaluados en la asimétrica relación banco-cliente; v. son innumerables los reclamos por servicios bancarios y tarjetas de crédito, los más comunes son por débitos de gastos no previstos en los contratos, cobro indebido de mantenimiento en cuentas sueldo, elevadas tasas de interés, problemas con los cajeros automáticos, como falta de acreditación de depósitos, extracciones indebidas y sustracción de la tarjeta magnética seguida de faltante de dinero. Otros reclamos incluyen; vi. problemas operativos para el procesamiento de cierres de cuentas solicitados por los clientes; vii. aumentos no anunciados y generalmente elevados de tasas de interés para saldos en descubierto; viii. en muchos casos los bancos emiten tarjetas de crédito sin requerimiento previo del cliente, lo que coloca a este último en la necesidad de comunicarse con el banco, hacer trámites de cancelación o arriesgarse a recibir cargos por servicios que no utilizó; ix. se registran casos de disminución unilateral de límites de compra con tarjetas; x. cuando en una operación intervienen dos bancos, cada uno de ellos le echa la culpa de la falla al otro, o a la red de cajeros, lo cual deja al usuario en estado de indefensión (Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, dic. 2003, 10).

de tendencias históricas prolongadas: se apoya en una concentración de bienes raíces superior a la concentración de ingresos. El neoliberalismo no ha hecho más que llevar esas tendencias profundas a lógicas extremas.

2. En estas condiciones, el crecimiento de los ingresos de algunos y del consumo de esos mismos está ligado a la monopolización de las riquezas, lo cual hace que el mercado se desarrolle dentro de una esfera cada vez más reducida y la exclusión crezca.
3. La prosperidad de una ínfima minoría en el país es el principal vector del crecimiento económico general.
4. La Policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial requieren de una reforma radical para hacer valer el poder real democrático de un gobierno no subordinado a los poderes de facto.
5. El país vive en un contexto de desintegración y exclusión social a gran escala. La descomposición moral y la fragmentación clientelista de las policías, de las Fuerzas Armadas, de la cúpula y los operadores judiciales de bajo nivel (fiscales, jueces, actuarios) expande en todo el país una ola de delincuencia y violencia generalizada, insoportable para la mayoría de la gente.
6. En otras palabras, el Presidente no tiene bajo su control la actuación de las policías, de los cuadros subalternos de las Fuerzas Armadas. Apenas logra mayoría en una de las cámaras del Legislativo y cuenta con un Poder Judicial que responde a los poderes de facto.
7. La lucha por la tierra es la que más cristaliza la resistencia del aparato judicial, que se erige sistemáticamente en barrera de protección del latifundio y los poderosos sojeros invalidando de hecho leyes de expropiación o decretos de ocupación dados por el gobierno, condenando y encarcelando a dirigentes de la MCNOC o de la FNC u otras organizaciones campesinas, cerrando los ojos al armamento y los crímenes de las milicias de los grandes terratenientes y productores sojeros.

8. La lucha por reducir y combatir el poder político de las oligarquías terratenientes y locales incrustadas en las instituciones del Estado es inseparable de la transformación de la ocupación del territorio.
9. Cuando una propiedad es más extensa que varios cantones franceses, los habitantes de esas regiones son súbditos del dueño de la tierra o de la empresa que la posee, antes que ciudadanos.
10. La limitación del latifundio, el establecimiento sobre sus tierras redistribuidas de un campesinado familiar que le dé un papel importante a la organización y las cooperativas. En una palabra, la reforma agraria sigue siendo entonces –más allá de su dimensión social– una pieza clave en la lucha por la democratización política de la sociedad y del poder territorial.
11. La salida para el país dependerá mucho más de la capacidad del gobierno para resolver estas cuestiones cruciales, que de los buenos índices macroeconómicos o de los acuerdos que firme con el FMI.

Nicanor, 15 de abril, Ginebra*

El resultado de la votación que tendrá lugar el próximo jueves en Ginebra en la 61ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas va mucho más allá de permitir o no la presencia de un relator para informar sobre la situación de los DD.HH. en la isla. Es la excusa que EEUU necesita para invadir militarmente a Cuba. La prepotencia imperial se prepara otra vez para pisotear de nuevo la dignidad latinoamericana.

Duarte Frutos hizo bien en invitar al comandante Fidel Castro y a Hugo Chávez a su asunción de mando en agosto pasado. Duarte Frutos hizo bien en decir no, al envío de tropas paraguayas a Irak. Duarte Frutos hizo bien en no recibir personalmente a un funcionario de cuarta como Otto Reich, que se cree ungido de espíritu imperial. ¿Será que está haciendo bien estos deberes porque se lo insinúan sus pares del MERCOSUR (menos Batlle, por supuesto)? Ellos tampoco enviaron tropas a Irak, ni Lula ni Kirchner recibieron a Reich, ambos invitaron a Fidel Castro y Hugo Chávez a sus respectivas asunciones.

La administración Duarte Frutos está dando muestras de un alineamiento internacional con Argentina y Brasil. Esto marca una diferencia con

* Diario La Nación, 8 de abril de 2004.

los gobiernos anteriores que tuvimos. La pregunta que uno se hace es si ese alineamiento va a continuar o no, qué hará nuestra Canciller el próximo jueves 15 de abril en Ginebra, cuando el voto paraguay cuente —y mucho— para evitar la indigna sanción que pretende aplicar EEUU en la Comisión de Derechos Humanos a Cuba. ¿Se supeditará el voto paraguay a las indecentes presiones norteamericanas por seguir castigando a un pueblo hermano?, ¿tomará Paraguay la actitud de Poncio Pilatos lavándose las manos con una también indecorosa abstención?, o ¿mostrará el gobierno paraguay su rechazo a esta acusación arbitraria, politizada y discriminatoria en la que —¡oh casualidad!— siempre los acusados son países del tercer mundo?

La historia de este sainete versión norteamericana es larga. Ya en 1987 se dio el primer intento de materializar una condena contra Cuba cuando los EEUU presentaron por primera vez un proyecto de resolución que fue desestimado. Sin desalentarse, volvió a presentar en 1988 un nuevo proyecto de resolución contra Cuba: tampoco le fue bien, ya que Argentina, Colombia, México y Perú presentaron otro alternativo que fue adoptado por consenso.

Durante ese mismo año por invitación del propio gobierno cubano viajó a la isla una Misión integrada por el Presidente de la CDH y cinco representantes de Estados Miembros de la Comisión para observar la situación y presentar un informe: en el texto de ese informe se lee que no existían en Cuba violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos. A pesar de eso, EEUU volvió en el 89 a presentar un nuevo proyecto pretendiendo condenar a Cuba. Le volvió a salir mal, ya que fue aprobado otro presentado por los latinoamericanos.

Todo esto ocurría antes del derrumbe del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Con el unilateralismo posterior, la CDH pasa a ser un instrumento norteamericano más para dominar a los países del sur. En 1990 por primera vez se adopta un proyecto de resolución promovido por EEUU. A partir de ese momento se estableció en la práctica un mecanismo selectivo y discriminatorio de seguimiento a la llamada “situación de los derechos humanos en Cuba”. Como es de esperar por parte de un gobierno con un mínimo de dignidad, Cuba siempre se opuso a este monitoreo injustificado, resultado de las presiones políticas y de un

ejercicio politizado y fraudulento que nada tenía que ver con la causa de los derechos humanos.

Entre 1993 y 1998 los sucesivos proyectos de condena ante la CDH por parte de EEUU fueron derrotados. En 1995, no obstante, vuelve a realizarse una visita del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos. Abatido, cabizbajo y con rabia, EEUU consigue que en 1999 nada menos que la República Checa (país que en ese entonces necesitaba el apoyo de EEUU para ingresar a la OTAN) fue convencida de oficiar de “presentador” del proyecto de resolución contra Cuba. Se aprobó, pero este proyecto no contenía ningún mecanismo de “monitoreo”. Se dieron así, desde el 99 hasta el 2001 tres resoluciones anticubanas, no sin graves fricciones y tensiones con los propios aliados de EEUU.

La resolución 2002/18 también condenó a Cuba esta vez con monitoreo (a todo esto, ya la República Checa se había abierto de ese denigrante papel). Cuba rechaza y “no reconoce autoridad alguna a esa persona, quien, por supuesto, no podrá ingresar al territorio cubano”. Ese año se produce la exclusión de EEUU de la CDH, o sea, ya no puede presentar proyectos de resolución. El año pasado utilizó a Uruguay y Perú (contra la explícita voluntad de sus pueblos) para presentar el proyecto de resolución.

Para este año, en la sesión que se hace el próximo jueves 15, el proyecto de resolución condenatorio fue presentado por Honduras (cuyo presidente es un peón en el tablero del ajedrez norteamericano para América Latina), país que aparece segundo más pobre en el continente. Pero este año aparece un nuevo ingrediente en el espeso caldo podrido que prepara EEUU para nuestros pueblos.

Bush se va en noviembre. Es lo más probable. Cuentan que Reich estando en Asunción en un ágape informal manifestó (¿con algunos tragos de más?) que Castro y Chávez tienen que irse y se irán lo antes posible. En suma, además de las “armas químicas” que Powell ya sospecha hay en la isla (cualquier semejanza con las armas de destrucción masiva en Irak son pura coincidencia), precisan de una resolución condenatoria a Cuba para justificar su criminal bloqueo y sus planes de agresión militar.

Bien haría la Cancillería en informar exhaustivamente a Duarte Frutos de éstos y varios otros detalles no directamente visibles de este indigno manoseo norteamericano a nuestros países. Esperemos que la decisión del gobierno paraguayo sea tomada informadamente, conscientemente. Sólo así sabremos calibrar qué línea se está bajando desde la presidencia, podremos saber de qué lado patea realmente el gobierno paraguayo.

De cómo podría una republiqueta sojera atraer inversiones productivas*

Bien sabido es que, quien más quien menos, hace leña del árbol caído. Con la misma lógica, ¿quién querría invertir en un país destartado por la corrupción y el neoliberalismo? Lo que las transnacionales hacen con un país así de caído es leña con la especulación y el despojo.

Hace unas décadas se hablaba de las *Banana Republics*, para referirse a la mayoría de los países centroamericanos en los que se habían instalado varias transnacionales de origen norteamericano que se dedicaban a la exportación de bananas. Eran (y siguen siendo) países con gobiernos títeres puestos por esas mismas transnacionales, empobrecidos hasta la mendicidad, con tremendas injusticias y desigualdades. No tenían proyecto nacional propio, no tenían dignidad, no tenían –por supuesto– soberanía alguna. El término *banana republics* es pues profundamente despectivo. En ellos no existe la república, sino un remedo de ella, un simulacro de país, una republiqueta.

En el Paraguay hay bananas pero no se exportan. Lo que Paraguay exporta es soja transgénica, pero en el resto de las cosas somos parecidos, iguales, un calco de los países recién mencionados. La licencia literaria

* Diario La Nación, 22 abril de 2004.

nos permite pues referirnos a nuestro país como una republiqueta sojera¹.

Creo que hasta acá, casi nadie estará en desacuerdo, ni moros ni cristianos, ni conservadores ni progresistas. Somos un país que da lástima.

Los neoliberalitos (va en diminutivo porque tienen muy poca estatura intelectual) que actúan hoy en nuestro país, se pasan tratando de convencernos que la única salida para el despegue económico es “atraer inversiones privadas extranjeras”. Para eso, hay que hacer de monaguillos de los sumos sacerdotes del FMI que cada tanto visitan el país y que les dan, a esos neoliberalitos (que para desgracia nacional están en el gobierno), las fórmulas mágicas que supuestamente harán del Paraguay, un país dinámico (al estilo del que los Menem y Cavallo hicieron de Argentina).

Como los neoliberalitos nativos tienen tan poco desarrollado el sistema nervioso central implementan como autómatas aquellas fórmulas mágicas, que en realidad son pociones fulminantes para los intereses de la sociedad paraguaya. Pero bueno, a Borda lo puso Nicanor, y a Nicanor lo puso su voto, y si votamos veneno, veneno tomaremos.

Uno de los componentes de la fórmula mágica del FMI es “plantad soja”. Para ser más precisos: “Plantad soja transgénica de la multinacional Monsanto, así os envenenáis vosotros y dejáis tremendas ganancias a una empresa norteamericana, y a los agroexportadores, y a los bancos que os financian vuestras cosechas y vuestras exportaciones. Debéis superar el 2,8% de crecimiento de vuestro PIB y la única forma de hacerlo es convirtiendo la región Oriental de vuestro país en un tremendo sojal”.

Y ahí lo vemos; cientos de personas envenenadas con glifosatos, plaguicidas y herbicidas varios, algunos muertos, cultivos de subsistencia arruinados, animales afectados, mortandad de la fauna ictícola, desaparición de los pocos bosques que quedan, sequía y desertificación. Todo en el sacrosanto nombre de la soja.

¹ Este concepto ha sido utilizado ya por Mariano Cereijo Gelo en su trabajo Transgénicos, Nuevo Orden y Miseria.

Cuando los campesinos ocupan o amenazan que van a ocupar tierras ociosas o en las que se sabe que van a plantar soja, el presto aparato represivo de Nicanor, con el apoyo solidario del Ministro Público don Latorre, hace lo suyo: golpea, encarcela, criminaliza a los que defienden lo que debiera estar defendiendo el gobierno. En estas condiciones los neoliberalitos nos dicen: “las ocupaciones desalientan a los inversores extranjeros”.

Pamplinas. Lo que desalienta a los inversores (inversores productivos me refiero, no especulativos) es ese simulacro de país que somos. El carácter de republiqueta, en la que las coimas están muy por encima de las leyes, en la que la economía en negro supera a la registrada, republiqueta en la que la mortalidad materna es una de las más altas en América Latina, en la que el índice de trabajo infantil lo mismo, en la que sólo el 60% de la población tiene acceso a servicios médicos, en la que el gobierno promete una cosa a los campesinos y luego no cumple y se queja de que habrá invasiones, etc.

¿Por qué el FMI exige que este gobierno privatice Essap, Copaco, ANNP y todo lo que pueda arrojar ganancias? Sencillo: para robarnos mejor. ¿Por qué los neoliberalitos ruegan a las transnacionales que inviertan acá? Sencillo: para recibir sustantivas coimas, comisiones y “alicientes”.

Mientras los neoliberalitos sigan arriba, mejor es que nos nieguen préstamos externos, mejor es que no venga ninguna inversión privada directa extranjera. Mientras podamos, construyamos el país desde abajo, porque *umi oiva yvate itujupaitema hikuái*.

La madre de los imbéciles está siempre embarazada*

No se trata sólo de un medio de transporte ahorrador de divisas, ni siquiera de que sea el único medio que nos queda que prescinde de las transnacionales petroleras y automotrices, es que el Ferrocarril Carlos Antonio López representaba simbólicamente la memoria de un país que se la pudo contra el poder imperial británico de la época. Borrar al ferrocarril es borrar parte de la memoria histórica del paraguayo. Hoy, un rematador público subasta sus rieles y “chatarras”.

La frase del título pertenece a Roberto Calderoli, vicepresidente del Senado italiano y coordinador de la ultraderechista Liga Norte. Fue pronunciada como crítica al llamado que hicieran los padres de los italianos secuestrados en Irak a realizar una gran movilización hoy jueves en Roma para evitar la ejecución de sus hijos. La frase se refiere a que el mundo está lleno de idiotas, que cada segundo nace uno. Si bien el refrán es sabio, al parecer el Sr. Calderoli es también hijo de la misma madre, debe ser porque no tiene ningún pariente secuestrado en Irak.

Esto viene a cuento por la cortedad mental de los administradores de turno de la economía paraguaya, y su no menor falta de patriotismo y de interés por su pueblo. Tomemos un ejemplo, el IBR anunció que de

* Diario La Nación, 29 de abril de 2004.

los Gs. 13 mil millones (algo así como U\$ 2,280 millones) que tenía asignado en su presupuesto para compra de tierras para todo el año, acaba de gastar Gs. 8 mil millones para solucionar uno de los casos esta semana en San Pedro (le quedan sólo U\$ 877 mil para el resto del año). Esta es una razón aducida a las organizaciones para decir que ya no pueden comprar más tierra. De acuerdo al criterio gubernamental, un importante grupo de familias campesinas deberá esperar quizá el próximo ejercicio fiscal (¡calcule usted!) 2005, para ver si le toca la lotería de obtener un lote.

Mientras tanto, durante el 2004 lo que Paraguay deberá pagar en concepto de servicios de deuda externa es de aproximadamente U\$ 270 millones. A los precios pagados por IBR esto equivale a 575 mil hectáreas. Lo que debe comprenderse es que mientras haya que pagar (“honrar” dicen los técnicos) esa deuda externa, no habrá posibilidad alguna que el gobierno haga inversión social. O sea, se prefiere estar bien con los bancos extranjeros a costa del sufrimiento y el hambre del propio pueblo. ¿Podría llamarse a esto un gobierno que defiende al pueblo?

Vaya y pase si la deuda externa paraguaya fuese toda legítima. O si estuviéramos en un período de floreciente crecimiento económico. Pero nada de eso. Estamos más estancados que carreta en esteral y una gran parte de la deuda externa paraguaya es ilegítima. Desde el gobierno no se escuchó pedir una auditoría de la misma, ni una quita (como lo han hecho varios países en el mundo), ni siquiera se escuchó que Nicanor se sumase a la posición de Kirchner y Lula de decir que se prorrateará el pago de la deuda según el crecimiento del PIB. Nada de eso. Sumisión genuflexa al FMI. Y así nos va...

Este mismo criterio descuidista con respecto a los intereses nacionales se observa en otros directores y presidentes de empresas del Estado y entes autárquicos varios. Entrega del patrimonio nacional por el servilismo a los intereses extranjeros. Un caso que mueve a indignación es el de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (fijese el SA que le pusieron, están por ponérselo al país, cosa que de repente no queda mal para algunos: República Sojera del Paraguay S.A.). Pues bien, se trata de favorecer a las transnacionales.

Pasa lo mismo con la solapada intención de privatizar INC (ayer lo mencionaba el presidente del principal sindicato de la cementera), ES-SAP, COPACO, ANDE, se trata de desregular el precio del gasoil (para regodeo de las transnacionales), o sea, de convertir a lo que alguna vez fue el Paraguay en una especie de carnaval para los intereses del capital multinacional.

Pero lo del Ferrocarril pasa ya la raya de la estupidez argumentativa de los neoliberalitos. Van a subastar 12 mil toneladas de rieles (entre Sapucaí y San Pedro del Paraná) a Gs. 270 el kilo, y 500 toneladas de lo que ellos llaman “chatarra” (vaya a saber qué incluyen entre esos hierros viejos) a Gs. 120 el kilo. Si esto no es rematar poco a poco al país, ¿qué es? Bueno, dicen que con esa plata van a hacer “un tren de turismo” hasta Sapucaí. ¡Habrase visto imbecilidad semejante!

El ferrocarril es una competencia a las transnacionales del petróleo, a las transnacionales automotrices y a las que producen autopartes, ya que –aunque el tren fuese a gas oil– la unidad de carga transportada por un tren por litro de combustible consumido, es radicalmente mayor que cuando se la transporta en camiones. Los camiones son comprados a transnacionales, consumen repuestos de transnacionales, cargan gasoil (desregulado a partir de poco tiempo) de transnacionales, van sobre rutas de asfalto que es un derivado de petróleo producido por transnacionales. El petróleo y sus derivados le cuestan al país, divisas. Con el ferrocarril se ahorraría un montón (ahorro que quizá podrían dárselo al IBR para que compre tierras para los campesinos), pero nada... se trata de hacer lo que les dicen desde el norte.

Pero aún peor, el Ferrocarril Carlos Antonio López fue un orgullo para el país. Es más, podría decirse que representó el dinamismo de una gran cantidad de pueblos y ciudades por los que circulaba, formaba parte de la identidad asuncena. Es parte de la memoria histórica y patrimonio económico y cultural de todo un pueblo.

El dicho italiano que usó este Calderoli llega a tener vigencia –como se ve– universal. Hay muchos hijos de esa madre eternamente embarazada.

Promesas incumplidas, consecuencias previsibles*

El 18 de marzo pasado, a fin de desconvocar la movilización realizada por la MCNOC, el gobierno firmó un Acta de Compromiso con dicha coordinadora, con la Plenaria Popular Permanente y la CPA-SPN. El acta lleva la firma del Ministro de Agricultura. A 45 días de los 90 acordados para dar cumplimiento a este compromiso, el gobierno no cumplió ninguno de los puntos. ¿Los podrá cumplir en tan sólo la mitad del tiempo mutuamente fijado?

La tierra está caliente en el campo. No es para menos; la pobreza continúa profundizándose, el incremento del precio del gasoil traerá aparejado no sólo el aumento de precios de productos de la canasta básica sino también un aumento en los fletes agrícolas o la eliminación de camioneros independientes pequeños, que no puedan aguantar una reducción aún mayor del ya pequeño excedente que obtenían. Los transportistas piden aumento de pasajes, los del interior un 40%.

Debe sumarse a esto la dogmática aseveración del ampuloso presidente del PLRA, para quien “la reforma del Estado es una obligación del gobierno”, síntesis folclórica del pensamiento único de los neoliberales, que ha desatado ya una taxativa respuesta de los campesinos acerca de

* Diario La Nación, 6 de mayo de 2004.

que las privatizaciones no pasarán. De ser aceptada esta “luminosa” iniciativa, los liberales de entrecasa estarían dispuestos hasta a apoyar la ley de adecuación fiscal. Las visitas de altos ejecutivos del FMI se suceden semana tras semana para “monitorear” cuán exactamente se pagan los servicios de la deuda, de manera a poder ofrecer nuevos préstamos y endeudar todavía más al país, manteniéndolo de esta manera enteramente sometido al capital financiero.

Y la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo aumentan. Esta situación es particularmente dramática en el campo, infestado ahora de transgénicos y de herbicidas letales.

En este contexto los campesinos de la MCNOC hicieron hace un mes y medio una movilización que apenas duró un día y medio. El Ministro Ibáñez firmó con ellos un Acta de Compromiso, por la cual el gobierno se comprometía a cumplir, en tres meses, los siguientes puntos:

- i. Buscar mecanismos político-administrativos para detener la invasión de extranjeros sobre tierras productivas. Impulsar un proyecto de ley para establecer una zona de seguridad fronteriza y cumplimiento de leyes migratorias.
- ii. Recuperación de tierras mal habidas y destinarlas a familias campesinas
- iii. Garantizar que las tierras recuperadas por los Bancos públicos y otras entidades estatales sean destinadas a la Reforma Agraria.
- iv. Garantizar la aplicación del Art. 5 del Decreto 1836 de impuesto a la soja y que lo recaudado sea aplicado al pago de tierras expropiadas.
- v. Prohibir la incorporación de semillas de maíz transgénico y el estudio conjunto de la política sobre otras semillas transgénicas.
- vi. Prohibir la importación de agroquímicos incluidos en la “franja roja”, así como la reglamentación de la franja de seguridad contra agrotóxicos en asentamientos con apoyo para el cultivo de especies vegetales protectoras.

- vii. Fijación de precio básico de referencia del algodón antes del período de siembra.
- viii. Constitución por parte del MOPC de una mesa de diálogo para el estudio de las radios comunitarias.
- ix. Inclusión en el proyecto de ley de la Banca Pública del Instituto de Economía Solidaria y la Caja Rural.
- x. Que el Poder Ejecutivo informe públicamente su posición con respecto al ALCA y,
- xi. Presentar una propuesta de reestructuración del INDI con participación de la comunidad indígena.

El día martes pasado concluyó una plenaria de las comisiones vecinales (de sin tierras) de esa misma organización campesina, en la que se ratifica que de no cumplirse los puntos antes señalados, a partir del 18 de junio se iniciarían masivas ocupaciones de tierras improductivas, tierras mal habidas y latifundios en general. A esto se agregó ayer, el anuncio de nuevas movilizaciones si llegara a aprobarse la derogación de la ley 1615 de privatizaciones.

¿Son los campesinos responsables de la situación de abandono y acorralamiento en la que se encuentran? ¿Son los campesinos los culpables de no tener tierra? ¿Son los campesinos los culpables de movilizarse para reivindicar sus derechos, por otro lado legítimos, cuando se les miente de la manera más burda?

Cuando llegue el 18 de junio escucharemos de nuevo a las autoridades gubernamentales prometer cosas, o reprimir pobres. Leeremos, escucharemos o veremos en la prensa tendenciosa y empresarial cuán criminales son los pobres en nuestro país. Tratarán de convencernos que la soja transgénica y el neoliberalismo son los instrumentos por excelencia para llegar a convertirnos en un país del primer mundo.

Despotismo, poder y pobreza*

Es en la esfera de la relación política entre sociedad y poder donde deben producirse los verdaderos cambios para poder hablar de democratización.

La cultura del monopolio, de la exacción y la cultura de elites, estructuran todos los aspectos de la sociedad paraguaya. Cultura en este sentido, se refiere a cultura como conciencia y no a la cultura como patrimonio. Desde el poder y desde hace mucho tiempo (probablemente desde después de la Guerra Grande), diferentes actores han usurpado lo que debiera ser colectivo: el bienestar, y las condiciones que hacen falta para lograrlo.

Recuerdo una entrevista que un periodista argentino le hizo al Pdte. Hugo Chávez a los seis meses de haber asumido la presidencia de Venezuela. Le preguntó que por qué no se veían avances en materia de desarrollo económico y social. La respuesta fue clara: "si Ud. quiere tomarse un cafecito y la tacita está rota, Ud. puede ponerle todo el café que quiera y no se lo va a poder tomar. Para que el desarrollo alcance a todos, primero hay que reparar o cambiar la tacita, o sea, reformar el

* Las ideas para este artículo están basadas en el trabajo de Gilles de Staal *Temibles desafíos para la transición brasileña*, Le Monde Diplomatique, Ed. Cono Sur, 54, diciembre 2003. Publicado en Diario La Nación, 20 de mayo de 2004.

sistema jurídico y el sistema político, si esto no se hace, todo lo que Ud. invierta irá a parar al bolsillo de los poderosos".

Esta cuestión tan sencilla no la entienden los mandamases del Paraguay. En realidad, no la van a asumir jamás, ya que ellos son los encargados de extraer, acumular, monopolizar y mandar. Son los que rompieron la tacita. De este modo el Estado paraguayo es reflejo e instrumento de esa cultura de elites. Las instituciones estatales están fragmentadas, se consolidaron "autarquías" institucionales que gozan de una notable autonomía: legislativa, ejecutiva, judicial, bancaria, mafiosa, que se organizan corporativamente y que a la vez responden a los intereses de los que tienen el poder.

Las instituciones son así enteramente instrumentadas por los grupos oligárquicos, dueños de la riqueza, que se reparten su monopolio y redistribuyen sus protecciones según su clientela, determinando la geografía política, la geografía del poder del país. En buena medida, el poder político real se limita al de los feudos clientelistas, muchas veces familiares, que reinan sobre regiones, pueblos o monopolios económicos enteros, desviando en su provecho el bien público, vendiendo su apoyo al poder central. Pensemos en los casos de Barreto Sarubbi en un tiempo en Alto Paraná, o en Fanego en Paraguari, o el de los empresarios transportistas, por poner sólo tres casos.

El desvío de fondos públicos, la evasión de capitales ilícitos, la proximidad con el comercio internacional de drogas, el contexto de descomposición y violencia social exacerbada, hicieron de esas elites políticas (pero al mismo tiempo terratenientes, financieras, judiciales), los socios cada vez más naturales para la delincuencia organizada a gran escala.

En estas condiciones, toda apertura del Estado hacia un nuevo modelo económico (ya que de algún modo las elites oligárquicas supieron adaptarse al neoliberalismo) requiere un profundo cambio de las instituciones y de las costumbres del poder político, una democratización de la nación. Por el momento, se asiste todavía a la sujeción de aquellas elites oligárquicas a los mandatos del Consenso de Washington, por otro lado ya denostados, entre otros, por Duhalde ("*anive rehodeterei*"), debido a la fuerte influencia de la Embajada norteamericana, ángel tutelar de

las transnacionales de ese país. Las elites locales no tienen capacidad ni interés de formular un proyecto propio y adoptan –para poder seguir actuando libremente a nivel local– lo que le viene dado por el FMI.

Sin apoyo a la producción nacional, apelan a la recesiva receta de aplicar más impuestos (ley de readecuación fiscal) para poder pagar una deuda externa cada vez menos pagable. Mientras tanto las actividades financieras especulativas hacen su agosto y el Presidente viaja a Taiwán para que vengan nuevas inversiones que tratarán de ganar lo más posible en el menor tiempo y remesar todas sus utilidades al exterior, o se financian programas de “alivio a la pobreza” con nuevos préstamos que engrosan la deuda externa.

El hecho que el Paraguay sea una de las sociedades con mayor y más desigual concentración de la riqueza, y en particular de la tierra, no es sólo el resultado de las políticas neoliberales. Es resultado de tendencias históricas prolongadas: se apoya en una concentración de bienes raíces superior a la concentración de ingresos. El neoliberalismo no ha hecho más que llevar esas tendencias profundas a lógicas extremas.

En estas condiciones, el crecimiento de los ingresos de algunos y del consumo de esa misma elite está ligado a la monopolización de las riquezas, lo cual hace que el mercado se desarrolle dentro de una esfera cada vez más reducida y la exclusión crezca. La prosperidad de una ínfima minoría en el país es el principal vector del crecimiento económico general.

La lucha por la tierra es la que más cristaliza la resistencia del aparato estatal, que se erige sistemáticamente en barrera de protección del latifundio y los poderosos sojeros invalidando de hecho leyes de expropiación o decretos de ocupación dados por el gobierno, condenando y encarcelando a dirigentes de la MCNOC o de la FNC u otras organizaciones campesinas, cerrando los ojos al armamento y los crímenes de los capangas de los grandes terratenientes y productores sojeros.

El ejercicio del poder de tales elites en estas condiciones es necesariamente despótico. La pobreza y el atraso que vivimos y que crece son resultado del ejercicio de ese poder despótico disfrazado de democracia representativa.

Las entidades caóticas ingobernables (ECIs)*

Los recientes asesinatos de Emilio Aguirre Rojas y Felicita Estigarribia volvieron a suscitar el debate público sobre la inseguridad ciudadana. Sus causas son complejas y las soluciones son políticas.

La violencia fue hasta hace un tiempo, patrimonio exclusivo de los gobiernos corruptos, autoritarios. Cuando Stroessner, tal es el caso, la violencia era patrimonio exclusivo del gobierno. Desde hace unos años sin embargo, varios grupos se disputan el monopolio de la violencia, además de los gobiernos corruptos que hemos tenido y tenemos. Cuando esto sucede, un Estado-nación como el nuestro, en vías de desarrollo, hace implosión y se transforma en una **Entidad Caótica Ingobernable** (ECI), al decir de Rivero.

Según este autor, las ECIs se caracterizan por la incapacidad del Estado para mantener el territorio nacional y la población bajo su control. Sectores enteros de la economía, ciudades, departamentos, regiones, caen bajo el yugo de los nuevos señores de la guerra, narcotraficantes o mafias o delincuentes. La legalidad, el orden público y los atisbos de sociedad civil se volatilizan. Es nuestro caso.

* El concepto ha sido acuñado por Oswaldo Rivero, autor, entre otros, de *El mito del desarrollo*, Mosca Azul Editores, Lima, 1998. Publicado en Diario La Nación, 3 de junio de 2004.

Una reflexión introductoria al tema lleva a identificar al menos dos grandes grupos de causas. Una tiene que ver con los problemas macro, o sea, de la estructura social. Otras tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones.

Autores como Ramonet y otros, consideran que en un mundo de desigualdades agravadas, se incrementa la guerra social. Se dan nuevas y agresivas formas de violencia; la violencia económica que ejercen los dominadores sobre los dominados, estimulados por la mundialización liberal. En este modelo las desigualdades alcanzan dimensiones inéditas. Literalmente sublevantes. Se da especialmente la violencia de los pobres contra los pobres y algunas formas primitivas, prepolíticas de rebelión que se manifiestan a través de la delincuencia, la criminalidad, la inseguridad.

Riveros apunta que las ECIs constituyen un fenómeno reciente, producto de la falta de viabilidad nacional de los países en vías de desarrollo, que se encuentran indefensos ante un sistema económico mundial indiferente a las ventajas competitivas que hasta hace poco los hacían viables: su abundante mano de obra y sus recursos en materias primas. En síntesis, la falta de empleo. El autor dice: “La competencia que exacerbó la globalización impuso una revolución tecnológica que prioriza la producción de materias primas para la exportación, en el preciso momento en que se produce una explosión demográfica urbana en los países subdesarrollados. Al privilegiar los precios más bajos, esta priorización perjudica a las empresas de menor rendimiento tecnológico, que se basan en el uso de abundante mano de obra y representan en muchos países el primer peldaño hacia la industrialización”. Esto significa falta de trabajo.

En fin, modelos económicos equivocados generan desempleo, pobreza, desigualdad, exclusión y los sujetos que padecen estos modelos, nuestro pueblo y principalmente nuestros jóvenes, incurren de manera escapistista en la drogadicción, el alcoholismo y otros detonantes inmediatos de la violencia. Los pobres delinquen para comer, los desahuciados para expresarse, los corruptos para lucrar y mandar.

En cuanto al funcionamiento de las instituciones, las causas de la delincuencia tienen que ver directamente con la corrupción. Cualquier análisis mínimo del circuito del delito nos remite a una cadena que parte de los políticos, continúa en el Poder Judicial, se extiende a los cuerpos policiales y concluye en los delincuentes. En cada uno de estos eslabones hay connivencia, responsabilidad, complicidad y transgresión. Dejamos de lado la normatividad vigente y el funcionamiento de las instituciones penales, ya que ambos son apéndices de la vértebra central antes mencionada.

No puede imaginarse –tanto por la masificación del fenómeno, por las ganancias que produce el negocio, como por la impunidad que lo rodea– que un país se convierta en una ECI si detrás del que comete el delito no hay un policía que lo apaña, un juez corrupto o un fiscal distraído y un político que se beneficia. Los tiros frente al Círculo de Despachantes y a las oficinas de Aduana son acciones que también responden a aquel circuito.

En países como el nuestro, que es una ECI, se ha roto el contrato social según el cual el ciudadano obedece por convicción y el Estado monopoliza la violencia para los transgresores. Estoy seguro que los jóvenes que asesinaron a Emilio o a Felicita se sienten víctimas de la ruptura del contrato social por los dominadores. Por esto la transgresión.

Ramonet es claro: “El incremento actual de delincuencias y criminalidades ... que suelen ser manifestaciones primitivas y arcaicas de agitación social, constituye un signo indiscutible de la exasperación de los más pobres ante la injusticia del mundo. Todavía no se trata de violencia política. Pero todos percibimos que se trata de una tregua. ¿Cuánto durará?”.

Por qué hay pobreza en el Paraguay*

Se reúne estos días en Asunción un selecto grupo de técnicos y políticos de algunos países latinoamericanos que se dedican a aliviar la pobreza con fondos que no pocas veces provienen de préstamos que engrosan nuestras deudas externas. Focalizo en ellos estas reflexiones.

Si bien el Paraguay siempre ha sido un país pobre (aunque *ryvatâ*), esta pobreza aumentó de manera acelerada durante los años del neoliberalismo que coinciden con los años de la "transición". Apunto algunas de las causas de por qué fuimos y somos pobres, afirmando que sólo atacando esas causas se alcanzarán las metas que los técnicos y ciertos políticos proclaman, sabiendo ellos perfectamente que no se van a alcanzar con los métodos que proponen.

- Siempre fuimos pobres porque tuvimos políticos corruptos o que sirvieron a intereses de países o empresas extranjeras o ambas cosas. Esto desde fines de la guerra contra la Triple Alianza.
- Fuimos pobres porque desde esa misma fecha muy poca gente acaparó mucha tierra y los que querían trabajarla no tenían acceso a la misma y a los otros recursos productivos que existen en ella.

* Diario La Nación, 8 de julio de 2004.

- Fuimos pobres porque el Estado paraguayo siempre consideró que los pobres eran un estorbo para el desarrollo y los marginó del acceso a servicios básicos en vez de apoyarlos para salir de la pobreza.
- Somos pobres porque pudiendo producir una gran cantidad y variedad de alimentos, se apoya sólo a los rubros que se exportan, aniquilando la diversidad productiva, para después importar o dejar que entre de contrabando lo que el pueblo va a comer.
- Somos pobres porque produciendo una gran cantidad de energía eléctrica, se importa petróleo en vez de utilizar transporte eléctrico de carga y pasajeros, aliviando de ese modo las compras del extranjero.
- Somos pobres porque estando parados sobre el acuífero Guaraní, no se abastece de agua potable a la población y no existe el riego agrícola y ahora se quiere enajenar esa riqueza a transnacionales extranjeras.
- Somos pobres porque en vez de estimular el ahorro interno, se liberaliza la remesa de estos ahorros al extranjero en operaciones de *banking off shore* y suplicamos como mendigos la inversión privada extranjera.
- Somos pobres porque algunos señores decidieron liberalizar las tasas de interés bancarias y se elevaron a tal nivel que nadie que quiera invertir en algo productivo toma créditos, con lo cual, al no haber inversión no se crean empleos, aumenta la desocupación y los desocupados se ofrecen a trabajar por cualquier dinero reduciendo los promedios salariales de los que trabajan a niveles por debajo de la subsistencia.
- Somos pobres porque los gobiernos de la transición, en vez de apoyar decididamente la agro industrialización (procesamiento de bienes producidos en el campo), alientan la exportación de materias primas sin transformación para beneficio de las multinacionales agroexportadoras.
- Somos pobres porque no se hizo nunca una reforma agraria, en la que además de asignar tierra a los que la van a trabajar (y no a dipu-

taduchos o militares, o etc.), se les dé créditos e infraestructura para vivir y trabajar.

- Somos pobres porque en vez de alentar la producción agropecuaria e industrial para el mercado interno (exportando los excedentes) se ajustan sólo las variables monetarias, haciendo caso al FMI que apoya a las multinacionales apoderándose de nuestro potencial productivo.
- Somos pobres porque al no apoyar a los pequeños productores (por ejemplo, 200 mil fincas campesinas de menos de 20 has. son PYMES desaprovechadas) se los está privando de generar empleo y se le resta poder adquisitivo a la población.

La insensatez de la violencia equivale a la insensatez de los políticos*

“Es entendible que quienes padecen hambre consideren las palabras que se pronuncian en estos ámbitos como objetos suntuarios, porque las palabras no se comen. Cuando una persona está en situación de exigencia, su largo plazo está dado por cómo conseguir el almuerzo”.

Canciller argentino Rafael Bielsa en la última Asamblea de la OEA

Algunos líderes de opinión, amplios sectores de la opinión pública, incluso algunos sectores de la prensa (que no es poco decir), parecen ya estar convencidos del nexo, del vínculo directo que existe entre la pobreza y la delincuencia, entre la pobreza y la violencia.

Entre la producción de pobreza y la fundación de un orden social paralelo en el que vive un montón de ciudadanos y que se rige por una racionalidad propia hay una relación directa. Existe una forma de vida paralela a la nuestra consolidada como un orden social; es el país de los chicos de la calle, el de los presos sociales, el de los llamados locos, el país de los mendigos, el de los drogadictos, el de los alcohólicos, el de los desempleados, el de las mujeres desempleadas jefas de hogar, el país de los indígenas, de los enfermos, de los analfabetos. Hablamos de casi la mitad de la población paraguaya.

Realmente es un mérito del pueblo paraguayo que haya tan pocos delincuentes en el país, que haya tan poca violencia, que hasta ahora hayan sido asesinados tan pocos estudiantes, que hayan sido violadas tan pocas criaturas, que haya tan pocos suicidios.

* Diario La Nación, 10 de julio de 2004.

Ese orden social paralelo al de la sociedad “normal” existe desde hace mucho tiempo. Algunos no se dan cuenta, pero es el orden social producto de la exclusión. Es la población que acumuló todos los factores de riesgo social posible y que por fin, se han salido casi por completo del sistema.

Muy bien, estamos empezando a entender que ese orden social, del que proviene parte de la delincuencia y parte de la violencia (la de los evasores, la de los corruptos, es otra, esa proviene de gente muy bien “incluida”), es producto de la pobreza. Ahora tenemos que dar un paso conceptual más para empezar a encarar atisbos de solución al problema. Tenemos que tener la capacidad de entender de qué es producto la pobreza.

Y para esto no hay que hacer un gran esfuerzo analítico: de la corrupción y de las políticas económicas.

La corrupción es hoy patrimonio, no digamos exclusivo, pero casi exclusivo de los políticos. Si no hubiera políticos corruptos, es difícil que existan burócratas o administradores públicos que lo sean. La corrupción pudre el cuerpo social hasta el mismo caracú. Y no solamente lo pudre, sino que además lo seca, le saca los recursos económicos –como quien dice, la sangre– para que ese cuerpo pueda moverse. Es el vaciamiento de los recursos públicos el que finalmente contribuirá a reducir a un mínimo intolerable el cumplimiento de las obligaciones sociales de todo Estado para con sus ciudadanos. La corrupción así, produce pobreza.

Las políticas económicas, que dependen también de los políticos, son a su vez complejas maquinarias instaladas en las fábricas de producción de pobres que somos hoy los países subdesarrollados que adoptaron el neoliberalismo. No se dice que el neoliberalismo es el único factor que produce pobreza, no, porque ya éramos pobres antes de que se empiecen a implementar estas políticas, pero ni éramos tan pobres, ni éramos tan obsecuentemente obedientes del FMI. Ya otros factores que concentran riquezas y recursos productivos se habían encargado de empobrecer al pueblo, en nuestro caso, el poder político de la oligarquía terrateniente. Sobre esa base vino el neoliberalismo.

Apreciemos la impactante combinación de instrumentos de política económica que vienen siendo aplicados:

- hay un manejo exclusivamente monetario (no productivo) de la economía del país.
- se apuesta a un modelo productivo primario exportador basado en el monocultivo de la soja transgénica que es totalmente dependiente de importaciones y que prácticamente no utiliza mano de obra, además de ser medioambientalmente perverso.
- se inyecta constantemente presión tributaria de tipo regresivo (los pobres pagan lo mismo que los ricos).
- se acepta acríticamente (sin la auditoría que Duarte Frutos había prometido en su campaña) la deuda externa y se sigue contratando nuevos préstamos.
- no se estimula el ahorro interno.
- se sigue intentando privatizar las empresas públicas más rentables.
- no se elabora una política energética razonable.

No vale la pena seguir con este rosario de sinsentidos. Lo que importa es señalar que con esta política vamos directamente al precipicio social, arrastrando a cada vez mayor porcentaje de la población a la pobreza y a la indigencia.

Juntando así la corrupción, la concentración latifundista y las políticas económicas neoliberales este gobierno, como los que lo precedieron, crean ese orden social paralelo que es cada vez más grande, más numeroso: el de los excluidos, ese lugar donde la humanidad pierde su identidad.

Estamos de acuerdo con que la violencia delincuencia es irracional, pero más irracional es la conducta de los políticos que la promueven por vía del aumento de la pobreza, de la exclusión.

El derecho a la tierra*

Se trata de una cuestión semántica, ¿debemos decir “acceso a la tierra” o “derecho a la tierra”? Lo primero nos remite a la lógica del mercado, lo segundo a la lógica de las aspiraciones profundas de las personas, las familias y los ciudadanos que viven del trabajo en el campo.

Se realiza hoy en la Plaza Italia un acto de la FNC para reclamar la puesta en marcha de la reforma agraria, la implementación de políticas efectivas de desarrollo y la defensa de la soberanía nacional que está siendo arrasada, entre otras cosas, por la expansión del área de siembra de la soja transgénica. Por su parte, la MCNOC anunció que desde la fecha se intensificarán las movilizaciones para la ocupación de tierras ociosas, que habían sido prometidas por el gobierno hace ya más de cuatro meses. Estas acciones se hacen luego de infructuosas negociaciones y peticiones de las organizaciones al IBR, que se muestra incapaz de satisfacer la demanda de más de 250 mil familias de campesinos sin tierra.

Las acciones realizadas por los campesinos y sus organizaciones sin embargo, son inmediatamente demonizadas por cierta prensa conservadora, por el gobierno y por supuesto, por los socios de la ARP y algunos

* Diario La Nación, 14 de julio de 2004.

sojeros. Ven a las organizaciones campesinas como hordas de invasores, delincuentes y violadores de toda legislación. En otras palabras, no se admite que los campesinos tengan derechos, sobre todo uno tan fundamental como cultivar la tierra y dar de comer a su familia con el trabajo honesto.

Esto es preocupante porque tiene que ver directamente con la gobernabilidad del país. Se repite hasta el cansancio que no puede haber democracia con hambre y de hecho es así, no hay democracia. Esto es, hay democracia para decir cosas y reunirse, pero no para que se atiendan los justos reclamos de los pobres. Estos deben pasar hambre, andar enfermos y desocupados sin chistar, sin reclamar nada. Esta es la visión autoritaria y vertical de los poderosos de nuestro país.

Mientras tanto el gobierno hace planes. Según el compromiso existente, una vez que se dé cristiana sepultura al IBR y alumbré el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de Tierras), fenómenos institucionales que aún no tienen fecha, el presupuesto del ente encargado de las tierras en el Paraguay pasará de los actuales U\$ 3 millones, a aproximadamente U\$ 35 millones (se financiaría básicamente con las regalías de Itaipú y el nuevo impuesto a la tierra). Pero asumiría la responsabilidad de proveer de infraestructura a las comunidades rurales más pobres, esto es: agua potable, electricidad, caminos rurales, escuelas, etc.

El gobierno parecería (este es un tiempo de la gramática castellana que denota incertidumbre y ambigüedad) estar consciente de que hay dos alternativas para vincular el desarrollo rural con la reducción de la pobreza, que es a la postre lo que todos queremos: aumentar la productividad de las fincas campesinas y mejorar la comercialización de la producción. Al menos, estas son las dos salidas que ven los técnicos nacionales y de la FAO.

Si bien puede haber acuerdo hasta acá (aunque no se consultó a los campesinos), las soluciones enunciadas en el papel empiezan a tener dificultades al momento de implementarlas, sobre todo cuando se entra en consideración acerca del papel que van a jugar: la tierra, el crédito agrícola y el trabajo. Unos proponen que los campesinos para mejorar la productividad deben insertarse en el proceso de comercialización,

pero primero deben tener tierra, lo cual es bastante obvio. Pero bueno, al menos perciben que la tierra es importante. Otros proponen que lo mejor que pueden hacer los pobres rurales (en alianza con los grandes productores) es integrarse verticalmente a las agroindustrias y agroexportadores o distribuidores de productos alimentarios urbanos (¿?).

En ambos casos el acceso a la tierra es clave, así como disponer de crédito y propiciar un mercado de trabajo rural, ya sea para actividades agrícolas o no, pero que generen un ingreso adicional a las familias campesinas, además del ingreso por actividades agrícolas.

El gobierno con apoyo técnico externo, piensa resolver estas alternativas con modelos econométricos relativamente sofisticados para nuestro medio, lo cual no está mal, ya que estos modelos ayudan a observar el comportamiento de mercados, como el de tierra y otros. Lo que uno objeta es la forma en que se piensa encarar el problema.

Es obvio que U\$ 35 millones al año para el INDERT es casi nada ante la gravedad del problema campesino y la gravedad de la pobreza. Se pregunta uno: ¿por qué, ante problemas tan serios como éstos no se consulta a los campesinos y sus organizaciones? Ellos, más que nadie saben dónde les aprieta el zapato; ellos son personas mucho más criteriosas y democráticas que los latifundistas; ellos, asumiendo un proyecto así, harían que los costos se redujeran notablemente, ya que asumirían parte de la paternidad de la iniciativa.

Pero no, se los ignora. Se pregunta uno si es que también los técnicos campesinistas que participan de esta iniciativa están imbuidos de esa orientación “de arriba hacia abajo” que caracterizó a las políticas sectoriales paraguayas desde Stroessner.

La tierra no es sólo un bien transable en el mercado, como ciertos técnicos lo pretenden, la tierra es también cultura, identidad y sociedad. Cuando un campesino pide tierra lo que está pidiendo es no perder su cultura. ¿Debemos dejar que toooooodo, todo, esté regulado por el mercado?

¿O el sentido común debe supeditarse también al pensamiento único de los neoliberales?

Pérdida de soberanía y transferencia de activos nacionales

La funcionalidad de la administración Duarte Frutos para los intereses neoliberales*

En un reciente trabajo, Halimi¹ trae a colación una lapidaria sentencia: “En los próximos veinticinco años casi todos los países registrarán una desintegración física”². Estas afirmaciones coinciden con un reciente estudio de la agencia de calificación Standard & Poors según la cual “todos los sistemas públicos van a derrumbarse a la vez”. Estima que en países tan desarrollados como Alemania, Francia y otros, el endeudamiento alcanzará a más del 200% del PIB y a 700% en Japón³. La situación, por supuesto, no será mejor en los países latinoamericanos.

El proceso de la desintegración de los Estados no es algo que vaya a ser hecho de un día para otro. Es largo pero no admite pausas, vale decir, se hace cada día.

Una primera pregunta que uno puede hacerse es: ¿y después de los Estados qué? La respuesta es bastante simple: gobernarán las corporaciones multinacionales, que son las que dictarán las normas de funcio-

¹ Halimi, Serge (2004): “En la tenaza de las privatizaciones”. En *Le Monde Diplomatique*, Ed. Cono Sur, junio, 10-13.

² Paivi Munter y Norma Cohén (2004): “Debt crisis threatens fiscal Armageddon”. En *Financial Times*, Londres, 1 abril.

³ Actualmente el techo fijado por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea es del 60%.

namiento y comportamiento, no sólo de las economías, sino también de la política y de la cultura. Ya existen en funcionamiento múltiples instancias “supranacionales” que regulan una creciente multiplicidad de decisiones que son tomadas fuera de los ámbitos nacionales y que afectan de manera directa la vida cotidiana de todos los ciudadanos, instancias que están controladas por estas multinacionales. Entre ellas, la OMC, el FMI, el BM, la OCDE y varias otras.

Al trasladar esta dinámica del capitalismo –básicamente especulativo– mundial a nuestro país, no podemos menos que encontrarnos desconcertados por dos hechos: por la velocidad con que el Estado paraguayo viene desintegrándose (perdiendo soberanía) y por la funcionalidad del sistema de partidos políticos (particularmente del Colorado) a este proceso.

Duarte Frutos y su administración, a un año de haber asumido el cargo, se muestra tanto o más agresivo que sus predecesores neoliberales de la “transición” en transferir los activos públicos nacionales a empresas extranjeras por vía de la profundización de las “reformas” neoliberales.

Son varias y muchas de ellas imperceptibles, las transferencias que se fueron haciendo durante este año y que tienen como destino final la aludida desintegración física y económica del Estado paraguayo. En efecto, se trata de la sustitución del Estado por las corporaciones transnacionales y sus organismos de gestión antes mencionados. Para ello hace falta ir, poco a poco y lo más calladamente posible (para que la ciudadanía no se dé cuenta), transfiriendo las riquezas y las decisiones sobre ellas.

Así tenemos el caso que una riqueza natural importante del país es, sin duda alguna, la fertilidad de sus suelos (o lo que queda de ella). Se abrieron las puertas para que colonos extranjeros y algunos paraguayos, la utilicen para invadirla con organismos genéticamente modificados, no sólo soja, sino una variedad de algodón (que desde hace algunos años viene usándose sin que haya trascendido a la prensa) y próximamente maíz. Esa misma tierra es generosamente rociada con 40 litros de un potente herbicida por hectárea, para volverla en no más de siete años, perfectamente estéril. La Monsanto se apodera así –con la com-

plicidad gubernamental— de lo que necesita para acumular más ganancias, vendiendo sus semillas y sus biocidas, en nombre, vaya a saber de qué dinamización del PIB agrícola. Mientras tanto, tierra, montes y agua, desaparecen o son contaminados ante la cómplice distracción de políticos, parlamentarios y de nuestro extrovertido presidente. Con la soja exportada se van también la soberanía económica, territorial y hasta cultural.

La derogada Ley 1615 de Privatizaciones, frenada durante la administración González Macchi en junio de 2002, está en puertas de ser reactivada con algunas modificaciones, para que continúe el traspaso de empresas públicas al capital privado internacional. Si bien es cierto que algunos parlamentarios colorados se oponen a ella, los demás junto con la “oposición” parecen estar dispuestos a concretar esta entrega.

El desfinanciamiento a que se ven sometidas las cajas y los fondos de jubilaciones y pensiones, ya sea por vía de administraciones puestas para llevarlas a la quiebra, o por fraudulentos *cracks* bancarios (como los de 1995 y 1997 durante Wasmosy) que diezmaron los fondos del IPS o de las Cajas de Funcionarios Bancarios y la Fiscal, son un prelude del traspaso a programas privados de sistemas de capitalización que suplantarán a los ahora vigentes, que son públicos y de reparto.

Una estrategia similar viene siendo utilizada con empresas públicas a cuyo frente se ha puesto a personas que tienen como misión fundamental, descapitalizarlas. La idea es demostrar al público usuario cuán ineficientes son estas empresas bajo gestión pública, y a la vez hacer disminuir propositadamente su valor para que, llegado el momento de su privatización, la misma esté “legitimada” y cueste una quinta parte de su valor real para las transnacionales que las adquirirán. La administración Duarte Frutos se ha mostrado notablemente eficiente en este tipo de estrategias.

Otro tanto ocurre con la salud pública, que se encuentra en estos momentos operativamente desfinanciada. El objetivo de mediano plazo es disminuir al mínimo socialmente aceptable la prestación de servicios de salud por parte del Estado, para su paulatina privatización, que ya está empezando, por un lado, por lo que está ocurriendo en el IPS y por otro,

por las tratativas de compra de las empresas de medicina prepaga por parte de multinacionales que se dedican al mismo negocio.

La educación superior pública gratuita ya ha desaparecido. Todos los alumnos de todas las facultades de la Universidad Nacional de Asunción, deben pagar algo. Este arancelamiento de los servicios públicos universitarios, más la proliferación de empresas privadas auto rotuladas “universidades” nos muestran el desolador panorama de la instrucción convertida en mercancía. El proceso, si bien no completado, se da también en los bachilleratos y en la Educación Escolar Básica.

En materia de prospección y explotación de las riquezas del subsuelo la entrega es mayúscula, aunque debe reconocerse, viene de hace ya varias décadas. La prospección petrolífera desde sus inicios en el Paraguay, ha sido concesionada a consorcios transnacionales y continúa siéndolo. Lo nuevo se da con la prospección gasífera, también concesionada, así como la prospección de minerales preciosos. El caso del agua es incluso más dramático: se conoció hace poco que se encuentran registradas en el país algo más de 4.700 empresas que tienen intenciones de competir en la búsqueda y explotación de agua potable, más del 90% de las mismas son empresas extranjeras o multinacionales. Se habla incluso de una nueva ley de explotación de recursos del subsuelo, que substituiría a la ya obsoleta que se encuentra en vigencia. La ciudadanía paraguaya no conoce el texto del anteproyecto de ley, ni conoce a ciencia cierta por quiénes está siendo elaborado.

La venta de tierras a grandes empresas extranjeras es ya también una realidad. Una importante aunque no cuantificada cantidad de territorio nacional, es hoy propiedad de empresas extranjeras o multinacionales: 400 mil hectáreas en Puerto Casado son del consorcio Moon; en Alto Paraná la Shell Corp. posee una no conocida cantidad de tierra; la frontera –principalmente con el Brasil– ha sido en su gran mayoría, vendida a propietarios brasileños.

La liquidación del ferrocarril, de la Flota Mercante del Estado para el transporte de carga y pasajeros, y de los servicios aéreos de las Fuerzas Armadas (TAM) e incluso privados nacionales (LATN), ha sido ya completada. El ferrocarril (y el transporte eléctrico en general), debido

a las fuertes presiones de las multinacionales del petróleo. Estas últimas tienen un control que sería completo en el país, de no ser por el uso aún importante del carbón y la leña como combustible doméstico en las áreas rurales. Por lo demás, hasta han presionado para que la generosa oferta del Pdte. Chávez de Venezuela sea desechada para seguir comprando un petróleo y sus derivados a países vecinos, a un precio mucho más alto. La bodega para fletes fluviales está totalmente en manos privadas, así como el transporte aéreo nacional. Tanto el transporte fluvial de pasajeros como el aéreo de cabotaje, cumplían una función social importante de interconexión entre pueblos y ciudades que hasta hoy quedan aislados en caso de lluvia (la ribera del Alto Paraguay, Alberdi y muchas otras).

La destrucción de la banca pública de fomento y el intento de acogotamiento de las cooperativas de ahorro y préstamo, no son sino el resultado concreto de las presiones del FMI y la banca privada multinacional para quedarse con la totalidad del mercado financiero nacional, restándole de este modo casi total soberanía al país para dictar y regular la política crediticia nacional.

La privatización de los servicios de asistencia técnica a agricultores, ya iniciada y que será profundizada en caso que se implemente la anunciada reforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería, representa por otro lado a la vez, un marginamiento aún mayor de la pequeña agricultura campesina de estos servicios (ya que no podrá pagarla), y una entrega de este importante servicio a las empresas multinacionales de semillas, fertilizantes, agrotóxicos y maquinarias y a sus importadores.

La lista de entrega de las riquezas nacionales al nuevo poder mundial es extensa. Esta entrega está garantizada con el mantenimiento y aumento de la deuda externa, que se presenta como el más importante yugo para el sometimiento de las autoridades económicas al FMI. Ésta se comporta claramente como un instrumento de dominación. El actual gobierno, secundado por los políticos de turno, han mostrado su superficialidad para un enfoque hondo y responsable del endeudamiento.

Este rechazo a reconstruir el proceso de formación de la deuda externa paraguaya, su discriminación en bloques, algunos tan anómalos como

el de la estatización de la deuda privada, ignorar el pasado, prometer en campaña una auditoría de la misma y no cumplir luego, son parte de esta entrega de la soberanía y de los activos nacionales a las multinacionales y con ello, se van dando los pasos que conducen directamente a la desintegración del Estado Nacional paraguayo.

En manos de quiénes estamos y hacia dónde nos están queriendo llevar*

La inminente nueva suba del petróleo y algunos de sus derivados (gasoil y gas) que anunciaron como globo sonda; el inicio ayer de nuevas ocupaciones de tierra por falta de respuesta gubernamental; la aprobación del uso de semillas transgénicas por parte del MAG durante lo que resta de la semana; el tratamiento mañana de la posible reactivación de una ley 1615 remozada (que ahora dirá ‘capitalización’ en vez de ‘privatización’ como si fueran diferentes); el subsidio que sí darán finalmente a los pequeños productores algodoneros –en realidad a las agroexportadoras– a pesar de que una vez cosechado le vayan a pagar monedas; el uso de lo recaudado por aranceles a la exportación de soja para el pago de la deuda externa; la reticencia a reactivar el ferrocarril a pesar de contar con un financiamiento que no requiere aval del gobierno; la ruina a la que están condenando a COPACO; el no uso de cemento en las rutas con el consiguiente perjuicio para la INC y regodeo de las transnacionales que importan derivados del petróleo; la ley del impuesto recientemente aprobada, entre otras acciones gubernamentales, nos muestran que las autoridades del gobierno (y las del Parlamento por no frenar esta conducta corporativa) tienen el mismo grado de responsabilidad dolosa que los Paiva, los constructores de supermercados, los intendentes y concejales, etc., en la tragedia del pueblo paraguayo.

* Diario La Nación, 18 de agosto de 2004.

Responsabilidad dolosa porque las medidas citadas y muchas otras que para citarlas no hay suficiente lugar, producen pobreza. Al haber más pobreza, un aumento cualquiera de precios, un recorte cualquiera del gasto social para poder pagar los servicios de la deuda externa, obliga a los que son pobres, a restringir sus gastos más básicos (comida, por ejemplo) para poder subsistir (pagar la luz, pasaje, salud pública cara e ineficiente, por ejemplo). Esto hace que aumente la desnutrición, con ella aumenta la mortalidad¹. La pobreza impulsa a obtener ingreso de manera competitiva, en ocasiones violenta.

Hay responsabilidad dolosa, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, porque la agudización de la pobreza a la que nos están conduciendo es producto de la primacía de los mismos tres factores que condujeron a la megadesgracia del Ycua Bolaños; a. el afán de lucro (de transnacionales, de su gendarme financiero que es el FMI): el “interés nacional” de miembros del Ejecutivo y parlamentarios se mide por “cuánto me va a dejar esta decisión que tomo”; b. la corrupción, que hace que las autoridades midan la importancia de sus acciones, también por la ganancia que les va a dejar, por ejemplo, por vía de la aceptación de grandes coimas, y; c. la mediocridad, que impide a las autoridades prever y tomar las medidas de prevención correspondientes para evitar los enormes riesgos sociales que corre la población paraguaya.

De los puntos citados al comienzo, la anunciada y posteriormente desmentida suba del gasoil y del gas, nos dice la prensa ayer, son resultado del incremento del barril de crudo en el mercado mundial. Por si no lo saben las autoridades de PETROPAR, ese barril hace por lo menos tres meses que superó la barrera de los 40 dólares, ¿han tomado alguna medida preventiva? Sabemos que esa razón es una excusa para camuflar impuestos y para aumentar las ganancias de transnacionales petroleras y distribuidores. Se hubiera podido aceptar la propuesta del presidente Chávez de Venezuela, se hubiera empezado a utilizar cemento para las rutas, pero no; se siguió igual (importando cada vez más petróleo y sus

¹ En el 2004 nacerán vivos en el país 152.000 niños/as; morirán 243 madres (tasa de mortalidad materna 160 x 100.000 nacidos vivos) y 3.800 niños/as menores de 5 años (tasa de mortalidad infantil de 25 x c/1.000 nacidos vivos) lo que hace un total de 4.043 personas.

derivados) y ahora es el pueblo el que paga la inoperancia, la falta de previsión, la corrupción y el afán de lucro de las elites económicas y las autoridades políticas.

¿Por qué CONATEL no le deja a COPACO que opere con internet, o con telefonía móvil? Porque disminuiría las ganancias de las operadoras locales de empresas transnacionales de telecomunicaciones, en este caso, de telefonía móvil e internet.

¿Por qué se aprobará el uso de semillas transgénicas? Porque la Monsanto tiene que empezar a cobrar las regalías por el uso de su semilla y del glifosato que se vende con el nombre de Roundup. El ministro Ibáñez parece no tener agallas para defender, tampoco en este caso, el interés nacional, prefiere engordar transnacionales y disponer fugazmente de algunas divisas que servirán para mostrar al FMI que se exporta. Todo esto aún a costa del desalojo campesino y del envenenamiento de sus conciudadanos.

¿Quién abre las puertas para que los campesinos tengan las tierras y los servicios que necesitan para trabajar y vivir dignamente? ¿Quién destranca las vallas que impiden bajar las tasas de interés bancario para que los que quieran invertir en producción lo hagan? ¿Quién apoya a los pequeños y medianos empresarios nacionales para que produzcan y generen empleo? ¿Quién prioriza la dotación seria de recursos a los servicios sociales como salud y educación para que todos las tengan? ¿Quién es el político que le dice al FMI que se vaya para poder reconstruir al país?

Los políticos están empujando a la población a la pobreza y a los pobres hacia la miseria. Esto tiene un costo social. La responsabilidad de la cúpula gubernamental es tan grande como la de los Paiva, en la muerte por hambre, desnutrición, analfabetismo, ignorancia y desesperación, no ya de 400, sino de al menos dos millones y medio de paraguayos.

El gabinete de crisis y sus tribulaciones*

La crisis es del gabinete, los campesinos vienen viviendo en crisis desde hace ya muchos años. Lo primero que debiera atender el gabinete de crisis es cómo superar internamente (dentro del propio gobierno) la disyuntiva política que las fuerzas sociales plantean: un gobierno para los que necesitan, o un gobierno para los ricos, los terratenientes, los sojeros, las transnacionales.

Históricamente la lucha por la tierra en el Paraguay tuvo dos actores confrontados: la oligarquía terrateniente y la agricultura campesina. Desde la década de los años setenta, se ha agregado un nuevo actor que compite por tierra cada vez más escasa en un mercado inmobiliario (formal e informal) ya totalmente privatizado: la agricultura empresarial, productora principalmente de soja, y de soja transgénica a partir del año 2000.

Los terratenientes pelean por mantener sus privilegios, los “caballeros de la Monsanto” por ampliar su área de siembra, los campesinos por sobrevivir como sociedad y como economía. De los tres actores, los últimos son los excluidos, pero han decidido ponerse de pie. Al parecer, a los otros dos actores y al gobierno esto les parece impropio:

* Diario La Nación, 25 de agosto de 2004.

¿desde cuándo los pobres reclaman? Violan la constitución, las leyes, la propiedad privada, son delincuentes, se los tolera. No, para ellos –los ricos– esto no puede ser.

Hace 13 años (por falta de un censo agropecuario reciente) la cosa estaba así:

| Sistema de Producción | Cantidad de Establecimientos | | Superficie | |
|--|------------------------------|------|------------|------|
| | N° | % | N° | % |
| Campesina Unidad de producción menor de 20 has. | 247.617 | 80,6 | 1.468.768 | 6,2 |
| Mediano empresariado (soja) <i>Farmers</i> con tractor propio o ajeno 50-200 has | 4.370 | 1,4 | 395.061 | 1,7 |
| Gran empresariado (soja) Gran empresa agrícola mayor de 500 has. | 354 | 0,1 | 1.440.181 | 6,0 |
| Latifundio ganadero Grandes Explotaciones > de 500 has | 4.627 | 1,5 | 18.808.256 | 79,0 |

Fuente: MAG - Censo Agropecuario de 1991

Efectivamente, lo que el Frente Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (y aparentemente también la FNC desde la próxima semana) está reclamando, no es sólo tierra. Es un cambio de modelo. A la corta o a la larga el gobierno tiene que tomar conciencia que no puede seguir pichuleando ya que lo que se le está planteando es que se defina. Examinemos brevemente algunas de las demandas.

Primero, descriminalizar la lucha social y campesina; liberar a los campesinos apresados por una justicia clasista; suspender procesos judiciales que afectan a casi un millar de campesinos; no efectuar nuevos desalojos.

Segundo, no sólo repartir tierra y parar ya esa historia de las privatizaciones, sino encarar una reforma popular del Estado, una reforma agraria en serio, encarar la reactivación productiva y económica del país, el respeto al derecho de los trabajadores, el no uso de semillas

transgénicas y de agrotóxicos prohibidos, defender los recursos naturales, reformar la banca pública a favor de los productores, aplicar tarifa social a servicios básicos y otras.

Como se ve, las demandas campesinas y de los trabajadores del Frente apuntan al meollo del modelo neoliberal. Este modelo considera “invasores” a los que ocupan tierra para trabajarla, reverencian la “propiedad privada” más allá de la función social que debe cumplir. El neoliberalismo busca privatizar todos los bienes públicos, para lo cual propugna una reforma del Estado “*made in Washington*”, aplica sólo medidas monetarias y no económico-productivas, pretende expoliar nuestros recursos naturales, busca eliminar la banca pública de fomento, protege a sus transnacionales (como la Monsanto), busca dejar librada a las “fuerzas del mercado” las tierras. Y podríamos seguir...

La cosa no está fácil para el gobierno. O atiende las demandas que buscan cambiar el modelo, lo que implica salirse del neoliberalismo abyecto, o tendrá que terminar reprimiendo.

Violencia y tierra: el poder despótico de la propiedad*

Para los campesinos, históricamente marginados de todo aquello que suponga desarrollo, como vivienda, salud, educación, recreación, etc., la principal fuente de trabajo y de ingresos es la tierra. Esto se vuelve cada vez más vigente a medida que los mercados de trabajo urbanos se saturan¹, a medida que las exigencias de ese mercado laboral aumentan, a medida que el crecimiento demográfico se mantiene², y a medida que las alternativas de la emigración regional se reducen por crisis económicas más o menos generalizadas, o a medida que la superficie de tierra de la que disponían –de por sí escasa– se reduce aún más por transferencias a la agricultura empresarial para el cultivo de la soja transgénica, o a empresas extranjeras que las adquieren en grandes cantidades.

Los datos del Censo agropecuario de 1991, el último dato en que apoyarse (el Censo que hubiera correspondido al 2001 no se hizo, según el

¹ En el caso paraguayo, casi el 80% del empleo es autogenerado, o sea, informal y por cuenta propia.

² La cantidad de hijos por mujer en edad fértil (Tasa Global de Fecundidad) es casi el doble en mujeres rurales que en urbanas.

* Revista ACCIÓN N° 247 – Setiembre, 2004. CEPAG.

MAG por falta de fondos³) mostraba ya en ese entonces un panorama crítico:

| Sistema de Producción (Total País) | Cantidad de Establecimientos | | Superficie | |
|---|------------------------------|------|------------|-----|
| | Nº | % | Nº | % |
| Campešina Unidades de producción menor de 20 has. | 247.617 | 80,6 | 1.468.768 | 6,2 |
| Mediano empresariado (soja) <i>Farmers</i> con tractor propio o ajeno 50-200 has. | 4.370 | 1,4 | 395.061 | 1,7 |
| Gran empresariado (soja) Gran empresa agrícola mayor de 500 has. | 354 | 0,1 | 1.440.181 | 6,0 |
| Latifundio ganadero Grandes explotaciones > de 500 has. | 4.627 | 1,5 | 18.808.256 | 79 |

Fuente: MAG – Censo Agropecuario de 1991*

* Elaborado por el Proyecto TCP/FAO/PAR/4553, Asistencia Técnica al IBR

Puede presumirse con toda seguridad, que esta situación ha empeorado en los últimos 13 años para la agricultura campešina.

Un dato más reciente, de fuente oficiosa pero fidedigna, señala que la región Oriental del país tiene aproximadamente 15 millones de hectáreas; de ellas, 10 millones están en manos de grandes propietarios dedicados en su abrumadora mayoría a la ganadería extensiva (0,7 cabezas de ganado por hectárea), algo como 1.8 millones corresponden a la agricultura campešina, 2.5 millones a propietarios agrícolas mecanizados y el resto se reparte entre ciudades, pueblos, cursos y espejos de agua, y otros. Esto es sólo región Oriental, la Occidental está aún mucho más concentrada.

Es evidente que el pequeño grupo de grandes propietarios (en especial aquellos con más de 5.000 has) no aceptará de buena gana desprenderse de parte de sus tierras (según aquella fuente, entre el 25% y el 30% de las grandes propiedades tienen tierra agrícolamente apta, o sea, entre

³ Excusa sobre la cual uno tiene todo el derecho a dudar, ya que tampoco se hace el catastro rural para el cual sí hubo financiamiento del BM, ni el IBR hizo un Censo general de colonias. Esto es, puede presumirse, una deliberada intención de ocultar aspectos sensibles de la realidad agraria.

2.5 y 3 millones de hectáreas). La afectación de una porción de las mismas permitiría al menos duplicar la tierra que hoy ocupa la agricultura campesina y solucionar, sin más trámites, esa demanda insatisfecha.

Ante la situación planteada más arriba, los campesinos han empezado tibiamente, aunque de manera sostenida desde hace unos dos años, a plantear, por los canales administrativos correspondientes (principalmente IBR, ahora INDERT) y a través de movilizaciones muy organizadas y pacíficas, la necesidad de que les sean adjudicadas tierras. La respuesta del gobierno ha sido invariablemente escuchar-prometer-incumplir.

Durante el ciclo agrícola 2002/3 se produce la muerte por intoxicación con Roundup de un niño en Itapúa; en el ciclo agrícola siguiente, dos campesinos son baleados en Ypekuá, Repatriación. Se empiezan a dar ocupaciones en diferentes puntos, cierre de rutas, bloqueo a que tractores de la agricultura de la soja realicen sus labores. Paralelamente, los grandes propietarios financian grupos de autodefensa armada, las transnacionales presionan al gobierno para la adopción de semillas genéticamente modificadas, el gobierno las atiende y se despreocupa de la suerte campesina.

Ante la inacción gubernamental, ya en 2004 se forman, en al menos cuatro Departamentos, las Coordinadoras Departamentales por la Defensa de la Vida y la Soberanía, que agrupa ya no sólo a campesinos, sino a otros sectores: trabajadores, maestros, religiosos, intendentes, ciudadanía en general, hasta que en junio estas coordinadoras departamentales se federan en una Coordinadora Nacional, que al poco tiempo se integra con otras coordinaciones existentes (la Plenaria Popular Permanente, Federaciones Sindicales como la CNT y la CUT-A, la MC-NOC) y constituyen en julio, el Frente Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía.

Desde mediados de julio, las invasiones se multiplican y el tema salta como primera prioridad a la tapa de los medios de comunicación. El problema está instalado en la agenda política.

Los sectores conservadores, principalmente la ARP y la prensa empresarial, adoptan una actitud claramente retrógrada, negándoles a los

campesinos el derecho constitucional a la protesta y a la reivindicación de sus aspiraciones legítimas.

Esta parte final de la larga historia de las luchas entre la oligarquía terrateniente y el campesinado, está mostrando una verdad que viene siendo ignorada por las elites políticas y económicas: es preciso un cambio de modelo económico, es preciso implementar una reforma agraria, sin desarrollo rural no hay desarrollo nacional, la orientación primario-exportadora de soja no trae ningún beneficio al país. Ante la cada vez mayor evidencia de esta situación, la oligarquía reacciona, la Monsanto presiona, los sojeros siguen expandiéndose y el gobierno se ve acorralado. Es que no le quedan muchas alternativas: o realiza los cambios del modelo de modo a convertirlo en más inclusivo socialmente, o reprime.

Por cierto, si se analizan las demandas, se ve que la lucha se ha radicalizado en el sentido de las exigencias: por un lado, descriminalizar la lucha social (suspender procesos judiciales que afectan a casi un millar de campesinos; no efectuar nuevos desalojos), por otro, no sólo repartir tierra y parar las privatizaciones, sino encarar una reforma popular del Estado, una reforma agraria en serio, encarar la reactivación productiva y económica del país, el respeto al derecho de los trabajadores, el no uso de semillas transgénicas y de agrotóxicos prohibidos, defender los recursos naturales, reformar la banca pública a favor de los productores, aplicar tarifa social a servicios básicos y otras.

Puede apreciarse que las demandas campesinas y de los trabajadores del Frente apuntan al meollo del modelo neoliberal. Este modelo considera “invasores” a los que ocupan tierra para trabajarla, reverencian la “propiedad privada” más allá de la función social que debe cumplir. El neoliberalismo busca privatizar todos los bienes públicos, para lo cual propugna una reforma del Estado *made in* Washington, aplica sólo medidas monetarias y no económico-productivas, pretende expoliar nuestros recursos naturales, busca eliminar la banca pública de fomento, protege a sus transnacionales, busca dejar librada a las “fuerzas del mercado” las tierras.

Se llegó así a un punto en que la violencia social ejercida por el control casi monopolístico sobre la tierra, muestra en carne viva las heridas infligidas a los excluidos: hay hambre y no hay trabajo ni tierra, hay deseos de mantener la dignidad y se los fuerza a ser mendigos, hay mucha tierra para todos y se la retiene para fines rentísticos especulativos. Se plantea dialogar y se responde con indiferencia o con represión. Se plantea razonar sensatamente y se reacciona histéricamente. Se plantea hacer un país para todos y se agacha la cabeza ante los poderosos.

El gobierno parece no ver que vamos directo al caos social y a la represión como método para saldar cuentas. Esta miopía nos va a costar caro, a todos.

“Hoy en pleno siglo veinte nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra”. Gabino Palomares. “La maldición de Malinche”.

Dinastía¹, faraones y esclavos*

El país sigue atravesando un oscuro período de interminables décadas de opresión económica y social para un pueblo que no se resigna a ser esclavo por siempre. Un pueblo que busca trabajo en un período caracterizado por el ejercicio despótico del poder por parte de los poderosos, grupo que incluye a la mayoría de los ganaderos, a todas las transnacionales y a funcionarios corruptos.

Ya desde antes de la guerra civil del 47 usurpó el gobierno del país una dinastía de “próceres” que se perpetuó en el poder político administrando el poder económico de los faraones locales: latifundistas, contratistas de Itaipú, beneficiarios de tierras mayores con propósitos de especulación inmobiliaria, importadores, exportadores, transnacionales y corruptos de todo pelaje, empresarios de frontera, beneficiarios de licitaciones amañadas, chupamedias y arribistas de palos enjabonados.

Son estos mismos señores quienes tienen todavía la prepotencia de indicar a los “esclavos”, hoy reclamando bajo la forma de campesinos y grupos sociales pauperizados, que deben sujetarse a la legalidad que esos mismos señores han diseñado para perpetuarse, que no deben crear

¹ Serie de Príncipes o reyes pertenecientes a una familia. Familia en cuyos individuos se perpetúa el poder o la influencia política o económica.

* Diario La Nación, 15 de setiembre de 2004.

escuelas de formación, que no deben leer a Ernesto Guevara o a Marx o a Ho Chi Min, o que están conectados con los narcotraficantes, o que están siendo instruidos por las FARC.

Esto es sencillamente una desvergüenza. Los pinta de cuerpo entero. Como no pueden argumentar razonablemente sobre la perversidad del modelo económico que ellos sustentan, los que se oponen a él son guerrilleros, narcotraficantes o lectores de Marx. Es evidente que el espíritu de faraón mayor (54-89, era feliz y no lo sabía) sigue inspirando las delicadas elucubraciones intelectuales de estos profetas de bienaventuranzas: no os preocupéis de no tener tierra ni para hacer un bodoque que vuestro será el reino de los cielos².

Se trata de una campaña hecha con toda la mala saña y el buen tino de la guerra ideológica de baja intensidad: desacreditar al adversario ante la opinión pública para restarle apoyo psicosocial ante eventuales medidas represivas que vayan a ser tomadas por el gobierno, para lo cual éste precisa justamente de ese apoyo ciudadano.

Se ofrece la bicoca de G. 60 mil millones en un futuro indefinido para comprar 30 mil has que beneficiarán a 3 mil campesinos, cuando hay 300 mil sin tierras. La migaja del 1%. Mientras tanto, una cantidad similar se destina a financiar la siembra y cosecha del algodón, que beneficia exclusivamente a los socios de CADELPA, ya que a los pequeños productores se le pagará una miseria. Mientras tanto se aumenta notablemente el gasto militar para el próximo año, o se aumenta el pago a los servicios de la deuda externa, para quedar bien con la banca extranjera.

Claro que así no quedan sino migajas para atender los problemas nacionales. Pero no porque no se los atienda los problemas dejan de crecer. En pocos días más los sojeros empezarán a sembrar sus semillas transgénicas, más bosques serán derribados, más glifosato será inyectado, más intoxicados habrá. Probablemente van a aumentar las movilizaciones y –de atenernos a lo que ya pasó– más sojales serán quemados y

² Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes....” (Mateo, 5-11).

más dinero se invertirá para “operaciones en terreno” de la policía o el ejército, degradado hoy en día a reprimir población civil compatriota.

Cuando esto se dé, los campesinos tendrán la culpa. Se los reprimirá para defender la ley y la Constitución, o sea para defender la propiedad privada de los que tienen mucha propiedad, de modo a que los que no tienen ninguna, agachen la cabeza, se resignen y mueran de inanición, tal como los esclavos en el antiguo Egipto.

La ciudadanía es un concepto que se refiere a una condición de las personas en estados modernos. Los esclavos del antiguo Paraguay reclaman hoy esa condición, pero los faraones del viejo Paraguay se la niegan. Se trata de perpetuar un modelo que produce riqueza para unos pocos y miseria para el resto.

En esta ecuación, los campesinos son más modernos que los dinosaurios acaparadores. Buscan lo imposible, buscan compartir el desarrollo.

La tierra, de bien natural a objeto de acumulación*

Durante el siglo 19 y parte del siglo anterior se completó el exterminio indígena y la expulsión de sus tierras en el cono sur.

En el siglo 21 el gran capital busca el exterminio campesino y el completo desalojo de los mismos de sus tierras, probablemente asistiremos también a la desaparición de toda forma de agricultura familiar en pocas décadas. La tierra será para las transnacionales.

Si uno examina la historia, encontrará que pareciera haber ciertas etapas –del despojo– que se cumplen como si fuera una ley. La ley del más fuerte. Durante el siglo antepasado se trató de la “conquista del desierto” en la pampa, y posteriormente en el Chaco argentino, la ocupación del *hinterland* en Uruguay, la ocupación europea del sur brasileño, la expansión de la ganadería y la agricultura en el Paraguay; los exportadores de la época, vinculados a los poderes imperiales de entonces, desataron entre 1840 y 1950 aproximadamente, una salvaje represión militar contra los indígenas a quienes se les despojó de sus tierras ancestrales, se “redujo” a los pacíficos y se aniquiló a los que pretendían ser libres.

* Revista ACCIÓN N° 248 – Octubre, 2004. CEPAG.

Esta es parte de la historia trágica de nuestros países, una historia de ignominias que empieza en 1492 y que mal que bien se extendió por mucho tiempo. Bien harían los alumnos de historia de nuestras escuelas en leer el librito llamado “Breve relato sobre la destrucción de las Indias”, del padre Bartolomé de las Casas, escrito allá por 1540, para tener una cabal idea de los inicios de ese genocidio, explicable sólo por la codicia de los grupos económicos dominantes.

Aquella ocupación por parte del capital de las tierras indígenas, respondía al modelo primario exportador prevaleciente en la época, ocupar tierra para exportar a Europa granos, carne, lana y otras materias primas de la región. Ese modelo se interrumpe brevemente –por unos 30 años– en lo que dio en llamarse la etapa de “sustitución de importaciones”, durante la cual estos países (excluyendo Paraguay, que nunca llegó a sustituir ninguna compra del exterior) tuvieron un pujante proceso de industrialización que promovió la urbanización. En los años setenta la sucesión de golpes militares en la subregión inspirados por la CIA y las embajadas norteamericanas, dan fin a ese efímero sueño de independencia económica que fue característico de esos años, durante los cuales muchos países de la región lograron conformar una clase obrera relativamente bien remunerada y cubierta por sistemas de seguridad social más o menos completos.

Desde mediados de los años setenta se inicia, sin embargo, un nuevo período que dio en llamarse de *reprimarización* de las economías y las exportaciones. El capitalismo mundial, capitaneado ya por las transnacionales norteamericanas, asignó a nuestra región la tarea de seguir proveyendo materias primas no elaboradas al mercado mundial y ¡nada de competir con los países centrales con manufacturas! No se trataba de competir en industrias, se trataba de abastecer a las industrias norteamericanas y europeas. Así Brasil, de exportar maquinarias y bienes de capital, pasa a ser primer exportador de jugo de naranjas y soja; Argentina, de ser exportador de automotores y elaborados metal mecánicos, pasa a ser tercer exportador mundial de soja; Uruguay sigue con la lana; Chile pasa (del cobre) a las uvas y los duraznos, y los paraguayitos debemos conformarnos con exportar un poco de algodón sólo desmotado y soja en granos.

En este modelo, los campesinos molestan: la tierra debe estar destinada a la producción de *commodities* por la agricultura capitalista mecanizada y el resto de ella debe estar en poder de los ganaderos y de las multinacionales. El recurso tierra es muy valioso para que esté en manos de los pobres. En la tierra hay productos exportables, hay biodiversidad, hay agua, puede haber petróleo, piedras preciosas, oro, bosques maderables. Además los campesinos producen buena parte de sus propios alimentos y no son buenos consumidores. No van a las cadenas de supermercados controladas por multinacionales y evitan comer la comida basura enlatada que allí se exhibe.

En este contexto histórico y regional se ubican los conflictos por la tierra en nuestro país. Vivimos la etapa de la descampesinización del campesinado. La “economía-mundo”, como dice Wallerstein, debe desarrollarse, no las economías nacionales. Las que se desarrollan son las empresas multinacionales, no los países, éstos deben hacer lo que aquellas quieren. ¿O cree Ud. que es por otro motivo que el ministro A. Ibáñez va a sacar un decreto “legalizando” la soja transgénica de la Monsanto?

En suma, a los campesinos les está ocurriendo lo que a los indígenas hace cien años. Deben desaparecer del campo, por compra de sus tierras, por alquiler, por fumigaciones o por represión de la FOPE. Lo que los campesinos están haciendo es resistir a su propia desaparición, resistirse a la muerte como sector social.

Así como en otros tiempos fue la yerba, el tanino, las maderas preciosas, el trigo, la lana, el salitre, el cacao, para los indígenas, hoy es la soja para los campesinos. Es lo que se ve de la fuerza expulsora, es lo inmediato. Lo que no se ve es lo que hay por detrás de esos productos, de esas *commodities*, los intereses de los grandes conglomerados económicos protegidos por el poder político y militar de las grandes potencias, principalmente de los EE.UU.

En todo caso, el dilema del gobierno hoy es de hierro, ya que atender la demanda campesina implica necesariamente afectar intereses, o de la oligarquía terrateniente, o de las multinacionales o ambos intereses juntos. No atender aquella demanda implica que tendrá que usar la re-

presión a la corta o a la larga, algo a lo que hasta ahora se resistió de usar de manera masiva.

¿Soluciones “civilizadas”? Hay muchas, pero todas tienen un costo político que no cualquier gobernante está dispuesto a pagar. Últimamente, la prensa ha venido difundiendo algunas pistas, como la de crear un impuesto a propiedades mayores, impuestos a las exportaciones, impuesto a la no producción (u ociosidad de la tierra), puesta en práctica de una ley de aparcería, y otras ya más estúpidas y dañinas para el campesinado como las expuestas por el peruano de Soto.

Todas estas iniciativas pueden estar bien según cómo se usen y en qué contextos. Toda medida es un instrumento y como tal puede estar mal o bien aplicado. Lo que es claro es que el problema es explosivo y el meollo del mismo radica en la tenencia, en el régimen de tenencia de la tierra. También es claro que deberán combinarse y aplicarse simultáneamente varios instrumentos de política para poder encarar el problema con algún viso de solución. Esto es, el problema de la descampesinización es de otra índole, es económico, pero la justificación “legal” de la expulsión es legal. Los dueños de la tierra en el Paraguay nunca han querido sanear la tenencia, nunca han querido un catastro, y de hecho lo han boicoteado y se desviaron algo más de 29 millones de dólares que a mediados de la década pasada llegó para tal propósito. Ellos son los pescadores y el régimen y registro de tenencia de la tierra es el río revuelto. Ellos ganan. Cuanto más inseguridad en la tenencia del pequeño productor sobre su parcela, más fácil es justificar su expulsión por medios violentos.

Por ahora, los malos de esta historia son los sojeros, pero a ellos no les irá mejor cuando caigan en la cuenta de lo mucho que han debido endeudarse para “preparar” los suelos (o sea, desmontar), para comprar maquinarias, para comprar insumos, para pagar fletes, para coimear a autoridades, para pagar los nuevos impuestos a punto de crearse, para pagar las regalías a la Monsanto. Cuando los vencimientos bancarios lleguen y el precio internacional de la soja no supere los 200 dólares la tonelada, entonces ellos deberán poner sus tierras a remate (o se suicidarán, como ya lo han hecho varios en Alto Paraná) y se comprarán un

elegante chalet en alguna ciudad. Para ese entonces, la tierra ya será de las grandes empresas. Una parte de ese ciclo histórico de despojo que empezó con los aborígenes, estará concluido.

Así como los pueblos indígenas se han prácticamente extinguido como tales, conviene que los políticos reflexionen si se hará lo mismo con los campesinos, y sobre todo, qué implicará eso para la sociedad en su conjunto. Un estado social de derecho como quieren los que hicieron la Constitución, supone la supeditación del interés y la propiedad privada, a la función social que cumple la tierra.

Probablemente esos papeles que forman tal carta magna, sean como cualquier otro: canjeables por plata.

Sobre el paro cívico*

Cuando los agrotóxicos se usaban en el campo, lejos de la ciudad, no pasaba nada. Cuando se derrama en un pueblo cerca de la capital se pone el grito al cielo. ¿Somos tan ciegos para no ver más allá de nuestras narices?

El paro se preparó para reclamar el incumplimiento del gobierno de los acuerdos sobre once puntos alcanzados hace tres meses; además está decir que el gobierno no sólo no cumplió, sino que ni siquiera respondió por escrito la solicitud como había dicho que lo haría. En las últimas semanas, como resultado de esas mentiras se reiniciaron las ocupaciones, el ministro Ibáñez autorizó el uso de agrotóxicos, los latifundistas amenazaron al Presidente que si no actuaba pondrían en su lugar a Castiglioni, el Presidente, conocedor de dónde está el poder y a quién hay que obedecer sacó a los militares a los campos, falleció en un desalojo violento con la cabeza rota un campesino, y el paro se inició.

La mañana del primer día del paro, o sea ayer, apurado en resolver esto quizás por su viaje de hoy a Venezuela y Costa Rica, el Pdte. invitó a los dirigentes del Frente a una reunión donde, de nuevo, se comprometió a cumplir algunos puntos de la agenda inmediata sugerida por los obispos en una reunión el lunes pasado: devolver a los militares donde deben

* Diario La Nación, 17 de noviembre de 2004.

estar, sus cuarteles, respetar los derechos humanos en casos de desalojo, pero, deslindó jurisdicciones en el pedido de liberación de los presos sociales, los 200 y tantos campesinos detenidos por fiscales “celosos del cumplimiento de la ley”. A todo esto, por sentencia de los ministros de la Corte Suprema de “Justicia”, el lunes pasado liberaron a Orué, el expresidente de la ANDE, otro integrante de la mafia gubernamental. Esta justicia, como se ve, atiende los pedidos de los que tienen plata. Veremos qué dicen cuando se solicite la liberación de los más de 200 campesinos que no tienen dinero para dar “compensaciones” por su libertad. Queda claro que la justicia en el Paraguay no tiene mucho que ver (por no decir, nada que ver) con la legalidad. Las leyes son una cosa, la justicia es otra cosa. No hay por qué confundirlas. Pero volviendo al punto. Los reclamos de los sectores trabajadores del Frente volvieron al punto cero de hace tres meses. Ahora se reclama subsanar las agresiones sufridas por el campesinado en ese período, y las demandas económico-sociales originalmente planteadas, pasaron a un segundo plano. Esta es la táctica de los poderosos: ceder supuestamente, pero sobre un terreno ganado a sus enemigos: los pobres.

Lo que está en cuestión es el modelo de acumulación. ¿Cómo se hace plata en el país, y quién se apropia de ese dinero? Esto es, en síntesis, lo que significa el modelo de acumulación. ¿Cuál es el que tenemos? Por un lado, el de entregar el país a las transnacionales (ganan éstas y se llevan la plata fuera); por otro, el de lucrar a costa del Estado a través de la evasión, el contrabando, la adjudicación de licitaciones amañadas, etc. (ganan los corruptos); por otro, el de tener tierra ociosa y especular con la renta de la tierra (ganan los latifundistas) y finalmente, el de hacer producir marihuana y traficar con otras drogas (ganan los narcos). Puede apreciarse que es un modelo de acumulación notablemente favorable para una minoría y empobrecedor para la mayoría. Sobre las características de este modelo giran las demandas del Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía.

Diez años después, más pobres y más oprimidos

Breve recuento*

Diez años son suficientes para marcar una tendencia. Hace una década habían transcurrido sólo cinco años desde el golpe y tres desde que la intendencia de Asunción había sido ganada por una fuerza “progresista”. Se inauguraba apenas el gobierno de quien sería el presidente emblemático de la cleptocracia, la ciudadanía no tenía todavía tiempo de conocerlo.

Hoy, diez años después de aquel documento del CEPAG sobre la pobreza, es probable que todos los pronósticos que se habían hecho, incluidos los más pesimistas, se hayan quedado cortos. Wasmosy sube a la presidencia con un fraude, Argaña era lo suficientemente “estatista” como para no caer simpático a la Embajada estadounidense, Rodríguez blanqueado por el golpe, es también el encargado de blanquear el fraude electoral de las internas coloradas del 92. Wasmosy fue el hombre de la Embajada estadounidense para encarar ya decididamente el proceso de privatización y la aplicación de otras medidas que se indicaban en el Consenso de Washington y lo logra en parte; el país se “neoliberaliza” pero no lo puede hacer a fondo ya que su pasado económico, hundido como estaba en la corrupción del período stronista, no podía sino delatarlo: es la época de los grandes negociados, de las mega estafas, de los irritantes favoritismos. Quiebras bancarias monumentales en los años

* Sin fuente.

95 y 97' y una política económica nítidamente favorable a los intereses de las multinacionales y la oligarquía local conducen al país, a partir de 1997, a lo que sería el período recesivo más profundamente largo de la historia económica contemporánea. A partir de entonces el PIB real retrocede sostenidamente, en ninguno de los ocho años siguientes, el crecimiento del producto supera al de la población y en algunos de ellos, es negativo.

Como era de esperarse, la mayoría de los indicadores de las variables sociales se deteriora; la nutrición, la mortalidad materna, la escolarización, la cobertura en salud primaria, las viviendas para los sectores pobres, la entrega de tierra para los campesinos que no la tenían. Se entra en un período de aceleración de caída de la espiral descendente de los niveles de vida de la población que ya se había empezado a insinuar desde 1982.

En este clima de corrupción, de políticas de corte neoliberal, de mantenimiento de los niveles de concentración de la riqueza, la tierra y otros recursos productivos, las tiranteces entre los diferentes sectores sociales se acentúan, la irritabilidad social y política aumenta. En el 96, en el 99 y en el 2000, marcados por el ascenso, triunfo y ocaso de un liderazgo populista neoconservador, el régimen político desemboca en el que se creía —en su momento— que sería el peor de los escenarios posibles; el reinado del pusilánime González Macchi, imbuido también él de la glotonería por bienes públicos que caracterizó la permanencia de miembros de su familia en altos cargos públicos en la era Stroessner. La pobreza sigue expandiéndose, aunque la indigencia crece más rápido que aquella. O sea, en el 2003 hay más pobres, pero sobre todo hay más indigentes.

El gobierno de Duarte Frutos adviene en medio de un hartazgo generalizado por la gestión que terminaba, en esas condiciones cualquiera era preferible a quien(es) estaba(n). Sus primeros meses de gestión son claros: demagogia verbal y profundización neoliberal. A Dios rogando y con el mazo dando parece haber sido la pragmática estrategia política. Posteriormente, ya consolidado, el gobierno prescinde de la demagogia verbal y se queda con el mazo, al menos desde la perspectiva de los sectores sociales más empobrecidos y sus organizaciones.

¿Dónde está el verdadero poder, o las causas de fondo de la pobreza paraguaya?

Aquella tendencia al empobrecimiento, insinuada desde el mismo golpe del 89, es la expresión de los intereses de cuatro grupos, los verdaderos núcleos del poder en nuestro país. Los gobiernos que se sucedieron desde entonces son los alfiles, o más bien peones, de ese tablero comandado por los verdaderos dueños del país.

Entre esos cuatro grupos, hay dos que son tradicionales, antiguos, que aprovecharon la circunstancia de la “democratización” para ensayar mecanismos de conservación de su antiguo poder. El primero de ellos es la oligarquía terrateniente, fuerte e históricamente arraigada al modelo de acumulación excluyente que caracterizó al país desde fines de la guerra contra la Triple Alianza. Sus propiedades y su poder, lejos de verse afectados por estos avatares de la vida moderna, continúan afianzándose y compitiendo hasta ahora exitosamente con nuevos actores agrarios que intentan disputarle tan privilegiada posición de control. Los integrantes de este grupo, impiden la distribución de tierra en un país eminentemente agrario y eminentemente campesino.

El segundo grupo de intereses, que también tiene ya una cierta raigambre en las tradiciones políticas y económicas de nuestro golpeado país, es el de los corruptos. De manera formal, este grupo se constituye durante la década de los años sesenta, prohijado por Stroessner, para funcionar como polea de transmisión del sistema de lealtades patrimonialistas diseñadas por el dictador. Vía prebendas, este grupo era el encargado de movilizar el prebendarismo que tan buenos resultados les produjo, tanto en lo político como en lo económico. Está constituido por el lumpen empresariado que se benefició del contrabando a gran escala, la evasión impositiva, la adjudicación dolosa de licitaciones amañadas para la construcción de obras públicas, el desvío directo de fondos públicos y otros. Los integrantes de este grupo succionan muy importantes recursos fiscales, lo cual repercute de manera directa en el gasto social.

Entre los grupos económicos “emergentes” de poder, emergentes en el sentido que han venido ganando en las últimas dos décadas crecientes

cuotas de control sobre la economía nacional, están los narcos y las multinacionales. Los narcos han logrado el control territorial de extensas zonas de nuestro país, así como movilizar importantísimas sumas de dinero por vía de la “triangulación comercial” en el tráfico de drogas pesadas y la producción de marihuana de alta calidad y muy apetecible en los mercados consumidores. El lavado de dinero, que normalmente acompaña a las actividades anteriores, les permite tener una cierta presencia en las actividades inmobiliarias y financieras. No es extraño encontrar vínculos entre los integrantes de este grupo e integrantes del grupo anteriormente descrito, aunque conceptualmente no hay que confundirlos, tienen –cada uno– su lógica específica de funcionamiento.

Finalmente, como importante grupo de poder real en nuestro país están las empresas multinacionales, las cuales no actúan solas sino con el apoyo del gobierno norteamericano (y en menor medida de los países de la Unión Europea), su embajada y los organismos multilaterales encargados de la implementación de la agenda neoliberal. Amplios y estratégicos sectores de la economía nacional se encuentran controlados por las mismas: el financiero, el de combustibles fósiles, las maquinarias e insumos agrícolas, la agroexportación, así como el de las comidas rápidas, automotriz y varios otros. El afán de control se extenderá a corto plazo, al de aguas, telefonía, financiero (eliminando la banca pública de fomento y restringiendo la operación de cooperativas), aduanas, reformato tributario, así como la compra de extensas propiedades inmobiliarias. La capacidad de succión de recursos económicos genuinos de la economía nacional por parte de estas empresas, vía remesas de utilidades y otros mecanismos, es extraordinaria.

El gobierno de Duarte Frutos, intenta completar la obra de transferencia de la soberanía nacional iniciada en 1989 por Rodríguez, haciendo caso omiso a las demandas de una población cada día más hambreada y desprotegida.

Deshumanización y pobreza

En un reciente trabajo una autora se refiere al problema de la pobreza. De acuerdo con Hannah Arendt, la pobreza “más que privación es un

estado de constante carencia y aguda miseria, cuya ignominia consiste en su fuerza deshumanizadora. La pobreza, según esa autora, somete a los hombres al imperio absoluto de sus cuerpos, esto es, al imperio de la necesidad, lo que hace llamar la atención sobre la incompatibilidad entre pobreza y libertad. En ese contexto ella inserta su análisis sobre la cuestión social, identificada con el surgimiento –con la Revolución Francesa– de la multitud en el escenario de la política, haciendo que la libertad se rindiese a la necesidad. Siempre según Arendt, “cupó a Marx la transformación de la cuestión social en una cuestión política, mostrando que la pobreza es un fenómeno político y no natural, una consecuencia de la violencia, más que de la escasez...”.

La pobreza es un fenómeno político y no natural, una consecuencia de la violencia, más que de la escasez. Específicamente de la violencia económica, que se traduce por obra y gracia de los gobiernos, en violencia política.

¿Cómo puede no ser política la fuerza de los oligarcas, de los corruptos, de los narcos y del neoliberalismo? No se trata acá de “profundizar la democracia” al decir de algunos cómplices del estado de cosas actual, se trata de fundar la democracia, que es una tarea radicalmente diferente a la otra.

Se trata también de darnos cuenta que el modelo de acumulación de riquezas (para unos pocos) en el Paraguay se basa en la concentración de la tierra, en la usurpación de los bienes públicos, en el mantenimiento de cuentas “nacionales” mafiosas y en la transferencia de activos a las multinacionales. En estas condiciones la pobreza no puede sino aumentar. Así como son políticas las causas que la producen (qué gobierno se atrevería a ponerle el cascabel a estos gatos), así también su resolución sólo puede venir por la vía política. Mientras tanto, la violencia será mucho más importante que la escasez, para mantenerla.

La situación migratoria en el país.

**Para las autoridades, la migración
es un problema de seguridad***

Quizás los problemas que afectan más directamente a los migrantes, tanto a los que ingresan como a los que buscan emigrar, son la visión persistente en las autoridades de que la migración es un problema de seguridad y, por otro lado, la excesiva burocracia y corrupción en la tramitación de la documentación migratoria. Estos aspectos serán considerados más adelante.

Acciones gubernamentales referidas a las migraciones

Durante el 2004, la Dirección General de Migraciones (DGM) inició la elaboración de la Política Nacional de Migraciones del Paraguay. Esta iniciativa, que continúa a la realizada en años anteriores, en la que se elaboraron los lineamientos de dicha política, cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El documento estará listo durante el primer trimestre del 2005.

Además de esta explicitación estructurada de la política, diversas acciones emprendidas por el gobierno muestran la orientación de los instrumentos que han sido aplicados, en la mayoría de los casos de manera reactiva ante situaciones de hecho, más que sugiriendo una conducta

* CODEHUPY 2004. Informe de Derechos Humanos en Paraguay 2004 en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Paraguay/cde/20121009041759/migracion.pdf>

institucional proactiva. Los principales acontecimientos registrados serían los siguientes.

Por un lado, ante el fenómeno de la intención masiva de migrar a España, que apareció con fuerza durante el año, el gobierno de ese país a través de su embajador manifestó que Paraguay no planteó la firma de un convenio de regulación de flujos migratorios y que España considera que no es el cauce “porque estimula el deseo de emigrar, lo cual no conviene a Paraguay y mucho menos a España”. A su vez, esa misma Embajada anunció que por un año otorgará el gobierno de España cupos migratorios a Paraguay. Dicho pedido fue solicitado por Nicanor Duarte Frutos, atendiendo el fenómeno que se está dando en los últimos años de centenares de compatriotas que viajan a España en busca de empleo. En concreto, el gobierno no parece mostrarse afectado por la emigración de paraguayos al exterior.

Por otro lado, el canciller argentino, Rafael Bielsa, entregó a mediados de año a su colega de Paraguay, Leila Rachid, una propuesta de un nuevo acuerdo migratorio. El convenio bilateral sobre el tema había sido firmado en noviembre de 1998 por las respectivas Cancillerías, pero ninguno de los dos congresos aprobaron tal documento, lo que significa que no está en vigencia.

A su vez, en el marco de la reunión de la Convención Interamericana contra la Corrupción, realizada en Managua, Nicaragua, en julio, se decidió establecer un mecanismo coordinado que impida el asilo a los ciudadanos acusados de actos ilícitos en sus territorios. Participó del encuentro el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Ávalos. En esa ocasión el gobierno paraguayo se comprometió a no otorgar asilo a los corruptos. Parecería ser que con los que ya hay dentro es suficiente.

En una curiosa aunque comprensible disposición, en enero el gobierno paraguayo anunció que eliminará todas las dificultades migratorias que puedan existir para facilitar al máximo el ingreso y radicación legal en el país de ciudadanos estadounidenses, principalmente de los que vengan con intenciones de realizar inversiones productivas. El tema fue analizado por la canciller Leila Rachid (casada en segundas nupcias con

un ciudadano estadounidense) y el director general de Migraciones de ese momento, Carlos Machuca, quien fue removido en julio con cargos de corrupción.

Cambios en la administración migratoria

Desde que asumió el cargo, en agosto de 2003, el anterior director de la DGM fue hecho responsable de una innumerable cantidad de irregularidades, que culminaron con su destitución a comienzos de julio de 2004.

Algunas de las irregularidades fueron las acusaciones contra funcionarios de la DGM en Ciudad del Este por despojar de 1.500 dólares a tres chinos “rojos”, además de arrebatarse el pasaporte a uno de ellos. La denuncia fue hecha por la mujer de uno de los afectados. Los orientales se habían negado a pagar otros 1.000 dólares, por lo que los funcionarios decidieron denunciarlos ante la Policía como miembros de la “mafia china”, y fueron detenidos por los agentes de seguridad. El director de Migraciones afirmó dicho hecho y resaltó que necesita la identidad de los involucrados para sumariarlos y castigarlos.

Trascendió también que funcionarios capitalinos interventores de la oficina de Migraciones ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad exigían una coima de 30 dólares a extranjeros que no tenían sus documentos de retorno. Uno de los “interventores” retuvo en forma ilegal la cédula de un ciudadano libanés. Esta coima subió luego a 50 dólares. Así, un grupo de 10 libaneses fue retenido y después liberado. El supuesto cobro fue por carecer del certificado de retorno.

Estos son sólo algunos de los casos. Entre los más graves se conocieron casos de estafas masivas a ciudadanos brasileños, quienes pagaron los aranceles de sus documentos y éstos ni siquiera fueron tramitados. Coimas en el aeropuerto internacional, tarifas más caras de lo normal cobradas por gestores, pésimo trato en frontera de funcionarios, y otras irregularidades que culminaron, como se dijo, con la destitución de Carlos Machuca y el nombramiento del doctor Carlos Lisera. El nuevo encargado procedió de inicio a una depuración importante de los funcionarios corruptos, limpieza que alcanzó incluso a antiguos y altos funcionarios, alguno de los cuales han sido imputados por diferentes

delitos, entre ellos a la directora del puesto de control en Encarnación. En estos momentos, la DGM parecería estar encaminándose hacia una gestión más transparente y eficiente, ya que además de los cambios mencionados procedió a iniciar –como ya se mencionó– la elaboración de la política migratoria nacional, un proceso de modernización institucional, una definición de competencias entre instituciones involucradas en la gestión migratoria y a encarar la reglamentación de la actual Ley N° 978 de Migraciones.

Los derechos humanos de los migrantes

En el marco de la celebración de la semana de las personas obligadas a desplazarse, la Pastoral de los Migrantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) solicitó mayor apoyo de parte de la sociedad hacia los desplazados nacionales y extranjeros. Según esta fuente, habría más de 70 mil indocumentados residiendo en el país, muchos de ellos en situación de explotación y pobreza. Bajo el lema “La migración como espacio en perspectiva de paz” se pretende desarrollar mayor apertura hacia los afectados por el fenómeno.

Por su parte, las Naciones Unidas pidió en mayo a Paraguay que no expulse a los refugiados: no devolver, extraditar o expulsar a los extranjeros que quieren ingresar al país con fines de refugio¹. Debe recordarse al respecto que Paraguay ha ratificado los siguientes acuerdos y tratados.

En un trabajo de tesis de licenciatura² el padre Alcides Salinas develó, documentadamente, un problema de escasa visibilidad en nuestra sociedad: el de la discriminación en las escuelas. Si bien algunos estudios anteriores³ habían mostrado las características xenofóbicas del comporta-

¹ De acuerdo a esta fuente, existían en ese momento 32 personas en carácter de refugiadas en el país, de las cuales 21 ya adquirieron su status y 11 solicitaron al Estado paraguayo ser reconocidas como tales. De las 21 personas, ocho son rusos, seis vietnamitas, cinco cubanos, una yugoslava y un iraní.

² Salinas, A. “Inserción de alumnos y alumnas inmigrantes al sistema educativo en el Paraguay. Un desafío para la educación”. San Estanislao, Paraguay. Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), Facultad de Ciencias de la Educación, 2004. Tesis de grado.

³ Pérez, N. y V. Coronel.

miento de la sociedad y las autoridades paraguayas hacia determinadas comunidades de migrantes, el trabajo de Salinas afirma que esta actitud es también observada en las instituciones escolares⁴. Este problema no es siquiera mencionado por las autoridades educativas del país.

| Instrumentos* | Fecha de ratificación |
|---|------------------------------|
| Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 | 1 de abril de 1970 |
| Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 | 1 de abril de 1970 |
| Tratado de Derecho Penal Internacional (Montevideo) de 1889 | 3 de setiembre de 1889 |
| Convención sobre Asilo (La Habana) de 1928 | 28 de octubre de 1948 |
| Convención sobre Asilo Político (Montevideo) de 1933 | 28 de octubre de 1948 |
| Convención sobre Asilo Territorial (Caracas) de 1954 | 25 de enero de 1957 |
| Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas) de 1954 | 25 de enero de 1957 |
| Convención Interamericana sobre Extradición de 1981 | (2 de junio de 1998 - firma) |

* Estado de ratificación de los principales instrumentos internacionales al 30 de junio de 2002. Base de datos jurídica sobre refugiados, migrantes, extranjeros y temas conexos. M. Laura Gianelli Dublanc, abogada, consultora.

En cuanto a los trabajadores migrantes, durante el año se firmó un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio del Interior y el Instituto de Previsión Social (IPS) con el objetivo de optimizar el control legal de las personas extranjeras que ocupan un puesto laboral dentro del país. Estas tres instituciones tendrán la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las leyes, de la Ley General de Migraciones y de seguridad social, en los locales de trabajo mediante la conformación de un comité técnico.

⁴ Así, el aspecto más relevante que impide a los alumnos y alumnas inmigrantes integrarse en la escuela es el rechazo (42%), seguido de la comunicación (18%), la falta de respeto (11%), por ser diferentes (11%) y por miedo e inseguridad (9%). Los tres últimos indicadores son también una forma de rechazo expresado por los alumnos y alumnas inmigrantes, lo que en este sentido alcanza el 73%.

La problemática de la trata de personas

Como resultado de una iniciativa de la Cancillería Nacional, y con el apoyo de la OIM, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició durante el año una serie de actividades tendientes a encarar este difícil problema. La conformación de grupos de trabajo especializados fue el resultado de una serie de hechos que han venido saliendo a la luz cada vez con más frecuencia y que se vinculan a la aprobación por parte de Paraguay de la convención de las Naciones Unidas que tiene por objetivo prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres, niños y niñas (de menos de 18 años de edad), según acuerdo adoptado en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.

Por su parte, la ministra de la Mujer, María José Argaña, mantuvo una reunión informativa con el oficial del Departamento de Monitoreo y Combate al Tráfico de Personas de la Oficina de Servicios Extranjeros del Departamento de Estado norteamericano, Phillip Linderman, así como con el ministro del Interior, Orlando Fiorotto (destituído), y la titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, Mercedes Brítez de Buzó. Las autoridades abordaron la problemática y las posibles acciones conjuntas para combatir el flagelo.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que aprueba el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, el cual complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, se conoció que una de las prioridades del Mercosur es detener el tráfico de personas. También poner freno definitivo al tráfico de personas en la región es uno de los objetivos de las fuerzas de seguridad del Mercosur. Así acordaron ministros del Interior del bloque, además de Perú, Bolivia y Chile, precisamente en momentos en que en nuestro país se reabre el debate con respecto a adolescentes llevadas bajo engaños a España para ser explotadas sexualmente.

Algunos de esos hechos son el trascendido de que cerca de 50 paraguayas declararan a la prensa que bajo engaño viajaron desde Paraguay para trabajar en España, pero terminaron en un burdel siendo prostituidas forzosamente. Otro caso de trascendencia fue el de la joven

Lourdes Concepción Resquín, de 22 años, quien fue víctima de una red internacional de trata de blancas de la que pudo escapar gracias al auxilio de sus hermanos. Recibió la oferta de ir a trabajar a España con la promesa de un sueldo de 2.000 euros. Una vez allá se encontró en un prostíbulo con 36 paraguayas. El caso fue denunciado ante el fiscal Pedro Alderete, de Villarrica. Por este motivo una organización de mujeres del Departamento del Guairá dirigió una nota a la ministra de la Mujer, María José Argaña, pidiendo la intervención del gobierno en el grave caso detectado de la red de prostitución que envía mujeres a España bajo engaño.

Esta red de prostitución involucra también a altos funcionarios de la Policía Nacional o de Migraciones, según el fiscal de Villarrica, Pedro Alderete, por la rapidez con que se le consiguió pasaportes a Lourdes Resquín y Emiliana Saucedo para viajar a España. El funcionario estima que se trata de una red mafiosa muy amplia, muy poderosa, cuyos tentáculos llegan a diversas esferas policiales.

En otro caso, dos jóvenes mujeres de Encarnación que escaparon de un prostíbulo de Córdoba, Argentina, testificaron ante el fiscal Víctor Florentín contra la red de prostitución que las llevó hasta allí. Afirmaron que la persona que les ofreció trabajo vive en el mismo barrio donde ellas residen. Dijeron además que muchas paraguayas son llevadas engañadas y trabajan actualmente en la ciudad del país vecino.

Como consecuencia de la amplia difusión de estas informaciones, el embajador paraguayo en España, Julio César Frutos, confirmó que más de 500 paraguayas trabajan en la prostitución en España y facturan – según él– poco más de 300 euros por día. Inmediatamente la canciller Leila Rachid indicó al embajador Frutos que asista a esas compatriotas.

Por su parte, la Policía española anunció que desarticuló dos redes que obligaban a brasileñas, paraguayas, argentinas y colombianas a prostituirse, en operativos en los que se detuvo a 17 responsables de 70 extranjeras en situación irregular.

La situación en áreas de frontera

Como consecuencia de la agresiva expansión del área de siembra de la soja transgénica durante el año, las reacciones de diversos sectores de la sociedad se ha incrementado contra los sojeros, la mayoría de los cuales son de origen brasileño. Este recrudecimiento de los conflictos con ese país se suma a otros ya existentes, que se refieren a la presencia de trabajadores brasileños en ciudades de frontera y que no reúnen los requisitos migratorios.

A raíz de esa creciente conflictividad, el Senado retomó el estudio de un proyecto de ley que establecería una “Franja de seguridad fronteriza”, como existe en los países vecinos. El documento estipula que la prohibición regirá hasta 50 kilómetros de los límites paraguayos para el resguardo de la soberanía. Si bien la iniciativa no prosperó debido a múltiples factores, resulta importante en términos de identificar el alto nivel al que ha llegado la preocupación sobre el tema. En efecto, la Cámara de Diputados resolvió postergar sin plazo el estudio del proyecto de ley de seguridad fronteriza, presentado por el diputado liberal Blas Vera en noviembre del 2003. Se alegó que debe ser discutida con todos los sectores involucrados y no puede ser una decisión unilateral de la cámara.

La reacción brasileña no se hizo esperar. Hizo conocer al gobierno nacional que busca regularizar la situación de los colonos de esa nacionalidad. La solicitud fue hecha en una visita que realizó el diplomático acreditado ante nuestro gobierno al secretario de Estado. El trabajo de relevamiento se centrará en los colonos que ya tienen familia e hijos paraguayos. Por su parte, el secretario de Estado manifestó que los ciudadanos brasileños recibirán sus respectivos documentos toda vez que reúnan los requisitos exigidos por la ley paraguaya. Pero la cosa va más allá: la protección de los ciudadanos del Brasil radicados en Paraguay constituye prioridad para el Estado brasileño. Trascendió incluso que manejan dicha situación como de peligro inminente y la consideran como causa de una hipótesis de conflicto armado con Paraguay, que prevé inclusive la ocupación de Asunción.

La reacción antibrasileña se expandió también entre sectores campesinos organizados, que anunciaron la posibilidad de expulsar a los extranjeros que tienen grandes inversiones en tierras en Paraguay. Los dirigentes de algunas de esas organizaciones dieron un plazo al presidente Nicanor Duarte Frutos para que intervenga en la compra masiva de tierras por parte de extranjeros.

Los trabajadores brasileños de Ciudad del Este han sido objeto también de fuertes críticas hacia el gobierno, que decidió apretar los controles. En efecto, se estima que unos 300 extranjeros han abandonado sus puestos de trabajo ante los controles que comenzó a realizar la DGM. Durante los primeros días de recorrido, los funcionarios públicos encontraron trabajando en comercios locales a un brasileño que portaba radicación permanente falsificada, cinco que tenían contraseña de iniciados los trámites en Migraciones y dos que presentaron tarjeta de entrada al país válida por 30 días. El “clima” prevaleciente sobre este problema se resume en la siguiente afirmación: “los brasileños no son inmigrantes, sino invasores”. Esta fue la conclusión a la que llegaron sindicalistas en un seminario-taller en la Gobernación del Alto Paraná, organizado por la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los conflictos con la Argentina, si bien menos virulentos, no dejaron de ser preocupantes. A comienzos de año ese país endureció los controles exigiendo la suma de 500 dólares como prueba de solvencia económica, a los paraguayos que quieran ingresar al país vecino. Ninguna autoridad de nuestro país pudo explicar por qué Argentina adoptó dicha medida. La Cancillería solicitó informe al respecto. Inmediatamente después las autoridades migratorias de ese país suspendieron la medida, que aparentemente fue adoptada para forzar al gobierno paraguayo a elaborar conjuntamente un programa de control integrado.

En febrero, el gobierno argentino dio un plazo de 6 a 12 meses a los paraguayos ilegales residentes en ese país para que legalicen sus documentos. Según esa fuente, son alrededor de 500.000 personas. Esta declaración fue matizada con el anuncio casi simultáneo del director general de Política Latinoamericana de la Cancillería argentina, Roberto García, quien manifestó que su país no expulsará a paraguayos. Los

beneficios también alcanzan a los migrantes de Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Según fuentes periodísticas, en los primeros meses del año aumentó el desplazamiento de paraguayos hacia la Argentina en busca de mejores condiciones de vida. Además, a partir del entredicho mencionado, disminuyeron los controles de residencia, aunque los migrantes tropiezan con algunas dificultades. El gobierno argentino (a pesar de los datos censales de su propio país) calcula que en Argentina viven cerca de 1.000.000 de paraguayos, y sólo el 50% estaría en forma legal.

El otro foco de conflicto con ese país fue el paso Encarnación-Posadas. A finales del año pasado, la DGM inició un estricto control de extranjeros que residen en forma ilegal en Encarnación. Habría alrededor de 9.000 personas indocumentadas en la zona. La inspección seguirá por tiempo indefinido, anunciaron. Esta acción se vincula a la existencia de un presunto complot alentado por la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas, Argentina, contra los comerciantes de Encarnación, que estaría generando graves problemas a miles de compatriotas que cruzan para las fiestas de fin de año con sus familiares. El hecho fue denunciado por la jefa regional de la Dirección de Migraciones, Marta Velozo⁵, en nota dirigida al director general del organismo, Carlos Machuca Vidal.

Un anuncio que calmó parcialmente los ánimos fue el de que —mediante un convenio entre la DGM y las universidades de la región— los alumnos y alumnas argentinos que cursan estudios superiores en Encarnación serán exonerados de ciertos documentos que se requieren para tramitar la residencia temporal. Sin embargo, a los pocos días el Tribunal de Apelaciones declaró nula la sentencia judicial N° 73/04 del 2 de junio, dictada por el juez Penal de Garantías Juan Bogarín, por la que se concedía un amparo a estudiantes argentinos contra la DGM. Encontraron defectos de forma en la resolución judicial, por lo que todo el trámite deberá ser reiniciado ante el Juzgado de Primera Instancia.

La actitud del gobierno argentino varió en los últimos meses del año, debido quizá a que dicho país firmó —en agosto— la Convención Inter-

⁵ Esta funcionaria fue removida de su cargo en julio e imputada por estafa ante la Fiscalía en el mes de octubre.

nacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990.

Recomendaciones para el gobierno

- La promulgación de una Política Nacional de Migraciones ayudará sensiblemente, en caso que se le dote de los recursos (políticos y económicos) para poder ser cumplida, a encarar con seriedad el tema migratorio en el país.
- De la misma manera, la reglamentación de la actual Ley N° 978 de Migraciones es un instrumento necesario para la agilización de la normativa migratoria en el país.
- Otros dos instrumentos, el de la redefinición de las competencias institucionales en materia de gestión migratoria y modernización institucional de la DGM, son claves para el ordenamiento normativo y administrativo de las migraciones en el país.
- Los controles sobre la corrupción y los abusos de autoridad cometidos contra los migrantes han aumentado desde la toma de posesión de cargo del nuevo director de la DGM, lo cual es auspicioso. Sin embargo, a pocos meses de gestión es insuficiente aún lo que se ha hecho, por lo que se recomienda continuar con esa política de saneamiento interno.
- El conflicto con los agricultores brasileños, que cultivan soja transgénica, deberá ser abordado con criterio nacionalista pero flexible, dados los estragos que la ampliación de la superficie cultivada con ese rubro está causando entre los campesinos paraguayos, forzándolos a un importante movimiento de expulsión.
- Debe insistirse, como ya se hizo en el informe del año pasado, en la concesión del voto a paraguayos residentes en el exterior como forma de reconocimiento de su ciudadanía.

La aprobación de transgénicos, privatizaciones y el recalentamiento social*

La rabia contra los corruptos, contra los ineficientes, contra los plata potá, alcanzó ya también a las escuálidas clases medias urbanas. Si esta bronca se junta con la de los campesinos, sindicalistas y el resto de la gente sensata del país, que es mucha, Nicanor deberá empezar a poner sus barbas en remojo... o convertirse en un presidente en serio, esto es, dejando de hacer de bufón de las transnacionales.

La prensa empresarial, en general poco afín a los intereses populares, estimó en cinco mil las personas que se dieron cita en el cruce de Santa Rosa del Aguaray desde el lunes y por lo menos hasta ayer, para exigir el cumplimiento de promesas y la rectificación de la política económica del gobierno.

Mientras tanto, el ministro de Agricultura, seducido por las presiones de la Monsanto, anuncia que la aprobación del cultivo de semillas genéticamente modificadas, vía decreto, saldría antes del 15 de agosto. Detrás de la semilla de la soja (de hecho ya utilizada de contrabando en el 85% de los cultivos de la oleaginosa), esperan también su aprobación, el cultivo del maíz y del algodón transgénico. Todas estas variedades con su letal paquetito tecnológico de glifosato.

* Sin fuente.

En paralelo, unos cuantos parlamentarios anacrónicos insisten en resucitar la ley 1615, que permitiría enajenar las empresas públicas al capital privado transnacional. Buscan reeditar la protesta popular de mayo-junio de 2002, que ahora se uniría a la casi unánime reprobación del uso de transgénicos, de los engañados por las promesas de pavimentación de rutas, de los futuros confiscados por los “empedrados” que pasan frente a sus casas, de los deudos de las víctimas y empleados del Ycuá Bolaños, de los que se les desconectó la luz eléctrica por falta de pago, de los campesinos que no tienen tierra y por querer trabajar son desalojados y apresados, de las víctimas de la inseguridad ciudadana debido a la ineficiencia y corrupción de ciertos cuadros policiales, de los perjudicados por la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras mientras los paraguayos se convierten en parias en su propio país, a la bronca de los enfermos que no tienen servicios de salud pública mínimos, a la de los maestros que no cobran...

En fin, hay mucha rabia que se está acumulando. El maestro popular y filósofo peruano Pablo Macera solía decir que lo mejor que produjo, lo hizo juntando mucha bronca y paz operativa. De lo primero en nuestro país ya hay mucha.

Mientras tanto el gobierno vive en el limbo. Las elites económicas del país que usan a los políticos de turno como alfiles y peones en su tablero de negociaciones, están suficientemente contentas con contar con esos políticos. Equivalen a los guardias de seguridad de Prevención en el Ycuá Bolaños: alguno de los Paiva les dice, “cierren los portones”, y enjaulan a todo un país en el incendio de la miseria, de la pobreza, del desempleo, de la ignorancia, de la enfermedad, de la mortalidad materna e infantil, de la desposesión. Es que son corruptos, incompetentes, venales y sólo les brillan los ojos cuando ven un billete, y si es verde hasta saltitean salivando.

No hay atisbos, de parte del gobierno y los políticos –que bailan la polquita que les ponen desde Washington– a imaginar tan siquiera un proyecto nacional de desarrollo que permita visualizar una salida de emergencia a la crisis nacional desatada por esta mezcla explosiva de gases neoliberales con fluidos venenosos provenientes del poder oligárquico terrateniente. Están actuando de la manera más irresponsable

que se pueda imaginar con respecto a su pueblo. Están colaborando a construir un edificio precario, de material inflamable, que se derrumbará apenas explote la crisis del petróleo¹, o cuando deflagren las tasas de interés del dólar que sería decretada por el *Federal Reserve* el año que viene². Siguen tomando préstamos que aumentan la deuda externa, enajenan el territorio nacional, se degrada el medio ambiente, se dan concesiones a multinacionales para explotar nuestros recursos naturales. O sea, hacen lo que no se debe hacer para obtener el bien común, hacen lo que quiere el neoliberalismo.

Este es un esquema fracasado, pero no vemos que las autoridades entiendan que un país que quiere desarrollarse tiene que invertir lo más posible, disponer de una estructura productiva sólida, terminar con el desempleo y los campesinos sin tierra, distribuir los ingresos con mayor justicia, jerarquizar el sistema productivo, procurar que las empresas actúen de acuerdo con el interés nacional, minimizar el problema de la deuda externa. No lo van a entender, porque un nuevo modelo precisa cambiar la configuración y el ejercicio del poder.

Una buena parte de la ciudadanía exige en este momento, más que nunca, cordura a sus autoridades. Cordura para no permitir el uso de material genético de impredecibles consecuencias para la salud, para erradicar el uso de agrotóxicos prohibidos, para no malvender el mínimo patrimonio público que nos queda, para dar energía eléctrica con tarifa social a los miles de desheredados de nuestra tierra, para no comprometer la soberanía territorial de nuestro ya pequeño país. Exigimos cordura.

Así como los primeros bomberos que llegaron al Ycuá Bolaños pidieron cordura a los perros guardianes de los Paiva para que abran las puertas, de ese mismo modo, el país pide sensatez y cordura a los que están en la obligación de usarla cotidianamente para preservar el bien común. Esperemos no ser tiroteados como lo fueron aquellos primeros bomberos que defendían la vida.

¹ Sarkis, Nicolás (2004). Hacia una nueva crisis petrolera, *Le Monde Diplomatique*, Ed. Cono Sur, julio, 26-27.

² Carmona, Ernesto (2004). Anuncian un gran colapso económico de EE.UU. en el año 2005. En, <http://www.studien-von-zeitfragen.net/>. Fue publicado en inglés el 26 de julio.

2005

La entrega del territorio

*Pto. Casado: ofensiva neoliberal y caducidad de lo propio**

Poco importó a quienes estuvieron involucrados en la transacción, que buena parte de las tierras que la firma Casado vendió a la empresa “La Victoria”, subsidiaria de la ultraderechista secta Moon, no tenga los títulos sobre las mismas. Se trataba de una transacción entre poderosos y estos detalles administrativo-burocráticos no hacen más que molestar. De hecho, la condición jurídica de las “propiedades” no ha estado clara desde que el “emprendedor” empresario Carlos Casado las ocupara a comienzos del siglo pasado¹. Parte de las tierras estaban tituladas, buena parte de ellas con serias adulteraciones en los registros y otra parte simplemente fue ocupada.

Además de este tipo de argumentos legales, podrían argüirse otros de tipo social, económico, histórico y geopolítico, para demostrar que la venta de tierras nacionales en una frontera estratégica y próxima a las nacientes del río epónimo no es sino, simplemente, la entrega del territorio nacional por plata.

¹ Se trataba de aprovechar el botín sobre los despojos que habían quedado del Paraguay pocos años después de la Guerra Grande y sacando tajadas de la inicua Ley de Tierras promulgada por el “patriota” Bernardino Caballero el 2 de octubre de 1883.

En lo social parece claro que no se puede vender una tierra con pueblo y todo, esto es, con gente incluida y sus respectivas instituciones. En lo económico es curioso ver cómo una empresa de capital extranjero (Casado SA) vende a otra empresa de capital extranjero (La Victoria SA) sin que el Estado tenga arte ni parte. En lo histórico, podría resultar banal recordar el papel que jugó ese pueblo en los avatares de la odiosa guerra con Bolivia impulsada por intereses de las multinacionales petroleras, pero algo significa en el imaginario cultural del pueblo. En lo geopolítico, entregar distraídamente 600 mil hectáreas de frontera en una zona particularmente rica en biodiversidad, es distribuir soberanía territorial al mejor postor.

Es cierto que este tipo de genuflexión de los gobiernos latinoamericanos ante la insignia de los logos de las multinacionales es cada vez más frecuente. Es cierto también que los políticos que gobiernan el país más tienen de piratas que de ciudadanos, pero el caso Casado/La Victoria no es el de una multinacional cualquiera, por lo que merece algunos datos sobre quiénes son los dueños de esa empresa y por qué tienen tanta ascendencia sobre estos gobiernos.

El “Reverendo” Sun Myung Moon se considera la reencarnación de Adán y de Cristo. En 1992 –hay una profusa documentación anterior y más reciente– fue acusado, en un informe del Congreso norteamericano, de soborno, fraude bancario, venta ilegal de armas. Fue acusado también de intentar construir secretamente armas nucleares para Corea. Otro informe del Congreso indica también que la Iglesia de la Unificación del “reverendo” fue fundada por el director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea Kim Chong Pil en 1961 como un instrumento político.

El informe del Congreso expresa textualmente: *“Kim Chong Pil organizó la Iglesia de la Unificación mientras era director de la Agencia Central de Inteligencia de la ROK (Republic of Korea) y vino usando la iglesia, con una membresía de 27 mil feligreses, como herramienta política”*. Kim pertenecía al primer anillo de los oficiales norteamericanos que condujeron el Golpe de Estado que llevó al presidente Park Chung Hee al poder en 1961. *“Los miembros de la iglesia están activamente comprometidos en aumentar su membresía principalmente en comuni-*

dades de agricultores. La iglesia tiene aparentemente mucho dinero ya que paga a gente influyente en dichas comunidades, fuertes sumas para afiliarse a la iglesia”².

Este interesante documento continúa relatando que la organización Moon gastó una alarmante cantidad de dinero en los EEUU en un esfuerzo por influir sobre el gobierno³. Más de U\$ 800 millones gastó sólo en la compra de Washington Times. Centenares de millones más fueron gastados en los periódicos Insight y Mundo, y decenas de millones en medios electrónicos, además de al menos U\$ 40 millones en periódicos de Nueva York.

La casa editora de la Moon en Nueva York, la Paragon Press, recibió U\$ 10 millones. Millones más fueron gastados en asociaciones de medios a nivel mundial y en la organización de conferencias, en organizaciones de la nueva derecha incluyendo la American Freedom Coalition. Moon compró propiedades valuadas en millones de dólares, incluyendo el New York Hotel (U\$ 100 millones), el Proyecto New Birth (U\$ 75 millones), y empresas de pesca comercial (U\$ 40 millones). Recientemente (para 1992) Moon gastó miles de millones de dólares para la construcción de una planta automotriz en China.

Dado que es poco lo que se conoce de este personaje y su “iglesia” en el país, permítaseme seguir citando a los dos periodistas antes mencionados quienes continúan: el increíblemente rico Rev. Sun Myung Moon tiene amigos poderosos en Washington y usa su influyente periódico, el Washington Times para hacer que estos amigos lo apoyen. Moon ha usado habilidosamente el miedo al comunismo para hacerse de poderosos aliados e intimidar a amenazantes enemigos.

Lo que pocos no entienden es que el comunismo realmente no le importa a Moon, es simplemente un estandarte que usa para ejercer una poderosa influencia en la sociedad (norteamericana).

² Martin, Harri V. y David Caul (1992). “Moonies: seeking to influence the media”, Napa Sentinel, Marzo 17.

³ Y lo consiguió, ya que actualmente el “reverendo” es uno de los líderes espirituales del entorno más cercano del presidente Bush (jr.), dada la afinidad entre los postulados de la Iglesia de la Unificación y la rama metodista de la que es fiel el señor presidente.

En 1965, trabajando con la CIA coreana, Moon hizo su primera visita a EE.UU. Durante la caída del presidente Richard Nixon en 1973-74, (el Rev.) Moon capturó la atención de los medios de prensa norteamericanos apoyándolo. Viajó por todo el país proclamando *“Perdonen, Amen, Únanse”*. *“El cargo de Presidente de los USA es sagrado”* dijo Moon. *“Dios ha elegido a R. Nixon para ser el Presidente. En consecuencia, sólo Dios tiene el poder y la autoridad para sacarlo”*. El 11 de diciembre, Nixon envió una nota de aprecio a Moon y a la iglesia de la Unificación por su apoyo. Cientos de seguidores de Moon se manifestaron frente a la Casa Blanca apoyando a Nixon. Moon recibió entonces una audiencia con Nixon y se abrazaron.

Recibió también proclamas que honraban a la Iglesia de la Unificación, de gobernadores como el de Georgia: Jimmy Carter y el de Alabama: George Wallace. Apoyos de los senadores William L. Scott de Virginia, Jesse Helms de Carolina del Norte, Mark Hatfield de Oregon y J. William Fulbright de Arkansas, así como del alcalde de Nueva York John Lindsay y William F. Buckley, Jr. Moon se sacó fotos y las publicó, con los senadores Hubert Humphrey, Strom Thurmond, James L. Buckley y Edward Kennedy.

Pero Moon ideó también un método particular de hacer lobby en Capitol Hill. Asignó tres lindas señoritas a cada Senador de los Estados Unidos. *“Déjenlas que tengan una buena relación con ellos. Una es para las elecciones, otra es la diplomática y la tercera para las fiestas. Si nuestras chicas son superiores a los senadores en muchos aspectos, entonces los senadores serán captados por nuestros miembros”*, afirmó Moon en 1973.

El vocero de la Casa Blanca, Carl Albert, ha estado cercanamente vinculado con una mujer seguidora de la Iglesia de la Unificación. Varios congresistas eran entretenidos en una suite del hotel Washington Hilton por las “Moonies”. Todo lo que las chicas conocían de los senadores y congresistas entraba a los archivos confidenciales de Moon, incluyendo los detalles de la vida personal. El Rev. Moon fue el invitado del Vicepresidente George Bush a las ceremonias de asunción de Reagan.

Se cita a Moon en muchas publicaciones diciendo, *“Conquistaré y subyugaré al mundo. Soy el cerebro. Llegará el tiempo -sin que yo lo busque- en que mis palabras servirán casi como ley. Si pido algo, será hecho. Si no quiero algo, no será hecho”*.

Como puede apreciarse, la empresa “La Victoria SA” con su propiedad de Casado, no es una empresa cualquiera, ni su jefe máximo es un empresario interesado netamente en negocios económicos.

En nuestro país tiene muchos defensores: medios de prensa, empresarios, senadores, diputados, oficiales de la policía y las fuerzas armadas, jueces, fiscales y hasta me atrevería a pensar que los más altos representantes del Ejecutivo. Se esgrime el argumento –ya trillado por cierto– de las inversiones extranjeras que deben ser atraídas y la gran cantidad de puestos de trabajo que éstas generarán para los pobladores de la zona.

Hasta donde puede verse, la Iglesia de la Unificación –o secta Moon– no es una entidad filantrópica. Si gastó lo que gastó es para recuperar cuanto antes lo invertido, pagar la menor cantidad posible de impuestos, retener una reserva inmobiliaria estratégica destinada a multiplicar varias veces su valor original con el paso de los años y remesar las utilidades que llegue a generar, sin tropiezos de ningún tipo.

Cercano a Bush, miembro de una secta ultraderechista, corrupto, son características excesivamente familiares en un país *“que ve la banda pasar”*, al decir de aquella marcha de carnaval.

Cuando chico nos enseñaban en la escuela que la soberanía no se enajena. Se denostaba a algunos opositores con el mote de “le-gionarios”, porque sirvieron de peones de potencias extranjeras contra los intereses nacionales. Hoy, el concepto de soberanía –para algunos– ya debe ser eliminado del léxico castellano, para otros la soberanía empieza a ser considerada como un elemento central de la calidad de vida: si los paraguayos decidiéramos sobre lo que hacer con y en nuestro país, viviríamos mejor que si adoptamos recetas que vienen detalladas desde fuera, recetas que sólo se ocupan de cómo sacar mejor el jugo a países gobernados por políticos abyectos.

Ocultar la verdad es una forma de mentir*

La entrega de soberanía que implica la política económica del actual gobierno paraguayo, equivale a entregar al pueblo a la desenfrenada irracionalidad de las multinacionales. La pobreza, el hambre y la violencia a que nos exponemos es –por el momento– difícilmente imaginable.

Hago referencia a dos hechos que se avecinan, que están muy próximos: a la suba del petróleo y a la caída del dólar. Ambos acontecimientos afectarán de manera directa y por cierto, muy negativamente al país, sobre todo a los más pobres. El gobierno no hace nada al respecto; ningún comunicado, ninguna alerta, ninguna previsión.

El petróleo

Empecemos con el petróleo. “Para el FMI, el actual “choque” en los precios del crudo, no es pasajero como los anteriores, sino que bien podría durar 20 años. Goldman Sachs (principal banco estadounidense de inversiones del mundo) ha alertado sobre la posibilidad de un “super-pico” de precios por encima de los 100 dólares por barril, mientras que Citigroup ha hablado de un “super-ciclo” económico dominado por

* Revista ACCIÓN N° 253 - Mayo, 2005. CEPAG.

un lapso prolongado de altos precios de todas las materias primas¹". Goldman Sachs, publicó recientemente un impactante reporte sobre la fuerte demanda del petróleo y su abastecimiento restringido, lo cual ocasionaría un alza paroxística y la *"compra masiva por los fondos especulativos"* (Mark Tran, The Guardian, 1º de abril)²".

En nuestro país la importación de derivados del petróleo sigue siendo el rubro, tomado aisladamente, más importante de drenaje de divisas. Con las perspectivas apuntadas eso tenderá a aumentar. Internamente tiene también sus efectos; con un gasoil a US\$ 0,61 por litro los precios de la canasta y servicios básicos se disparan, el Índice de Precios al Consumidor, IPC y la inflación aumentan y la pobreza también³. Proyectando esto a un futuro cercano, la situación tenderá a ser insostenible políticamente por las amenazas a la gobernabilidad que significa.

Esto en un país cuyo consumo energético sigue dependiendo en un alto porcentaje (no menos de 40%) de energía renovable (leña y carbón) y que tiene la represa hidroeléctrica más grande del mundo, además de la de Yacyretá y Acaray. Así las cosas, la política energética de los gobiernos neoliberales de la transición aparece como enteramente irracional (con la lógica del sentido común), aunque altamente funcional a las transnacionales del petróleo, sus distribuidoras y otras ramas transnacionalizadas de la economía. Habiendo electricidad y cemento suficiente se siguen construyendo rutas asfaltadas (derivado del petróleo), consumiendo petróleo en las rutas y toda la parafernalia de automotores y accesorios controlados por empresas multinacionales. No hay planes de reforestación, no hay un plan de expansión del uso de la electricidad (para el transporte de carga y pasajeros por ejemplo),

¹ Buchanan, Ronald (2005). "Los choques petroleros ya no son como antes", México, La Jornada, 18 de abril. Se agrega además: "Hablar de los altos precios del petróleo comienza a ser costumbre. Preparémonos para seguir oyendo estas noticias. Ahora no es sólo cuestión de geopolítica como en los años 70 y 80, sino que se trata de un fenómeno con profundas repercusiones en la economía mundial".

² Alfredo Jalife-Rahme (2005). "Superalza del petróleo a 105 dólares el barril?". México, La Jornada, 6 de abril.

³ Si bien no existen estudios en el país, es posible pensar que con cada punto porcentual de aumento del IPC se crean en el país al menos 30 mil nuevos pobres (personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas, alimentación).

renegociación de los tratados binacionales, nada. Nicanor y Borda parecen entregados a los dictámenes de la embajada que representa los intereses multinacionales.

Es más, los dos principales rubros de exportación (soja y algodón) son totalmente dependientes del petróleo, así como lo es la producción de los alimentos⁴, debido al modelo derivado de la revolución verde, basado en el insumo de derivados del petróleo en los insumos agrícolas, la tractorización extensiva, la conservación y el transporte de alimentos así como la energía fósil consumida en la distribución mayorista y minorista de los mismos.

¿Qué pasará cuando el precio (o las disponibilidades) de petróleo superen la capacidad de compra (o acceso) del Estado paraguayo? Situación por cierto prevista para el mediano plazo por especialistas en el tema. ¿Qué pasará? Al gobierno parece no importarle este asunto. La producción en general, el transporte en su totalidad, el consumo alimentario y muchas otras pautas de organización de la vida cotidiana sufrirán irremediablemente radicales transformaciones con respecto al modelo que hoy conocemos. Para los “estrategas” de la política nacional esto debe sonar a falsas alarmas de los opositores de siempre. Lamentablemente, ya nuestros hijos vivirán esta situación.

El dólar

Por otro lado, las autoridades económicas del país deben haber notado que el dólar de Estados Unidos ha perdido el 38 por ciento de su valor frente al euro, desde febrero de 2002; el 25 por ciento en relación con el dólar canadiense y el 23 por ciento frente al yen japonés, para sólo mencionar tres ejemplos⁵.

“Paul Craig Roberts, anterior secretario asistente del Tesoro con Reagan y editor asociado del ultraneoliberal *The Wall Street Journal*, diagnostica “*el fin que viene de la superpotencia estadounidense*” (“¿El último tango”?; Counterpunch; 1/3/05): “*la economía en descenso de EEUU*”

⁴ Sobre este tema, consultar el excelente artículo de Norman Church (2005): “Energía, transporte y sistema alimentario”, www.rebellion.org, 21 de abril.

⁵ Elys Fors (2005) “El colapso del dólar”, Prensa Latina/Rebelión, 3 de abril.

se encamina a una crisis. (...) Las aflicciones son serias y pueden ser fatales aun si son diagnosticadas y tratadas. EEUU ha perdido el poder de compra de su divisa y su habilidad de crear empleos para la clase media". Aborda la consabida diversificación de los bancos centrales mundiales y la pérdida tanto del valor intrínseco del billete verde como de su función de "reserva".

Su análisis sobre la pérdida de empleos es demoledor: *"el declive del dólar elevará las tasas de interés y los precios en general, con excepción de los empleos"*. Fustiga la propuesta de privatización del seguro social que costará 4.5 millones de millones de dólares (trillones en anglosajón) –¡más del 13 por ciento del PIB planetario!– de empréstitos en los próximos 10 años: *"EEUU no posee ahorros domésticos para absorber esta deuda y los extranjeros no prestarán tales sumas enormes a un país con una divisa en vías de colapsarse, en especial un país empantanado en un conflicto en Medio Oriente que acumula cientos de miles de millones de dólares en deuda de guerra"*⁶.

Estas opiniones de observadores mundiales autorizados son claras; el dólar se irá desvalorizando a menos que la Reserva Federal norteamericana, el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional, FMI, tomen drásticas medidas que incluyen la suba de las tasas de interés a niveles récord. Quizás el peor de todos los pronósticos es que el crecimiento de la economía norteamericana se desacelere aún más.

Las repercusiones sobre un pequeño país como el nuestro, que además está gobernado por personas probadamente incompetentes y mundialmente conocidas como corruptas, serán también tan negativas como previsibles.

En primer lugar, una suba de las tasas de interés del dólar (fijadas por la mencionada triple alianza) tienen un impacto directo e inmediato sobre los servicios de la deuda externa del país, que se verá ampliada con las consiguientes repercusiones que ello tendrá sobre el ya exiguo gasto social (mayor ajuste del déficit fiscal y mayor control del circulante para evitar inflación disparada por los futuros aumentos de precios).

⁶ Alfredo Jalife-Rahme (2005). "Agonía del dólar: ¿el último tango del imperio?", México, La Jornada, 11 de marzo.

En segundo lugar, encarecimiento del precio de las importaciones de países de fuera de la zona dólar (por ahora, Europa pero previsiblemente en un futuro cercano también los países asiáticos). Como todos sabemos, Paraguay es un país que ha visto deteriorarse severamente los precios de su intercambio comercial con el exterior (deterioro de los términos de intercambio), además de ello la totalidad de sus exportaciones tiene un altísimo componente importado, así como buena parte del consumo doméstico no productivo (bienes y servicios). De modo que de mantenerse un modelo primario-exportador como el actual, habrá de producirse mucho más para que ingrese la misma cantidad de divisas, para lo cual hará falta importar más. Ese círculo vicioso, destrozará el modelo sojero (entre otras cosas) basado en los pequeños y medianos productores.

Estos no son sino superficiales apuntes sobre dos de los hechos que se avecinan en el futuro cercano. Sus efectos ya los estamos sintiendo, pero el gobierno –creo yo que a propósito– no los hace visible de modo a evitar una reacción del pueblo, que será el primero y principal afectado.

Rumsfeld en Paraguay

*Ni puntadas sin hilo, ni visitas sin motivo**

El Pentágono tiene entre sus planes inmediatos expandir el Plan Colombia al resto del continente. Esto significa instalar en cada país de América Latina la preocupación por la droga y el terrorismo, dos problemas que no son latinoamericanos sino norteamericanos. Una vez instalados (lo que en otros términos significa, legitimados como ámbito de preocupación política de los gobiernos y civil de la población), la fase siguiente es su combate, para lo cual hará falta extremar las medidas de “seguridad” que en términos prácticos significa restringir las libertades civiles, tal como el *Patriot Act* lo hizo en Estados Unidos.

Qué buscan

El analista de temas internacionales Manuel Freytas¹ apunta cuatro objetivos de la estrategia militar de los Estados Unidos que está sustentando la expansión del Plan Colombia a nuestros países:

- i. *Control geopolítico*: alinear en un mismo programa y en una misma agenda política a los gobiernos regionales –tanto “progresistas”

¹ Especial para IAR-Noticias. El plan “contraterrorista” del Pentágono en el Cono Sur. ¿A qué fue Rumsfeld a Paraguay? Agosto 16, 2005. www.iarnoticias.com

como “neoliberales”– en un eje vertebrador central que es la *defensa de la democracia regional* amenazada por el narcotráfico y el peligro del “*terrorismo internacional*” (Plan de acción institucional).

- ii. *Control militar*: alinear –mediante acuerdos de cooperación militar, tratados, entrenamiento y operaciones conjuntas– a los servicios de inteligencia, policías y ejércitos regionales en un plan estratégico de “*combate contra el terrorismo*”, cuyo eje organizador y operativo es el Comando Sur de Estados Unidos (Plan contraterrorista).
- iii. *Control social*: alinear a los gobiernos regionales –mediante convenios de seguridad y entrenamiento conjunto– en un mismo *plan represivo contra los conflictos sociales*, cuya consigna aglutinadora es la de preservar a la sociedad del “*caos y la violencia terrorista*” de las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos de izquierda que proponen y realizan huelgas, tomas de fábricas o de empresas, o bloqueos de rutas (Plan de contención de conflictos sociales), y
- iv. *Control económico*: hegemonizar –mediante acuerdos y convenios de defensa continental contra el “terrorismo”– el *dominio militar estratégico alrededor de las fuentes de recursos naturales: petróleo, reservas energéticas, agua, y riquezas de biodiversidad* (Plan de apropiación de recursos naturales y de estructuras económico-productivas).

Instalando el problema

Acosado por los problemas económicos y el fantasma del agotamiento de recursos naturales estratégicos para el futuro inmediato, el sector duro del actual gobierno norteamericano (conocido como “los halcones”) ha ido desplegando desde hace ya un tiempo una compleja estrategia continental que se vio favorecida por los acontecimientos del 11-S.

Esta estrategia, centrada según ellos en el fantasma del “terrorismo internacional”, fue diseñada por la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI, y la Agencia de Inteligencia para la Defensa, es decir, los máximos proveedores de inteligencia a la Casa Blanca.

Detallar todos sus componentes resultaría por demás extenso para un artículo como éste, se rescatan sólo algunos de ellos.

Por un lado, convencer que el enemigo está en América Latina, que el terrorista no es sólo un señor con túnica y turbante que está allá lejos en medio oriente. Para ello se sindicó a las FARC como agrupación “narco-terrorista” que está desarrollando vínculos cada vez más estrechos con Al Qaeda y que se expande por el resto del continente. Tarea que –en la mente notablemente retorcida de los estrategas norteamericanos– cuenta con el apoyo de Cuba y Venezuela (¡!).

El asesinato de Cecilia Cubas, en el cual se encontraron involucrados militantes de Patria Libre, sirvió como demostración que las FARC operan en el Paraguay (¡dando asesoramiento por correo electrónico!). Un jingle de la SENAD advertía de la peligrosísima presencia de guerrilleros colombianos en nuestro país. El embajador de dicho país en Asunción se vio en la necesidad de negar rotundamente la presencia de miembros de las FARC en el Paraguay. Posteriormente una campaña de los medios empresariales daba cuenta de la “entrada masiva” de colombianos, venezolanos y cubanos al Paraguay. La embajadora cubana salió al paso también, desmintiendo la existencia de tales ciudadanos de su país en el nuestro. ¡Hasta la llamada anónima advirtiendo de la existencia de una bomba en Emergencias Médicas a los seis meses del hallazgo del cadáver de Cecilia Cubas fue endilgada a las FARC!

¿Qué se busca? Convencer a la opinión pública que las FARC están entre nosotros, que son peligrosas, que tienen planes terroristas y finalmente, que coordinan con Al Qaeda.

Según Freytas en el artículo ya citado, para los que manejan y procesan información estratégica, el sustento funcional del plan, su argumentación central, fue claramente expresado por el director de la CIA, Porter Goss, durante un informe que brindó ante el Senado, a fines de febrero pasado.

En su exposición ante el Comité de Inteligencia del Senado el director de la CIA señaló que las “células clandestinas” de la red Al Qaeda, los “terroristas” de las FARC, y las ambiciones nucleares del régimen de

Irán, son las *principales amenazas* que enfrentan los intereses de EEUU en el mundo.

Además, indicó que el conflicto bélico en Irak, “aunque no es una causa del extremismo, se ha convertido en una causa para los extremistas islámicos”, que, según el jefe de la CIA, ya se encuentran operando en EEUU y América Latina. Advertencias similares fueron formuladas ante el Comité de Inteligencia del Senado por el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller.

Por otro lado, la estrategia norteamericana tiene otro componente que actúa como el tuco para los tallarines: complicar a Cuba y Venezuela con las FARC en supuestos planes y operaciones para desestabilizar la región, principalmente Bolivia. En sus primeros pasos, la metodología de mezclar en una misma bolsa a Cuba, Venezuela, las FARC y las organizaciones combativas de ultra izquierda (sobre todo de Bolivia) intentaría demostrar que el “terrorismo”, tanto local como internacional, está operando en forma fusionada para potenciar sus resultados “criminales” a nivel mundial, incluido el territorio latinoamericano.

El nuevo esquema estratégico “contraterrorista” diseñado por los técnicos de la CIA y el Pentágono, sigue diciendo Freytas, tiene al Comando Sur como eje vertebrador central, en tanto que los servicios de información, las policías y los ejércitos latinoamericanos –salvo los de Cuba y Venezuela– se convirtieron en *sucursales* de las políticas de inteligencia diseñadas para el control operativo y estratégico de Washington en la región.

En ese sentido, los expertos en Washington no descartan a corto plazo un “*11-S latinoamericano*”, un atentado terrorista demoledor en América Latina, que termine por ensamblar (como sucedió en Europa con el 11-M español y los de julio en Londres) un *plan “contraterrorista” latinoamericano* suscrito por todos los gobiernos de la región. El que “no descarten a corto plazo”, más bien quiere decir que son esas agencias norteamericanas arriba citadas quienes lo estarían diseñando.

En este revoltijo, más propio de un guionista de Hollywood que de “expertos en inteligencia”, nuestro país hace –una vez más– el papel de bobo de la película. Y esto con mucha benevolencia.... Hugo Olazar de

Clarín, recoge en este sentido las declaraciones de Castiglioni: “Ellos dicen que quieren irradiar un proceso de estabilidad desde Paraguay y nosotros estamos de acuerdo en construir una nación y un continente más seguro a partir de un Paraguay más seguro si EEUU colabora con nosotros”. Para bobadas basta este ejemplo.

Es en este marco que el Secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, realizó una visita al presidente paraguayo Nicanor Duarte a los efectos de “ratificar el compromiso en la lucha contra el terrorismo”. Esto es, esa visita debe inscribirse en el marco más amplio de lo apuntado anteriormente. Visita que –como sabemos– estuvo adecuadamente precedida por la aprobación parlamentaria a la presencia de tropas norteamericanas en nuestro país en 13 misiones hasta fines del 2006.

De aquí Rumsfeld fue al Perú, donde está el presidente latinoamericano más rechazado por su pueblo (sólo un 8% lo considera bueno o aceptable), el Sr. Toledo. Ahí volvieron a poner el mismo disco, la misma cantinela de vodevil; que Cuba y Venezuela desestabilizan la región. Esas declaraciones fueron casi simultáneas a la primera promoción de 1.600 médicos latinoamericanos graduados en Cuba. ¡Notable forma de desestabilizar la del comandante Fidel Castro, cuidando de la salud ajena!

La visita de Rumsfeld no fue para que Nicanor le pida una ampliación del cupo de azúcar orgánica o de la carne (presidente dicho sea de paso, que hace de gerente de marketing de AZPA y de la ARP), aunque no fue para eso, no perdió la oportunidad de pasar el sombrerito para seguir mendigando. La visita del Ministro de Defensa norteamericano fue para dejar en claro que el Paraguay es una ficha estratégica de los planes militares norteamericanos para el cono sur.

La discriminación a personas migrantes*

En toda estructura social, las diferencias se dirimen por las relaciones entre actores ubicados en determinadas posiciones. Las posiciones están dadas por la acumulación/desposesión de poder de cada uno de los actores. Poder que puede referirse a la posibilidad y disponibilidad tanto de capital cultural, político, de prestigio, de fuerza física, o económico, acumulado o disponible por los actores. Las relaciones entre actores diferentes pasan a ser, de este modo, relaciones de dominación o subordinación entre ellos. Tanto más exacerbado será este tipo de relaciones cuanto mayor sea la desigualdad entre los actores. Sólo en culturas igualitarias, en teoría, podría no hablarse de discriminación.

El concepto de multiculturalidad –muy en boga últimamente– encubre, así como el concepto de “diferencias” y el de “diversidad”¹, la desigualdad constitutiva de los actores que determina relaciones de marginación, exclusión, discriminación de unos –quienes disponen de poder– sobre otros, en este caso concreto, de migrantes sin poder en la sociedad de recepción.

¹ Esta misma temática, aplicada a contextos escolares, es discutida por Sinisi (2001).

Como todo producto cultural, la discriminación se cimenta en los principios de la personalidad autoritaria². Teóricamente, la segregación y la discriminación son resultado de la resolución de un conflicto territorial que se hace sobre la base de un acuerdo sobre fronteras. Una de las partes, más poderosa que la otra, tiene la facultad de dibujar fronteras que deja a la otra parte sólo con ciertos enclaves dentro de un territorio; esto es lo que típicamente ha ocurrido en el Paraguay con las etnias indígenas confinadas en “reservas”. Si a la parte más débil se la obliga a permanecer en las áreas prescritas, se habla de segregación. Una forma menos completa de segregación, no aísla geográficamente a los miembros del grupo más débil, pero le exige usar servicios diferentes (no entrar a ciertos restaurantes o clubes o escuelas). La función social de cualquier forma de segregación es reducir la capacidad del grupo de los actores más débiles de competir con el más fuerte.

La discriminación intenta limitar la competencia, en los ejes discriminantes³, de manera diferente. En su expresión más virulenta, los miembros de un grupo determinado están completamente excluidos de cierto tipo de empleos, establecimientos educacionales, de ciertas organizaciones o clubes. Las formas más comunes de discriminación son aquellas en que a las personas miembros de los grupos se les imponen exigencias diferentes y más fuertes para acceder a posiciones ocupadas por miembros de los grupos con más poder.

La construcción social de la discriminación al migrante

Así pues, la discriminación parte de la construcción de una personalidad autoritaria, que se gestó históricamente. Este tipo de personalidad, perpetuada por los procesos de socialización primaria, dio origen a rasgos culturales que caracterizan el ethos del paraguayo.

Sus manifestaciones más conspicuas son: el patriarcado, el machismo, la incapacidad de manejar subjetivamente las diferencias, la discrimi-

² Exhaustivamente analizada por diversos autores clásicos en la temática, especialmente Adorno (1950) y Allport (1954).

³ Que pueden estar referidos a la dimensión étnica, de género, de edad, de nacionalidad, de idioma, de clase social u otros.

nación hacia los grupos más débiles, el fanatismo y la intolerancia religiosa.

Como toda cultura, la paraguaya (si es posible hablar de “una” cultura en el país) se edificó alrededor de la figura del varón criollo, modelado en la adversidad, en lucha permanente contra elementos hostiles, defensor de su patrimonio individual (a lo sumo, familiar), creyente en un ser superior, con un reducido pero sólido grupo de convicciones a las que se aferra.

El migrante, con características étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas diferentes, planteó a ese arquetipo cultural no pocas contradicciones. A partir de la década de los años setenta, el país empieza a recibir importantes contingentes de migrantes que cuestionan el modelo de sociedad tradicional⁴ antes descrito. Paraguay, que ya lo era, es aún mucho más multicultural a partir de entonces y, en consecuencia, la discriminación hacia el migrante extranjero y hacia el migrante interno se vuelve mucho más visible.

La dirección social de la discriminación

No todos los migrantes, sin embargo, son sujetos de discriminación. De todos los ejes sobre los que habitualmente se mueve la discriminación, el más determinante resulta ser el de la clase social: se discrimina al *pobre* y, por extensión, a todo aquel migrante que “porta” los atributos del pobre. La paraguaya es una sociedad estructurada y dominada —en muchas ocasiones despóticamente— por los que tienen poder económico, poder político, estatus y prestigio social. Los “valores” giran alrededor de los modelos con estos atributos.

A su vez, son valorados y admitidos todos aquellos medios que conducen al logro de estos poderes, incluyendo la corrupción, subvalorándose los mecanismos tradicionales de movilidad social. De hecho, la permeabilidad entre clases sociales es escasa si se utilizan aquellos mecanismos tradicionales (educación, trabajo honesto, méritos o cualidades propias del individuo). Los medios de comunicación masivos han

⁴ Sobre este aspecto consultar a Merino y Muñoz (1995).

acentuado este esquema, agregando a lo anterior la exhibición de pautas de consumo suntuario.

Considerando ahora la constitución de los flujos migratorios predominantes en el país, se puede avanzar en la identificación de los migrantes discriminados.

Existen tres flujos clásicos. Los referidos a la migración interna, los de inmigración de nacionales extranjeros y la emigración. En todos ellos es posible identificar prácticas discriminatorias contra los y las migrantes.

La migración interna desde hace ya dos períodos censales⁵ ha estado principalmente constituida por campesinos y, más recientemente, por indígenas. La discriminación hacia ellos es doble.

Por un lado, se da una discriminación que podría definirse como estructural, en el sentido de que el Estado no cuenta ni con una legislación ni con una institucionalidad ni con recursos previstos para la atención de un flujo que está determinado abrumadoramente por factores de expulsión.

La discriminación se expresa hacia estas personas bajo la forma de confinamiento residencial (en tugurios más que en barrios de la periferia urbana), laboral (forzados al desempleo o a su inserción en los peldaños más bajos de la estructura del mercado de trabajo), bajo la forma de desigualdad de acceso a los servicios básicos, tanto de salud como de educación, vivienda o seguridad social, o bajo la forma de invalidez civil, por la dificultad de disponer de los documentos mínimos de identidad o de otras formas de acreditación. La inseguridad jurídica hacia ellos es otra forma de expresión de la discriminación, ya que los aparatos de seguridad y justicia se diseñan específicamente para el efectivo control de individuos sospechosos simplemente por “portación de rostro”.

Por otro lado, se da una discriminación social, dadas las características personales o familiares de estos migrantes: su forma de vestir, el uso del castellano, sus habilidades intelectuales y otros rasgos hacen de ellos y ellas sectores marginados del acceso a determinados bienes y servicios.

⁵ Consultar datos proveídos por la DGECC (1994 y 2004).

Las corrientes inmigratorias se intensificaron a partir de la década de los setenta, a diferencia de las de principio de siglo, que fueron mayoritariamente de ultramar. Éstas están conformadas por migrantes intra-regionales. Entre ellas, la de los brasileños es dominante. No obstante, las hay desde Argentina, Perú, Bolivia y algunas de ultramar; las del Cercano Oriente y la de países asiáticos.

Como se dijo más arriba, las manifestaciones de discriminación hacia estos migrantes no se da de manera importante por su origen nacional, sino por su posición de clase. Un trabajo reciente (MRE, 2003), mostró así que las comunidades nacionales más expuestas a acciones de discriminación fueron la boliviana y la peruana⁶. Esta migración, altamente estratificada, está constituida, por una parte, por empresarios y profesionales, y, por otra, por cuentapropistas o desocupados. Es hacia ellos que se dirigen las prácticas discriminatorias.

La discriminación puede provenir tanto de las autoridades como de la sociedad en general. En el primer caso, los migrantes más expuestos son aquellos que se encuentran en situación irregular⁷. Diversos testimonios recogidos en trabajos de campo en el país muestran la vigencia de prácticas discriminatorias⁸. Si bien los abusos de autoridad son práctica común en el país, lo son en particular para los migrantes y más en específico aún para aquellos que están en situación irregular.

⁶ Ver en particular CIADEL, 2002.

⁷ “El problema relacionado con la migración en el Paraguay no se centra solamente en la migración interna. Según el último censo de extranjeros realizado (1998), residen legalmente en el país unos 213.000 extranjeros, y una cantidad similar que reside en forma ilegal; es decir, los inmigrantes serían más de 400.000 personas que configuran una situación más grave aún, porque ello implica una diferencia cultural que dificulta de manera más severa la adaptación social y encierra muchos otros aspectos que no son visualizados fácilmente por la clandestinidad en que se desenvuelven muchos de ellos” (Salinas, 2004).

⁸ “Se dan casos concretos de discriminación ‘por portación de cara’, esto es, por los rasgos físicos de los migrantes, lo cual constituye una flagrante violación a los tratados y acuerdos internacionales firmados o comprometidos por el país. Un testimonio retrata esta situación: En este aspecto somos discriminados por la policía que nos persigue, por ejemplo cuando llega un boliviano a la terminal de ómnibus, inmediatamente nos identifican porque somos morenitos y ya nos llevan para sacar coima con el tema de los documentos”.

La discriminación desde la sociedad ha sido también documentada (Salinas, 2004) en el caso de instituciones escolares hacia alumnos extranjeros⁹. Puede presumirse que tales prácticas no se limitan al ámbito escolar.

No es muy diferente lo que ocurre con los paraguayos en el exterior. Este flujo emigratorio es también estratificado. Una pequeña porción de nacionales altamente capacitados, profesionales, empresarios, emigra, pero el contingente mayoritario está constituido por mujeres y hombres, preferentemente jóvenes con muy bajo nivel educacional, y en su mayoría provenientes de zonas rurales del país. Es en este flujo donde se encuentra la mayor cantidad de personas que no ha cumplido con los requisitos de la legalidad migratoria del país de destino y, en consecuencia, es la que está más expuesta a todo tipo de problemas.

En el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores ya citado, se expresa que los problemas a los que más frecuentemente están expuestas las personas migrantes paraguayas en el exterior son los siguientes:

- Problemas de *documentación*. Como se mencionó, una muy alta proporción de paraguayos y paraguayas que residen en el exterior están indocumentados en lo referente a papeles de residencia legal. Esto se debe en especial, por un lado, a la temporalidad de algunos de los flujos, sobre todo a países vecinos a los que se realizan desplazamientos de relativamente corta duración; por el otro, al alto costo de los trámites y a la excesiva burocracia y duración de los procedimientos que normalmente supone la obtención de los documentos.
- Problemas vinculados a la *informalidad laboral*. La falta de la documentación legal de residencia favorece la informalidad en las condiciones laborales de los empleos a que los/las connacionales tienen acceso. Esta informalidad incluye salarios menores para el

⁹ Los aspectos en los que se expresa la discriminación en las escuelas, caso documentado por Salinas, son: i). comunicación (no habla bien guaraní-no habla bien español), ii). falta de respeto, iii). por ser diferente, iv). rechazo (me llaman: bolí, coleano, cholita, indio, curepa, intruso, no me quieren, soy negro, me imitan cuando hablo, se burlan, dicen que somos los peores, no aceptan mi cultura, sienten odio, hablan mal de Brasil).

mismo empleo, comparados con los que se pagan a trabajadores/as nativos/as, o más horas de trabajo que las del resto de trabajadores/as por una misma remuneración. La informalidad laboral se expresa también en la variada gama de ocupaciones por cuenta propia que los y las migrantes paraguayos/as en el extranjero desarrollan.

- Problemas referidos a la *inseguridad en el tránsito interno*. La falta de documentos expone a las personas migrantes también a diferentes tipos de molestias y percances para el libre tránsito dentro del país de recepción, cuando se encuentran con controles policiales.
- Problemas vinculados a la *discriminación* propiamente tal. Es frecuente la constatación de diferentes formas de discriminación por razones étnicas, culturales (manejo del castellano) y condición socioeconómica a las que están expuestos paraguayas y paraguayos en el exterior, aunque esta discriminación puede hacerse extensiva a migrantes de otras nacionalidades.

Los efectos de la discriminación sobre los individuos y grupos migrantes

Por lo general, la persona migrante tiene diferencias en su formación académica, en sus costumbres, en su cultura, con respecto a los integrantes de la sociedad del país receptor. De ahí que su inserción se haga difícil en todos los campos, motivo por el cual es sometida a la explotación laboral y a la discriminación de todo tipo. Esta situación es más grave aún en niños, jóvenes y mujeres, que se convierten en presas fáciles de la prostitución y otras situaciones no deseadas. Los migrantes, en estas condiciones, son verdaderos excluidos sociales en todos sus ambientes y están en permanente riesgo de ver afectada su propia dignidad como personas.

La amenaza de pérdida de su dignidad humana se agrega a los problemas que acarreo la propia decisión de migrar, normalmente vinculados a penurias económicas y que ya habían planteado las consecuencias propias del desarraigo y de la desintegración familiar. El aislamiento y la automarginación del migrante es una situación frecuente entre ellos, especialmente en casos en que la sociedad receptora está geográfica y

culturalmente muy alejada de la del migrante. En casos extremos, estas vicisitudes llegan hasta la misma psicopatía (Couto, 1995).

De manera general puede concluirse en el caso paraguayo que ciertos grupos de inmigrantes no han tenido problemas de integración y asimilación a la sociedad nacional. Estos son migrantes que han venido normalmente con capital económico o cultural. Los otros y las otras, que inmigraron para escapar a una situación de origen de precariedad, deben enfrentarse a los problemas que plantea una sociedad paraguaya receptora que, además de ser profundamente conservadora, está fuertemente estratificada por los recursos y símbolos del poder de clase. Estas personas la han pasado y la siguen pasando mal.

Los paraguayos y paraguayas que migran, tanto dentro del país como los/las que se dirigen al extranjero, en su mayoría, deben sortear los mismos obstáculos que los/las migrantes pobres de otras nacionalidades enfrentan en el país.

La multiculturalidad, la coexistencia de diferentes grupos culturales, no es una coexistencia pacífica. Por el contrario, está marcada por la desigualdad, la marginación, la exclusión y la discriminación.

Referencias bibliográficas

- Adorno, T.W. *The authoritarian personality*. New York, Harper, 1950.
- Allport, G.W. *The nature of prejudice*. Cambridge, Mass. Addison-Wesley, 1954.
- CIADEL Diagnóstico sobre comunidades migrantes al Paraguay. El caso de los bolivianos y peruanos. Asunción, Centro Iteño de Apoyo al Desarrollo Local, Ministerio de Relaciones Exteriores/OIM/UNFPA, 2002.
- Couto de Mármora, Diana. *El paciente psiquiátrico migrante. La dimensión etno psiquiátrica de la atención*. Buenos Aires, 1995.
- DGEEC. Censo 1992 Paraguay. Censo Nacional de Población y Viviendas. Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos/Secretaría Técnica de Planificación. Asunción, 1994.
- DGEEC. Paraguay. Resultados Finales. Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 - Total País. Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos/Secretaría Técnica de Planificación/BID. Asunción, 2004.

- Merino Fernández, J. y A. Muñoz Sedano. “Ejes de debate y propuesta de acción para una pedagogía intercultural”. Revista de Educación. Ministerio de Educación y Ciencia. España, 1995.
- MRE: Lineamientos para la formulación de una política migratoria para el Paraguay. Ministerio de Relaciones Exteriores/OIM/UNFPA. Asunción, 2003.
- Salinas, Alcides: Inserción de alumnos y alumnas inmigrantes al sistema educativo en el Paraguay. Un desafío para la educación. San Estanislao, Tesis de Grado, UTIC, 2004.
- Sinisi, Liliana: “La relación nosotros-otros en espacios escolares ‘multiculturales’. Estigma, estereotipo y racialización”. En: Neufeld, M.R. y L.A. Thisted: De eso no se habla. Los usos de la diversidad sociocultural en la escuela. Buenos Aires, EUDEBA, 2001.

El Estado nacional paraguayo, ¿un anacronismo?*

Las cosas pasan de moda. Ropas, comidas, estilos corporales, ritmos, hacen su aparición, duran un tiempo y al rato ya pocos se acuerdan de ellos. Son en cierta medida descartables. Una pajita para beber, una cucharita de plástico, uno las usa y las tira. La diferencia es que las modas duran un poco más, pero siguen siendo descartables.

Aunque a uno lo perturbe un poco, parece que hay cosas que uno las creía más o menos sólidas pero que en realidad –como aquella célebre frase atribuida a Carlos Marx– se terminan derritiendo en el aire. Una de ellas es la idea de nación. Sería algo así como la moda, pero con una duración un poco mayor. Durante un tiempo está de moda ser “nacional”, pero por lo visto hasta conceptos como éste terminan siendo descartables. Poco a poco empieza a entrar de moda ser “global” o sea, globalizado, o a ser “interdependiente”.

La cosa no sería grave si lo que se diluye es sólo la idea, o la palabra, lo que algunos intelectuales bienpensantes dicen en ciertos libros, diarios, radios o teles. El problema se plantea cuando aquello a lo cual hace referencia la idea de nación, en realidad, se está disolviendo. Tal parecería ser el caso paraguayo.

* Revista ACCIÓN N° 259 - Noviembre, 2005. CEPAG.

Las grandes corporaciones financieras, las multinacionales agroexportadoras y proveedoras de insumos agrícolas, las transnacionales petroleras, las poseedoras de patentes biotecnológicas, las corporaciones farmacéuticas, en fin, todas esas estrellas que forman la constelación de los “osos mayores”, tienen hoy la capacidad económica y el suficiente poder político para que ciertos estados nacionales agachen la cabeza y hagan la genuflexión ante sus intereses.

Para los responsables políticos formales¹ del país sin embargo, el supeditarse a los mandamientos de las transnacionales no es percibido como una genuflexión, en el discurso público ellos hablan de “modernización”, “flexibilización”, “liberalización” y términos afines del léxico neoliberal. En la práctica privada, ellos reciben comisiones, coimas, “reconocimientos pecuniarios” que –al engrosar sus cuentas corrientes– los vuelven a la vez defensores de la modernidad, traidores a su pueblo y desintegradores de la nación. Del Estado nacional. No obstante ellos son pre-modernos, de origen popular, y reivindican discursivamente la “paraguayidad”.

Quizás la más reciente y violenta expresión de esta entrega de lo nacional a los patrones de las multinacionales sea lo que está ocurriendo con la soja. La expansión del área de siembra de este cultivo, cuya casi totalidad está genéticamente modificado, produce varios atentados contra un patrimonio que lo creíamos nuestro. El más evidente es el traspaso de enormes extensiones territoriales a productores individuales extranjeros o grupos corporativos multinacionales. Estratégicamente ubicados en áreas de frontera y en tierras extraordinariamente ricas en biodiversidad, estos vastos territorios se rigen hoy por normas dictadas por sus patrones, el Estado nacional paraguay en ellos ya no existe. Son tierras “liberadas” por los empresarios privados.

Otra agresión a la autodeterminación, que es lo que define a un estado nacional, es la supeditación económica, que encierra no pocos absur-

¹ Es importante hacer la diferencia entre los que tienen el poder formal (el gobierno, las instituciones de fachada de estas democracias representativas) y los que tienen el poder real. Aquellos son simples títeres de éstos, que están normalmente ocultos y sólo muestran las uñas cuando sus intereses se ven –aunque tan sólo sean levemente– amenazados.

dos. El Paraguay necesita exportar, nos dicen, la soja produce buenas divisas, luego hay que expandir su cultivo. Lo que no se dice es que para exportarla es necesario importar del exterior una gran cantidad de insumos mucho más caros que lo que exportamos; los tractores, las corte y trilla, las máquinas fumigadoras, las semillas, los fertilizantes químicos, los agrotóxicos, el combustible utilizado por las máquinas, incluso la mano de obra (muchas de ellas es traída desde el Brasil). Todo lo que se paga por estos insumos sale al extranjero, incluso las ganancias de la mayoría de los sojeros que es depositada en entidades financieras extranjeras. Tal es así que la soja exportada casi no es paraguaya, lo que es nacional es la fertilidad del suelo, que es exportada como cualquier *commodity*, suelo que luego queda degradado. En este caso, el Estado nacional también es expoliado. Se depende cada vez más de otros para poder sobrevivir.

No menos importante es lo que se pierde en autonomía alimentaria. La frontera de la soja avanza en buena medida sobre tierras que estaban ocupadas por campesinos. Estos, al ser expulsados ya no cultivan, ya no producen sus propios alimentos e incluso producen menos alimentos para el mercado local, nacional. Con lo cual la demanda alimentaria pasa a depender de las importaciones (o del contrabando, en nuestro caso). La familia campesina, estando en los tugurios urbanos, ya no tiene seguridad de que hoy va a comer, el país pierde soberanía alimentaria. Por lo demás, todos empezamos a comer cosas de escaso valor nutritivo (fideos, panchos, hamburguesas, etc.). Menos comida, peor comida, y comida cada vez más, traída del exterior. Un pueblo sin su comida es un pueblo degradado.

Pero quizás la disolución más importante de lo nacional, de lo que define al país, es la destrucción de la identidad cultural, de “lo paraguayo”. Este proceso opera por vía de la destrucción física, moral y económica de los sectores mayoritarios de la población. Vendiendo o arrendando sus tierras a compradores extranjeros, el campesino debe abandonar el campo, dejándose al modelo productivo de una agricultura sin agricultores. Son miles las familias que durante estos últimos cinco años –año a año– se han sumado al éxodo rural-urbano por razón de la soja. Verdaderos condenados en su propia tierra, estos desplazados económi-

cos engrosan la legión de población “sobrante”, excedente, excluida. Es población que ha sido descartada por el modelo.

Al ser absorbido por el “estilo de vida” urbano, por la violencia, por la competencia individualista, por la comida chatarra, por la música chatarra, por el cambio de idioma, por el desarraigo, la cultura de ese pueblo migrante, de ese pueblo que ha debido refugiarse económicamente en cualquier parte, la cultura de ellos se pierde. Es la cultura propiamente paraguaya la que se *macdonaliza* y se *cocacoliza*. Va gradualmente dejando de existir. Y una nación sin cultura no es una nación.

Todo esto está siendo propiciado por esta nueva generación de stonistas que sucedieron a Stroessner. Personas intelectualmente vacuas, éticamente extraviadas y sobre todo anti patriotas. Patrioteras quizás, pero que arrojaron a la nación paraguaya al tacho de basura de la historia política contemporánea.

Han convertido al concepto de nación y a la nación misma en una cucharita de plástico descartable.

Hipótesis plausibles acerca de estrategias geopolíticas poco perceptibles*

Antes de hacer cualquier estudio o investigación que implique el manejo de datos, normalmente un investigador o estudioso elabora hipótesis, que son conjeturas acerca de lo que uno espera encontrar, o esquemas provisorios de interpretación de una realidad o de una situación. Las hipótesis son herramientas valiosas para alcanzar una interpretación menos incorrecta de la que existe sobre algo. El conocimiento no hubiera podido avanzar sin hipótesis. Las hipótesis deben ser verificadas, luego de lo cual se aceptan o se rechazan.

Pues bien; resulta que sobre el lamentable desenlace del secuestro de la Srta. Cecilia Cubas se ha dado sólo una versión, la versión oficial. A tenor de las inconsistencias, de las omisiones y de las comisiones en que los voceros oficiales han incurrido para tratar de explicar el caso, muchas personas han dudado –desde un comienzo– y con bastante fundamento, de la veracidad de la versión oficial. Sucede lo mismo que ocurrió con Copérnico: antes de él, era el sol el que giraba alrededor de la Tierra. Esa era la versión oficial. Este señor se permitió dudar de ella y terminó siendo cierto lo opuesto, es la Tierra la que gira alrededor del sol. Copérnico se basó en pistas, en señales, en supuestos y a partir de

* Revista NOVAPOLIS Edición N° 9 - Noviembre 2004/Febrero 2005. GEO.

éstos elaboró inicialmente la hipótesis científica que luego descartó un dogma.

De la misma manera, a la ciudadanía se le quiso instalar el dogma de la relación: Patria Libre-FARC-guerrilleros-narcos-secuestradores-delin-cuentes-campesinos. De este modo, los partidos de izquierda pasan a ser grupos armados, los campesinos y sus organizaciones plantan marihuana y son también guerrilleros y todos ellos, delincuentes. Como los narcos y los guerrilleros son un atentado contra la democracia (*american style*) éstos deben ser eliminados, perseguidos. Para ello se solicita ayuda a Colombia (¡nada menos que a Uribe y su régimen!), se militarizan los conflictos y se estigmatiza ideológicamente al campesinado y sus organizaciones.

Ante un dogma tan mediáticamente orquestado, cualquier persona sensata tiene derecho a dudar. ¿Son tan nítidas y claras las cosas como las pintan la Fiscalía y el Ejecutivo?

Acá parece que no es un gato el que está encerrado, sino un elefante. Examinemos, aunque sea ligeramente, los supuestos que nos inducen a formular una hipótesis diferente, creíble (plausible, atendible, admisible) o por lo menos igualmente verosímil que la que nos proporciona el dogma oficial.

- i. El país, por el desgobierno y la corrupción, se encuentra en un estado de franca bancarrota y su población empobreciéndose a una velocidad sin precedentes. Para salvar políticamente la situación, el gobierno apuesta por entregarse enteramente en los brazos del imperio norteamericano.
- ii. El nicanorismo suelta amarras del MERCOSUR con lo que se desvincula simultáneamente del eje progresista Caracas-Brasilia-Montevideo-Buenos Aires, países con los que EEUU tiene, o una fobia declarada (Venezuela), o un forzado respeto (Brasil), o miradas recelosas (Uruguay, Argentina). Paraguay queda así como único peón en la zona geográfica del tablero de ajedrez correspondiente al cono sur sudamericano.

- iii. EEUU necesita un “incondicional” en la sub-región (como lo fue y es Uribe en el norte sudamericano) en quien pueda “confiar” para ejercer el control militar de la zona y para –eventualmente– posicionar bases militares para el control de recursos naturales (soja, acuífero, otros) y para el control de posibles exabruptos “populistas radicales” al decir de James Hill, jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en Panamá¹.
- iv. EEUU necesita una excusa para avanzar en esta estrategia antes que sea demasiado tarde². En este contexto, expandir el Plan Colombia al cono sur sudamericano es para ellos un imperativo. Para ello, nada mejor que servirse de un gobierno económicamente desahuciado y sistémicamente corrupto como el paraguay. Pero hace falta encontrar una justificación, un motivo concreto, un desafío al orden “democrático” que pueda ser identificado, fotografiado, apresado, confeso, para de este modo justificar la expansión de dicho plan militar.
- v. La Central Intelligence Agency (CIA) es el organismo de gobierno norteamericano especializado en este tipo de cosas. Una innumerable cantidad de golpes de estado propiciados, secuestros, asesinatos, actos de terrorismo y varias otras proezas avalan el curriculum vitae de esta “Agencia”.
- vi. Se planea el secuestro de personalidades prominentes. Para ello se “contrata” a policías (que en nuestro país resultan baratos de com-

¹ En un informe presentado el 24 de marzo de 2004 ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, este militar refirió, además de las obligadas menciones al terrorismo y al narcotráfico como cuestiones tocantes a la “seguridad hemisférica” que: “Estas amenazas tradicionales se complementan ahora con una amenaza emergente mejor caracterizada como populismo radical, en el cual se socava el proceso democrático al reducir, en lugar de aumentar, los derechos individuales” Citado por Gilly, Adolfo: “Populismo radical: un sujeto político no identificado”. Extraído de Jim Cason y David Brooks (2004): “Descubre el Pentágono una nueva amenaza en América Latina: populismo radical”, La Jornada, México, 29 de marzo.

² Demasiado tarde puede ser, una excesiva subida del precio del petróleo, una devaluación aún mayor del dólar, una reacción venezolana cortando el suministro de petróleo a EEUU, un endurecimiento de las posiciones soberanas de Brasil con respecto a la Amazonia, una nueva rebelión argentina ante las pretensiones del FMI, el éxito del nuevo gobierno uruguayo en la reactivación productiva de su economía con el consiguiente efecto de demostración, y otros.

prar), probablemente a militares o ex-militares, a fiscales, a jueces, y a simpatizantes o militantes de izquierda más o menos pauperizados, ideológicamente extraviados y propensos a fantasías, quienes harán el trabajo sucio a cambio, por supuesto, de una parte del botín. Todo esto con anuencia de altos exponentes del poder político que, por fuerza, deben estar informados y consienten el procedimiento.

- vii. Se realiza el operativo y caen los peces chicos. Ellos son la mano visible del crimen. Pero resulta que esos peces chicos son de izquierda. ¡Resulta que esos pescaditos tienen “contactos” con las FARC, resulta que tienen sus bases en San Pedro, donde además hay muchas y muy combativas organizaciones campesinas, y en donde también hay muchas zonas liberadas del narcotráfico y hay hasta escuelas con los rostros pintados en las paredes de dos peligrosos terroristas como lo fueron el Dr. Francia y Ernesto Guevara!
- viii. Se hace entonces el mbaipy³ mediático, que es la parte conocida y ampliamente difundida del repugnante operativo.

Un hecho, un fenómeno social, un acontecimiento, normalmente comienza a ser interpretado cuando se responde a la pregunta: ¿quién sale ganando con él?

Respóndase usted mismo/a. El primer grupo beneficiado es el de los latifundistas: con los militares en los campos disminuirían las ocupaciones y el abigeato. El segundo gran grupo es el de los conservadores, que lamentablemente en el Paraguay es enorme y abarca un espectro que va desde la cúpula gubernamental, hasta el menos pintado de los opositores parlamentarios. Pero por sobre todo, ganan los estrategas de la geopolítica norteamericana.

Estas hipótesis configuran una interpretación tan creíble como la que la prensa ha venido difundiendo durante los últimos meses.

Pero no es sólo el apoyo económico lo que el nicanorismo necesita en estos momentos; necesita también contener la intranquilidad social producida por la pobreza. Ya lo había dicho James Wolfenson, exdirector

³ Polenta, menjunje en guaraní.

del Banco Mundial en Washington en 1993: “la pobreza es el principal problema de seguridad que afrontaremos en el futuro”.

Para el caso paraguayo, la única oposición real que hay al gobierno es la de los campesinos organizados. Es pues hacia ellos que debe dirigirse la atención de los organismos encargados de la “seguridad” interna y nacional. No es pues para nada casual que casi dos mil campesinos estén hoy imputados jurídicamente por alguna fiscalía, o que el ejército haya salido al campo a reprimir con violencia a las comunidades campesinas, o que locales de organizaciones campesinas hayan sido ocupados por las “fuerzas del orden”, o que cada tanto se tome prisioneros a campesinos.

El Plan Colombia se extiende hacia el sur; hizo su incursión en el Ecuador de Gutiérrez y en el Perú de Toledo. En Bolivia, Torales, Quispe y los dirigentes sindicales ya han sido directamente acusados de desestabilizadores y de recibir ayuda de Hugo Chávez. El Paraguay es la cuña para los demás países del cono sur.

Como parte del Plan Colombia, hay crecientes evidencias que se ha montado un nuevo “Operativo Cóndor”. De este parecer es, entre otros, Alexis Ponce, vocero de la Asociación Permanente de Derechos Humanos del Ecuador e integrante del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia. Ponce cita a un coronel del Comando Sur, cuya tesis apareció publicada en una revista militar especializada de Washington, según el cual “todos los grupos marginados económicamente en América Latina, como los piqueteros en Argentina, los cocaleros en Bolivia, los sin tierra del Brasil, los indígenas del Ecuador, los círculos bolivarianos de Venezuela y agrupaciones campesinas del Paraguay, son grupos altamente desestabilizadores que pueden ser arrastrados al terrorismo”⁴. Como el Operativo Cóndor de los años setenta, éste busca “sacar de circulación” con el método que sea, a activistas sociales y militantes de partidos progresistas. Esta práctica está siendo utilizada sistemáticamente en nuestros países.

⁴ Luis Iramain, Oscar Palacios y Demetrio Iramain (2005): “Otra vez el ‘Plan Cóndor’ en América Latina”, www.rebellion.org, 18 de enero.

La pesadilla del secuestro de la Srta. Cubas que ha compartido toda la ciudadanía, sería así —de acuerdo a este conjunto de hipótesis— un operativo montado para “probar” con hechos, que en el Paraguay hay “grupos altamente desestabilizadores” que justifican la intervención militar del ejército paraguayo, la asesoría de militares norteamericanos, la coordinación de las Fiscalías (colombiana y paraguaya) y el estrechamiento de vínculos entre los dos jefes del Ejecutivo.

De esto no es posible tener pruebas, pero de igual modo y hasta el momento, la Fiscalía de Latorre tampoco presentó ninguna para su versión, presentó sólo imágenes en la televisión.

Como hipótesis interpretativa de un hecho social, la que aquí se presenta puede ser rechazada una vez que se presenten evidencias en su contra. Lo embromado es que cada vez se presentan más evidencias que la sostienen.

Soja transgénica, Monsanto y Derechos Humanos en el Paraguay*

La densidad demográfica de la región Oriental del país (35 habitantes por km²), la situación de pobreza en que vive la población en general (48%) y en particular la población rural (76%), la notable concentración de la tierra (1,5% de los propietarios tienen 77% de las tierras), la ausencia de políticas públicas orientadas al campesinado y la corrupción imperante en las esferas administrativa, legislativa y judicial del gobierno, han confluído (entre varios otros factores) para convertir al Paraguay en el más agresivo paradigma de penetración de la Monsanto. Esto es, de imposición por parte de una multinacional, de sus intereses a costa de la violación de los más elementales derechos sociales, económicos, políticos y culturales de un país.

Hasta el ciclo agrícola 1999/2000, el Paraguay tenía una superficie sembrada de soja de aproximadamente un millón de has; cinco años después, esa superficie se duplicó y para el ciclo 2005/06 se prevén 2,5 millones de has. El total de has cultivadas en el país es de 7,5 millones. Esto significa que un tercio de toda la superficie cultivable del país será de soja.

* Observatorio de los Agronegocios, por una Agricultura Humana. Año 1. Edición 001 – Noviembre 2005, en <http://www.rallt.org/cultivos/soya/observatorio%20de%20los%20agronegocios.pdf>

La gran expansión del área sembrada del último quinquenio se debe a la introducción de la soja transgénica de Monsanto. Una expansión que se da al ritmo promedio de 250 mil has/año de las cuales al menos la mitad, eran tierras en las que previamente estaban asentadas familias campesinas con una producción diversificada de autoconsumo. A un promedio de 10 has por familia y 7 personas por familia, esto supone la expulsión de unas 90 mil personas/año de sus tierras. Estas familias se convierten en verdaderos refugiados económicos en los tugurios de los centros urbanos o migran al exterior en condiciones más que precarias.

Las semillas de soja (y hoy también de algodón) de Monsanto fueron introduciéndose al país de contrabando, esto es, burlando la legislación aduanera desde 1997. Dos años más tarde su siembra se masifica sin que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) haya aprobado el uso de las semillas¹.

Esta estrategia de infiltración clandestina de material genético por parte de la multinacional constituye un flagrante delito a la legislación nacional, que no ha sido sancionado por ningún ente gubernamental competente, de lo que se deduce que la Monsanto, filial Argentina² ha debido pagar “comisiones” (coimas) a altas autoridades del gobierno para instalarse en el país.

A partir de la cosecha 2004/5 Monsanto comenzó a percibir una contraprestación por uso de la tecnología RR de acuerdo a un contrato de otorgamiento de autorización suscrito con empresas operadoras de soja (agro exportadores).

De acuerdo a la propuesta de Monsanto que fue aprobada, Monsanto proveerá tecnologías de testeo para el cobro a los productores. El operador de soja cobraría al productor de soja RR una contraprestación a partir de 2004/5. Se cobraría contra entrega del grano en silos. Si el

¹ La inscripción de cuatro cultivares portadores del gen Roundup Ready (RR) en el Registro de Cultivares de la Dirección de Semillas del MAG se realizó recién en la campaña 2004/5, permitiendo el inicio de un proceso de legalización de su producción por medio del pago de regalías a las empresas propietarias de derecho de obtentor.

² Hasta el 2005 esta empresa no había abierto una filial en el Paraguay.

productor declara, la soja transgénica se le cobra y no se testea, o bien, el productor declara que no lo es y se realiza un testeo.

Si no es transgénica no se le cobra, pero en caso contrario el productor pagaría el costo del análisis, una multa y la contraprestación. El exportador de soja paga la contraprestación al momento de exportar a la firma Monsanto o a quien ésta designe. Los gremios aceptaron el acuerdo marco en su respuesta de fecha 8 de marzo de 2005³.

No son pocos los problemas que han empezado a enfrentar los productores con el pago de las regalías; el monto propuesto por Monsanto fue largamente cuestionado por los productores hasta llegarse a un acuerdo de aumento gradativo del porcentaje a abonar sobre el total de la producción, la intermediación de silos acopiadores entre el productor y las agroexportadoras ha complicado el pago, ya se han dado casos de productores que no plantaron soja transgénica y el silo acopiador intentó cobrar el 100% de la tasa como si fuera transgénica (contaminación),

3 La lista de las empresas agroexportadoras de soja instaladas en el Paraguay es la siguiente:

- | | |
|---|--|
| 1. ADM (Archer Daniels Midland Company), | 18. Agropecuaria Naranjal Ltda., |
| 2. Agro Comercial Industrial Naranjal S.A., | 18. Cooperativa de Producción Agropecuaria Pindo Ltda., |
| 3. Agro Guarani Agrícola S.A., | 19. Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios Jhechapyra Ltda., |
| 4. Agro Industrial Pikiry S.A., | 20. Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios Volendam Ltda., |
| 5. Agro Santa Rosa S.A.E.C.A., | 21. Cooperativa LA PAZ Agrícola Ltda., |
| 6. Agro Silo Santa Catalina S.A., | 22. Cooperativa Yguazu Agrícola Ltda., |
| 7. Agrofertel S.A., | 23. DEKALPAR S.A., |
| 8. Agroser S.A.E.C.A., | 24. LAR S.R.L., |
| 9. Agrotec S.A., | 25. Louis Dreyfus Paraguay S.A., |
| 10. Baelpa S.A.I.C., | 26. Ovetril S.A., |
| 11. Cargill Agropecuaria S.A.C.I., | 27. Repossi S.A., |
| 12. Contiparaguay S.A., | 28. Sociedad Agrícola Golondrina S.A., |
| 13. Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Ltda., | 29. Sociedad Cooperativa Agrícola Friesland Ltda., |
| 14. Cooperativa de Producción Agropecuaria e Industrial Raúl Peña Ltda., | 30. Sociedad Cooperativa Pirapó Agrícola Ltda. |
| 15. Cooperativa de Producción Agropecuaria e Industrial Unión Curupaty Ltda., | 31. Vetra S.A. |
| 16. Cooperativa de Producción Agropecuaria Integración de Colonias Naranjito Ltda., | |
| 17. Cooperativa de Producción | |

la imposibilidad de usar semillas para la próxima siembra es otro tema de preocupación para los productores por las probables acciones legales que la Monsanto iniciaría contra ellos.

Estos problemas que empiezan a insinuarse (téngase en cuenta que no hace todavía un año de la aprobación de la forma de cobro por Monsanto de las regalías) se agregan a otros que deben enfrentar los productores (dificultades de tránsito por rutas del estado brasileño de Paraná, en el uso del puerto de Paranaguá, aumento del costo del gasoil, conflicto con camioneros fleteros, sequía en el ciclo 2004/5, alto nivel de endeudamiento) y que pinta un escenario poco propicio a futuro para los mismos. Durante los últimos tres años de siembra de soja transgénica, una organización campesina del Departamento de Alto Paraná manifestó que no menos de 22 productores sojeros se han suicidado y son constantes los casos reportados de envenenamiento y enfermedades producidas por el glifosato, incluso en miembros de la familia de los sojeros.

Paralelamente a ello, la expansión de la soja transgénica sobre áreas –en algunos casos– densamente pobladas por campesinos o incluso pequeños pueblos rurales, el uso del glifosato ha producido innumerables casos de muertes, envenenamiento de personas y animales domésticos, destrucción de cultivos de autoconsumo y severa contaminación de cursos de agua.

Ante la resistencia campesina en varias comunidades, los sojeros, amparados por autoridades políticas, militares, policiales, de la Fiscalía, han contratado matones armados que ya produjeron la muerte de al menos seis campesinos en los últimos dos años.

Monsanto es responsable directo, junto a las agroexportadoras, de esta grave situación social por la que atraviesa el país. Los productores sojeros –en su mayoría extranjeros– no son conscientes de que tarde o temprano serán también ellos irradiados del escenario productivo rural, que –según otras experiencias ya verificadas en la región– deberán ceder sus tierras y su capital a las grandes multinacionales, que pretenden el control total de la cadena productiva de alimentos e insumos para producirlos.

Comida y petróleo. Otro escenario de la ofensiva neoliberal*

“En los países democráticos no se percibe la naturaleza violenta de la economía, mientras que en los países autoritarios lo que no se percibe es la naturaleza económica de la violencia”.

Bertold Brecht

El que dos millones de habitantes de un país con seis millones tengan hambre, o coman tarde, mal y nunca, representa un acto de notable violencia. Parecería que somos un país democrático –de acuerdo a Brecht– ya que pocos perciben la naturaleza violenta de la economía al excluir a tanta gente de un derecho tan básico como el del acceso al alimento. Sin embargo, también somos un país autoritario, ya que pocos perciben que el origen de la inseguridad, de la violencia de los militares en el campo, o de la Fiscalía criminalizando a activistas sociales, o sea, la violencia que impera en el país, es de naturaleza económica.

Querer comer, dentro de pocos años, puede llegar a ser el motivo principal de la represión y los encarcelamientos. Quien no tenga dinero para comprar algo de comer, robará la comida, el que roba es sujeto de penalidades. Diría más, querer comer es ya hoy motivo de aprehensión, desalojos y represión para una parte importante de la sociedad paraguaya, el campesinado.

Comento en este artículo un trabajo de Norman Church¹ acerca de la relación que existe entre la producción y el precio del petróleo (y sus

¹ Church, Norman (2005): Energía, transporte y sistema alimentario, From the Wilderness (www.rebellion.org. 21/04/05).

* Sin fuente.

derivados) y el gas, sobre la forma cómo hoy nos abastecemos de alimentos. La tesis del autor es que durante los próximos años (hasta 2020, pero empezando en 2010) el actual sistema alimentario se cae, como resultado del “pico del petróleo”² y la consecuente alza de los precios de sus derivados.

En principio, se trata de un problema tan obvio que la mayoría de la gente no lo percibe en toda su magnitud. Se alcanza a apreciar apenas sus efectos más inmediatos.

Es lo que ocurrió con la última suba del gasoil; pasó de Gs. 3.300 a Gs. 3.800 el litro. Inmediatamente subió el pasaje (transporte) y en consecuencia el flete, los panificados, los lácteos, los alimentos en su conjunto. Lo que se aprecia es cómo impacta la suba de los combustibles sobre la “canasta familiar” o sobre el Índice de Precios al Consumidor, IPC. Esto es lo que se ve, sin embargo, el problema es mucho mayor.

El profesor Dale Allen Pfeiffer³ lo expresa de la siguiente manera. *“El fin de esta década podría sufrir sin alternativa una espiral ascendente de los precios de los alimentos. Y la próxima década podría padecer una hambruna masiva a nivel global tal como jamás ha afectado a la raza humana”*.

El hecho es el siguiente; el sistema alimentario depende del petróleo crudo barato. Virtualmente todos los procesos en el sistema alimentario moderno dependen ahora de este recurso limitado que se acerca a su fase de agotamiento. Dice Church: *“vastas cantidades de petróleo y gas son utilizadas como materias primas y energía en la producción de fer-*

² Se conoce con este nombre el momento en que las reservas del combustible fósil no serán suficientes para abastecer la demanda mundial. Los países exportadores, a partir del pico, empezarán a bombear menos barriles diarios que los que solicita la demanda.

³ Pfeiffer, D. A. (2005): Comemos combustibles fósiles, From the Wilderness (www.rebellion.org.02/05/05).

tilizantes⁴ y pesticidas, y como energía barata y fácilmente disponible en todas las etapas de la producción de alimentos: desde la siembra, la irrigación, la nutrición y la cosecha, hasta el procesamiento, la distribución y el embalaje⁵. Además, los combustibles fósiles son esenciales en la construcción y la reparación de los equipos y de la infraestructura requeridos para facilitar esta industria, incluyendo la maquinaria agrícola, las instalaciones de procesamiento, almacenamiento, barcos, camiones y carreteras. El sistema industrial de suministro de alimentos es uno de los mayores consumidores de combustibles fósiles y uno de los mayores productores de gases invernadero”.

En resumen dice nuestro autor, *“el moderno milagro agrícola comercial que nos alimenta a todos, y a gran parte del resto del mundo, depende por entero del flujo, el procesamiento y la distribución del petróleo, y la tecnología es crítica para mantener ese flujo”.*

Por el momento, en el Paraguay este fenómeno se manifiesta con el alza del precio de los combustibles y su traslado a los costos de los alimentos. Resulta obvio que, por cada aumento de un punto porcentual de suba del IPC, una buena cantidad de gente deja de comprar algo de alimento o cambia a un sucedáneo más barato, o ingresa a la categoría de pobre con hambre. Hace pocos días la prensa local transcribía una noticia de los supermercadistas en la que éstos manifestaban que al hacer sus compras, la gente busca ahora *“lo más barato”*, dejando de

⁴ Pfeiffer menciona; “para dar al lector una idea de la intensidad energética de la agricultura moderna, la producción de un kilogramo de nitrógeno para fertilizantes requiere la energía equivalente de entre 1,3 a 1,8 litros de combustible diesel. Según The Fertilizer Institute (<http://www.tfi.org>), desde el 30 de junio de 2001 al 30 de junio de 2002, Estados Unidos utilizó 12.009.300 toneladas cortas de fertilizante de nitrógeno. Utilizando la cifra baja de 1,4 litros de equivalente de diesel por kilogramo de nitrógeno, esto equivale al contenido energético de 15.300 millones de litros de combustible diesel, o 96.2 millones de barriles. Desde luego, se trata sólo de una comparación aproximada para ayudar a comprender los requerimientos energéticos de la agricultura moderna.

⁵ Según Pfeiffer, en Estados Unidos el consumo de energía agrícola se reparte como sigue: 31% para la producción de fertilizantes inorgánicos; 19% para la operación de maquinaria agrícola; 16% para transporte; 13% para irrigación; 8% para la crianza de ganado (sin incluir el alimento para ganado); 5% para secar la cosecha; 5% para la producción de pesticidas; 8% para usos varios. Los costes de energía para embalaje, refrigeración, transporte al comercio minorista y la cocina doméstica no han sido considerados en estas cifras.

comprar productos de una marca determinada a la que estaba acostumbrada. Esta es una señal de que la pobreza llega a comprimir el gasto en comida. Pero, ¿hasta cuánto ese gasto puede ser comprimido?

Al lector local le puede resultar algo exagerado decir, “*el sistema alimentario actual caerá*”. Sin embargo, supongamos el siguiente escenario. El gasoil va a Gs. 7.000 el litro (el barril del crudo hoy a U\$ 48 va a U\$ 100), el aceite de costar Gs. 5.500 el litro va a Gs. 11.000, el pan de Gs. 3.600 pasa a costar Gs. 7.000 el kilo y el azúcar de 2.600 va a 5.000. Mientras tanto, el salario no se reajusta y los precios agrícolas siguen en los niveles en que están ahora. ¿Cuántos paraguayos comerán menos o no comerán con esos precios y estos salarios? Esto no es apocalíptico, la Goldman Sachs, importante banco estadounidense de inversiones en el mundo, alertó sobre un inminente precio “paroxístico” de 105 dólares el barril de petróleo⁶. Esto está a las puertas. Sin embargo –y curiosamente– nadie habla de esto. Es más, no es sólo que no se habla, sino que al menos en lo que respecta al gobierno paraguayo, se hace exactamente lo contrario a lo que se debe hacer.

Lo que se está haciendo es supeditar todavía más la economía al petróleo. La principal exportación del país hoy es la soja. Un monocultivo devorador de petróleo por donde se lo mire, se exportan *commodities* y se importan alimentos. Se incorpora irresponsablemente el uso de semillas transgénicas en el agro paraguayo, se fumiga con potentes herbicidas y pesticidas, se aplican fertilizantes inorgánicos, se asfaltan rutas (en vez del pavimento rígido de cemento), no se electrifica el transporte. En fin, uno puede continuar la lista con muchos más ejempls.

Lo que se debe hacer, por lo menos en materia de alimentos, nos lo dicen los autores citados: usar la menor cantidad posible de derivados de petróleo y comercializar los alimentos a la menor distancia posible entre productor y consumidor. Este es el modelo viable, es lo que tendrá que hacerse en el futuro si queremos seguir comiendo.

⁶ Goldman Sachs, uno de los principales mercaderes globales en futuros de energía, publicó un impactante reporte sobre la fuerte demanda del petróleo y su abastecimiento restringido, lo cual ocasionaría un alza paroxística y la “compra masiva por los fondos especulativos” (Mark Tran, The Guardian, 1º de abril). Citado por Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada, (www.rebelion.org 06/04/05).

Resulta que una cosa es que se acabe el petróleo, hecho para el que falta todavía un buen tiempo. Otra cosa es que se tenga el dinero para comprarlo, sobre todo para países como el Paraguay que hasta ahora no lo produce. En efecto, para países pobres que no tienen petróleo el momento en que el petróleo se acaba es el momento en el que ya no se pueda pagar por él por sus altos precios. Y ese momento es el que está cerca.

Precisando, siempre habrá en el país quien pueda pagar un gasoil a un precio altísimo y el costo igualmente alto de los alimentos que lo acompañará. El punto es, ¿qué pasará con la gran mayoría que no podrá pagar esos precios?

Para una persona que se muere de hambre, o para un chico que muere de desnutrición, el petróleo se acabó ese día. Esa es la fecha que está cerca para una gran cantidad de paraguayos, paraguayas, paraguayitos y paraguayitas.

Es un contrasentido total desmontar la agricultura campesina, que es la única que podrá alimentar a la población cuando el petróleo entre en su pico. Por ahí pasa la solución, según Church y según Pfeffer. En palabras del primero: *“La prioridad debe ser el desarrollo de sistemas locales y regionales de alimentos, preferentemente sobre base orgánica, en los que un gran porcentaje de la demanda es satisfecho dentro de la localidad o la región. Este enfoque, combinado con el comercio justo, asegurará suministros seguros de alimentos, reducirá a un mínimo el consumo de combustible fósil y reducirá la vulnerabilidad asociada con una dependencia de exportaciones de alimentos (así como de las importaciones). La localización del sistema alimentario requeriría diversificación, investigación y apoyo importantes que hasta ahora no han tenido lugar. Pero es factible y tenemos pocas alternativas”*.

Enrique Ortiz Flores, afirma: *“La estrategia fundamental es sacar a los pobres de la economía de subsistencia en la que son sujetos activos para convertirlos en sujetos pasivos de la economía de mercado. Eliminarlos como productores para pasarlos a ser clientes consumidores y empleados, o ‘dependientes’ en el mejor de los casos, de las empresas*

transnacionales”⁷. Otro investigador, el urbanista suizo-mexicano Jean Robert, expresa aún de manera más lapidaria la situación: “*Los grandes negocios usan la bandera de la modernización para justificar renovaciones que transformen hasta a los más pobres en clientes compulsivos [...] destruyendo los instrumentos y tradiciones que permiten a la gente soportar la pobreza: convierten la pobreza en indigencia*”.

Queda así planteada una cuestión de máxima importancia para el futuro del país. ¿Seguiremos dependiendo de las importaciones de petróleo para poder comer, para poder exportar? ¿Seguiremos enajenando nuestra capacidad de alimentarnos para traspasarle esa capacidad a las empresas transnacionales?

⁷ En un informe que presentara a la Asamblea Mundial de Pobladores de la Coalición Internacional del Hábitat, México DF, 2001, enfrentada a la Conferencia Hábitat de la ONU y publicado por Coalición Hábitat Internacional, bajo el título *Políticas y estrategias habitacionales en un mundo en proceso de globalización*, México, 2001.

Las tropas norteamericanas y la geografía del saqueo.

América Latina, MERCOSUR y Paraguay en la mira^{*}

Introducción

Cuando los poderosos usan el recurso de la fuerza, muestran su debilidad. En el caso de los EEUU, que exhibe hoy de manera indecente su poder militar en América Latina, lo que está demostrando es la vulnerabilidad intrínseca del supuesto carácter imperial del que se jacta. Es un imperialismo basado en la efectividad de las armas, pero con un soporte cada vez más débil en su base económica.

Arrastrando un déficit fiscal monumental, así como un déficit de su balanza comercial igualmente gigantesco, la economía norteamericana durante la primera década del siglo está dando signos inequívocos de graves dificultades. No es sólo el peligro de la inflación el que la acecha, propiciada por la inminente devaluación del dólar, sino y principalmente, la probabilidad de un *crack* financiero de proporciones. La insuficiencia de sus recursos estratégicos para la producción y el consumo agrega un condimento central a la creciente agresividad mostrada por el Pentágono en su política hacia América Latina.

En la selección de lecturas que Santiago Millán presenta en este compendio, podrá encontrarse suficiente información sobre las verdades que se esconden detrás de la “lucha contra el narcotráfico y el terroris-

* Millán, Santiago, 2005. Las tropas norteamericanas y la geografía del saqueo. América Latina. MERCOSUR y Paraguay en la mira. Asunción: BASE-IS.

mo” con la que los “halcones” del gobierno norteamericano pretenden camuflar el saqueo de nuestras riquezas continentales. Sin embargo, poco se escribió aún sobre la perentoria necesidad del capitalismo norteamericano de hacer un “ajuste espacio-temporal”, ajuste que busca continuar oxigenando al sector financiero, hegemónico, del capitalismo. La idea es de David Harvey, quien sostiene que el capitalismo hoy en día es incapaz de *acumular a través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable*, lo cual *ha sido acompañado por crecientes intentos de acumular mediante la desposesión*”.

En su esencia, el ajuste espacio-temporal asume que la sobreacumulación en un determinado territorio (en este caso, EEUU, pero también en otros países de capitalismo avanzado) genera un excedente de trabajo (produciendo un creciente desempleo) y un excedente de capital (que se expresa ya sea con sobreabundancia de mercancías que no pueden venderse sin pérdidas, ya sea como capacidad productiva desaprovechada, ya sea como excedentes de capital-dinero que no tienen oportunidades de inversión productiva rentable, lo cual es gravísimo para el sistema financiero). O sea, sobra trabajo, sobran mercancías y sobra dinero.

En estas circunstancias (y nos atenemos ahora sólo a) los excedentes de capital, pueden ser absorbidos por un desplazamiento temporal a través de inversiones de capital en proyectos de largo plazo (piénsese en proyectos como el PPP o el IIRSA), que lo que hacen es diferir para el futuro la entrada en circulación de esos excedentes actuales de capital. O pueden ser absorbidos por desplazamientos espaciales, a través de la apertura de nuevos mercados (caso ALCA o TLC bilaterales), de nuevas capacidades productivas (por ejemplo las generadas por la biotecnología con los transgénicos por citar sólo un caso) y nuevas posibilidades de recursos (agua o la Amazonia en Sudamérica) y de trabajo en otros lugares (mano de obra barata de nuestros países).

Harvey agrega otro elemento; cuando los desplazamientos temporales y espaciales se combinan, el capital fijo inmovilizado en el ambiente construido (piénsese en las hidrovías, terminales portuarias y aeroportuarias, ferrocarriles, enlaces con fibra óptica, previstas en el IIRSA) es particularmente importante. El capital fijo así inmovilizado brinda la infraestructura física necesaria para que la producción y el consumo

se realicen en el espacio y en el tiempo. Agrega el autor que éste no es un sector menor de la economía capitalista y permite, además, absorber grandes cantidades de capital y trabajo, *particularmente en condiciones de rápida expansión e intensificación geográfica (cursivas nuestras) como las que hoy día presenta el imperialismo norteamericano.*

Y ahora lo central: la fase actual del capitalismo tiene la hegemonía del capital financiero; pues bien, esta reasignación de los excedentes de capital hacia estas inversiones “requiere de la mediación de las instituciones financieras y/o estatales capaces de generar crédito”. En condiciones históricas como las actuales, la expansión norteamericana sobre América Latina es –para ellos– una estrategia de salvataje del sector hegemónico del capitalismo.

Añádase a lo anterior que –siempre según Harvey– “actualmente la fuerte oposición por parte de los propietarios del capital a cualquier política de redistribución o de mejora social interna en EEUU no deja otra opción que mirar al exterior para resolver sus dificultades económicas”. De esta forma, sigue diciendo el autor: “una alianza non sancta entre los poderes estatales (los halcones de Bush) y los aspectos depredadores del capital financiero forman la punta de lanza de un «capitalismo de rapiña» dedicado a la apropiación y devaluación de activos, más que a su construcción a través de inversiones productivas”. Es lo que se conoce como acumulación por desposesión.

No es pues sólo la apropiación por saqueo de recursos naturales que son preciosos y lo serán aún más en el futuro cercano (como el agua, el gas, el petróleo, la soja, la biodiversidad) lo que impulsa a EEUU a ir paulatinamente ocupando militarmente el territorio latinoamericano y caribeño, es también la angustia de un capital financiero que afronta una crisis de proporciones todavía desconocidas, pero grandes.

Harvey cita a Arendt mencionando que “para Gran Bretaña en el siglo XIX, las depresiones de los ’60 y ’70 dieron el impulso inicial de una nueva forma de imperialismo en la que la burguesía tomó conciencia de que (por primera vez, el pecado original del simple robo, que siglos antes había hecho posible la acumulación originaria de capital (Marx) y que había posibilitado toda acumulación posterior, debía repetirse una y

otra vez, so pena de que el motor de la acumulación súbitamente se detuviera». Esto nos retrotrae a las relaciones entre la búsqueda de ajustes espacio-temporales, los poderes estatales, la acumulación por desposesión y las formas de imperialismo contemporáneo” (115).

BASE Investigaciones Sociales agradece el oportuno apoyo de Santiago Millán Zúñiga, alumno avanzado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien con su visita de pasantía académica en nuestro Centro, ha entregado una valiosa colaboración para que, con su compilación, tengamos una noción más clara de qué hacen los militares norteamericanos en nuestro país.

Hay 995 años por delante*

Metas del milenio, ¿reducir la pobreza o reducir a los que empobrecen?

Demás está decir que los esfuerzos que se están desarrollando a nivel nacional, latinoamericano y mundial para alcanzar las metas que 191 países fijaron hace cinco años en la Cumbre del Milenio, son meritorios. Hay mucha gente, muchos recursos, mucho tiempo ocupado en eso. Y es loable. Lo que podría preguntarse es si esos esfuerzos son conducentes, si llevan a algo, o es un pasatiempo que distrae y que además está financiado.

Las Naciones Unidas –propiciadoras de esta iniciativa– es un organismo crecientemente impotente. Iniciativas de la mayor importancia en el pasado, como lo fue por citar sólo unos pocos casos, la conformación del proyecto sobre el Nuevo Orden Informativo Internacional de la UNESCO terminó boicoteado por los países que controlan la prensa. El ECOSOC¹, de gran trascendencia en su momento, es hoy poco menos que una oficina administrativa sin peso alguno. Lo mismo ocurrió con la UNCTAD, cuya importante función de sugerir a los gobiernos pro-

1 La Comisión Económica y Social de la Secretaría Ejecutiva de NN.UU.

* Sin fuente.

gramas de industrialización (entre otras cosas) terminó diluida también en una intrascendente oficina de consultas. La FAO está hoy recomendando el uso de transgénicos. La CEPAL es apenas una sombra amarilla de lo que fue. Es que cuando el “triángulo de las Azores” (Baby Bush, Blair y Aznar) decide invadir Irak independientemente de lo que piense Koffi Annan y su sistema, se decretó el descanso en paz de este loable producto, sucesor de la Liga de las Naciones que logró sobrevivir al siglo pasado. En suma, lo que piense, diga o hagan las Naciones Unidas le tiene sin cuidado al capitalismo, a las transnacionales y a los gobiernos del G-8.

Pero resulta que es el sistema capitalista, personalizado en el poder económico de las multinacionales con el respaldo político y militar de los países del G-8 (pero principalmente ya se sabe cuál), resulta que ése es el sistema de relaciones que produce pobres, como nunca antes. Si las Naciones Unidas y los bienpensantes militantes sociales de los DESCs² y de los ODM³ se entusiasmaron con un país en el que se ha erradicado la pobreza y el hambre, o con un país con educación básica universal, o con uno en el que la sustentabilidad del medio ambiente esté asegurada, si están entretenidos con esas misericordiosas utopías, entonces no están pensando ni actuando para enfocar y denunciar las causas de la inequidad de género, o de la notable desnutrición y mortalidad infantil, de la mortalidad materna, del VIH/SIDA y otras *lindezas* del capitalismo neoliberal. Se está gastando mucha pólvora en sólo chimangos.

Si hay muchos pobres en nuestros países y hay mucha hambre (objetivo 1), no podemos evitar pensar en la desocupación y en la inseguridad alimentaria. Desocupación que es producto de la escasa inversión productiva (sustituida por la especulativa), desalentada por las altas tasas de interés del capital financiero, la tentación de los *hedge funds*⁴, la liberalización del comercio exterior. Y si la gente no come, o come mal, es porque los alimentos están caros o ya no los producen. Encarecimiento y expulsión productiva explicada por las políticas “de desarrollo” im-

² Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

³ Objetivos del Milenio.

⁴ Partidas financieras de altos riesgos y rentabilidad.

puestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI y grupos multinacionales como la Monsanto o la Cargill o cualquiera de ellas.

Si la educación básica no es universal (objetivo 2), si es cada vez peor, es porque los niños y niñas no pueden asistir porque sus familias no tienen ingreso suficiente, y porque los maestros de la educación pública son mantenidos con sueldos de hambre por los “ajustes fiscales”, impuestos por el FMI, para que haya superávit fiscal de modo que el país pueda pagar puntualmente sus “compromisos” con los servicios de la deuda externa y los muchachos de la corrupción sigan siendo convenientemente aceitados para seguir apoyando gobiernos del tipo que tenemos.

Si las desigualdades de género (objetivo 3) siguen tan campantes y muchas de sus manifestaciones incluso se acentúan, se debe, entre otras cosas, al incentivo del machismo (exacerbado por los medios de comunicación *chatarra*), del sexo, la violencia, o por el alcoholismo producto de la desesperanza y la impotencia, tan cuidadosamente hilvanados por la ideología y la praxis neoliberal.

Si la mortalidad infantil (objetivo 4), la salud materna (objetivo 5) y la indiferencia hacia el combate al VIH/SIDA y otras enfermedades (objetivo 6) siguen siendo la regla, no es porque hay una ley natural que así lo dice, sino porque a los políticos locales les importa un rábano la situación de su pueblo, porque desfinancian el sistema de la salud pública, para que la salud se vaya privatizando, para seguir pagando deuda externa por reducción del gasto social, para que los pobres mueran en mayor cantidad y más pronto, y de esa manera tener menos presión y demanda social por derechos básicos.

Si se está haciendo un ecocidio⁵ (objetivo 7) es debido a la insensatez de un modelo de acumulación de riqueza basado en la agroexportación de materias primas, propiciado por las multinacionales productoras de insumos y las de la agroexportación, y respaldado por los intereses imperialistas que giran en torno al control de los recursos naturales de nuestros países, que no se limitan a la soja, sino que se extienden al agua,

⁵ Destrucción masiva e irreversible del medio ambiente.

la biodiversidad, metales preciosos y otros. Deforestación, agrotóxicos, transgénicos: herramientas de un proyecto de destrucción de la vida y las culturas. Cuando ya nuestra tierra no dé nada, comeremos maíz transgénico norteamericano, tomaremos alguna “cola”, comeremos hamburguesas y dependeremos cien por cien de las multinacionales.

Cuando el 14 de setiembre próximo se inicie en Nueva York la Cumbre M+5, probablemente la situación de nuestros pueblos sea peor que cinco años atrás. Ante estas circunstancias que mueven al pesimismo hay otras iniciativas derivadas de la Cumbre del 2000 que han echado a andar. La más importante de ellas es la Carta Social de las Américas impulsada principalmente por el presidente Hugo Chávez, que fue dada a conocer en abril de 2004 en el seno de la OEA⁶. Se trata de un documento internacional que, aún cuando sea firmado y ratificado por la mayoría de los países de la región, sin embargo, tiene escasas posibilidades de implementarse, dada la inspiración netamente neoliberal de las políticas económicas de todos los países de América Latina y el Caribe con excepción de Cuba y Venezuela.

Si no está entonces en la viabilidad del logro de los objetivos propuestos, ¿dónde radica el valor principal de la campaña por alcanzar las metas del milenio? Sin duda alguna en el impacto que se pueda lograr con la campaña emprendida para dar a conocer a los pobres, a los que realmente fueron objeto de las políticas neoliberales, sus derechos como seres humanos.

El actual gobierno paraguayo (y me temo que el próximo será lo mismo) no tiene en su agenda la erradicación de la pobreza. Tiene en agenda el traspaso de las últimas riquezas del país a las transnacionales y el aumento del caudal de las cuentas corrientes de sus personeros. La ignorancia en que sumieron a la población acerca de sus derechos como ciudadanos es un aliado para esta violenta usurpación. Si no se conoce, no se reclama.

⁶ En su Preámbulo, esta Carta toma en cuenta la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de Margarita y la Declaración de Nuevo León, que constituyen –siempre según el Preámbulo– los principales documentos en donde el foro hemisférico ha plasmado su planteamiento de erradicar la pobreza, la inequidad y la exclusión social en la región.

De ahí que la campaña “Sin Excusas” para lograr los ODM debe encarar con prioridad, no tanto una campaña de *lobby* con autoridades que son probadamente insensibles sobre lo que le ocurre al pueblo, sino una campaña de educación a la población, diciendo: *“usted tiene derecho a un empleo, a la alimentación, a la tierra, a la salud, a ser educado gratuitamente por el Estado. Todas estas cosas no son un regalo, son una obligación del Estado y si el Estado no las cumple no tenemos por qué respetarlo”*.

Esta cosa tan simple, nadie se la dijo a nuestro pueblo. Nadie le dijo que los beneficios de los recursos naturales que hay en nuestro territorio pertenecen a los que vivimos en él y no a los piratas que se sucedieron en los míseros gobiernos que hemos tenido durante décadas. Son cosas simples.

La campaña pues, no tiene excusas para obviar lo que es obvio. Sólo el reclamo popular hará que algún día volvamos a ser el país que alguna vez fuimos.

El movimiento campesino en el Paraguay.

Conflictos, planteamientos y desafíos*

Un contexto particularmente hostil

Si bien es cierto que supone la continuidad de las políticas económicas de los gobiernos anteriores, la asunción de Duarte Frutos a la presidencia de la república en agosto de 2003 ha marcado también el inicio de cambios en la gestión política interna, que ya puede ser evaluada como altamente negativa para el movimiento social en su conjunto y –por ser el de mayor importancia– para el campesino en particular.

Lo específico de la gestión de Duarte Frutos es la “legitimidad” de su gobierno para aplicar los mecanismos político-institucionales que permitieron la profundización de la política neoliberal. Esta “legitimidad” deriva de varios factores; su relativa poca vinculación anterior con el aparato del Partido Colorado (en el gobierno desde 1940) notablemente desprestigiado por la corrupción y el atraso en que ha sumido al país; el importante número de votos logrado en las elecciones del 2003 (34%) debido en parte al uso demagógico de reivindicaciones populares empleado durante su campaña; la composición de su gabinete con figuras no necesariamente provenientes del tradicional clientelismo colorado; las medidas populistas de la primera etapa de su mandato; el uso hasta

* Movimientos Sociales y expresión política 2005 Asunción: CEPAG, SPP, BASE-IS. Una versión similar a este trabajo fue publicado en el Observatorio Social de América Latina N° 16, revista editada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

el hartazgo de un marketing publicitario delicadamente esbozado y varios otros factores.

Con este impulso inicial (su nivel de aprobación por parte de la ciudadanía llegó a ubicarse por encima del 50%) la mona fue rápidamente despojándose de sus vestidos de seda. A tres meses de haber asumido, por primera vez en su historia el país firma un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, con las condicionalidades que ello implica; se suceden otras iniciativas tanto en el plano económico¹, como jurídico² y una bien planificada campaña de desprestigio de los movimientos sociales y partidos políticos progresistas. Sin una estrategia propia, el gobierno aparece en poco tiempo como una estructura orientada en lo sustantivo a precautelar los intereses de cuatro grupos de poder claramente delimitados. Por un lado, el que reúne los intereses del capital transnacional, grupo que incluye a las multinacionales financieras, del petróleo, de provisión de insumos para la agricultura de exportación, las importadoras y exportadoras y en lo institucional, a los organismos multilaterales de crédito y a la propia Embajada norteamericana³.

El segundo grupo, el de los latifundistas, no sólo ha mantenido el poder y prestigio de antaño sino que los ha multiplicado por efecto de la hipervalorización inmobiliaria rural que resultó —últimamente y entre otras cosas— de la expansión del área de siembra de la soja transgénica y de la apertura de nuevos mercados internacionales para la carne elaborada⁴.

El tercer grupo de poder es el de los narcos. Extensos territorios del país se encuentran hoy bajo control de facto de grupos dedicados a la

¹ Presentación de proyectos de ley tendientes a la liquidación de la banca pública de fomento, liberalización del mercado de derivados del petróleo, transferencia de las telecomunicaciones: transnacionales extranjeras y otras.

² Cambio casi completo de la composición de la Corte Suprema de Justicia, mantenimiento —a pesar de la masiva repulsa popular— del incondicional Fiscal General del Estado y otras.

³ Que opera en el país desembozadamente obligando al gobierno a decisiones internas que hablan un nivel de injerencia nunca antes conocido.

⁴ 10 de las 15 millones de hectáreas de la región Oriental del país, donde vive el 97% de la población está en manos de grandes terratenientes; 1,5 millones en manos de la agricultura campesina parcelar, 2 millones en producción por los sojeros y el resto repartido en tierras de usos varios.

producción de marihuana, vinculados a los que trafican insumos para la cocaína y producción terminada de la misma hacia mercados de ultramar. Este grupo, íntimamente vinculado a todas las esferas de poder⁵, completa sus ganancias con el muy próspero negocio del lavado de dinero. Se trata de un poder paralelo, subterráneo pero visible para toda la población (especialmente la rural), controla importantes recursos del poder político y administrativo del Estado.

Finalmente, opera el grupo de pseudo empresarios (empresarios) que forman parte del (o se benefician por parentesco o vínculos políticos con el) gobierno. Engrosan este grupo buena parte de los integrantes de la burocracia corrupta del régimen. Las fuentes principales de enriquecimiento de los integrantes de este grupo son las licitaciones amañadas de obras públicas, el contrabando, otras formas de evasiones, el desvío de fondos públicos y otras. Los intermediarios en la comercialización de productos agrícolas se ubican en su mayoría en este grupo.

El empresariado auténtico, debilitado, deambula sin rumbo principalmente entre los dos primeros grupos⁶. El empresariado agrícola, específicamente el mediano, dedicado a la soja, debe considerarse una prolongación de los grupos multinacionales que proveen insumos para la agricultura y de las agroexportadoras. Sus integrantes son en la práctica “trabajadores a domicilio” de aquellos. Todos estos grupos –que son los que realmente detentan el poder real más allá de la formalidad de las instituciones estatales– tienen intereses anti-campesinos. Se retoma este punto más adelante.

⁵ Recuérdese que el general Andrés Rodríguez, que hizo el golpe de Estado contra Stroessner en 1989, no podía salir del país hasta pocos meses antes del golpe (que lo blanqueó) por tener orden de captura de la INTERPOL, sindicado por la DEA por tráfico de drogas.

⁶ En los últimos años, tanto la Unión Industrial del Paraguay (UIP) como la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) han funcionado de hecho como apéndices de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que nuclea a los grandes latifundistas.

Movimientos campesinos

Se obvia en este trabajo la descripción histórica del movimiento campesino en el Paraguay, que ya ha sido abordado por diferentes autores⁷. En la actualidad, tal como lo apunta Palau (2002) “dos son las principales referencias organizativas campesinas: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y la Federación Nacional Campesina (FNC). La primera articula en su interior organizaciones de base, regionales y nacionales, con una estructura bastante laxa –propia de su estructura de coordinadora– y sus reivindicaciones centradas –en los últimos años– en la implementación de proyectos productivos y en demandas de tierra, salud y educación. La FNC, por su parte, también con presencia e inserción en gran parte del país, tiene una estructura bastante más rígida y sus reivindicaciones –en los últimos años– están principalmente centradas en el cultivo y la industrialización del algodón. Ambas, sin embargo, coinciden en la necesidad de la reforma agraria y son contrarias a las políticas neoliberales. Asimismo, utilizan los mismos métodos de lucha: movilizaciones, invasiones de tierra y cortes de rutas, constituyéndose esta última en la medida más fuerte de presión”. Una tercera organización de carácter nacional, la Organización Nacional Campesina (ONAC), más pequeña y de origen social-cristiano, ha estado aliada hasta el 2002 a la FNC, pero debido a diferencias internas se separa de ella y desde entonces participa del Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida, liderado por la MCNOC.

Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) es la cuarta organización de alcance nacional, integrada por mujeres campesinas e indígenas. Esta organización fue ganando protagonismo durante los últimos años en demanda principalmente de salud, educación y por su lucha contra los transgénicos y agrotóxicos.

Más recientemente, en abril de 2005, se conforma la Central Campesina, Indígena y Popular (CCIP) como un desprendimiento de la MCNOC (la cual queda sustancialmente debilitada). La ruptura se da como resultado de conflictos referidos al sistema de representación de las or-

⁷ Entre ellos Riquelme (2003), Fogel (2001), Fogel y Riquelme (2005), Bareiro (1997) y más recientemente en el exhaustivo y documentado libro de Piñeiro (2004).

ganizaciones constitutivas en la Mesa Directiva nacional. La CCIP no reúne, entre sus 23 organizaciones fundadoras, a ninguna de carácter nacional, aunque la federación de las mismas resulta sí ser de alcance nacional. Más allá de las diferencias ideológicas y divergencias tácticas acerca de las formas de encarar la lucha reivindicativa, la FNC y la MCNOC mantienen una breve pero ya histórica disputa marcada por la rivalidad entre dirigentes, fruto de la traumática escisión de la MCNOC en 1997. Estas discrepancias se acentuaron hasta el punto en que, basado principalmente en la importante base social de la FNC, en 1999, algunos de sus dirigentes más otros sectores sindicales y políticos, crean un partido político (Paraguay Pyahu Ra - PPPR) de inspiración marxista leninista para dejar clara la orientación política del movimiento. Por su parte, la MCNOC mantuvo hasta abril de 2005 la unidad a pesar de la diversidad de organizaciones y de partidos políticos de izquierda a los que se encuentran afiliados muchos de sus dirigentes. Convergencia Popular Socialista (CPS) y el Partido de los Trabajadores (PT) son los principales. Otros dirigentes manifiestan explícitamente su independencia con respecto a cualquier tipo de organización partidaria⁸.

Según la sugerente caracterización que hacen Grammond y Mackinlay (2005) sobre las matrices o tipos de relaciones sociales entre las organizaciones mexicanas, la FNC aparece adoptando una variante de organización social subordinada a un partido político, centrando “su estrategia de acción para mejorar la situación de sus representados desde la política, por lo que en este caso es difícil diferenciar la organización social del partido político”, con la diferencia con respecto a lo apuntado por esos autores –importante por cierto– que ese partido político no se plantea su participación en elecciones⁹. Esto quedó fehacientemente demostrado en la posición anti participacionista adoptada desde un principio por el PPPR en los tímidos intentos de unidad con propósitos

⁸ Los miembros fundadores de la CCIP aluden precisamente a esta supeditación de la organización hacia CPS para fundamentar su escisión de la MCNOC. Sin embargo, no está aún claro cómo se definirá la línea política de la Central; si por la primacía de los intereses gremiales o por la del Partido de los Trabajadores, uno de cuyos brazos gremiales (ASAGRAPA) pasó a formar parte de la CCIP.

⁹ Según dirigentes del PPPR, sin embargo, para las elecciones del 2003 ellos instaron a sus adherentes a votar en blanco como forma de manifestar un voto castigo, lo cual constituye –para ellos– una forma de participación eleccionaria.

eleccionarios que se insinuaron hacia fines del 2002 para encarar las elecciones nacionales del año siguiente.

La MCNOC, dado su carácter más pluralista y en alguna medida, polipartidista, adopta más claramente un tipo de relaciones o matriz de tipo social y política, aunque ciertas organizaciones que la componen (caso de ACADEI, CRAI y otras), dada su independencia con respecto de partido alguno “aceptan la tensión necesaria entre organización social y partido político, debido a que tienen objetivos, dinámicas de acción y reglas de funcionamiento distintos. La tensión se resuelve a través del establecimiento de programas políticos, acuerdos pactados y alianzas concretas” (op. cit.). Aquellas que responden de manera más clara a lineamientos político-partidarios (MCP, OLT, ASAGRAPA y otras) ya sea de CPS o del PT, tienden a compartir con la FNC la relativa supeditación de las demandas populares a los intereses del partido, adoptando en esta medida lo que los autores antes citados refieren como “corporativismo blando”. No obstante, debe reconocerse que en el caso de la MCNOC, la existencia de al menos dos partidos políticos y un importante grupo de independientes hace que aquella supeditación sea mucho más moderada y que ciertas decisiones deban ser negociadas y acordadas entre la dirigencia partidaria y la social.

La ONAC, que desde la separación en 1997 de la FNC y la MCNOC estaba adherida a la primera, es en realidad el brazo campesino de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) en el Paraguay, el brazo obrero está representado por la Central Nacional de Trabajadores (CNT) que desde el 2003 atraviesa una profunda –y aún irresuelta– crisis. La disputa por la Dirección Nacional se da entre un candidato perteneciente al PPPR, que era el anterior secretario general y que buscaba la reelección y un candidato independiente. El triunfo de este último y las ásperas discusiones mantenidas determina que la nueva dirigencia de la CNT y de la ONAC se vuelquen hacia el Frente de Lucha por la Defensa de la Soberanía y la Vida, conformado en 2004 y en el que se encuentra la MCNOC.

| Productos | Algodón | | Soja | |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Superficie (hectáreas) | Producción (toneladas) | Superficie (hectáreas) | Producción (toneladas) |
| 1995/99 | 300.832 | 329.751 | 833.005 | 2.394.784 |
| 96/97 | 110.897 | 139.098 | 939.852 | 2.670.003 |
| 97/98 | 202.000 | 222.000 | 1.005.043 | 2.855.742 |
| 98/99 | 166.204 | 202.263 | 1.185.748 | 3.053.005 |
| 99/2000 | 194.760 | 246.594 | 1.176.460 | 2.980.058 |
| 00/01 | 297.885 | 294.444 | 1.350.000 | 3.511.048 |
| 01/02' | 169.671 | 123.667 | 1.445.385 | 3.300.000 |
| 02/03' | 240.442 | 170.064 | 1.474.058 | 4.204.865 |
| 03/04' | 320.000 | 330.000 | 1.870.000 | 3.583.000 |
| 04/05' | 215.000 | 180.000 | 1.950.000 | 4.400.000 |

Fuente: Morinigo, 2004 y fuentes periodísticas para los últimos ciclos.

Dos nuevos movimientos entran en escena en el cuadro de los movimientos sociales desde mediados de 2003¹⁰. Uno netamente campesino y otro de conformación multisectorial aunque también con un fuerte componente campesino. Se trata del Movimiento Agrario Paraguayo (MAP) y de las Coordinadoras Departamentales de Lucha por la Soberanía y la Vida (CDLSV). El MAP tiene su origen en un movimiento religioso de tipo evangélico, el Pueblo de Dios, que desde su implantación en el país tuvo buenas relaciones con el régimen de Stroessner, algunas de las altas figuras de ese régimen llegaron incluso a pertenecer a esta religión que se caracteriza por prácticas de reclusión en comunidades campesinas en territorios relativamente autónomos. El Departamento de Caaguazú es la zona del país en donde más arraigo logró. Por tratarse de un departamento de alta conflictividad con gran proliferación de movimientos campesinos, luego que el golpe del 89 fuera desmoronando su base política de sustentación, el Pueblo de Dios fue teniendo actitudes más aperturistas hacia las reivindicaciones campesinas. Algunos de

¹⁰ Surgieron además otros movimientos más pequeños que no cuentan aún con una base organizativa significativa; entre ellos, el de los Cedroneros y Sesameros (cultivadores de cedro y sésamo) que vieron burladas las promesas hechas por el gobierno sobre el precio de sus productos.

los líderes de ciertos distritos de dicho departamento (Yhu, Vaquería, 3 de Diciembre, San Joaquín) se incorporaron a la religión y trasladaron a sus comunidades la agitación social propia de la zona. El MAP, entre otros, es uno de los movimientos que constituyen la CDLSV de Caaguazú, es resistido tanto por la FNC como por la MCNOC por su estrecha vinculación con esa religión.

Desde el ciclo agrícola del verano 1999/2000 el área de siembra de la soja, con la incorporación de su semilla transgénica, ha venido expandiéndose aceleradamente en el país¹¹, desde entonces el uso de potentes agrotóxicos se ha intensificado, a los insecticidas que se venían usando para los rubros de exportación se adicionó el uso de herbicidas. La tierra se sobrevalorizó rápidamente (pasando de un promedio de U\$ 300 la hectárea a U\$ 2.800 en las zonas sojeras) expulsándose de ellas –vía alquiler o compraventa– a los campesinos ahí residentes¹². Los sojeros son en su mayoría extranjeros (brasileños, menonitas y de otras nacionalidades). Muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas, expulsión de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de soberanía alimentaria por el monocultivo son algunas de las consecuencias de este proceso y son el motivo principal de las coordinadoras departamentales.

La conciencia sobre la situación provocada por el masivo cultivo de la soja transgénica se difundió no sólo a los directamente damnificados, los campesinos, sino también a educadores, religiosos, intendentes, estudiantes, asociaciones confesionales, periodistas, técnicos de ONG y otros. A fines de 2003 ya se encontraban funcionando las Coordinadoras de San Pedro (con importantes contingentes de dirigentes de la MCNOC) y la de Caaguazú. En ambas, los respectivos obispos diocesanos tuvieron una activa participación, además de sacerdotes, diáconos y miembros de otras religiones. A principios de 2004, con la suma de la Coordinadora de Cordillera y la presencia de observadores de otros departamentos (Misiones, Paraguari) se crea la Coordinación Nacional de Coordinadoras Departamentales. Posteriormente, hacia mediados de

¹¹ Producción agrícola de algodón y soja en el Paraguay.

¹² Para mayores detalles ver Palau y Kretschmer (2004) y Palau (2004).

año esta organización recién constituida pasa a conformar el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (FNLSV) del que, además de la MCNOC, forma parte la Plenaria Popular Permanente.

La acción reivindicativa

Las características que presentan las principales organizaciones sociales paraguayas comparten las características señaladas por Zibechi (2003) referentes –como se vio– a una cierta autonomía ante los partidos políticos de un grupo importante de ellas (aunque no de todas), a la revalorización de la cultura y la identidad, a la formación de sus cuadros, al nuevo papel de la mujer en la organización campesina¹³, la creciente participación de los indígenas¹⁴, la preocupación por los problemas medioambientales, las formas de movilización y en particular, la importancia del arraigo territorial, que ha sido el factor determinante para la constitución del MAP y de las Coordinadoras Departamentales para la Defensa de la Vida y la Soberanía. Pero por el momento, la mayor fortaleza de las mismas radica en la fuerza y la correcta orientación de sus argumentos, notablemente más “modernas” que las de las fuerzas antagónicas.

En efecto, la expansión del neoliberalismo en la economía nacional ha devastado a la sociedad campesina; las multinacionales controlan hoy no sólo la provisión casi completa de insumos para la producción, sino también las principales redes del comercio internacional de los rubros de exportación. Empiezan incluso a comprar activos inmobiliarios en detrimento de las demandas de campesinos sin tierra. Las condicionales del FMI cierran las posibilidades de desarrollo desde el sector primario. A su vez, el gran latifundio reconvertido ahora parcialmente hacia el negocio de la soja transgénica y estimulado por los precios de las tierras defiende delictivamente sus propiedades. Los narcos en el

¹³ Hasta el punto que tanto CONAMURI como las mujeres de la FNC han protagonizado últimamente importantes movilizaciones, independientemente de la acción de las organizaciones campesinas más grandes.

¹⁴ En la MCNOC una de las organizaciones integrantes es la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) de activa presencia en varios departamentos del país.

norte de la región Oriental sujetan a importantes contingentes campesinos a la producción de marihuana so pena de represalias. La corrupción imperante entre ciertos “empresarios” vinculados con el gobierno termina de arruinar al campesinado con el contrabando de productos agrícolas y el control autoritario de las redes de comercialización interna. El deterioro del costo de vida y del poder adquisitivo de salarios y precios agrícolas se encargan de hacer el resto.

En este contexto, las luchas campesinas desde que Duarte Frutos asume el gobierno han continuado negociando infructuosamente mejores condiciones de vida y producción para sus asociados. Después, el éxito obtenido en frenar la privatización de varias empresas públicas y un proyecto de ley “antiterrorista” en junio del 2002, lo que promisoriamente pintaba como la unidad del movimiento social paraguayo, con el papel protagónico de la MCNOC y la FNC en el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), se ha diluido. En el inicio del actual mandato presidencial las movilizaciones se suceden, se dan incluso violentos enfrentamientos a fines de 2003 y casi todo el 2004¹⁵ alrededor del tema de la soja, hasta que en noviembre de 2004 Duarte Frutos, bajo fuerte presión del lobby de los terratenientes, accede a movilizar al ejército y sacarlo a las zonas rurales para contener la ola de ocupaciones. El efecto es inmediato, ya que se produce precisamente en la época en que se realizan las labores de siembra de la oleaginosa. El ejército permanece en los sitios conflictivos. Un decreto posterior crea 18 nuevos destacamentos militares en otros tantos puntos del país, con lo que se completa el cierre de la tenaza represiva hacia el movimiento campesino¹⁶.

Ya en abril de 2005 los neoliberales vuelven a la ofensiva. El Parlamento termina por aprobar una nueva ley según la cual se transfiere al jefe del Ejecutivo la decisión con respecto a las privatizaciones. Se trata de una maniobra efectiva para burlar la ley 1932 que derogaba la vigencia de la 1615 (de privatización) que en mayo-junio de 2002 ha-

¹⁵ En octubre de 2004 el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería autoriza por decreto el cultivo de material genéticamente modificado, con lo cual se “legaliza” la siembra de transgénicos en el país.

¹⁶ Esta situación se completa si se tiene en cuenta que la actualidad algo más de 900 líderes campesinos están imputados por la Fiscalía y que durante los últimos 18 meses no menos de 600 campesinos han pasado por las diferentes cárceles del país.

bía provocado la contundente reacción campesina. Con este motivo se reanudan las conversaciones entre la MCNOC y la FNC interrumpidas desde aquella fecha. Los interlocutores son el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de la Vida y la Soberanía (liderado por la MCNOC) y el Frente de Defensa de los Bienes Públicos y del Patrimonio Nacional (liderado por la FNC), que son los que en 2002 formaron el CDP. Entre ambos frentes reúnen a la casi totalidad de las organizaciones sociales –campesinas o no– que reconocidamente tienen existencia activa en el país. Acosados por las políticas económicas neoliberales, por el agresivo actuar de las multinacionales, por el cerco de los latifundistas, las restricciones impuestas por los narcos y la corrupción de los “empresarios” vinculados al gobierno, los campesinos continuaron manifestando su descontento durante todo el mandato de Duarte Frutos. El 25 de febrero de 2004 la FNC convocó en Asunción a una movilización para debatir sobre el modelo de desarrollo. A su vez, CONAMURI moviliza a sus asociadas a comienzos de mes reivindicando mayor asistencia en salud. El 16 de marzo hace lo propio la MCNOC con un abanico muy amplio de reivindicaciones. Entre ese día y el 18 la MCNOC bloquea dos rutas nacionales. El 31 de marzo la FNC vuelve a movilizar a sus adherentes en la undécima marcha anual consecutiva; la reforma de la banca pública y la industrialización del algodón son los dos principales reclamos. A comienzos de abril CONAMURI y la MCNOC vuelven a manifestarse por el tema de la salud. Para esta fecha ya la mesa de diálogo convocada por el gobierno a finales de 2003 se ha disuelto. En julio, la Coordinadora de Productores Agrarios de San Pedro Norte se moviliza en ese departamento. Ante el incumplimiento de promesas, esta organización inicia un bloqueo de ruta más masivo a comienzos de agosto. El 17 de agosto las protestas se realizan en varios puntos del país por organizaciones integrantes de la MCNOC. El clima se enrarece aún más hacia fines de ese mes, con el anuncio de que la FNC también marchará contra el “modelo privatizador”. Mientras, en San Pedro siguen las ocupaciones. Hacia comienzos de setiembre la MCNOC accede a volver a dialogar con el gobierno, mientras la FNC ocupa oficinas del Crédito Agrícola de Habitación y del Banco Nacional de Fomento en varias ciudades del interior. Amenazan con nuevos cierres de rutas. La MCNOC y el FNDVS anuncian ocupaciones en varios latifundios.

A fines de setiembre la tensión es ya grande. La Policía recibe órdenes de desalojo en las ocupaciones. En octubre se realiza un “paro cívico” que tiene pocos resultados, a principios de noviembre, a pedido de la ARP el ejército reprime en los asentamientos. A partir de entonces se entra en un período de tensa calma (marcada por una fuerte represión principalmente a las bases de la MCNOC) hasta que a fines de abril y comienzos de mayo de 2005 con la reactivación del proceso privatizador los aprestos campesinos de movilización se reinician.

Perspectivas

Más allá de lo que suceda en el corto plazo, las perspectivas de cambio social que resulten de la acción de los movimientos campesinos en el país dependen de la resolución de varios factores. Por un lado, la disposición de la dirigencia de los partidos políticos (que mantienen en la mayoría de los casos relaciones simbióticas con la cúpula de muchas de las organizaciones campesinas) a encarar la resolución de la tensión partido/movimiento. Entre las propuestas que han surgido recientemente (principalmente entre las organizaciones que conforman el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida) se delineó una que parece encarar resueltamente este problema: la creación de un frente político y el mantenimiento del frente social propiamente tal. No quedó claro, sin embargo, de qué maneras concretas se implementaría la iniciativa.

Por otro lado, superar la distancia entre la dirigencia nacional, la dirigencia regional y las bases. Estas relaciones distan mucho de ser las más adecuadas para un sistema de representación participativa. Actualmente la dirigencia de base se encuentra distanciada de la regional y –principalmente– de la nacional. En el caso de las organizaciones del FNDVS la representación es por organización y no por región, con lo cual se diluye aún más la transmisión de la demanda local al plano nacional, lo cual tiende a agravar aún más el sentido problema de la representación.

Otro aspecto de no menor importancia es motivar la participación a través de consignas y reivindicaciones unificadoras, superando el fraccionamiento de la demanda particular de cada uno de los movimientos,

lo cual se ha visto reflejado en la multiplicidad de reivindicaciones esgrimidas en cada una de las movilizaciones. La demanda por la unidad del movimiento es unánime desde las bases, que no comprenden las divisiones de cúpula. La responsabilidad de la dirigencia social en este sentido es muy alta. Sin embargo, en la medida en que las organizaciones (y los movimientos) sociales en su conjunto no deslinden con claridad su estrecha vinculación con partidos políticos (lo cual no significa renunciar a un proyecto político), no será posible la maduración de la fuerza social que por ahora sabe con toda claridad lo que quiere, pero a la que le falta la correa de transmisión política de sus demandas que habrá de venir a través del diálogo serio y los pactos responsables entre los movimientos campesinos y el o los partidos que se hagan cargo de su demanda social.

Bibliografía

- Bareiro, Víctor (1997). Notas sobre el proceso agrario paraguayo, Asunción, Pastoral Social Nacional.
- Barreto, Mirta (2004). Reforma agraria confiscada, Asunción, Arandurã Ed.
- Fogel, Ramón (2001). “La estructura y la coyuntura en las luchas del movimiento campesino paraguayo”. En Giarracca, N. ¿Una nueva Ruralidad en América Latina? Buenos Aires, CLACSO.
- Fogel, Ramón y Marcial Riquelme (Comps.) (2005). Enclave sojero. Merma de soberanía y pobreza, Asunción, CERI.
- Grammond, Hubert C. de y Horacio Mackinlay (2005). “Las organizaciones sociales y la transición política en el campo mexicano”. En La construcción de la democracia en el campo latinoamericano, Buenos Aires, CLACSO.
- Morínigo, José N. (2004). Campesinos atrapados en un modelo agrícola excluyente, Asunción. Libros Blancos, Novapolis.
- Palau, Marielle (2002). “Luchas sociales obligan a retroceder al gobierno y detienen proceso de privatizaciones”. En Observatorio Social de América Latina, CLACSO, 8, setiembre, 20-25.
- Palau, Marielle y Regina Kretshmer (2004). “La guerra de la soja y el avance del neoliberalismo en el campo paraguayo”. En Observatorio Social de América Latina, CLACSO, 13, enero-abril, 105-115.

- Palau, Tomás (Ed.) (2004). Capitalismo agrario y expulsión campesina. Avance del monocultivo de soja transgénica en el Paraguay, Asunción, CEIDRA.
- Piñeiro, Diego E. (2004). En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina, Buenos Aires, CLACSO, Colección Becas de Investigación.
- Riquelme, Quintín (2003). Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino, Buenos Aires, CLACSO.
- Zibechi, Raúl (2003). “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”. En, Observatorio Social de América Latina, CLACSO, 9, enero, 185-188.

2006

Apuntes para una interpretación de la coyuntura agraria*

Lo que se presenta acá es un listado de elementos, factores y procesos que afectan y caracterizan la situación agraria de la coyuntura (no entendida como el momento corto de los hechos puntuales). No es un análisis. Es simplemente un punteo de las características más resaltantes del momento en la agricultura paraguaya.

- La agricultura paraguaya no puede ser interpretada fuera del contexto de la agricultura como centro de interés de las corporaciones multinacionales proveedoras de insumos y encargadas de la exportación.
- Es preciso también preguntarse cuál es el rol que se le asignó a la región en el conflictivo juego de tensiones entre: intereses geopolíticos norteamericanos, intereses económicos de las multinacionales, la disponibilidad y el tipo de recursos (agrícolas, ganaderos, minerales, agua), los intereses de las oligarquías locales (latifundistas, sojeros, etc.) y la supervivencia política del nicanorismo.
- No puede tampoco soslayarse el comportamiento político de los países de la región sobre temas agrícolas sensibles como los transgénicos, la biotecnología y la inversión privada directa extranjera. Piénsese que Brasil está adoptando una posición favorable a los

* Ponencia presentada en la Mesa de Análisis de la Coyuntura Agraria, propiciada por la RedRural el 27-02-06.

transgénicos¹, Argentina aprobó una reciente ley sobre biotecnología, Uruguay se está poniendo al borde de un conflicto internacional por defender las papeleras que supondrán el avance masivo de monocultivos forestales. El Paraguay parece adoptar una posición común como MERCOSUR ante la OMC.

- Por lo que puede verse, son cuatro las tendencias que vienen operando en el sistema agroganadero paraguayo. Por un lado, el avance del cultivo de la soja que proseguiría hasta llegar a las 4 millones de hectáreas² (el doble del área de siembra actual). Por otro, el fortalecimiento de la ganadería de exportación dados los buenos precios internacionales de la carne. Asimismo, parece ir consolidándose la intención de resucitar el algodón, movido por el interés de las corporaciones vinculadas a la exportación del textil. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el creciente uso del etanol está elevando los precios del azúcar, por lo que puede esperarse (y en particular si el gobierno da impulso a los biocombustibles) una expansión del cultivo de la caña de azúcar.
- La sequía que viene afectando desde hace al menos tres años a la agricultura está poniendo en aprietos a los sojeros (muchos de ellos están exigiendo ya una nueva, la tercera, renegociación de sus compromisos financieros). La merma de producción del actual ciclo podría llegar a significar la quiebra de muchos de ellos, sobre todo de los no integrados a los circuitos financieros. De ser así, esas tierras pasarían a manos de sus acreedores, principalmente actores financieros, empresas proveedoras de insumos y otras corporaciones. La producción de soja podría estar pasando a ser así, no una actividad de sojeros, sino de empresas. De ahí a los *pools* de siembra³ hay un paso.

¹ El gobierno Lula dio una gran ayuda a las empresas transnacionales de biotecnología durante la última reunión del Protocolo de Cartagena (de Bioseguridad), el año pasado. En Montreal la delegación brasileña se sumó a la de Nueva Zelanda para impedir el consenso entre los 172 países miembros del Protocolo en la definición sobre la forma de identificación de las cargas exportadas de organismos vivos (semillas y granos).

² Según declaraciones del Pdte. de Capeco.

³ Empresas que se dedican a captar ahorro de empresas y particulares y a hacer trabajar ese dinero en cultivos extensivos de soja.

- Si se admite que por cada 10 has. de soja que se incorporan se pierden al menos 4 de campesinos, los próximos años con una expansión de 2 millones de has. pueden significar el desalojo de 800 mil has. hoy ocupadas con campesinos. Esto da unas 80 mil familias, prácticamente la mitad de las fincas campesinas con menos de 20 has. Esto trae aparejado un aumento poco sostenible de la inseguridad alimentaria nacional, un notable aumento de la pobreza, aún mayor deforestación y contaminación de cursos y fuentes de agua.
- La inminente introducción del maíz transgénico⁴ conducirá inevitablemente a la contaminación genética de las variedades nativas, reforzando aquella dependencia alimentaria con importaciones masivas de alimentos. Esto hará aumentar aún más el precio de los alimentos (como los registrados durante el 2005), aumentos que se consolidarán con el sostenido incremento del precio de los combustibles.
- La posición del gobierno en lo referido a sus políticas sectoriales es la de un completo apoyo a la agricultura empresarial y a la ganadería de exportación. En el pasado reciente abandonó a su suerte a los cedroneros, a los sesameros y, tal como van las cosas, los pequeños productores de algodón no parece que vayan a correr mejor suerte. El subsidio de Gs. 5.000 a los pequeños cañeros, prometidos al inicio de la zafra 2005, quedó también en el olvido.
- El INDERT por su lado, completamente desfinanciado, no es un actor gubernamental válido para encarar el acuciante problema de la tierra, la cual por su parte, continúa apreciándose con lo que su acceso queda completamente fuera del alcance administrativo del ente, y de los pequeños productores. El mero crecimiento de la población campesina hará que los problemas del campesinado sin tierra vayan agudizándose en el futuro inmediato.
- La falta de alimentos para las familias campesinas, el aumento de la pobreza, la deforestación, el aumento de campesinos sin tierra y

⁴ La reciente condena de la OMC al régimen europeo de importación de transgénicos (moratoria) fortalece la posición de empresas como Monsanto y augura una mayor expansión mundial de cultivos genéticamente modificados.

otros problemas, tienden a agudizar la conflictividad. La reacción gubernamental es criminalizar este conflicto, o sea, a resolver en el campo judicial y penal (cuando no militar) los problemas sociales. La reciente acusación de que la OCN tiene vinculaciones con las FARC no es un hecho casual, los casi dos mil dirigentes campesinos imputados por la fiscalía no son una ficción, así como tampoco los recientes asesinatos.

- Mientras esto ocurre en las bolsas de valores, en los consejos de dirección de las multinacionales, en los gabinetes ministeriales, al interior de los cuerpos armados, la sociedad campesina aparece ampliamente desprotegida. Ni la Iglesia (progresista), ni las no gubernamentales, ni la solidaridad internacional están reaccionando acorde a la gravedad de la situación.

La sequía, de fenómeno climático a instrumento de sometimiento*

La prensa empresarial se vino ocupando profusamente de los efectos que la sequía produjo sobre la soja. Las pérdidas para el sector más adinerado de la agricultura paraguaya y las pérdidas para las transnacionales de la agroexportación ocupan siempre un lugar destacado en la prensa empresarial.

Otro tanto ocurre con la preocupación gubernamental sobre el algodón, también afectado por el fenómeno climático. Llamativamente, las protestas campesinas recientes vinculadas a los reclamos por el algodón no son objeto de represión como las demás. Eso se debe a que al gobierno le importa mantener los cupos y márgenes de ganancia de las desmolidoras, de las agroexportadoras y el bienestar de los integrantes del exclusivo club CADELPA, Cámara Algodonera del Paraguay.

Ni qué decir de los problemas que afectan a la ganadería: la aftosa y la sequía de los pastos son tratadas como una “cuestión nacional”, al decir del presidente de otro no menos exclusivo club: la ARP, Asociación Rural del Paraguay.

La soja, el algodón, las vacas. He aquí el modelo primario exportador del país, que supedita todo lo demás a sus intereses corporativos. Las ofensas a este sistema son consideradas ofensas al país.

* Revista ACCIÓN N° 261 - Marzo 2006. CEPAG.

La sequía, hecho concreto, real, tiene sin embargo varias otras aristas y derivaciones que no son percibidas por el gran público de los medios empresariales pero que sí son –¡y vaya si no!– por la mayoría de los habitantes rurales, que son esencialmente campesinos.

Resulta que la sequía afectó no sólo los sojales, los algodones y los pastos, afectó también a todos los demás rubros agrícolas y entre ellos, a los de subsistencia: el maíz, la mandioca, los porotos, en fin todos aquellos productos de los que comen y viven los algo más de dos millones de campesinos que todavía existen en el país. Así las cosas, este largo año que queda por delante (hasta noviembre por lo menos) será un año marcado por el hambre y la consecuente desesperación de esas doscientas y tantas mil familias que viven de su chacra. Esto lo sabe el gobierno y por la forma como actúa parece estar preocupado. ¿Cómo se manifiesta esa preocupación? De varias maneras, veamos al menos dos.

Si no hay pan, al menos que haya circo. La campaña electoral del Partido Colorado fue una gran cortina de humo para tapar la gravedad de la situación económica y social de la población y a la vez, para enardecer los ánimos de ese millón y medio de afiliados que dice tener dicho partido. Esto hizo olvidar (al menos eso creen) aunque sea por un momento, las penurias de esas familias que siguen teniendo el pañuelo *colo'ó* en el cuello o en algún rincón de la casa. Pero eso ya pasó y el hambre y la malnutrición continúan.

Por otro lado, volvieron a reaparecer los “guerrilleros” de Oscar Latorre (exfiscal general del Estado) denunciados inmediatamente, y casi sin pruebas ni información a la población (ahora por Latorre’í) como instruidos y/o visitados, equipados e inspirados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ahora no es Patria Libre, es la OCN (Organización Campesina del Norte). O sea, de criminalizar a partidos de izquierda, se pasó a criminalizar a las organizaciones campesinas. Este punto no deja de ser interesante.

¿Qué hacen –entre otras cosas– las organizaciones campesinas? Ocupan tierras ociosas, obstruyen el paso de los corte y trillas a los sojales, cortan rutas, “roban ganado” (cuando en realidad son abigeos profesionales al servicio de encumbrados políticos locales), se instalan en

oficinas públicas. Todo esto ofende al sistema latifundio-soja-algodón y deben ser considerados subversivos.

Surgen entonces sugerentes conexiones. ¿Le interesa a la Embajada norteamericana una segunda Colombia en el cono sur? ¿Tienen algo que ver los anuncios del hallazgo (¡por fin!) de gas y petróleo en el Chaco con el interés norteamericano? ¿O la subida de Evo Morales, o el independentismo brasileño en materia de comercio exterior? ¿Molesta esto a USA o entorpece sus planes para asentarse en territorios del acuífero Guaraní? Si le interesa una segunda Colombia está faltando un actor para poder imponer acá también el Plan Paraguay (como lo hizo con el Plan Colombia): faltan los guerrilleros, faltan las **FARC**, o sea, las **FARP**. Ya hay unas fuerzas armadas incompetentes y mayormente corruptas, ya hay grupos armados de la mafia, de la droga operando hace años, ya hay también paramilitares al servicio de sojeros y latifundistas. Pero claro, esos son “amigos”, faltan los enemigos y esas son las FARP. Sin este personaje la opereta se queda sin guión.

Pero esta inquietud no es sólo de Nicanor o los sectores más ultraconservadores del reducido espectro político nacional. Lo es también de la derecha del cono sur. Veamos como ejemplo el caso brasileño¹.

El pasado 29 de noviembre fue aprobado y remitido a la Cámara de Diputados en Brasilia un informe elaborado por la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) de la Tierra. En él se propone considerar los hechos de ocupaciones de tierra como “actos terroristas”. Una vez revisado y aprobado el proyecto de ley por diputados, la misma CPMI remitirá el instrumento al Ministerio Público que decidirá sobre las medidas a adoptar. Es más, se está solicitando al Congreso la creación de una nueva CPMI en 2006, esta vez articulada ya directamente contra el Movimiento de los Sin Tierra (MST).

Para el movimiento campesino esto representa un peligro, porque “*una lucha contra las ampliaciones mediáticas del debate en torno a la cues-*

¹ Esta noticia puede ser consultada, para mayores detalles y de manera directa en: www.rebelion.org del 13/02/06 con el nombre de “Diputados brasileños solicitan una nueva ley para clasificar la ocupación de tierras como ‘delito hediondo’ y que jurídicamente se contemple como ‘acto terrorista’ ”. Comité de Apoyo al MST de Madrid.

*ción del terrorismo, en momentos en que este término está siendo utilizado y manipulado por el poder neoliberal en todo el mundo con fines claramente propagandísticos, sí supondría un gran esfuerzo organizativo y de medios para el MST, como lo está siendo ya para cualquier otro movimiento que intente constituirse como alternativa sociopolítica o simplemente aportar un debate constructivo. ‘Terrorismo’ devendrá en la acumulación progresiva de significados (en el año 2003, un informe del ejército de los Estados Unidos, siempre interesado en cuestiones lingüísticas, contaba más de 100 definiciones) y por lo tanto en la pérdida del valor comunicacional de la palabra, no deja de asustarnos esa táctica de laboratorio, de ensayo y error, que se maneja como intento de criminalización cali/descalificatorio hacia todo aquel que no está en el supuesto lado correcto”.*²

Existen pues obvias aunque invisibles relaciones entre las instrucciones que se reciben en el Palacio de López, en la Vicepresidencia (el Vice viaja a menudo a Washington), en la Fiscalía, y las ansias de saqueo que mueven a las multinacionales norteamericanas, con el pensamiento de latifundistas, ganaderos y sojeros, o sea de la derecha de la región.

Para el sistema primario exportador los campesinos son seres superfluos, sobre todo están de más en el campo; deben ser expulsados para que las riquezas que alberga el suelo rural puedan ser rentablemente explotadas por la agricultura, la ganadería y la minería³ empresarial.

En este sentido, la sequía viene de perillas ya que acogotará aún más la escuálida economía campesina obligando a que, en 2006, el desplazamiento económico forzoso del campesinado a las ciudades se acentúe más allá de las 100 mil personas/año que se estimaba salían del campo cada año en el último quinquenio.

El peligro de una “sublevación del pobrerío” sin embargo, no puede ser descartado, para ello Nicanor **ahora desde el gobierno y desde la ANR** deberá extremar su ya hasta ahora manifiesta tendencia al autoritarismo y pasar a un gobierno de acción represiva directa. El anillo perfecto

² Artículo citado de Rebelión.

³ Incluyendo a las cuatro mil y tantas empresas extranjeras que ya han obtenido licencia para la explotación del agua.

para ese dedo es sin duda la “guerrillerización” del movimiento campesino. Nada extraño sería que personajes infaltables en ambas cámaras del Parlamento den el *nihil obstat* a esta política y la legalicen con las mismas herramientas que intentan hacerlo sus pares brasileños. Del resto se encargarán la obsecuente Fiscalía y el no menos supeditado Poder Judicial. Si a pesar de todo, el pobrerío se resiste a dejar de comer, vendrán las gloriosas Fuerzas Armadas paraguayas o los paramilitares para zanjar el pleito.

“Ahora sólo tenemos lluvias de frentes, ya no aquellas producidas por la humedad ambiente”. “La deforestación está íntimamente vinculada a la sequía que se verá agravada por la nueva aparición del fenómeno de la Niña en el Pacífico ecuatorial”. Estas son declaraciones de una meteoróloga, tomadas (no recuerdo si) de un diario o una radio. La ganadería y el modelo sojero son netamente expoliadores de los recursos forestales (como en su momento lo fue el algodón), la desaparición de la masa boscosa y la contaminación del agua superficial y los acuíferos adelantarán el problema de la escasez del recurso en nuestro país. Pero CAPECO quiere llegar a las 4 millones de hectáreas del grano forrajero y los ganaderos siguen expandiendo sus propiedades. Por su parte, la Embajada norteamericana quiere asegurarse la completa colonización del país para que sus multinacionales operen acá, con mayores facilidades que en su propio territorio y para mantener a raya a gobiernos díscolos de la región.

¿Dónde quedan los campesinos afectados por la sequía? “Mire, allá al fondo, a la izquierda”.

A Nicanor le asoma el fantasma de la alternancia*

La marcha de Resistencia Ciudadana (RC) y la de los trabajadores, están modificando el escenario político del país. Son modificaciones perceptibles aunque todavía pequeñas, pero han demostrado que ni el coloradismo, ni mucho menos el nicanorismo, son fenómenos perennes. No están para quedarse cincuenta años más, como lo imaginaba Nicanor. Y esto ha provocado un atisbo de optimismo en una ciudadanía por lo demás, desesperanzada.

La oposición parlamentaria –a falta de figuras propias– ha debido echar mano a la persona de un clérigo de buena imagen para lograr lo que por ahora aparece todavía como una alianza cosida con alfileres. El nicanorismo ha sentido el impacto y su único líder se muestra hoy más moderado y mucho menos triunfalista que dos meses atrás.

Por ahora, tenemos una segunda constatación en menos de cuatro años, que cualquier posición unitaria puede llegar a hacer tambalear al más pintado de los bueyes de la cúpula colorada. En junio de 2002, cuando el campesinado se unió en el Congreso Democrático del Pueblo, Luis González Macchi derogó en un santiamén varios proyectos de ley que atentaban contra el patrimonio nacional y la democracia. En marzo y mayo de 2006, si bien aún no se logró lo buscado, RC por un lado y

* Revista ACCIÓN N° 263 - Mayo, 2006. CEPAG.

los trabajadores unidos por otro, vuelven a demostrar que la mentada mayoría colorada hace agua por varios lados y que no será suficiente con calafatear el bote.

Sin embargo, el fenómeno RC es notablemente frágil y particularmente vulnerable. Son cuatro partidos que han estado (durante el tiempo de la transición en que existieron) tan perdidos como turcos en la neblina, en materia de construcción de una institucionalidad democrática. Es que son partidos sin definición ideológica, integrados por personas en mayor o menor medida corruptas y, con muy pocas excepciones, notablemente carentes de masa intelectual propia. Tanta es la mediocridad política de esa oposición que su actual líder es un no-político, es un religioso. Mayor prueba de incapacidad política, casi imposible de encontrarla.

La auspiciosa primera reunión convocada por RC en el local de la Central Nacional de Trabajadores CNT, en preparación de la marcha –reunión en la que se encontraban también los integrantes del Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía (FNLSV)– perdió su auspiciosidad muy pronto; la Plenaria Popular Permanente, integrante del FNLSV, se retiró de la convocatoria, esto restó base popular a la marcha del 29 de marzo. La permanencia en RC de dos centrales sindicales y otras pocas organizaciones sociales integrantes del Frente, produjo prácticamente la disolución del Frente; un resultado desfavorable para las posturas progresistas que hubiesen contrarrestado el conservadurismo esencial de RC de cara a una ciudadanía encandilada por la contestación anti-nicanorista. Las dos centrales sindicales que se “abrieron” del Frente, convocaron a las otras tres para organizar la marcha del 1 de mayo.

Los cinco ministros de la corte (en minúsculas) cuestionados en marzo, siguen en sus puestos y el violador de la Constitución, tan campan-te en la presidencia del Ejecutivo. Puesto en términos prácticos, RC no logró sus objetivos. Aunque como se dijo, logró otros de no menor importancia. Entre ellos, trajo a colación, anticipadamente, el tema de las elecciones de 2008. El nombre de Fernando Lugo ya suena como candidato de la (eventual) coalición opositora, sin que el monseñor se haya pronunciado aún.

Hay una indefinición al respecto. Lo que pase dependerá de muchos factores y tensiones. Entre ellos: cómo se resolverán las fricciones entre los partidos de oposición, que en estricto sentido es una verdadera bolsa de gatos; qué pasará con el candidato opositor y su vinculación a la Iglesia, y en particular, a la Iglesia jerárquica, corporación eclesiástica que dista mucho de ser coherente en sus posiciones sobre asuntos mundanos; qué futuro le espera al país en caso de un eventual triunfo de la candidatura de Lugo timoneando una coalición débil. Hay, por cierto, muchas más dudas que certidumbres sobre lo que sobrevendrá en el escenario político.

Los partidos de la oposición han empezado a dar muestras de una importante división, en la que el personalismo de Pedro Fadul está jugando un papel decisivo. Las estrechas metas de UNACE hacen dudar de la estabilidad de cualquier pacto con este sector una vez que logre sus objetivos. Las desavenencias internas de País Solidario alentadas por el figuretismo y los pactos nada claros de Carlos Filizzola tampoco auguran una cohabitación pacífica en ningún pacto de coalición. El oportunismo liberal es proverbial y, en cualquier vuelta del camino, puede deslindar posición respecto de sus aliados “opositores”. El Encuentro Nacional poco cuenta. Todo esto lo sabe Nicanor y ya ha empezado a especular bilateralmente con cada uno de estos actores.

Esto también lo sabe Fernando Lugo quien –a pesar de su investidura– pretende quedar bien con Dios y con el diablo apoyando también la marcha de los trabajadores, intentando demostrar con ello que no ha celebrado nupcias sólo con los actores políticos en el buscado cambio de rumbos para el país. Por el momento, su original solidaridad con el pueblo campesino, demostrada en toda su vida pastoral, no ha tenido oportunidad de manifestarse. Esto es, el actor campesino aún no ha sido convidado a la mesa del cambio social que propugna la incursión de Lugo en la política. Y esta es una omisión importante.

Por su parte, la Conferencia Episcopal ha debido celebrar una reunión específica para tratar de empaquetar corporativamente la posición de la Iglesia Católica jerárquica en el berenjenal político en que se encuentra metida y, sobre todo, para perfilar esa posición ante el futuro más bien tumultuoso que se avecina. No son difíciles de imaginar las presiones

que deben estar llegando del Vaticano poniendo a prueba la capacidad diplomática del nuevo Nuncio, proclive como otros anteriores, a aceptar convites de la presidencia de la república.

La figura de Lugo como alternativa de cambio, descansa básicamente en dos valores claramente percibidos por la ciudadanía: su honestidad y su compromiso con el pueblo pobre, que equivale en la práctica a patriotismo.

Son estos dos valores los que precisamente serán directamente atacados en la remota posibilidad de que RC se constituya en alternativa política y en la todavía más remota “carta Lugo” como figura de la alternancia. Desmantelar una corrupción meticulosamente construida en los sesenta años de coloradismo no es una tarea fácil; reconstruir el aparato de justicia para erradicar la impunidad suena también a utopía. Igualmente idílico suena que tal nueva alternativa política pueda desatender los intereses de la oligarquía ganadera, de las multinacionales y de los organismos financieros multinacionales para demostrar aquel compromiso con el pueblo pobre. Con corrupción y con neoliberalismo no habrá cambios. Si se sigue con ellos, al trasto con la honestidad y el patriotismo. Esto también lo sabe Lugo quien podría ser, en el 2008 y en el mejor de los casos, un nuevo integrante de la *pink wave*¹ si sigue adherido a la actual oposición parlamentaria.

Por lo pronto, y en apoyo a lo que se acaba de mencionar, resulta llamativo el apoyo de ciertos medios de prensa escritos, televisivos y radiales al proyecto Lugo. ¿Será que la poderosa corporación empresarial vinculada a importantes grupos económicos también está harta de Nicanor y apuesta a un cambio controlado? ¿A un cambio previsible y conservador?

En resumen, las alternativas parecen ser simples. Primera: RC se disuelve, Lugo vuelve a la Dirección del Colegio Verbo Divino y santas pascuas. Segunda: RC se consolida como coalición de partidos políticos “opositores”, Lugo acepta liderar, en cuyo caso será necesariamente cooptado. Tercera: igual que la segunda pero Lugo no acepta ser coop-

¹ La “onda rosada”, término que designa y engloba a la camada de presidentes socialistas neoliberales que han proliferado últimamente en América Latina.

tado, en cuyo caso la situación se torna ingobernable. Cuarta: Lugo se aparta paulatinamente de sus averiados aliados políticos y se acerca a un sector más progresista del espectro político y a los movimientos sociales.

Esta última alternativa es la única con reales posibilidades de producir un cambio en el país, aunque es obviamente la más difícil y que aún ni siquiera está diseñada.

Pero por el momento nada está dicho. Lo más positivo que se ha visto en estos últimos meses es que hay figuras de recambio y que éstas están fuera de la estructura política formal del Estado, y hablando de afuerinos, Lugo puede no ser el único. Otra cosa positiva es que la ciudadanía está realmente harta de la satrapía gubernamental actual. Otro hecho positivo es que cuando la sociedad se une, el poder político formal se remece. Parece estar servida en bandeja la posibilidad de recambio.

Todo dependerá ahora de la capacidad de diálogo, de la madurez política, de la honestidad intelectual, de una visión estratégica de largo plazo y del patriotismo de los líderes sociales. Si no apelan a estos valores, puede llegar a ser cierto lo vaticinado por Nicanor: Facundito al cumplir los 18 en el 2023 podrá suceder a su padre.

Segunda Contra-Conferencia de Mesas Redondas sobre “Soja Sustentable”*

Lambaré, 31 setiembre - 2 agosto 2006. Paraguay

1. Motivos

La Primera Conferencia se realizó el año pasado en la ciudad de San Miguel de Iguazú, Brasil, en el mes de marzo. El debate giró en torno de la expansión de la producción para atender la demanda mundial, sus consecuencias y cómo preservar las áreas de alta biodiversidad. En ella se presentó un informe sobre los “impactos negativos” de la expansión de la soja en América del Sur, a cargo de la ONG ambientalista norteamericana WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), “preocupada” por la demanda de la soja que aumentará a un 60% de la actual, con más de 300 millones de toneladas por año hasta el 2020 para asegurar pastos y forraje para la producción de proteínas animal en Europa y China.

En ese informe se citaron superficialmente algunos de los impactos negativos que produce el cultivo de la soja, como la deforestación atendiendo que la variedad más cultivada es la soja transgénica Roundup Ready (RR), que es tolerante al herbicida “mata todo” de Monsanto.

El equipo organizador del evento estuvo conformado por AAPRESID (Agricultores Cero-Labranza) de Argentina, CAPECO (Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas), Grupo André

* En: <http://www.grr.org.ar/ceparaguay/>

Maggi (el mayor productor de soja en Mato Grosso, Brasil), UNILEVER (empresa transnacional de la industria alimentaria), WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), GUYRA PARAGUAY (ONG ambientalista), FETRATF (Federación de Pequeños Agricultores del Sur de Brasil), CORDAID (Agencia de Desarrollo Holandesa), COOP (Cadena de supermercados de Suiza). Además estuvo presente el sector financiero por el banco holandés Rabobank y el inglés HSBC, que son accionistas principales de Archer Daniels Midland (ADM), CARGILL, BUNGE y Louis DREYFUS, que controlan el comercio mundial de soja.

2. Intereses en juego

El término “sustentable” de la soja incorpora un discurso ecologista conservacionista que cae bien en el ámbito de las ONG que reciben apoyo de las agencias de cooperación involucradas en la promoción del cultivo de soja sustentable. Con esta idea no se está cuestionando el modelo agroexportador que está detrás, ni a los sectores financieros que apoyan este tipo de evento para buscar limpiar sus imágenes, sino más bien quiere demostrar que el cultivo de soja, desde esta perspectiva, evitará la profundización del daño ecológico, tendrá una producción más humana conservando el medio ambiente, todo esto para conseguir el apoyo de los consumidores, principalmente de Europa, para el proyecto. Lo que se sabe es que detrás de estos eventos están las compañías de semillas transgénicas y agroquímicas (MONSANTO, PIONNER, SYNGENTA, DUPONT) y los bancos multilaterales.

3. Perspectivas

La segunda conferencia ya no incorpora el término “sustentable” por los cuestionamientos suscitados desde los movimientos sociales. De esta manera, el nombre de esta convocatoria es la Segunda Conferencia Global sobre soja Responsable, que se realizará en Lambaré, Paraguay, el Hotel Yacht y Golf Club. Según la información, todos los sectores “interesados” pueden participar de la actividad.

Lo que merece atención en este apartado es la introducción del adjetivo “responsable”, que de acuerdo a sus sinónimos en castellano equivale

a solidario, garante, subsidiario, etc. Lo que cabría preguntar es: ¿responsable con quién o quiénes, solidario con quién o quiénes, cómo y subsidiario de quién o quiénes, de los empresarios transnacionales, productores de semillas transgénicas y agroquímicos? Nos preguntamos nosotros, serán responsables de la contaminación ambiental causada por 1 millón de litros de químicos derramados en este año, la colmatación de arroyos, ríos y lagunas, la expulsión de casi cien mil campesinos, el asesinato de más de 100 dirigentes campesinos, la expulsión de pueblos indígenas, la imputación de más de 2.000 campesinos.

4. Objetivos del Contra Encuentro sobre la irresponsabilidad del modelo sojero

Visibilizar a la opinión pública las falacias del modelo agroexportador basado en el monocultivo de soja transgénica.

Mostrar el repudio de un sector importante de la población paraguaya a la manipulación de la información realizada por las multinacionales involucradas en su producción y exportación, ONG financiadas por éstas, gremios sojeros y la prensa empresarial a su servicio.

5. Justificación

Todo monocultivo es perjudicial para el ecosistema en el que se instala, es expulsor de población, atenta directamente contra la diversidad productiva, reduce drásticamente la seguridad alimentaria del país.

En el caso concreto de la soja transgénica, a lo anterior debe agregarse que la soja RR viene acompañada de la introducción de un potente herbicida que es utilizado sin que se tomen las mínimas normas de precaución, lo que supone el envenenamiento de personas, destrucción de cultivos de autoconsumo, muerte de animales domésticos. Por otro lado, la modificación genética de las semillas utilizada tiene efectos aún desconocidos, pero amenazantes sobre el germoplasma nativo y la salud de las personas.

El área de siembra del producto (no sólo en el Paraguay sino en todo el cono sur sudamericano) coincide casi completamente con la extensión

del acuífero Guaraní, lo que significa que el área será rápidamente deforestada en su ya escasa extensión boscosa que resta y las napas freáticas contaminadas por el uso no sólo del glifosato sino de otros biocidas también utilizados.

La conversión de nuestros países en republiquetas sojeras, alimentaria y económicamente dependientes, es de interés de las corporaciones multinacionales del ramo y de máxima prioridad geopolítica para el gobierno y el ejército norteamericano. Forma parte de un plan continental para el saqueo de nuestros recursos naturales, que además de la soja incluye las fuentes de energía, la biodiversidad y el agua.

Por estos motivos, sucintamente presentados, consideramos de interés nacional defender los derechos del pueblo paraguayo a una vida sana, libre de transgénicos y sin injerencia de intereses multinacionales en nuestras vidas.

Nuevo Mesías para viejos pobres, el algodón transgénico*

Según una información proveída por funcionarios de rango medio y alto de una importante desmotadora hace unos seis meses, en la recepción de la cosecha de algodón del ciclo agrícola 2005-2006 se ha detectado que poco más, poco menos, el 14% del algodón desmotado era transgénico. Fuentes dignas de todo crédito aseguran que para el ciclo 2006-2007, que se inició con la siembra a mediados de setiembre pasado, existía almacenada en varios depósitos clandestinos, suficiente semilla para sembrar 100 mil hectáreas de la fibra, sobre un total de 240 mil hectáreas, que es el pronóstico de siembra para este próximo ciclo.

Con esta progresión de 14% de inicio el primer año, 42% el segundo, es probable que en tres años más la totalidad del algodón producido en el país sea transgénico.

El disfraz

¿Qué hay por detrás de este avance de las semillas genéticamente modificadas? En las zonas algodonerías, las radios de Frecuencia Modulada locales, en su mayoría por supuesto controladas por grandes comerciantes, políticos o empresarios, hablan de las bondades de la semilla; que

* Revista ACCIÓN N° 269 - Noviembre, 2006. CEPAG.

ya no le atacarán las plagas, que no va a hacer falta usar insecticidas, que tampoco se van a hacer carpidas ya que bastará echarle matatodo (Roundup), que el campesino va a poder descansar más, que se va a hacer de plata con seguridad y comodidad. Es la propaganda; es la mentira.

Una de las cosas que se esconde y no se dice en esas radios de empresarios y politiqueros es que toda la semilla transgénica de algodón en el Paraguay es ilegal. E ilegal, por doble mano. En primer lugar, ingresó al país de contrabando, en consecuencia es semilla *mau*, viene en bolsa blanca o sea, no identificada. En el envase no se identifica quién la produjo, qué tipo de semilla transgénica es, no hay papeles de pago de impuestos aduaneros. En resumen, fue introducida por “empresarios” o políticos colorados vinculados al poder; son cortesanos que actúan con la impunidad que les otorga ser amigos del Rey.

En segundo lugar, es ilegal porque su siembra comercial aún no fue aprobada por el SENAVE y el Ministerio de Agricultura; a comienzos de octubre ni siquiera había sido aprobado para cultivo experimental (proceso de experimentación que debiera tomar tres años para su aprobación final). Debe tenerse en cuenta que el principio de precaución contemplado en la misma Política Ambiental Nacional (PAN) y el compromiso asumido por el gobierno nacional a través del Convenio sobre Diversidad Biológica ratificado por Ley de la Nación Paraguaya 253/93, en su artículo 8, inciso g, taxativamente expresa: *“Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la Biotecnología”*.

Es quizás esta normativa, la que le hizo decir al director del SENAVE a fines de setiembre que, con apoyo de la Fiscalía, su organismo verificaría los plantíos para determinar con un procedimiento rápido si el algodón ahí cultivado es o no transgénico; de serlo, se procedería inmediatamente a su destrucción. Esto conllevaría enormes pérdidas al pequeño productor, ya que no sólo se quedaría sin el fruto de su trabajo, sino con deudas por las semillas e insumos a los proveedores. O sea, implicaría la ruina del productor campesino.

Otras cosas que no se dicen

Existen dos tipos de semillas de algodón transgénico; las que son resistentes a tres tipos de orugas (y sólo a tres) que se llama algodón Bt¹, y el algodón RR² resistente al herbicida.

Un primer problema práctico es que el campesino recibe la bolsa de semillas (a U\$ 100 la unidad, o sea, Gs. 530 mil contra Gs. 120 mil como máximo que cuesta la bolsa de semilla convencional) sin saber cuál es su contenido; de hecho, en esa bolsa están mezcladas las semillas Bt y las RR creyendo que lo que compró es a la vez resistente al herbicida y a los gusanos, lo cual es falso. O es para los gusanos, o es para el herbicida. Llegado el momento de la fumigación, el campesino le echará matatodo y matará tantas plantas de algodón como semillas de Bt haya sembrado, porque las semillas Bt *NO* son resistentes al herbicida. A su vez, las semillas RR sembradas que contenía la bolsa, serán atacadas por las plagas del algodón y producirá pérdidas de mucha importancia. En resumen, una situación muy riesgosa.

Para muestra, se cita lo que pasó en la India (que como se sabe es un gran productor de fibra de algodón de muy alta calidad). En ese país el algodón Bt ha causado una ola de suicidios de campesinos, quienes han perdido su fuente de subsistencia por causa del fracaso económico de este transgénico. El gobierno del estado de Andhara Pradesh en India, informó en el 2002 que en el primer año de la siembra, el algodón Bt resultó en una producción cinco veces menor que el algodón convencional.

Los transgénicos tienen riesgos enormes e impredecibles para la salud humana, los ecosistemas y la agricultura tradicional. El algodón Roundup Ready (RR) está modificado para permitir el uso de agrotóxicos más poderosos, ocasionando un impacto social y ambiental poniendo en peligro la biodiversidad en general y la salud de las familias, con preferen-

¹ Porque contiene genes del *Bacillus Thuringensis*, un bacilo que mata a determinados tipos de gusanos.

² O sea, Roundup Ready, que quiere decir que se puede usar con el herbicida Round Up, o sea el matatodo, que mata los yuyos que crecen en el algodonal.

cia mujeres y niños cuya fuerza de trabajo es ocupada principalmente en el rubro del algodón.

Tampoco se dice que ambos tipos de algodón transgénico, el RR y el Bt, causan dependencia de los agricultores hacia las corporaciones que venden semillas patentadas, porque socavan las bases de la economía familiar campesina al eliminar las semillas nativas. Esto representa una amenaza a la Soberanía Alimentaria del pueblo, porque afectará tanto a productores como a consumidores, y sólo aportará ganancias millonarias a corporaciones como la Monsanto, Cargill y otras.

A todo lo señalado anteriormente, se adiciona el factor de la contaminación de cultivos ocasionada por los rubros transgénicos, lo cual se agrava con la falta de leyes claras sobre la responsabilidad penal y comercial en este tipo de situaciones, ya que se convierte en un obstáculo para que los campesinos accedan a la administración de justicia para reclamar sus pérdidas a las corporaciones que introducen estos transgénicos de manera ilegal.

Qué se busca y quiénes están por detrás

Lo que se busca es introducir al mercado una semilla que es apta para su siembra y cosecha mecanizada. Es una semilla que por su longitud y características puede ser trabajada con máquinas cosechadoras de gran porte.

Esto quiere decir que en pocos años más, una vez que el uso de dichas semillas se haya generalizado, los precios de los insumos, el precio internacional, las regalías que haya que pagarse por las patentes a Monsanto, harán que el cultivo de algodón sólo sea rentable a gran escala, como lo es hoy la soja, que –como todos sabemos– es un rubro sólo para grandes propietarios capitalizados o para empresas.

Esto significará, lisa y llanamente, la acelerada desaparición del campesinado. Son 120 mil pequeños productores algodoneros los que –ellos mismos– se están poniendo la soga al cuello para que una vez llegado el momento, las corporaciones multinacionales pateen la silla sobre la que están parados. Si asumimos que cada una de estas familias tiene en promedio 10 has serán un millón 200 mil hectáreas las que el sector

campesino transferirá al sector empresarial de la agricultura paraguaya. ¿Qué harán esas 120 mil familias una vez que ya no estén en el campo?

El terreno se viene preparando: no es admisible que los empresarios con sus radios FM, los politiqueros y funcionarios corruptos de turno sigan prometiendo lo que saben perfectamente que no se va a cumplir; buenos precios y prosperidad para el campesino transgénico. Con un dólar a Gs. 5.300 será imposible pagar un precio que cubra ni siquiera los gastos que demandará la siembra y cosecha de una ha de algodón. El campesino perderá esta vez por partida doble. Por sembrar un rubro que no tendrá precio en época de cosecha y porque estará dictando la sentencia de su propia desaparición.

El campo debe estar en manos de las grandes corporaciones multinacionales. Este es el objetivo del neoliberalismo en su manifestación en la agricultura. Los campesinos deben abandonarlo, ya que en la tierra está la riqueza del futuro. En la tierra están los alimentos, en la tierra está el agua, en la tierra están las fuentes de energía, en la tierra está la renta diferencial del suelo, en la tierra está la construcción de paisajes para el turismo de 5 estrellas. En la tierra reside la principal fuente de superganancias para el capitalismo neoliberal que ya está con nosotros.

Si no entendemos estas cosas tan simples, por supuesto que no vamos a entender por qué están en nuestro país fuerzas militares norteamericanas, o por qué se abandona al campesinado a su suerte, o por qué se fomenta la siembra de *commodities* en detrimento de la producción de alimentos.

Si no entendemos aquellas cosas tan simples, no podremos entender por qué somos tan pobres y seremos más pobres en el futuro.

Paraguay: La destrucción de la vida campesina a manos de la soja*

Problemas medioambientales (destrucción de biodiversidad), de salud para quien los consume (por la manipulación genética y por el aumento del uso de pesticidas en muchos casos), de desigualdad social y hambre (las repercusiones sobre el campesinado son enormes), de irreversibilidad (la contaminación genética se reproduce a sí misma). Estos son algunos de los impactos negativos de la invasión de la soja en tierras paraguayas. El sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Asunción, Tomás Palau, afirma en un estudio que las ventajas del monocultivo de soja son nulas excepto para un sector social: los millonarios que dirigen las multinacionales agroindustriales.

El experto afirma que la situación actual de la agricultura en Paraguay, planteada por la nueva ofensiva de la agricultura capitalista, está compuesta por una serie de elementos nocivos: la conversión de la soja convencional a transgénica; la indolencia y complicidad en la acción gubernamental; el avance de la frontera del cultivo; intoxicación humana y contaminación de flora y fauna; la reacción campesina; creciente dependencia de importaciones a costa de las exportaciones; pérdida de soberanía; incremento del precio de las tierras; y presión externa para lograr el crecimiento del PIB.

* Entrevista. En: http://www.rapaluruaguay.org/transgenicos/Soja/Destruccion_vida_campesina.html

“Se trata de un problema complejo, que tiene como efecto social final más importante, el desalojo campesino de las áreas rurales del país”, señala Palau. Se expande el área de siembra del cultivo de soja en Paraguay. Esta superficie ya es de 1.176.460 hectáreas, 720.000 más en sólo cuatro años, lo que da un promedio de 180 mil has por año.

La soja plantada es casi toda transgénica (90%) traída de contrabando. Con esto se pierde soberanía genética sobre semillas convencionales que se habían desarrollado exitosamente en el país. Se introduce un factor de riesgo sanitario, ya que no está comprobado que los transgénicos no afecten la salud humana. Además se produce un efecto de contaminación genética a otros cultivos. Paralelamente, la Monsanto exige el pago de regalías.

Los cultivos con semillas transgénicas, que son resistentes a herbicidas, son profusamente fumigados con esos biocidas, muchos de los cuales son de uso prohibido. Estos biocidas producen en los humanos casos de muerte y de intoxicación, ya que las fumigaciones se hacen —muchas de ellas— mecanizadamente o incluso desde avionetas. Además de esto, destruyen cultivos de autoconsumo y producen mortandad en la fauna doméstica, ictícola y la microfauna del suelo.

El gobierno no actúa, ya que en el fondo, les conviene que aumente el área de siembra de la soja. La Policía (y en no pocos casos, el Ejército), la mayoría de los jueces y fiscales, actúan a favor de los grandes propietarios. La legislación ambiental sobre tierras, migratoria, etc., no se cumple.

Se produce así, gradual pero rápidamente, una triple pérdida de soberanía. Por un lado, se continúa perdiendo soberanía económica, ya que se depende de las exportaciones de un solo producto (soja) cuyas semillas serán proveídas por una sola empresa (Monsanto), el aumento de esas exportaciones a su vez, hace depender al país de importaciones cada vez más importantes. Por otro lado, hay pérdida de soberanía territorial, ya que inmensas extensiones de tierra son adquiridas por propietarios (privados o corporativos) extranjeros. Finalmente, hay pérdida de soberanía alimentaria, ya que el monocultivo desplaza la diversificación y con ello a los cultivos de subsistencia; además los campesinos expulsa-

dos de sus tierras migran a las ciudades en las que –para comer– deben pasarse al bando de los consumidores, habiendo sido antes productores de parte de su comida.

Los afectados, principalmente campesinos, actúan de tres maneras: conformándose con lo que les pasa, venden sus tierras, se van a los pueblos o ciudades y terminan empobreciéndose rápidamente, quedan fuera, excluidos; se organizan en coordinadoras departamentales por la defensa de la vida y el medioambiente. Esta respuesta “institucional” hasta ahora no dio muchos resultados por la insensibilidad del gobierno; u ocupan tierra, queman sojales, bloquean el ingreso de maquinarias y personal para fumigación. Esta reacción directa es reprimida por el gobierno. Palau afirma que si continúa esta tendencia que venimos observando desde hace algunos años se forma el siguiente escenario para el futuro próximo: un país con una gran cantidad de pobres (probablemente el 70% en no más de 20 años); casi completa desaparición de las clases medias urbanas; un pequeño grupo de familias tremendamente ricas; aumento de la delincuencia, del trabajo y explotación infantil, de la prostitución, consumo de drogas y alcohol; y creciente analfabetismo de la población, por falta de acceso a la educación y por su pésima calidad.

Además habrá el aumento de las enfermedades en general y de las de transmisión sexual, respiratorias agudas y las derivadas de la parasitosis en particular; aumento dramático de la desertificación del país por uso intensivo e irresponsable del suelo y por la deforestación; y aumento de la represión policial y militar para frenar el descontento social.

El Foro de la Triple Frontera, su importancia*

Más allá de los problemas propios de la organización de un evento multitudinario, esta versión del Foro de la Triple Frontera (FTF) ha reunido en el lugar apropiado a la mayoría de los grupos sociales representativos del país; campesinos, indígenas, mujeres, sindicalistas, estudiantes, así como también a connotadas figuras de países de la región, figuras y organizaciones que, junto a las nuestras, se esmeraron en mostrar los resultados de la política imperial norteamericana y de sus corporaciones transnacionales y de esbozar lo que puede esperarle a la región de mantenerse las actuales tendencias políticas.

Estuvimos los de siempre, pero estuvimos juntos. Esto de por sí ya es importante, porque el Foro dio la oportunidad para que evidenciemos que estamos en lo mismo y mostró, por ese hecho, la utilidad del “carpismo”, el estancamiento para el movimiento social que supone mantener cada grupo, cada organización una supuesta falsa identidad ante

* Citando a Ana Esther Ceceña y Carlos Motto, Zibechi expresa: “Realizar maniobras en Paraguay responde al objetivo de Washington para posicionarse en una región de doble importancia estratégica: grandes recursos naturales como el Acuífero Guaraní y una zona como la Triple Frontera donde confluyen los intereses y la cooperación de los dos países más importantes de Sudamérica: Argentina y Brasil”. Si el control de los recursos naturales es visualizado por las elites de Estados Unidos como una ventaja comparativa en su competencia interestatal (en particular con los países emergentes) para mantener su hegemonía global, para disciplinar la región busca introducir “una cuña para desactivar cualquier proyecto entre Argentina y Brasil que prescinda de la mediación de Estados Unidos”.

problemas que son de todos, ante problemas nacionales, ante problemas regionales, ante problemas mundiales. Ojalá cada uno de los participantes podamos tener la conciencia clara, de que cuanto más se tarde en concertar un pensamiento y una acción unitaria, más fácil será el camino para el despojo y el saqueo económico y militar que fuimos a denunciar.

En el lugar apropiado decía, porque la zona de la triple frontera es uno de los escenarios privilegiados por el Comando Sur del ejército norteamericano para instalar sus “ojos y oídos” en la región. De hecho, la Misión Internacional de Observación sobre militarización, que visitó el país inmediatamente antes del Foro, entre el 15 y el 20 de julio, entendió que no son precisamente bases, en el sentido tradicional del término, lo que el Comando Sur busca instalar en Paraguay sino unidades flexibles “multiuso” que permitan transmitir y procesar información, capacitar a militares paraguayos para el “trabajo sucio” de la represión y sólo eventualmente, utilizar el aeropuerto de Mariscal Estigarribia para operaciones de mayor escala.

Raúl Zibechi, quien estuvo en el país en esa misión, afirma literalmente; *“Paraguay está siguiendo los pasos de militarización de Colombia, aunque no existe una guerra en su territorio. El país se ha convertido en una pieza clave en los planes de control y dominación de América Latina por parte de los Estados Unidos, y vive además un proceso de militarización interna, en parte impulsado por la superpotencia pero también por los ganaderos y productores de soja que buscan contener a los movimientos campesinos”*¹. Esta síntesis expresa lo discutido en el primer Eje del Foro: “Soberanía, Militarización y Recursos Naturales. Estrategias hegemónicas para el control y apropiación de los bienes naturales”.

Vinculado a lo anterior, y como parte del eje económico de esa planificación del saqueo, el Foro abordó los temas vinculados a la “Integración y alternativas de los pueblos frente al capitalismo neoliberal”, el ALCA, la deuda externa, los tratados de libre comercio bilaterales, y los

¹ Entrevista. En: http://www.rapaluruaguay.org/transgenicos/Soja/Destruccion_vida_campesina.html

compromisos y desafíos de los movimientos sociales que luchan contra cualquier forma de dominación y son criminalizados por los Estados.

Ante la literal evaporación del intento ALCA de anexión norteamericana de nuestros países, el énfasis en este eje estuvo puesto en la criminalización de las luchas sociales, manifestada y denunciada principalmente por las organizaciones campesinas presentes en el Foro, con la visible ausencia de la Federación Nacional Campesina, poco proclive a este tipo de eventos.

Los movimientos de derechos humanos, de mujeres, de estudiantes y organizaciones barriales integraron principalmente el tercer eje del Foro, el de “Derechos Humanos, equidad, diversidad sexual, cultura, educación y comunicación”, con debates que enfatizaron principalmente la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales (DESCs).

Unas dos mil personas, el primer día, hicieron una marcha por el centro de Ciudad del Este mostrando a una ciudadanía más o menos apática la relevancia de los temas abordados. En ella la presencia de la comunidad libanesa, nos recordó a todos que las bombas que se están lanzando contra el pueblo libanés y sobre el Líbano, son agresiones de la misma factura que la que debemos soportar los pueblos latinoamericanos por los mismos comandos del imperio norteamericano que tanto pueden llamarse sionistas, como Cargill, Monsanto o ALCA.

El saldo es netamente positivo, aún cuando la prensa empresarial, súbita irredenta de aquellos intereses imperiales, casi no le haya dado espacio.

MERCOSUR, la ofensiva no conservadora*

Los neo conservadores asomados a su balcón que da al patio trasero de Washington deben estar poco satisfechos con el giro no conservador que dio –en muy poco tiempo– el “Mercado Común del Sur” en los últimos meses.

Allá por 2003, cuando el presidente Chávez anunciaba la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), planteaba una verdad casi de perogrullo: si no hay un interés político de los gobiernos, no puede haber integración. Sentencia que es la antítesis de los presupuestos que originaron en 1991 lo que pomposamente se firmaría con el nombre de Tratado de Asunción. El MERCOSUR de Menem, Collor de Mello, Rodríguez y Lacalle, postulaba una integración para comerciar e invertir, o sea, una integración funcional a los intereses de las corporaciones multinacionales. En Córdoba, en la cumbre del 20-21 de julio pasado, se planteó una integración para los pueblos.

Equivale a un cortocircuito en las redes de instalación del edificio neoliberal para Sudamérica. Mientras Duarte Frutos pedía inversión extranjera y volver a una zona de libre comercio (ahora ya es una unión aduanera) para poder firmar Tratados de Libre Comercio bilaterales con países de extrazona, el invitado comandante Fidel Castro pedía garanti-

* Sin fuente.

zar la alfabetización y la salud de los pueblos de los países que integran el MERCOSUR.

Lo acontecido en Córdoba puede considerarse un logro de la tozudez del presidente Chávez, apoyada por las cancillerías brasileña y argentina, un episodio importante en el proceso de disolución del bloque (por la posición subalterna y conservadora de los gobiernos de Vázquez y Duarte Frutos) o, el inicio de un MERCOSUR diferente.

En síntesis, lo planteado por Venezuela y Bolivia, con el apoyo de Cuba es: sigamos con la cuestión comercial, pero démosle un contenido social y, sobre todo, un mínimo consenso político a un eventual bloque económico y popular autónomo. Autónomo de Washington.

Para Mario Osava (de InterPress Service) *“la incorporación de Venezuela como miembro pleno amplía las tensiones políticas internas y externas del MERCOSUR, pero en contrapartida le agrega una mayor potencia energética y financiera que puede neutralizar factores de desagregación”*.

Citando al conocido Theotonio dos Santos, el autor plantea que para el bloque, Venezuela representa “un buen refuerzo” en capacidad de inversiones, por la disposición venezolana de destinar sus recursos financieros, agrandados por el alza de los precios petroleros, al desarrollo de la región y a la infraestructura de integración. Con ello el MERCOSUR gana mayor poder de atracción de otros países sudamericanos y de cohesión interna, contribuyendo a superar disensiones entre los países miembros plenos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Si el componente social y la mayor capacidad financiera y de inversiones pueden considerarse un avance, hay también temores de retroceso. El conservadurismo de los gobiernos de Paraguay y Uruguay, con los conflictos bilaterales que estos países mantenían con los dos grandes del bloque, más la incorporación de Venezuela puede llevar a los dos pequeños a insistir, como ya lo han hecho, en negociar tratados bilaterales por fuera. Sin duda, desequilibrar la balanza hacia la izquierda tiene el riesgo de tensionar en exceso una relación de por sí ya bastante conflictuada.

No obstante ello, debe tomarse en cuenta que la breve historia del bloque ha iniciado un proceso de tomar en consideración –aunque muy tímidamente– el componente social de la integración. Así el Protocolo de Ouro Preto, firmado en 1995, estableció la creación de la Comisión Parlamentaria Conjunta, que es un principio de integración legislativa, creó el SubGrupo de Trabajo N° 10 sobre Relaciones Laborales, empleo y seguridad social, así como la participación de representantes de organizaciones privadas y sociales en el Foro Consultivo Económico y Social. Si bien es poco, algo es.

Pero el avance en el campo social más importante, antes de la reunión de Córdoba, fue la “Carta Social del MERCOSUR”, firmada en Buenos Aires en el 2000¹ en la que se reconoce –entre otras cosas– que el bloque debe “*fortalecer los mecanismos de apoyo a los grupos sociales más afectados...*”. Hasta ahora, sin embargo, esa Carta, que es la principal apoyatura institucional existente para reencaminar al bloque, ha sido letra muerta. Posteriormente, ya en el 2005 se decide la creación de los Fondos Estructurales de ayuda a los dos países de menor desarrollo relativo del bloque, con la intención supuesta de disminuir las asimetrías económico sociales entre los Estados miembros. Por el momento también una declaración de intenciones.

Así las cosas el futuro del MERCOSUR aparece hoy más que nunca, incierto. Un sueño de Lula, como es consolidar la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones, conformada por los 12 países de la región, está en buen camino y avanzó con la adhesión plena venezolana al MERCOSUR, sueño que coincide con el de Chávez del ALBA (aunque estén Colombia y Perú de por medio). Pero por otro lado, están los intereses uruguayos y paraguayos, estrechamente adheridos a los de EEUU, gobiernos para quienes la presencia de Venezuela incomoda, más aún cuando se invita a Cuba a formalizar acuerdos comerciales con los países integrantes.

¹ Ver más detalles en Caputo, Luis (2003). El MERCOSUR y los derechos humanos, Asunción, BASE Investigaciones Sociales, Documento de Trabajo N° 105, diciembre.

Mercosur. Principales problemas y diferencias entre los miembros del bloque

| | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Uruguay | Venezuela |
|-----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|
| Argentina | | Precio del gas | Diferendos comerciales | Precio del gas | Yacyretá Comerciales | Pasteras | |
| Bolivia | Precio del gas | | Nacionalización del gas | Salida al mar | Tráfico de drogas | Ideológicas | |
| Brasil | Diferendos comerciales | Nacionalización del gas | | | Itaipú Comerciales | Comerciales | |
| Chile | Precio del gas | Salida al mar | | | | | Ideológicas |
| Paraguay | Yacyretá Comerciales | Tráfico de drogas | Itaipú Comerciales | | | | Ideológicas |
| Uruguay | Pasteras | Ideológicas | Comerciales | | | | Ideológicas |
| Venezuela | | | | Ideológicas | Ideológicas | Ideológicas | |

¿Qué es Comercio Justo?*

“Comercio Justo” es una traducción libre de una frase que en inglés suena como un juego de palabras. Libre Comercio en inglés se dice *Free Trade* y Comercio Justo se dice *Fair Trade*, el slogan era “*Fair Trade not Free Trade*”, que quiere decir: Comercio Justo y no Libre Comercio.

Pero para entender el Comercio Justo tenemos que entender primero lo que es el Libre Comercio.

¿Cuál es el circuito de los productos de un pequeño agricultor? Se observa de manera muy resumida el circuito por donde circula el producto de la finca campesina, el producto de los sojeros, el producto de los ganaderos y el del productor primario. Se corresponde bastante a lo que se conoce también con el nombre de Sistema Agroalimentario. En primer lugar está el productor, que puede ser un productor campesino, incluso un productor ganadero, sojero, en algunos casos puede ser productor de la explotación forestal, esta producción de ninguna manera llega directamente al consumidor.

Si recordamos aquella música portorriqueña que se llama Lamento Borincano, la letra refiere a un chico que va con su burrito y su carreta al mercado a llevar los productos de su chacra y termina el día, y no vendió

* Ortega, Guillermo, comp. 2006. Qué es Comercio justo. Asunción: BASE Investigaciones Sociales.

nada, vuelve triste y cabizbajo porque no puede llevar otras provistas para su finca. En este momento no solamente el lamento es borincano, sino latinoamericano total, donde ya se perdió esa vinculación humana, esa gran porción de la tela de araña de la que nos hablaba Sebastián Pinheiro ya no tiembla de la misma manera, la sociedad ya no tiembla junta. ¿Qué ocurre ahora? Una vez que el productor entrega su algodón en rama, su poroto o su maíz a un intermediario, su producto entra en un sistema que le es ajeno, los intermediarios ya están inscriptos en el circuito capitalista comercial, empresarial, como queramos llamarlo.

Si se traslada esto al mercado internacional, notamos que los intermediarios son muchos; el camionero, el almacenero, la desmotadora, etc., todos entran, pero básicamente los que controlan el negocio de la intermediación son las compañías multinacionales dedicadas a la agroexportación. Hay varias operando en el país, todas ellas conocidas por nuestros campesinos: Cargill, Dreyfus, ADM, el Grupo Estévez y otras.

Esas empresas agroexportadoras son como los “manguruyús” de la intermediación, suministran ese producto campesino a la industria, y la industria alimentaria está compuesta generalmente por grandes empresas de transformación, aunque muchas de ellas funcionan también como intermediarias. Este es el caso de Cargill. Cargill opera en muchos ámbitos, es decir, lo que en economía llaman “integración vertical” en este circuito del sistema agroalimentario.

La industria alimentaria, o más propiamente, el sistema agroalimentario, está constituido por las multinacionales vinculadas a la alimentación, pero no solamente a este rubro, sino a la producción de semillas, a la producción de biocidas en general y son empresas como Nestlé, Unilever, Kelloggs, Hellmans, todas empresas procesadoras de alimentos.

Dentro del sistema de las multinacionales participan también otros actores igualmente poderosos o hegemónicos. En efecto, una industria procesadora de alimentos no produce los envases, se los compra a otra empresa que hace envases. Siguiendo la cadena, esta empresa no hace publicidad, la entrega a una compañía dedicada a esa actividad.

Lo que vemos en la televisión por ejemplo, la Coca Cola no tiene una empresa publicitaria, contrata a Biedermann Publicidad o a Nasta y

ellos le diagraman la publicidad; las computadoras no las hace Unilever, ni Kelloggs, ni Nestlé, compran los softwares a la marca Microsoft así como los insumos; el diseño gráfico es parte de la publicidad, el diseño industrial es para los envases, para la publicidad, para todo.

Por otra parte, las multinacionales de alimentos necesitan de dinero, para eso apelan a los bancos, a casas financieras, que les dan el dinero pero que tiene un costo, que por supuesto lo trasladan después a su producto final. Igualmente, requieren de maquinarias, que también compran de empresas productoras de bienes de capital; necesitan combustible, entonces lo compran a Shell o a Esso, o a Chevron o a Texaco. De esta manera, las industrias alimentarias están fuertemente vinculadas al sector proveedor de servicios básicos, lo que obviamente tiene un costo, ese costo va al producto de la industria alimentaria. Asimismo, ellas no son quienes salen a las calles a vender su producción, sino que la entregan a las empresas distribuidoras, que pueden ser mayoristas, como las cadenas de hipermercados y supermercados, o la entregan –como se está implementando en Europa– a enormes Centros de Compras que vuelven a distribuir a los hipermercados y supermercados, y en algunos casos, como todavía se mantiene una variedad de distribuidores, al almacenero del barrio, en donde se compra con la libreta.

Una vez que el producto está en el Supermercado o en donde fuese, ahí va el consumidor, va a las bocas de expendio. Así pues, el circuito es largo y complicado para llegar al consumidor final. Un ejemplo sencillo: un frasco de Nescafé sale Gs. 6.000 (1 dólar), yo lo compro y pregunto, de estos Gs 6.000 que pagué como consumidor ¿cuánto se destina al que plantó y cosechó la planta del café? Si le llega un 5% del valor, o Gs. 50, o Gs. 100 es mucho, entonces, en la cadena agroalimentaria, este señor productor es casi prescindible, va a llegar un momento en que dejará de existir, se usará esencia saborizada de café, producida sintéticamente.

Por ahora ya estamos hablando de la soja en Paraguay como una agricultura sin agricultores. Los jugos que tomamos no tienen naranja, tienen “sabor” a naranja, los colorantes, los conservantes, los saborizantes, los helados, cuando dicen helado de chocolate, ¿ustedes creen que tiene cacao puro?, no, es una sustancia sintética.

Otro ejemplo más cercano a nuestra historia. Antes en el Paraguay, mal que mal, los hacheros de los quebrachales de Casado tenían trabajo para producir el tanino, el tanino se fue a la quiebra, ¿por qué?, porque se descubrió una sustancia química que curte el cuero, que es sintética, y es producida en laboratorios. Otro tanto pasó con la insulina, la insulina antes era el producto de una glándula endócrina de las tiroides de las vacas, de ahí se sacaba la insulina, después se produjo la insulina sintética y se terminó la primera forma. No lo deseamos, pero de aquí a que se produzcan alimentos sintéticos o automáticamente (¡con lo que es la nanobiología!) no falta mucho, ¿y el que producía el alimento?, ¿quién es el que producía el alimento? Es como el cuento del agua, en el año 2050 va a desaparecer, el campesino también quedará como un recuerdo del pasado. En efecto, en este sistema altamente tecnológico de producción alimentaria, el campesino es por ahora una molestia que hay que aguantar, pero que dentro de pocos años va a ser directamente sustituido.

La presentación del representante de Cancillería versó sobre los mecanismos de regulación del comercio internacional, esta regulación se complicó mucho porque no son empresas chicas las que intentan controlar el gran negocio alimentario mundial, sino enormes empresas que se pelean entre sí, entonces hay que poner reglas en este mercado y que no venga cualquiera a querer participar de la torta que se reparte allí.

Cuando hablamos de Comercio Justo, estamos peleando contra todo ese sistema. En la medida que nos acogemos a ese tipo de legislaciones, lo único seguro es que vamos a perder, de alguna u otra forma.

Ahora veamos qué es lo que plantea esta noción del Comercio Justo. Es un tipo de comercio que surge de una nueva relación libre, directa y honesta. En Paraguay la relación no es libre porque si no plantás algo, no comés; acá la relación es forzada, vos tenés que hacer eso, estás integrado a una cadena agro industrial, en este caso no se es libre. Para el Comercio Justo la relación es directa, es decir, salta la intermediación en alguna medida y va directamente al consumidor. Y es honesta, no fraudulenta, dando a entender que las reglas actuales del comercio agrícola internacional son fraudulentas.

El Comercio Justo engloba así a “tres nuevos sujetos económicos: los productores en vías de empobrecimiento, los consumidores solidarios y los intermediarios sin ánimo de lucro”. Esto surge en Europa, en el primer mundo, en los países desarrollados, donde los consumidores empiezan a ser conscientes del poder que tendrían para transformar las relaciones actuales de comercio agrícola internacional –porque finalmente el consumidor es el que manda–. Por eso es tan importante la industria y el rol que cumplen los medios de comunicación, las agencias de publicidad, porque “con la publicidad se modifica la conducta del consumidor”. Hay personas que se avergüenzan por usar ropas que no son de marca y entran en unos conflictos existenciales terribles. ¿Qué es eso?, es producto de la manipulación mental ejercida sobre estas personas que se dejan colonizar publicitariamente por las multinacionales.

Y si el consumidor toma conciencia de eso, es todo un peligro para el capitalismo, es más, el consumidor vota todos los días en el mercado cuando va a comprar, es decir, si yo tengo que comprar huevo y aceite para hacer mi mayonesa, voto por el productor de huevos que a lo mejor es un granjero. En cambio, si compro mayonesa Hellmans que es de una multinacional, estoy votando por las multinacionales y dejando de lado al productor, es como poner el voto en una urna, pudiendo hacer la mayonesa en casa.

Pero ser consumidor consciente no es suficiente, es necesario recompensar a las empresas o a los productores que tienen objetivos sociales que protegen el medio ambiente, que son capaces de mejorar las condiciones de trabajo de los productores.

Así es como se va armando esta Red de Comercio Justo entre consumidores solidarios, productores en vías de empobrecimiento e intermediarios sin fines de lucro. Nace del encuentro de estos tres nuevos sujetos. El Comercio Justo entonces es un enfoque alternativo al comercio convencional, es una Asociación de Comercio que busca un desarrollo sostenible para los y las productoras desfavorecidos o excluidos, busca proveer mejores condiciones comerciales a través de campañas de sensibilización.

Otra definición dada por la Coordinadora de Organizaciones de Comercio Justo de España, dice: “el Comercio Justo es un Movimiento Social integrado por productores y productoras, comerciantes y consumidores que trabajan por un modelo más justo de intercambio, posibilitando el acceso de los/as productores/as más desfavorecidos/as al mercado y promoviendo el desarrollo sostenible”.

En Holanda, en Brenkelem en el año 1969 se abre la primera tienda de Comercio Justo, dos años después ya habían 120 tiendas, esto fue posible por el sobreprecio. Hay una cierta superposición entre el sobreprecio por Comercio Justo y el sobreprecio por producción orgánica, entonces cuando uno hace Comercio Justo con productos orgánicos, que así tiene que ser, entonces ya uno no discrimina bien si ese sobreprecio es por el componente de Comercio Justo o si ese componente es por el producto orgánico.

Surge así la primera generación del Comercio Justo que se caracteriza porque son las mismas organizaciones de Comercio Justo las que asumen la función comercial y a la vez son las propietarias del capital en forma colectiva y asociada. Los productos importados por ellas mismas se venden en puntos de venta donde se garantiza su procedencia y se explica al consumidor cuáles fueron los precios de compra a los productores, así como todo lo que concierne al Comercio Justo. Los puntos de ventas son las llamadas Tiendas de la Solidaridad, pero igualmente se distribuyen los productos a través de colectivos y particulares, iglesias, comités de solidaridad.

El aspecto medular del Comercio Justo consiste en que se paga al productor asociado un sobreprecio que puede oscilar entre un 10 y un 15% por encima del precio del mercado mundial. Esa fue la primera generación. Después entra ya el concepto de fidelización, un término que en castellano quiere decir, ser fiel. ¿Qué es la fidelización?, es la medición o la valorización del grado de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, es decir, entre lo que la organización de Comercio Justo sostiene en su mensaje de sensibilización y lo que después hace en el mercado.

Las organizaciones europeas de Comercio Justo intentan garantizar la procedencia de la producción y la calidad, esto tiene que ver con lo or-

gánico o no, el respeto a la naturaleza en la elaboración a través de las marcas de Comercio Justo. Este tema plantea el problema de los llamados sellos de garantía. Por ejemplo, un consumidor sensible paga 15% más por el café, por la banana, el azúcar y otros productos en Europa, ahora, ¿quién garantiza que la etiqueta del producto que se compra es cierta? Es ahí donde nacen los sellos de garantía. En Europa hay tres marcas de gran tradición, Max Havelaar, Trans Fair y Fair Trade Mark, que son tres empresas que comercializan café, cacao, chocolate, miel, azúcar y té, con sellos de garantía. Para certificar esta garantía, tanto los productores como los productos, las organizaciones que importan esos productos y las que distribuyen, son sometidos a estrictas auditorías de control a cargo de las certificadoras. Esta es la segunda generación de Comercio Justo que está exclusivamente en manos de las empresas certificadoras.

Luego, si las empresas del sector lucrativo intervienen en el proceso de Comercio Justo, el principio de fidelización entra en crisis total, porque ya no se pueden garantizar los principios y criterios del mismo. Si empresas que han venido operando en el otro campo del circuito comercial mercantil como Unilever, Nestlé y otras, sacan la etiqueta de Comercio Justo, entonces cualquiera hace cualquier cosa, entonces es un contrasentido esto del Comercio Justo.

Lo antes mencionado crea una reacción y aparece la tercera generación de Comercio Justo, en donde los productores pasan a participar en la comercialización, el proyecto asociativo se amplía a los intermediarios y a los productores y éstos pasan a compartir el control de los precios de mercado, el consumidor responsable se activa y todos participan en el proyecto de economía popular y de esta forma, surge la economía solidaria o economía popular. No sé aún cuán avanzadas están las experiencias en la práctica, con respecto a esta tercera generación de Comercio Justo en la cual hay una coalición y activa participación de los tres actores: productores, intermediarios sin ánimo de lucro y distribuidores.

2007

Bush, extraviado en los laberintos asiáticos*

En su discurso pronunciado el 10 de febrero de 2007 en la conferencia de Seguridad de Munich (Alemania), el presidente ruso Vladimir Putin expresó que *“querer regentar el mundo de manera unipolar es ilegítimo e inmoral”*. Fue todavía más allá al afirmar que *“la problemática de la seguridad internacional es mucho más amplia que el tema de la estabilidad político-militar; porque abarca la estabilidad de la economía mundial, la eliminación de la pobreza, la seguridad económica y el desarrollo del diálogo entre civilizaciones”*.

Estas palabras cayeron como cascotes en techo de zinc a los “halcones” (línea dura neocon) que rodean al presidente Bush, que sólo ven agresiones cuando se trata de opinar diferente a ellos. En ese Foro el presidente de la Federación Rusa expresó también con respecto a Estados Unidos: *“Quiero señalar a propósito, que a Rusia, a nosotros, nos intentan aleccionar constantemente, enseñándonos democracia. Pero quienes lo hacen, ellos mismos [léase EE.UU.], no muestran muchas ganas de aprender”*.

La seguridad mundial así considerada por un grupo importante de naciones a su vez importantes, tiene varias dimensiones, no sólo la militar,

* Revista ACCIÓN N° 271 - Marzo, 2007. CEPAG.

sino también la política, la dimensión económica y la ideológico-cultural-religiosa.

En lo militar, durante los últimos meses se dieron dos acontecimientos (entre muchos otros reportados en la prensa mundial) que descolocaron la estrategia militar norteamericana a nivel mundial, pero particularmente en Asia, un continente que empieza en el Líbano, Siria, sigue en Irak, Irán, India, China y termina en el remoto oriente ruso.

Las pruebas del más reciente prototipo de los misiles Topol (el RS-12M1 Tópol-M (SS-X-27) que es un misil a prueba de cohetes antimisiles lanzado en noviembre pasado fue una primera advertencia. No diplomática como la que hizo Putin en Munich, sino militar. Según la fuente, este ensayo pone fin a las pruebas de una nueva ojiva para los misiles balísticos intercontinentales que a velocidad hipersónica cambian espontáneamente su trayectoria, lo que impide que puedan ser abatidos *“por los sistemas de defensa antimisiles existentes”*.

A este contratiempo, EE.UU. debió sumar uno más inmediato y concreto. El 11 de enero de 2007, China lanzó un misil de mediano alcance desde o cerca de su Centro Espacial Xichang, que subió hasta un punto cercano a su satélite climático Feng Yun 1C –en órbita polar desde 1999– a una altura de 864 Km., y lo destruyó. El misil tenía capacidad de maniobra y habría sido guiado por sistemas de navegación y rastreo a bordo, o por una guía controlada desde Tierra, o por una combinación de estos sistemas. Cerca de su punto de intercepción, el misil, o un misil a corta distancia portado por el mismo, fue apuntado hacia el satélite y acelerado por un motor impulsor de cohete para convertirse en un “vehículo cinético de destrucción” despedazando al satélite objetivo. Fue el primer ensayo exitoso de China de un sistema anti-satelital (ASAT), después de tres pruebas anteriores¹.

Con estas solas dos pruebas, Rusia y China pretenden demostrar a EEUU que su arquitectura de defensa antimisiles está obsoleta y –lo que es peor– que el propio uso de misiles norteamericanos (teledirigidos por satélites) puede verse desarticulado con la destrucción por

¹ García Manuel Jr. (2007) La nueva carta china en el póker de la guerra espacial. Counter Punch Rebelión.

parte del ASAT chino en caso de confrontación de su aparato bélico convencional.

No son solamente militares las consecuencias de estos eventos. Ahora parece que el gobierno de Bush tendrá que sentarse a discutir varios temas sobre los que antes ni pensaba dialogar. En efecto, la magnitud de los pagos de intereses a tenedores chinos de obligaciones, y la cantidad de moneda de USA en posesión de bancos chinos puede ser un factor en estas deliberaciones.

Como dice García, ¿qué significa esto para China? ¿Qué representa el ensayo ASAT chino políticamente? Tal vez sea una señal que insta a un freno del expansionismo de USA (por ejemplo, la guerra contra Irán). Tal vez sea una señal de promoción propia ante la comunidad internacional, para elevar la estima de China por parte de aquellos que tiemblan bajo la sombra del poder de USA. Tal vez sea una señal de un gran inversionista ansioso a un aventurero corporativo temerario, para que modere acciones que podrían poner en peligro el capital principal –no vaya a ser que los apreciados bonos de guerra dólares americanos se derrumben–. Tal vez sea un voto de confianza chino en un nuevo régimen de desmilitarización del espacio. Tal vez, aunque es muy poco probable, sea una afirmación de la agresividad china en una “guerra espacial”.

Lo que parece claro es que a los EEUU y más en particular al Pentágono, se le hace cuesta arriba implementar la tendencia a la transformación del ejército de EEUU en un servicio mundial de protección de petróleo –según Klare²– cuya función principal es proteger los suministros de energía en el extranjero junto con su sistema mundial de distribución (oleoductos y gaseoductos, buques cisterna y rutas de suministro). Esta misión conjunta se articuló en un principio por el presidente Jimmy Carter en enero de 1980, cuando describió el flujo de petróleo del golfo Pérsico como un “interés vital” para los EEUU, y afirmó que este país emplearía “cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza militar” para vencer cualquier intento de bloquear este flujo por parte de un poder hostil.

² Klare, Michael T. (2007). Las dos caras de un energo-fascismo emergente. La carrera energética mundial y sus consecuencias. *Znet*. Rebelión, febrero 15.

Agréguesele a esto que China, siguiendo el ejemplo de países como Singapur, Corea del Sur y Noruega, empieza a buscar nuevas formas de gestionar sus inversiones. En conjunto, estas decisiones de los bancos centrales repercuten en los mercados financieros de todo el mundo. El probable desenlace será una disminución de las inversiones en bonos del Tesoro de EEUU y más compras de instrumentos más riesgosos, pero con mejores retornos de largo plazo, como la deuda de empresas, acciones e, incluso, bienes raíces y *commodities*.

O tómesese de nuevo, lo mencionado por Putin en Munich acerca de la importancia de bloques como el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que superan en interés al que en comercio internacional puedan representar iniciativas más clásicas, o la participación de China y Rusia en la reciente cumbre de la ASEAN³ promoviendo su fortalecimiento, o el acuerdo energético de Rusia, Irán, India y China para la utilización de gas y petróleo. En estas iniciativas económicas que involucran a casi la mitad de la población mundial, los EEUU no están incluidos.

Por último, el despliegue propagandístico de la falsimedia que el mentado “choque de civilizaciones” explica la hostilidad norteamericana con el Islam, es cada vez más rechazado por la opinión pública mundial que percibe el enfrentamiento contra ciertos países árabes, simplemente como irreconciliables posiciones políticas. Con esto, EEUU pierde un arma ideológica clave para exculparse del saqueo y los crímenes cometidos —sólo recientemente— en Afganistán e Irak.

La seguridad internacional parece así, con sus múltiples dimensiones, haber dejado de ser un tema unipolar, sobre el que solamente EEUU tiene capacidad de tomar decisiones. Se lo están diciendo en la cara en foros internacionales, se lo están diciendo los avances militares en Asia, se lo están diciendo las bolsas con el desplome del dólar, se lo están diciendo los musulmanes con sus resistencias a invasiones diseñadas para el robo de sus recursos energéticos.

³ Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

Y a medida que se acercan las próximas elecciones que probablemente interrumpirán el continuado mandato de los republicanos en EEUU más desesperadamente Bush y su entorno necesitan un Irán, necesitan a Siria, a Venezuela, necesitan un chivo expiatorio que justifique la demencial política de saqueo internacional que realizan en el nombre de la “civilización occidental”, la democracia y el *american way of life*.

Hacia una mejor comprensión de las funciones de la agricultura*

Los avances tecnológicos o científicos que se produjeron en la agricultura (que han sido muchos) han tenido como objetivo básico aumentar los rendimientos (bien mayor productividad, bien menores costes) y facilitar el trabajo de las personas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Dos objetivos muy loables.

Pero esto se puede leer de otra manera: La historia de la agricultura ha sido y sigue siendo la obsesión por la reducción de los costes de gobernabilidad. Es decir, disminuir el número de personas dedicadas a la agricultura (la fuerza de trabajo) y mantener a estas personas, campesinas y campesinos, lo más distanciados posible de la toma de decisiones.

Desde hace 10 mil años (cuando se inicia la agricultura) hasta hace pocas décadas, regía el interés de producir alimentos para una población en crecimiento, interés que progresivamente fue sustituido por el de producir beneficios económicos. Donde había trabajadores agrícolas se sustituyeron por esclavos, donde no había fuerza de trabajo se importaron esclavos. Gran avance en la agricultura: al igual que los animales de tiro, trabajaban a latigazos y sólo recibían algo de comida. En nuestros días la práctica se mantiene igual de eficiente, como las mujeres boli-

* Seminario Clima y Agrocombustibles Ciudad del Este, 14 de julio de 2007. Basado en Gustavo Duch Guillot (2007) "Por primera vez en el planeta, la mitad de la población humana vive ya en zonas urbanas. La verdadera historia de la agricultura". El País.

vianas esclavizadas en las grandes plantaciones de viña en Chile, o los brasileños del nordeste esclavizados en los cañaverales para el etanol.

El capitalismo descubrió que la agricultura no era para producir alimentos sino para producir ganancias.

Como la fuerza de trabajo humana siempre podía representar problemas de sublevación, reclamaciones de sus derechos, etc., se la fue sustituyendo por maquinaria y tractores.

El progreso agrícola, a la vez que desplazaba mano de obra para los procesos capitalistas industriales, siguió introduciendo avances que dejaban a los campesinos sin control sobre los recursos productivos.

La fertilización artificial sustituye a la fertilización natural. Los campesinos han de comprar los fertilizantes y abonos químicos a las empresas igual que han de comprar recambios o combustible para sus tractores, en lugar de hacer uso de la fertilización natural de los animales o su fuerza de tiro, recursos que estaban en manos de los propios campesinos.

El mejoramiento de las semillas durante la llamada Revolución Verde (y ahora las semillas transgénicas) puede leerse desde la misma óptica: desposeer a los agricultores del control sobre sus propias actividades. Poderlos gobernar. Las semillas –regalo de la naturaleza– ya no las reproducen e intercambian los campesinos; se han privatizado.

En la era de la globalización, del mercado único, de la competitividad, de la desaparición de aranceles o regulaciones, la agricultura capitalista, en manos ya de muy pocas empresas, juega con los territorios agrícolas. Se deslocaliza la producción o procesamiento de alimentos a los países del Tercer Mundo donde la mano de obra sin apenas derechos laborales es, de nuevo, fácil de gobernar, fácilmente domesticable.

Están domesticados también los consumidores, ya que cada vez tenemos menos opciones para escoger y saber qué es lo que nos llevamos a la boca. Si no se frena el avance de una agricultura industrializada y uniformada que ha desplazado sus objetivos esenciales de asegurar alimentos sanos para todos, para alcanzar, eso sí, clasificaciones y cotizaciones económicas de primera magnitud, estaremos propiciando un verdadero desastre civilizatorio.

Las buenas intenciones no bastan. ¿Es el proyecto Lugo sólo un nuevo intento?*

El planteamiento que se presenta en este artículo¹ es que el proyecto Lugo, por llamarlo de alguna manera, está siguiendo el derrotero de una incompatibilidad larga y previamente anunciada.

La desintegración que padecen hoy las agrupaciones políticas vinculadas a este proyecto no es tanto el fruto de características de las personas y organizaciones sobre las que se apoya (aunque en buena parte también lo sea), sino y principalmente, de la lógica política sobre la que se estructuró: la lógica electoral y de búsqueda de figuración y de cargos de sus artífices.

Al caer en esta trampa, Lugo y sus adherentes han rendido tributo a la ausencia de patriotismo, a una honestidad sólo retórica y a una muy cuestionable idoneidad, rasgos que han sido sobresalientes en los más de sesenta años de pasantía de la ANR en el gobierno del país. En otras palabras, han aceptado jugar de visitantes en la cancha grande de los

¹ Muchas de las ideas aquí planteadas surgieron en conversaciones que tuve con Jorge Lara Castro, probablemente una de las personas más lúcidas que tenemos en el país, no sólo por sus análisis sino por su comportamiento político. Si algunas ideas claras son suyas, los eventuales errores en la formulación de las mismas y otras inexactitudes que puedan aparecer son exclusivamente mías.

* Revista NOVAPOLIS N° 2 (12) – Agosto, 2007. Germinal - Centro de Estudios y Educación Popular. En: <http://novapolis.pyglobal.com/>

dueños del país, siendo apenas un rejunto de jugadores inexpertos. Están guiados por el cortoplacismo de la agenda electoral.

Sin un pensamiento estratégico, sin un programa al que aferrarse, con los mismos métodos facciosos de sus oponentes y sin control del aparato electoral, la eventualidad de un triunfo de la candidatura Lugo sólo puede ser concebida como el resultado de un malestar generalizado del electorado, pero al que le faltará conducción política y por cierto, gobernabilidad.

Mientras tanto, los riesgos de una ruptura del proceso debido a la manifiesta ofuscación actual del oficialismo del Partido Colorado y la imprevisibilidad propia del líder de UNACE, fuerzan a suponer que (al menos) las embajadas de EEUU, Brasil, Taiwán y la Nunciatura preparan –bajo cuerda–, ellos sí, una estrategia de recambio no traumático para sus intereses económicos y geopolíticos.

Lugo parecería estar apostando por una estrategia minimalista: estos son los bueyes con los que hay que arar y conocido es el escarpado terreno en el que hay que competir con un partido burocrático que ejerce el poder desde hace 60 años, para esto el exobispo ha escogido arar con los bueyes históricos de la oposición parlamentaria. En esta lógica, es suficiente cambio un cambio de gobierno para generar otros, no muy grandes ni importantes, pero que al menos permitirían deslizar suavemente el plato de la balanza hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. La duda más importante en este caso es: ¿qué grado de transformación y en qué esferas de la estructura económica, política y social le será permitido introducir esos cambios por los verdaderos detentadores del poder?

En caso que Lugo no acceda a la presidencia, es obvio que las condiciones que hicieron posible su notable figuración en el escenario político continuarán existiendo, en cuyo caso la tarea más relevante sería, sin duda alguna, la construcción de un proyecto político propio de Lugo, más pegado a los movimientos sociales y sin las deudas políticas que supone negociar dentro de la Concertación Nacional.

¿Moda o necesidades compartidas?

Mucho se viene diciendo acerca de que los cambios políticos registrados en varios países de América Latina en los últimos años responden a una suerte de “contagio” del desempeño de gobiernos como el cubano o el venezolano, que se atrevieron a desafiar al imperio, que vive –probablemente– el peor de sus momentos por la acumulación de desaciertos.

Esta visión es desde luego ingenua y no toma en cuenta los elementos de la historia contemporánea latinoamericana que, tanto en sus facetas económica como política, muestra de manera harto elocuente la desintegración social producida por el neoliberalismo, por la impropriadamente llamada globalización. Ningún país de la región se ha librado de esta situación.

El único denominador común de los países cuyos electores han decidido rumbar hacia la izquierda, y aún de aquellos que se plegaron a la “onda rosada”, es que en los últimos dos decenios la pasaron mal: o con gobiernos corruptos, o con gobiernos mesiánicos, o con tecnócratas moldeados al formato de los Chicago boys, y en todos los casos, con incrementos en los niveles de pobreza que superaron cualquier antecedente en cada uno de los países².

El molde impuesto a los países de la región fue el de la re-primarización de sus economías, la consecuente des-industrialización y la adopción subalterna (a los países del capitalismo central) del rol de proveedor de materias primas para el mantenimiento de los niveles de vida acostumbrados en aquellos países. En el caso paraguayano durante los últimos años, la manifestación más elocuente ha sido la introducción de semillas transgénicas para la producción de soja forrajera para la ganadería europea y más recientemente el despojo campesino para la producción de agrocombustibles –biodiesel y etanol– ambos basados en monocultivos extensivos, prescindentes de mano de obra y expulsores de población campesina hacia mercados laborales urbanos ya completamente

² “Esta reestructuración neoliberal de la sociedad, del Estado y del mercado de trabajo ha incidido fuertemente en las formas en que se accede a los medios de subsistencia básicos para la reproducción de la vida (salario, relaciones de reciprocidad e intercambio, entre otros), configurando un nuevo mapa de la pobreza”, dice una convocatoria de la CLACSO (2007).

saturados. Si a esto se agrega la corrupción, es fácil comprender que “exista un deseo subjetivo de cambio de un sector mayoritario de la ciudadanía” (Richer, 2007).

No es pues obra de la moda que Lugo haya emergido como una figura relevante en el escenario político, su imagen es producto de la desesperación de más de dos millones de paraguayos que se debaten en la pobreza, es producto del apoyo que en su momento dio a campesinos en San Pedro que estaban siendo diezmados como productores por las corporaciones del agronegocio, su figura es producto de los cientos de miles de desesperados sociales que quizás no quieren cambiar el mundo, sino entrar en él, como decía Carlos Auyero. Piensan que como no es político es decente, piensan que como no es del aparato colorado no roba, piensan que como no tiene empresas no es favoritista. Piensan, casi, casi, que es un Mesías, como en su momento pudo haberlo sido y quizás lo siga siendo, Oviedo. Hasta un 30% de los votos para Lugo provendrían de electores colorados también pauperizados por la agroexportación y la corrupción. Esto está queriendo decir algo.

Lo que quizás puede considerarse algo relativamente nuevo (en realidad, algo similar ya se vivió con Asunción Para Todos, en las municipales de 1991) es la convocatoria de Lugo en lo que –muy ambiguamente– podría llamarse el sector medio y medio-pobre urbano del país, un sector que se caracteriza por su apatía, banalidad y conservadurismo político. Convocatoria, a no engañarse, generosamente engrosada por una buena parte de la feligresía católica bienpensante, el estudiantado de colegios confesionales y beneficiarios varios de obras de servicio. A este grupo sin embargo, poca gracia les hacen las obras y las pompas de un Chávez o de un Correa. Paralelamente a este entusiasmo de las clases medias urbanas, la adhesión de los movimientos sociales más importantes no se materializa, al parecer prefieren esperar a ver qué pasa.

El que sí parece estar influenciado por el éxito electoral de los nuevos gobiernos en la región es el propio Lugo, obstinado como el que más, en que podrá unir a todos los paraguayos en la tarea común de reconstrucción nacional, en la fundación de una nueva república basada en el consenso y la solidaridad. Dice el dicho que “a abad sin ciencia y sin conciencia, no le salva la inocencia”. Ingenuidad parece ser, por cierto,

admitir que en aras de la construcción de un edificio verdaderamente democrático para el país, los grupos de poder que se mencionan enseguida, acepten reducir sus privilegios y sobre todo sus márgenes de ganancia.

Cambiar para que nada cambie. O, el que nace para maceta no pasa del balcón

“Lugo cae bien a la gente, incluso en nuestras bases, no se puede discutir eso. El problema no está ahí, sino que surgió desde arriba para abajo y también puede sufrir contradicciones, depende de la movida de Lugo”. Belarmino Balbuena, MCP³.

Existe una confusión bastante grande en la ciudadanía acerca de lo que es el gobierno y lo que es el poder. De esta confusión sólo puede quedar la desazón. El gobierno, ya se sabe, es de los mediocres, o de los que pueden financiarse una campaña, o de los arribistas, o de los que maniobran, es de aquellos de los que está lleno el basurero de la historia. Así lo fue en nuestro país desde hace ya mucho tiempo. El poder sin embargo, es de los poderosos (y no es tautología ni redundancia, es énfasis), de los que realmente tienen la sartén por el mango.

Si los politólogos tienden a subestimar esta diferencia, cuánto más la prensa, empresarial e interesada precisamente, en encubrir los nombres y los circuitos del verdadero poder. En este contexto se acentúa aún más la figura mítica del exobispo como portador de soluciones sociales a los problemas que son inherentes a la misma estructura de la dominación oligárquica.

Asumo que todo gobierno posible en el Paraguay hoy, debe ser respetuoso de los intereses de los que tienen el poder real. Más que respetuosos tienen que ser funcionales a los mecanismos instalados de acumulación de riqueza. De no ser así, son eliminados (y Raúl Cubas, como pato de la boda lo sabe muy bien). La otra alternativa, la de desafiar al poder real implica una acumulación de fuerzas, una claridad ideológica y un grado de unidad tal, que permita –literalmente– gobernar con la

³ Citado por Ocampo (2007).

gente en la calle y desarmar el andamiaje jurídico-constitucional pacientemente diseñado en décadas de gobiernos estrechamente sumisos a aquellos intereses, cosa que ni remotamente se vislumbra en el proyecto Lugo que personifica la Concertación.

Sucintamente enunciados esos grupos de poder pueden, analíticamente⁴, ser clasificados en cuatro: la oligarquía ganadera heredera o usurpadora de inmensas extensiones de tierra, de buena parte del comercio de exportación, y de un nítido y prepotente prestigio social y político; el empresariado corrupto vinculado estrechamente al Partido Colorado desde la época de Stroessner, que es responsable de la sobreacumulación ilícita de riquezas vía licitaciones y contrataciones amañadas, contrabando, evasión impositiva, desvío de fondos públicos y otras fuentes; los narcos, que no sólo controlan territorios enteros, sino que producen marihuana, se dedican al tráfico de cocaína y otros estupefacientes y al lavado de dinero, están enquistados en los más altos niveles del gobierno, el ejército, la policía, el Ministerio Público y el aparato judicial; finalmente están las corporaciones transnacionales, que actúan no sólo por sí mismas, sino con la ayuda de los organismos multilaterales financieros y de “ayuda al desarrollo”, de la Embajada norteamericana, de la pléyade de tecnoburócratas neoliberales entrenados y diseminados para legitimar las bondades del modelo y de un cierto empresariado nacional más atento a las dádivas externas que al esfuerzo propio. El poder de este último grupo es creciente⁵.

⁴ En la práctica, los principales actores de cada uno de esos cuatro grupos tienen intereses en alguno o en los otros tres grupos, dado el sincretismo que caracteriza la estructura de dominación en el país.

⁵ “Cuando el poder económico privado concentrado de las grandes corporaciones le quita el gobierno, es decir, la decisión política al pueblo, y los gobernantes no son más que marionetas que ejecutan órdenes de las corporaciones, nos encontramos frente a lo que los diccionarios definen como fascismo, e incluso en una forma más avanzada”. Entrevista a Ralph Nader, quien llegó a ser una conocida personalidad por desarrollar una campaña en defensa de los consumidores en Estados Unidos. Ralph Nader fue también candidato independiente a las elecciones presidenciales estadounidenses en 2000 y 2004, y el único que puso en tela de juicio la versión oficial de los atentados del 11 de setiembre y los vínculos entre Israel y Estados Unidos. Es autor del libro: *The Good Fight: Declare Your Independence and Close the Democracy Gap*. La entrevista fue realizada por Amy Goodman (2007). www.voltairenet.org/article150019.html

Esta distinción entre gobierno y poder es clave para entender, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, las posibilidades de cambio realistas que existen en el país. Los gobiernos pueden alternarse, los gobiernos pueden incluso no alternarse (como es el caso paraguayo) aunque modificando la retórica⁶, pero no pueden afectar ciertos patrones de acumulación de riqueza pautados por los grupos de poder mencionados. Con el advenimiento de la “democracia” los movimientos sociales se percataron de la inamovilidad de las estructuras, supieron que pueden hacer todo el ruido que quieran pero sin tocar determinados intereses.

Este es el caso de la FNC, cuyos referentes en una entrevista (Palau, 2007) expresaron literalmente “...durante la época de la dictadura sabíamos cómo éramos perseguidos, no se podían reunir dos o tres personas. Ahora, nos reunimos todas las personas que queramos y donde queramos, pero cuando vamos a exigir nuestros derechos verdaderos empiezan a reprimirnos. Nos reuniremos, dialogaremos, gritaremos todo lo que queramos, pero sin tocar sus intereses. Entonces para nosotros lo que hoy llamamos democracia, en realidad no lo es, sino sólo una apariencia”. De la misma tesitura es lo que expresan –en ese mismo trabajo– los dirigentes de la MCNOC: “existe una... apertura política, hay posibilidades de organizarse, de articularse, pero no podemos avanzar hacia una democracia realmente económica, social y cultural, más bien la democracia está restringida a cuestiones electorales en base a los votos y no una elección de carácter participativo”.

La así llamada oposición parlamentaria es bastante menos lúcida, es un poco más de lo mismo que el Partido Colorado. Otros nombres y otros colores pero idéntica chatura intelectual, ausencia de proyección política y sobre todo los mismos hábitos electoreros y prebendarios que guiaron la conducta partidaria de las agrupaciones políticas paraguayas, antes y después del golpe de Rodríguez contra Stroessner. Han estado encerradas –y podrían seguir así por mucho tiempo– en el corral electoral. Consideran viable, todavía hoy, un proyecto democrático re-

⁶ Recuérdese que en la campaña de las internas del coloradismo para las elecciones del 2008, Nicanor, luego de la ruptura del clan Argaña, crea el Movimiento Progresista Colorado, y en no pocas alocuciones con su candidata Blanca Ovelar declara que el ideario de él y del coloradismo es socialista.

presentativo cuya dinámica empieza y termina en lo eleccionario, desconociendo de la manera más elíptica la forma en que la legislación y la institucionalidad electoral fueron construidas y funcionan: bajo control total de los grupos de poder y del coloradismo, que es su más fiel exponente político. Es obvio que allí no habrá fisuras que permitan la incursión de extraños.

Si la legislación y la institucionalidad electoral están viciadas y la oposición política hace como que no ve este “desperfecto” democrático, parece igualmente cómoda navegando en las aguas de una pretendida “representatividad” que no es cuestionada de ninguna forma. Asumen como natural que el voto “directo” del electorado a listas cerradas, que han sido confeccionadas de acuerdo al aporte económico de cada candidato, elige ciudadanos “representativos”. No dudamos que lo sean, pero habría que preguntarse de quién. Obviamente de quienes financiaron la postulación.

Por lo demás, la historia política reciente ha demostrado que a los partidos de la oposición poco les interesa ser gobierno, ellos se contentan con cargos; de ser posible en el Parlamento, en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, en la Cancillería o en los consejos de alguna de las binacionales. No les interesa trabajar, les interesa tener influencia, mandar, figurar y de ser posible ganar dinero en su pasantía. Los movimientos sociales parecen estar mucho más conscientes de la vacuidad de una democracia viciada en sus dos fundamentos políticos principales, la representatividad y la rectitud de los procedimientos electorales. Las expresiones arriba recogidas son claras así como coherente su comportamiento político, las dos federaciones campesinas más representativas, la Nacional Campesina y la MCNOC no apoyan el proyecto Lugo.

Así, como lo afirma Richer (2007), al aceptar Lugo disputar su candidatura dentro de la Concertación Nacional (CN) de hecho, acepta una alianza que lo llevará a asumir compromisos políticos con los partidos de centroderecha y con los sectores de derecha que lo componen⁷. Su

⁷ A raíz precisamente de estos compromisos, el Partido Humanista y el de los Trabajadores (PH y PT) se salieron del Bloque Social y Popular, compuesto además por Tekojoja y algunas centrales sindicales que continúan plegados al proyecto de la Concertación.

principal debilidad para disputar ese espacio es que carece de una organización y de una estructura organizativa que le permita enfrentar a ciertos aparatos partidarios de mucho peso, como el del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Pero al aceptar esas reglas de juego de la CN, Lugo –aunque cuente con el apoyo de ciertos movimientos sociales– “no puede ir más allá de derrotar al Partido Colorado, producir la alternancia y modernizar el Estado con la orientación que presupone la influencia de las principales fuerzas de la CN con el neoliberalismo”. Y esta es una suposición optimista.

Por esto, el proyecto Lugo sólo puede aspirar –cuanto más y siendo más optimistas de lo que la prudencia exige– a plegarse a la onda rosa de gobiernos de la región. Falta el contrapeso popular-progresista de los partidos del espectro de la izquierda que han tenido una “participación electoral que ha sido durante la transición, fragmentada, con una muy discontinua articulación con las organizaciones sociales y con una prácticamente nula acumulación, no ha ocurrido lo mismo en el plano de las luchas sociales, que han llevado adelante importantes acciones, muchas con un éxito importante” (Palau, 2007; 50). No parece que la coreografía de las próximas convocatorias a elecciones variará mucho.

En resumen, y como lo afirma Ocampos, “los líderes y referentes de los sectores sociales y gremiales que apoyan a Lugo están divididos ante la perspectiva de sumar fuerzas con partidos desprestigiados, de trayectorias diversas y en líneas generales partidarios del neoliberalismo” (2007; 19).

La incertidumbre como presente y como futuro

Es reconocida la capacidad psicopatogénica de la incertidumbre; produce inestabilidad emocional y propensión a conductas erráticas, imprevisibles, ciclotímicas. Al parecer, este cuadro es aplicable también a los cuerpos sociales, principalmente a los políticos y aún más en particular, al oficialismo del Partido Colorado.

La amenaza de una cierta posibilidad que el coloradismo pueda ser “alternado”, ha llevado al Presidente de la República –responsable directo de una eventual salida del poder de su partido– entre otras cosas, a

habilitar una red nada despreciable de “providencia social focalizada” con fondos provenientes de préstamos externos y de dispendios de las dos binacionales hidroeléctricas, fondos que han sido orientados al proselitismo y a calmar las necesidades de grupos específicos de adherentes. No menos elocuentes son las recientes ampliaciones aprobadas al Presupuesto General de la Nación y el anuncio de un reajuste salarial al funcionariado público a partir de enero 2008 (en abril son las elecciones generales). El nerviosismo es patente, la prudencia le es esquiva. El problema es que, como dice el refrán, cuanto más escarba la gallina, más tierra se echa encima, con lo que el ciclo de impertinencias se amplifica.

Pero no es esa la principal incertidumbre que se cierne sobre el país. Mal que mal, los paraguayos estamos acostumbrados, por una razón u otra, a vivir pendientes de un hilo. La emergencia de Lugo, la papa caliente que significa Oviedo en el tablero de las movidas de Nicanor, la forma como se dirimirá en diciembre la pugna partidaria interna, las futuras alianzas que eventualmente pueden sellarse entre los defensores del statu quo y los que pugnan por cambiarlo, plantean a la ciudadanía —cada vez más descreída de sus “representantes” políticos (incluyendo a Lugo)— una suerte de hartazgo, que hasta uno se atrevería a pensar, desmoviliza.

Los que no están “desmovilizados” son los dirigentes de las cúpulas partidarias, principalmente las de aquellos partidos que están en el Parlamento. En puertas de la interna colorada la crispación política va en aumento, lo cual produce no sólo un aumento en los decibeles de violencia en los discursos verbales, sino una casi total renuncia a las funciones propias del gobierno de un país. Todo paraguayos sabe también que si bien el principal adversario de un colorado en el gobierno es otro colorado de diferente lista, llegado el momento clave, se unen y actúan como un bloque. Sólo que en este momento, el deterioro social y económico está llegando a la sima⁸ y el horno político no parece estar para bollos ni refritos partidarios. El margen de gobernabilidad (entendida como el manejo político de los problemas sociales) se ha reducido al

⁸ Cavidad grande y muy profunda en la tierra.

mínimo y los encontronazos del tendotá no se limitan a sus adversarios internos.

No son pocos los rumores acerca de que el choque entre la ola de conflictos políticos con la crítica situación social, más los sucesivos temblores de tierra producidos por la candidatura Lugo y el tortuoso proceso a Oviedo podrían provocar un tsunami en el débil andamiaje institucional de la “democracia”.

Ante este panorama los grupos económicos se ponen nerviosos, y tanto más nerviosos cuanto mayores son sus intereses en juego. Esta realidad conduce al razonamiento a suponer que los defensores de esos intereses hacen sus planes, estos sí estratégicos. EEUU tiene mucho que perder si las cosas van mal en el Paraguay, desde sus buques insignia de la agricultura (Monsanto, Cargill), hasta sus intereses geopolíticos puestos en el agua y el control sub regional. De la misma manera Brasil, con sus más de 300 mil connacionales habitando el Paraguay hasta Itaipú, Taiwán que depende del apoyo político paraguayo en foros internacionales multilaterales y el Vaticano, que desde tiempos inmemoriales ha dado al César todo lo que es del César, y hasta con propina principalmente desde que Ratzinger asumió la jefatura del Estado en su sede central. Todos ellos están más que interesados en que no se hagan olas, que todo siga como está, porque así como están las cosas les está yendo muy bien.

No es para nada arriesgado suponer que –al menos– los cuatro representantes de esos Estados estén ajustando un plan alternativo para cualquiera de las formas que pudiera asumir un quiebre institucional en el país. Este plan (o planes) estará desde luego ajustado a sus intereses, tendrá poco o nada que ver con las prioridades del país, y contará –¡cuándo no!– con la venia obsecuente de los más conspicuos representantes de los grupos de poder real internos antes mencionados.

Los defensores de la “onda rosada” de gobiernos sudamericanos (Lula, Kirchner, Vázquez, Bachelet) manifiestan claramente que éstos crean mejores condiciones que los anteriores, que dada la sensibilidad social de sus agendas, los movimientos populares se sentirán menos presionados y lograrán hacer avances hacia una reforma social de sus respectivos Estados. Sin duda, es una manera de ver las cosas, es el polo

minimalista de lo que Correa o Chávez parecerían estar planteando con más acelerador y sin *air back*. Lugo, en el mejorcito de los casos, sólo puede aspirar a que lo colorado se convierta en rosado⁹.

Cabe sin embargo la duda acerca de cuál es el máximo que los terratenientes, los narcos, el lumpen empresariado y las transnacionales están dispuestos a negociar, y el mínimo que las organizaciones sociales estarían dispuestas a recibir para mantener una mínima gobernabilidad. Y cabe también preguntarse si, de darse la alternancia, el Partido Colorado ya en la llanura estaría dispuesto a colaborar en ese proyecto de Lugo de la reconstrucción nacional.

En otras palabras, la duda más importante en este caso, es: ¿qué grado de transformación y en qué esferas de la estructura económica, política y social le será permitido a Lugo introducir esos cambios por los verdaderos detentadores del poder?

¿...y si no hay cambios?

Ahora bien, dada la escasa diferencia en las preferencias electorales entre el candidato colorado y el de la Concertación, es bastante posible, por lo dicho anteriormente, que el coloradismo tenga un nuevo período.

Lo que quedaría garantizado en este caso es el mantenimiento de la actual situación, esto es, de la situación que ha caracterizado al país durante los últimos 18 años. Se podrá tener énfasis diferentes según sea Blanca Ovelar o Castiglioni quien asuma la presidencia, pero el núcleo del poder real –todo hace presumir– continuará intacto. La forma como se genera riqueza continuará siendo la misma. Este escenario, que podría parecer pesimista para muchos, podría sin embargo, incubar los gérmenes de un cambio mayor en el 2013 del que podría esperarse para el próximo año, con la peculiar alianza electoral de Lugo. ¿En qué sentido?

⁹ Mientras tanto, sotto voce las bases coloradas estarían recibiendo instrucciones que en caso de que pierdan las elecciones del 2008 arrancarían a la izquierda sus banderas y pasarían a defender una posición antineoliberal a ultranza, en un ataque desde la oposición que no se limitaría precisamente sólo a lo ideológico.

Un nuevo gobierno colorado significará necesariamente un mayor desgaste político de dicho partido por varias razones; la corrupción deberá continuar para mantener funcionando los mecanismos principales del sostenimiento político del gobierno, el “modelo” económico no variará (es más, con Castiglioni probablemente se acentuará) y se seguirá expulsando campesinos de sus tierras, se mantendrán altos niveles de exportación de pobres al exterior (emigración), por efecto de los monocultivos el precio de los alimentos aumentará a niveles muy altos, la represión deberá también crecer (de ahí la necesidad, para el gobierno, de aprobar las modificaciones al Código Penal), la oposición parlamentaria será arrastrada también a niveles aún mayores de descrédito y en suma, las condiciones para la emergencia de un proyecto político auténticamente transformador serán más claras.

Algunos colegas opinan que la alternancia en sí ya es un gran avance y que por ella vale la pena jugarse. Si bien este razonamiento tiene algo de verdad, está lejos de ser políticamente defendible. La alternancia con fracaso administrativo sería, de hecho, mucho más nociva que una situación de no alternancia que permita, para el futuro, la construcción de un proyecto de cambio social y político más sólido.

Sin respaldo de los grupos sociales organizados, principalmente los movimientos campesinos, sin un grupo de gente que piense en un proyecto de país para todos, sin una dirigencia que modifique radicalmente la práctica política, sin el diseño previo de las modificaciones jurídico institucionales que deberán introducirse en el andamiaje de la República, no hay mesías que pueda redimir una situación como la que el país está atravesando.

Bibliografía

CLACSO (2007). Concurso de proyectos de investigación 2007. Tema: “Producción de pobreza en América Latina y el Caribe”. Buenos Aires, Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales.

Ocampos, Genoveva (2007). Informe Democracia y Desarrollo 2006-2007, Borrador Capítulo Paraguay, Asunción, BASE-ECTA/ALOP.

Palau, Marielle (2007). El movimiento popular paraguayo: entre la fragmentación y la unidad. Informe Final. Asunción. Concurso de proyectos para investigadores de América Latina y el Caribe. “Partido, movimientos y alternativas políticas en América Latina y el Caribe”. Programa de Becas CLACSO-ASDI de promoción de la investigación social, 2003-2005.

Richer, Hugo (2007). “La crisis y una nueva transición”. En Acción, N° 272, abril, 7-11.

Stefanoni, Pablo (2007). “¿Fin de época en Paraguay?”. En Le Monde Diplomatique, Año IX, N° 97, julio, 8-9.

Algunas cosas que no se dicen sobre la situación económica mundial y sus impactos sobre el Paraguay*

De cómo la caída del dólar podría causar enormes problemas a nuestra desfalleciente economía

El dólar llegó a un nivel de depreciación que nunca había alcanzado: hay que pagar US\$ 1,49 por cada euro que se quiera comprar, y la onza de oro alcanzó la cifra de US\$ 830 (1 onza igual a 437,5 gramos), lo que significa que cada gramo de oro cuesta \$ 1,90, o sea, G. 8.840. El barril de petróleo se mueve en la franja de los US\$ 90 (oscilando entre US\$ 99 y US\$ 86 durante la última quincena). Para un país no exportador de petróleo en la así llamada “zona dólar”, esto traerá consecuencias que las autoridades de nuestro país no sólo no las están previendo sino que ni siquiera las informan.

El Paraguay es un país agroexportador “insumodependiente”, esto quiere decir que las exportaciones (lo que se vende al exterior) dependen fuertemente de las importaciones (lo que se compra del exterior). Si el país no importa petróleo, maquinarias, semillas, agrotóxicos y otros bienes de capital para procesar y exportar soja, por ejemplo, no se podría exportar esa oleaginosa. Ahora bien, la soja en granos es una *commodity* que si bien tuvo en repunte en su precio **nominal** de ninguna manera llega a compensar los aumentos que tuvieron los insumos que hacen falta para producirla. Como ejemplo, pongamos que la soja en un período determinado sube de US\$ 250 a US\$ 310 la tonelada: aumentó

* Sin fuente.

24%. Para ese mismo período el petróleo pasó de US\$ 60 a US\$ 90 el barril: aumentó 50%. El Paraguay en ese período perdió un 26% en los términos del intercambio soja-petróleo. Este es obviamente un negocio a pérdida para el país. Ningún inversor sensato seguiría este modelo. Esto explica por qué a pesar de que el dólar bajó de G. 6.000 a G. 4.600, aumenta el precio de las naftas, del diesel, del gas doméstico y de muchas otras mercaderías de consumo masivo.

Las explicaciones de muchos analistas económicos conservadores –y hasta hace poco tiempo del propio presidente del Banco Central– tendían a ocultar el problema argumentando que el dólar caía por las remesas de los paraguayos en el extranjero y otras falsas razones que más sonaban a excusas que a análisis serios. Al parecer, el no admitir o negar la realidad los exime de pensar en las estrategias para contrarrestar los efectos que se vienen. El dólar está cayendo a nivel mundial y nosotros estamos cayendo con él. No hace falta ser economista para entender procesos como éste.

Pero, ¿por qué cae el dólar?

De cómo la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos tendrá repercusiones nada agradables en países como el nuestro y de cómo esa burbuja no es sino la gota que colmó el vaso del sistema financiero mundial.

Éramos pocos y parió la abuela¹ dice el refrán, que en este caso puede aplicarse al sistema financiero mundial pero cuya desgracia surgió en Estados Unidos hace unos meses. En efecto, las cuentas públicas venían mal en Estados Unidos de América: déficit comercial impresionante, déficit fiscal sin precedentes y desaceleración del aparato productivo.

Como además se daba un proceso inflacionario, el *Federal Reserve* (equivale al Banco Central de ese país) no encontró mejor cosa que alzar gradualmente las tasas de interés –que hasta hace unos tres años

¹ Éramos pocos y parió la abuela es como decir que, por si ya no había suficientes cosas que funcionasen mal hasta el momento, de repente llega otra cosa más grave aún. Esta expresión (muy utilizada, por cierto) es el equivalente español a lo que viene siendo la Ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. Y si además puede empeorar, lo hará.

eran de apenas el 1%— de modo a controlar la inflación y, de paso, atraer capitales —de tipo especulativos, de esos que buscan tasas altas para instalarse— para disponer de dólares sin emitir.

En el momento de las tasas bajas, los bancos pero especialmente las empresas inmobiliarias ofrecieron créditos muy convenientes para la compra de casas. Entre 8 y 9 millones de norteamericanos se embarcaron con esas tasas bajas a comprar casas con créditos hipotecarios, al subir después las tasas de interés no pudieron amortizarlas y las empresas inmobiliarias empezaron a ejecutar hipotecas. Las casas bajaron de precio y no se vendían, o sea, no pudieron recuperar esos fondos. Los bancos que se embarcaron con las inmobiliarias se quedaron sin liquidez². Varias empresas inmobiliarias quebraron y los bancos sólo pudieron mantener su liquidez con ayuda de los bancos centrales de sus países... ya la crisis se había extendido a Europa. Todo esto tuvo su repercusión en las bolsas que hasta ahora se encuentran sacudidas por las caídas y las recomposiciones.

El efecto de esto es múltiple: el sistema financiero mundial tambalea, la economía norteamericana podría entrar en recesión (de hecho ya entró, según un reciente ajuste de la tasa de crecimiento del PIB hecho por el *Federal Reserve*), el dólar se debilita aún más, las inversiones norteamericanas en el exterior disminuyen.

El aumento de las tasas de interés golpea a los países deudores como el Paraguay, la recesión norteamericana implica aún menos compras de ese país al nuestro (ya tenemos un déficit importante en la balanza comercial), deben esperarse menos inversiones privadas directas en dólares, y si se sigue valorizando la moneda local (el guaraní), no sería impensable el ingreso de capital especulativo al sistema financiero local. Esto es un cóctel peligrosísimo para una economía tan frágil como la nuestra. Incluso, ante el desconocimiento del público local, algunos bancos extranjeros instalados en el país están ofreciendo en guaraníes créditos hipotecarios a bajas tasas, replicando la perversa ecuación norteamericana. Si estos créditos se masifican y el ajuste económico con-

² Esto es en realidad mucho más complicado, por los paquetes financieros en que se envolvieron las hipotecas de difícil cobranza. Acá se hace una sobre simplificación del problema a los puros efectos didácticos.

tinúa, la ejecución de las hipotecas de los prestatarios morosos llevaría a una concentración inmobiliaria aún mayor en el país y la quiebra de muchas familias de clase media que se embarcaron en este vidrioso negocio, que se quedarían sin casa y sin lo que ya habían pagado por ella.

De cómo el aumento del precio del petróleo está llevando al país a un verdadero callejón sin salida

En el interior del país un litro de leche cuesta G. 2.000. El litro de gasoil G. 4.250. Un vehículo que consume 10 litros por cada 100 km gasta en 10 km el equivalente a dos litros y un cuarto de leche. Para graficar: un vehículo gasolero que hace un viaje de ida y vuelta a Ciudad del Este gasta 65 litros, o sea G. 276.250. Con este dinero se podrían comprar 138 litros de leche, suficientes para alimentar durante un mes un hogar de 7 integrantes. ¿Esto a Ud. le parece lógico?

Resulta claro que no. Así como tampoco es lógico que teniendo dos grandes hidroeléctricas compartidas, una totalmente nacional y otra en proceso de construcción se estén asfaltando más rutas (el asfalto es un derivado del petróleo), comprándose más vehículos, tractores para una agricultura sin agricultores que expulsa campesinos, y muchos otros detalles, en vez de aprovechar la energía eléctrica que se está malvendiendo (por no decir regalando) a Brasil y Argentina, para aplicarla al transporte de cargas y pasajeros, o fomentando una agricultura falsamente “moderna” (“modernosa” diría yo) dependiente del petróleo, en vez de producir alimentos ecológicamente, con un precio internacional ciertamente más alto (mucho más alto) que soja transgénica saturada de agrotóxicos exportada en granos para hacer de forraje a los cerdos y vacunos europeos.

El seguir siendo dependientes del petróleo, que se acerca peligrosamente a los US\$ 100 el barril es directamente insensato. Sólo produce ganancias a las multinacionales petroleras, a las multinacionales automotrices y de autopartes y a los empresarios del transporte (que con contadas excepciones constituyen el sector más corrupto del empresarial nacional).

El analista económico Manuel Freytas³ menciona tres elementos básicos que acosan al petróleo: reducción de las reservas y *alta demanda*, escalada de precios y especulación financiera, y fracaso cada vez más evidente de los llamados biocombustibles *para reemplazarlos como alternativa energética mundial*, que lo convierten a su vez en potencial detonante de conflictos geopolíticos-militares a corto plazo.

La gravedad del problema del petróleo para un país no productor como el nuestro es pues grave, su encarecimiento dispara la inflación (aún cuando el gobierno nos quiera convencer que el costo de vida en noviembre bajó un 2,2% porque bajaron de precio las verduras), y la inflación corroe los ingresos de los trabajadores (que son pocos y que mantienen a los que no trabajan en la familia).

El resultado de todo esto es el aumento de la pobreza. No creo que sea casualidad que el gobierno no haya publicado el comportamiento del índice de pobreza en el país para el año 2006 y que cuando la FAO, en un encuentro realizado a fines de noviembre, apuntó que la pobreza en el país llegaba al 42%, por presión del gobierno su representante residente tuvo que desmentir el dato.

Más allá de estas sutilezas técnicas, los resultados de un modelo basado en el dólar, especulativo desde el punto de vista financiero y dependiente del petróleo, sólo augura mayor pobreza para el país. Esto lo saben perfectamente el gobierno y los neoliberales. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no explican estas cosas al pueblo?

³ Freytas, M. (2007). Agotamiento de las reservas mundiales. El papel estratégico del petróleo en la crisis global del sistema capitalista, www.iarnoticias.com, 3 de diciembre.

Todos los incendios son provocados*

Los organismos internacionales, principalmente dedicados al tema del cambio climático, los entes gubernamentales, la prensa y, por extensión, hasta mucha gente normal se han acostumbrado a usar una frase perversa: “es un desastre producido por la acción del hombre”. Este es un giro semántico, o sea, una manipulación verbal según la cual la responsabilidad se diluye “entre todos los hombres” (imagino que incluirá también a las mujeres y que se trata simplemente de una expresión machista).

Es cierto que todas las personas, allá en el fondo, algo tenemos que ver con los desastres climáticos y ambientales, pero la mayoría de los desastres son producidos por “algunos hombres” que tienen determinados intereses (casi siempre económicos), que profesan una determinada ideología y que adhieren a un determinado sistema económico. Para hacerlo corto, la inmensa mayoría de los desastres climáticos, ambientales y otros desastres naturales son producto de la evolución del capitalismo o, más propiamente, del desenfrenado afán de lucro y consumo que es propio de los así llamados países desarrollados y de las elites y oligarquías de los países no desarrollados o pobres.

* Revista ACCIÓN N° 278 - Octubre, 2007. CEPAG.

Más de uno dirá: bueno, una parte de los incendios de agosto en el país no fueron provocados, fueron “naturales”. De nuevo estamos ante una falacia, ya que el hecho que no haya existido alguien que puso un fósforo en pasto seco no quiere decir que no haya sido provocado por un fenómeno climático. Ya en primaria aprendimos que no existe la generación espontánea, todo fenómeno –natural o no– tiene una causa. Asumiendo entonces que no hay incendios no provocados, continuamos.

La inmensa mayoría es producto del interés de lucro, es cierto, pero hay sin embargo algunos incendios que derivan de una cierta manera de pensar, de una cultura ancestral según la cual el fuego limpia y regenera, una herencia antigua (la cultura de la roza y quema) en un contexto nuevo, en el que ya casi no queda monte para hacer rozados. Es la del campesino, acostumbrado como estaba a ahorrar tiempo y esfuerzo y culturalmente subyugado por la magia y la hipnosis del fuego. Tema que ha sido abordado por múltiples antropólogos y hasta por el padre del psicoanálisis.

Pero la mayoría de las quemazones parecen provenir de tres fuentes para nada psicoanalíticas ni culturales. Las provocadas por los latifundistas, acostumbrados –ellos también aunque con muchísimos más recursos que los campesinos– a gastar lo menos posible y obtener la mayor renta posible. Regenerar pasturas por vía de la quema. Habría otros métodos para hacerlo pero año tras año, sin penalización alguna, ahorran a costa del riesgo ajeno y de la destrucción ambiental.

Los otros actores por detrás de los incendios son algunos empresarios (¿?) madereros a quienes más le cabría la descripción de traficantes de rollos. Estos no hacen leña del árbol caído, sino ganancias libre de costos, de árboles quemados. ¡Qué mejor para estos delincuentes que un incendio que arrase con bolsones de monte para aprovechar rollos lampiñados!

Y sin pruebas pero con fundadas sospechas estarían los invisibles agentes del agronegocio. Poner soja o en menor medida caña de azúcar en un monte está siéndoles cada vez más difícil y expulsar a campesinos les exige ingentes gastos en la contratación de matones armados. No parece haber procedimiento más inocuo (para ellos) y más efectivo que

se quemen los montes donde luego pondrán el monocultivo y se asfixie por humo, necesidad o hambre a los campesinos cuyas tierras podrán —sobre las cenizas que queden— ser adquiridas a precio de remate, también para implantar monocultivos.

El panorama se conforma de esta manera con ribetes desoladores, no tanto por la fantasmagórica imagen de tierras calcinadas, sino por el control que tienen actores como los recién mencionados sobre nuestras fuentes de vida, sobre nuestros recursos. Se trata de hecho de un poder despótico, impune, sobre la naturaleza y la vida humana.

Habiéndose aplacado temporalmente los incendios aparecen los pescadores en río revuelto. La asistencia proveniente de la declaración del “estado de emergencia”, decretado a las cansadas por el Ejecutivo, está siendo canalizada en gran medida con criterios políticos, se trata sin duda de una catástrofe oportuna ya que posibilita aumentar la clientela político-electoral en vísperas de elecciones.

Pero no sólo son los políticos quienes tratan de sacar provecho. ¡Hasta la Asociación Rural del Paraguay (ARP) declaró una “cruzada nacional” para asistir según ellos a 100 mil pequeños productores afectados por los incendios! Uno de sus directivos anunció que pedirán para esto ayuda a los ganaderos, a las empresas proveedoras de tractores, de agroinsumos, de semillas, etc. O sea, dos sectores que a la postre terminarán beneficiados con los incendios son los que ahora (ante el hecho consumado) se muestran como caritativos ciudadanos ayudando a los pobres campesinos.

En esta gran puesta en escena nacional del drama campesino ellos sí tienen por delante un futuro incierto. Por lo menos hasta enero podrán presentarse casos de hambruna, aumento de enfermedades por desnutrición, emigración masiva a centros urbanos, cesión de tierras productoras de alimentos a empresarios de monocultivos, aumento de la dependencia alimentaria. En fin, una aceleración del proceso que el país ya viene viviendo desde hace bastante tiempo.

En esta nada estimulante realidad es interesante destacar la postura del senador Ronaldo Dietze, defensor él de los monocultivos pero ciertamente coherente y honesto, quien se propone presentar al Congreso un

proyecto de ley que prohíba la quema de campos durante los meses de mayo y octubre. Si bien en un país en el que los poderosos no respetan la ley éste es un comienzo. Por lo menos alguien tiene la valentía de hacer planteamientos sensatos.

Los incendios de agosto y setiembre nos dejan una lección, las prácticas depredadoras están más vigentes que nunca, la búsqueda del lucro fácil es la motivación de las elites que controlan el país y que los incendios pueden evitarse: la depredación puede frenarse y las condiciones climáticas que hacen posibles tales desastres están en nuestras manos. Recuerdo en estos momentos una frase que se la escuché a un maestro, Luis I. Ramallo (ex sj): “el subdesarrollo es principalmente mental”.

2008

Intereses económicos fuertemente entrelazados*

Sin el sistema o estructura de los agronegocios, la producción de agrocombustibles hubiera sido imposible. Este complejo empresarial es el que da sustento a la provisión de insumos, producción, comercialización y distribución de los agrocombustibles, de ahí que no se pueda entender el porqué de los mismos si no se conoce cómo funciona el agronegocio. En este apartado se intenta dar una visión muy resumida de la estructura del mismo, enfocado principalmente a cómo opera en nuestro país.

Puede verse en el Diagrama de abajo que el sistema institucional oculto detrás de los intereses del agronegocio es complejo y sobre todo económica y políticamente muy poderoso. Lo que la mayoría de nosotros percibe a simple vista son los productores (sojeros, cañeros, ganaderos) y las grandes multinacionales de la agroexportación o semilleros, pero, como se muestra más abajo el sistema de los agronegocios es algo mucho más complejo que solamente lo que está visible.

El diagrama de abajo permite imaginarnos de manera gráfica la cantidad de relaciones posibles entre los diferentes actores del sistema de agronegocios. Relaciones que son siempre relaciones de poder. De po-

* Sin fuente.

der político, económico e ideológico/cultural, este último ejercido principalmente a través de la prensa empresarial.

Estos actores intervinientes en el agronegocio pueden agruparse de diferentes maneras, teniendo en cuenta que los que se muestran en el Cuadro son sólo los que operan dentro del país. Sin embargo, los más importantes son actores internacionales.

Actores públicos nacionales: Gobierno (ministerios, poder legislativo, poder judicial, ministerio público, políticas implementadas, banca pública, sistema educativo).

Actores “públicos” internacionales: Convenios, Acuerdos y Pactos internacionales, organismos internacionales, organismos financieros internacionales, embajadas de ciertos gobiernos extranjeros.

Actores privados internacionales: Banca privada transnacional, procesadoras y comercializadoras, la industria biotecnológica, la industria petrolera, la industria automovilística (adaptándose a los agrocombustibles y demandándolos).

Actores privados nacionales: Productores, procesadoras y comercializadoras, bancos y financieras, importadores de maquinarias, equipos y tecnología, empresarios del transporte, contratistas de obras públicas, distribuidores y los demás que aparecen en el Cuadro del final del artículo.

Todos estos actores apuntan en una sola dirección: control de los recursos naturales, control del territorio con expulsión de poblaciones indígenas y campesinas, control del alimento (el arma política por excelencia), control del aparato estatal y con esto del sistema de toma de decisiones. Se trata de una verdadera ofensiva que adquiere una dimensión geopolítica, como lo afirman Bravo y otros autores (2007) refiriéndose a los agrocombustibles (aunque también es válido por supuesto para los agronegocios en general), “El sometimiento de los sistemas agrícolas locales al modelo industrial y a una demanda energética exógena es una cuestión política que implica relaciones de poder sobre los ecosistemas y los pueblos”.

En el caso concreto paraguayo, puede verse en el diagrama que se presentó que todos esos actores “que someten los sistemas agrícolas al modelo industrial” son poderosos; se relacionan unos con otros (los bancos financian la siembra, las cooperativas y agroexportadoras garantizan mercados, la prensa bombardea con los beneficios al país de estos empresarios, etc.), se apoyan y controlan las decisiones que toma el gobierno (ya sea con coimas, comisiones, beneficios), a su vez el gobierno emite ordenanzas, decretos, leyes, realiza otras acciones como reprimir a campesinos, imputar a líderes, etc., en directo beneficio de los diferentes actores del agronegocio.

Para tener en cuenta

La alianza de capitales de la industria automotriz, biotecnológica y petrolera es el reflejo de la nueva ola ofensiva internacional para continuar con el saqueo, la explotación de la naturaleza y la misma lógica de acumulación. La producción de combustibles a partir de cultivos agrícolas es una oportunidad más para continuar con las ganancias, pues de lo contrario podrían sufrir una crisis que obligaría a un cambio de paradigma del modelo de desarrollo.

El afán de impulsar la producción de biocombustibles, parece indicar una tendencia a pretender “administrar” la crisis ambiental desde el poder de los capitales petroleros y automotrices, pero que juega con fuego, al apostar en ello la reconversión de los territorios menos devastados (sobre todo los que están en manos de pequeños productores campesinos e indígenas), las áreas protegidas, la conservación de la diversidad biológica y agrícola y, sobre todo, los derechos de los pueblos.

La competencia por la apropiación de más tierras para el cultivo agroexportador está generando una migración masiva de productores ganaderos hacia el Chaco, aprovechando los altos precios que cobran por la venta de sus tierras, lo que dificulta sobremanera la posibilidad de establecer una política de compra de tierras para los campesinos y campesinas. Además, el plan de agrocombustibles que el gobierno está promoviendo no tiene en cuenta la situación campesina, que se agra-

vará con el plan de expansión de los cultivos de soja, caña de azúcar, maíz, que actualmente insume cantidades significativas de agrotóxicos.

Actores del sistema de agronegocios

Actores financieros

- Banco Mundial
- BID
- Fonplata
- Banca privada multinacional
- Banca pública
- Financieras

Infraestructura y transporte

- Megaproyectos (tipo IIRSA)
- Puertos privados
- Rutas
- Empresas de transporte

Actores gubernamentales

- MAG y sus dependencias técnicas
- MIC
- Indert
- Incoop
- Ministerio Público
- Poder Judicial
- Ministerio del Interior

Políticas y acciones

- Apoyo a apertura de nuevos mercados y refinamiento de la logística y el marketing de productos.
- Promoción de exportaciones.
- Promoción del crédito agrícola.
- Cambios en la forma de financiar la investigación y la transferencia de tecnología.
- Focalización del gasto público en unas pocas líneas de trabajo e inversión.
- Cambio en la visión productiva clásica por un enfoque de cadenas productivas (clusters).
- Estimular la inversión en alianzas público privadas para la innovación. (Fuente: IICA (2006) Estimular la inversión en alianzas público privadas para la innovación, Montevideo.)
- Política impositiva

Maquinarias, equipos y tecnología

- Monsanto, Syngenta
- Valmet, John Deere
- Agroquímicos
- Importadoras de otros equipos e implementos

Cooperativas

- Fecoprod
- Colonias Unidas
- Neuland
- varias otras

AGRONEGOCIOS

Consultores

- Empresas dedicadas a servicios gerenciales
- Consultoría especializada (marketing, informática, etc.)

Cámaras gremiales

- UGP
- Capeco
- Feprinco - otros varios
- ARP-UIP
- APS

Empresas distribuidoras

Distribuidoras

Híper y supermercados

Agroexportadoras

- Cargill
- Archer Daniel Midland (ADM)
- Louis Dreyfus
- Bunge

Eventos, seminarios y otros

- Encuentros de la Mesa Redonda sobre Soja Sustentable
- Seminarios internacionales sobre biocombustibles
- otros

Industrias procesadoras

- Coca Cola
- MHP

Productores

- Tranquilo Faveiro
- Aproximadamente 7 mil medianos y grandes productores en su mayoría extranjeros

Prensa

- Periódicos
- Radios
- Canales de TV

Organismos y acuerdos internacionales

- Protocolo de Kyoto
- OLADE
- IICA
- FAO

La reforma agraria en el Paraguay ¿una promesa electoral más?*

Desde que fue electo presidente el 20 de abril pasado, hasta recientemente luego de su asunción, Fernando Lugo no ha perdido oportunidades para asegurar que la reforma agraria será realizada durante su mandato quinquenal.

No son pocas las dudas que surgen alrededor de esta promesa, dudas que la ciudadanía tiene debido —entre otras cosas— a la altísima concentración de la tierra en el Paraguay (0,91 del índice de Gini, según datos de la FAO), y de los intereses históricamente enraizados de la oligarquía ganadera (concentra aproximadamente 10 de las 15 millones de hectáreas de la región Oriental del país), a los que se han sumado más recientemente los de los grandes productores sojeros y empresas dedicadas a este monocultivo. La consecuencia del avance de la soja en el último decenio ha producido una suba drástica del precio de las tierras agrícolas, lo cual vuelve literalmente impracticable la habilitación de tierras para eventuales beneficiarios de un programa de reforma agraria, sobre la base del tradicional mecanismo de la expropiación.

Por otro lado, también arrojan dudas los recientes nombramientos de autoridades en las instituciones sectoriales, principalmente en el Ministerio de Agricultura y sus múltiples reparticiones, las cuales hacen

* Setiembre - sin fuente.

suponer, que no habrán –al menos a corto plazo– cambios sustantivos en la política que se ha venido aplicando desde hace medio siglo hacia la agricultura campesina: la provisión de infraestructura social y productiva a los asentamientos campesinos seguirá siendo deficitaria, la intervención estatal en los circuitos de comercialización a los efectos de recortar los beneficios excesivos de la intermediación ni siquiera aparece en la agenda del discurso, y la provisión de servicios técnicos y financieros apunta, como lo ha venido haciendo, prioritariamente hacia los rubros de exportación, de los cuales están virtualmente ausentes los pequeños productores.

Finalmente, también se vuelve difícil imaginar un proceso de reforma agraria seriamente realizado si se toma en cuenta la notable incapacidad técnica y pesadez administrativa de funcionarios y organismos encargados de atender las múltiples exigencias de este tipo que –además– supone reformar relaciones de clientelismo y verticalismo largamente solidificadas en la relación Estado-campesinado. La manifiesta tendencia a criminalizar¹ (judicializar) las demandas campesinas por parte del ministerio público, el Poder Judicial y los aparatos de “seguridad” no cambiarán tampoco de un día para el otro, con lo que puede presumirse que el descontento y la represión (tal como ya reiteradamente lo ha manifestado el ministro del Interior) continuarán siendo la práctica cotidiana para resolver los problemas de hambre, falta de tierra y desposesión que afecta a no menos de la mitad del campesinado (definido censalmente como aquel productor agrícola con menos de 20 hectáreas).

La administración Lugo parecería intentar resolver las inequívocas desigualdades de la sociedad paraguaya con una estrategia que pretende conciliar los designios de dios y del diablo. Estrategia que se anticipa como un fracaso, al menos desde el punto de vista de los sectores sociales más vulnerables. Su gabinete se conforma de defensores a ultranza

¹ La lógica de la criminalización se vino intensificando desde el año 2004, cuando luego de acciones orientadas a la ocupación de tierras y contra las consecuencias del modelo sojero, se producen una serie de movilizaciones, a partir de las cuales son apresados cerca de tres mil militantes campesinos, dos mil de los cuales son imputados y sus casos judicializados. (Palau, Marielle 2008. Movimiento campesino: Resistencia a los agronegocios y la criminalización de sus luchas. Asunción, BASE Investigaciones Sociales).

del neoliberalismo en las carteras ministeriales “duras”, en las que se define la orientación económica del proceso y de luchadores de larga trayectoria en el campo popular en las carteras que tienen que ver con los problemas sociales. Es como si lo que Lugo vislumbra es el mantenimiento del modelo, con una fachada más eficiente para administrar la pobreza. Naturalmente, esta estrategia tiene mucho menos que ver con el cambio paulatino de las condiciones estructurales que condujeron al despojo campesino, y se emparenta ineludiblemente con la “onda rosada” de algunos gobiernos del cono sur que, surgidos con una propuesta popular, terminan alineándose a los intereses multinacionales que rigen –de facto– las decisiones determinantes.

La reforma agraria, tal como la perciben los campesinos, aparece cada día más como una tarea distante... y que se aleja. En el Paraguay agrario de hoy la presencia de la soja se ha convertido en el más formidable mecanismo de descampesinización de una sociedad que mantenía (hasta el censo de 2002) 43% de su población en el campo, sociedad “atrasada” desde el punto de vista de la modernidad neoliberal, pero hasta hace poco tiempo alimentariamente soberana y autosubsistente. Con la soja transgénica (desde el ciclo agrícola 99/2000), entre 16 y 18 mil familias campesinas (de un total aproximado de 280 mil) abandonan sus chacras para ir a sobrevivir de mala manera en las orillas de ciudades violentas, inhóspitas y con mercados laborales saturados. Una cantidad similar de familias campesinas jóvenes se encuentran sin tierra y con deseos de permanecer en el campo.

En este escenario, la reforma agraria no es (no debiera ser) sólo una reivindicación campesina, es por lejos, una de las pocas alternativas ciertas de devolver cohesión social a una sociedad fracturada; genera empleos, produce alimentos, arraiga a las familias, descomprime ciudades-tugurios, y redistribuye recursos de producción. Su costo no es mayor que cualquiera de los mega proyectos que sí están en agenda. No sabemos hasta que punto Lugo es consciente de esto, pero sí sabemos que los designios de las corporaciones multinacionales y de la oligarquía ganadera preferirían ver un campo sin campesinos, un agro como territorio de los negocios.

Paraguay en la incertidumbre o, cuando las elecciones no garantizan gran cosa*

Augusto Roa Bastos, quizás el mejor exponente de la novelística paraguaya, definió a su país como una isla rodeada de tierra, y en otro de sus escritos rubricaba no sin poca resignación, que había contraído nupcias con el infortunio.

Tales parecen ser las más vívidas descripciones de este país sudamericano de seis millones de habitantes (que tiene casi 10 veces la superficie de Holanda), y que en 120 de sus 190 años de existencia independiente ha tenido dos guerras internacionales, una guerra civil e innumerables convulsiones políticas que lo han fragmentado política y socialmente. Debió además soportar 35 años de una de las dictaduras más “eficientes” del continente y ha vivido durante los últimos 19 años bajo un régimen de supuesta democracia y de una muy real y desenfrenada corrupción. Durante los últimos 61 años, ha estado gobernado por un único partido, el Colorado o Asociación Nacional Republicana, que desde hace tiempo controla hasta los más pequeños mecanismos de la dominación.

Desde comienzos de los 70s –todavía bajo el dictador Alfredo Stroessner– el país fue entregado literalmente al extranjero, la represa hidroeléctrica de Itaipú al Brasil, la de Yacyretá a Argentina, el cultivo y exportación del algodón y de la soja a las transnacionales de la agroex-

* Sin fuente.

portación y ha vivido una acelerada descampesinización (del 64% de población rural en 1962 ha pasado a apenas 43% en 2002) que ha tenido como resultado esperado un sostenido aumento de la pobreza (42% de la población) y de la indigencia (24%), una casi total destrucción de sus bosques y, recientemente, una acentuación de los flujos emigratorios.

Sobre esta historia y sobre este escenario, se preparan las próximas elecciones del 20 de abril, en las que por primera vez, desde aquel nefasto 13 de enero de 1947¹ es posible alentar alguna esperanza de que el Partido Colorado pierda en las urnas. Sin excepción alguna, todas las elecciones que se dieron desde entonces han estado viciadas de alguna manera u otra, y por supuesto, todas las ha ganado el actual partido de gobierno.

Una exmaestra, un excomandante en jefe procesado y un exobispo

Si a uno le dan a elegir, indudablemente se queda con la maestra; es la que más respeto inspira, mirándolo desde el punto de vista de la laboriosidad. La exmaestra –Blanca Ovelar– es sin embargo, la candidata (por cierto la primera mujer candidata a presidente de la historia de este atribulado país) del partido de gobierno, de los colorados. Llevada a ministra de Educación por el actual presidente Nicanor Duarte Frutos, debió renunciar a dicho cargo para tomar la candidatura presidencial, propuesta también por Duarte Frutos. Es la figura de la continuidad del gobierno quizás más controvertido de la larga transición política. Su triunfo en las internas partidarias en diciembre para las presidenciales de abril 2008 estuvo teñido de irregularidades y su principal adversario interno (Luis Castiglioni, pro-norteamericano) acusa a Duarte Frutos directamente, de haber cometido fraude. Si a esto se suma el hecho de no provenir de la militancia partidaria de base, ¡y de ser mujer! (en un país machista, patriarcal y conservador) ha influido decididamente en sus posibilidades, hasta el punto que una encuesta realizada a mediados de febrero la ubica en el tercer puesto en la intención de votos.

¹ Fecha en que se inicia la guerra civil antes mencionada.

El excomandante en jefe y general procesado, Lino Oviedo fue considerado el hombre de confianza de Andrés Rodríguez (quien en 1989 había dado el *putsch* contra Stroessner). Rodríguez fue durante mucho tiempo un importante capomafioso y –se presume– legó a Oviedo el negocio. A la muerte de Rodríguez, Oviedo asume el entonces poderoso cuerpo de caballería del Ejército, desde donde –en 1996– desacata una orden del presidente de turno, Wasmosy, y empieza a adquirir notoriedad política; es posteriormente procesado en 1998, luego que su candidatura ganara las internas partidarias de 1997. Es apresado y asume su vicepresidente, quien al ganar, libera de la prisión transitoriamente a Oviedo.

Luego de los acontecimientos de marzo de 1999, derrocado Cubas Grau, deambula como asilado político por Argentina y Brasil, para entregarse a la justicia paraguaya posteriormente, la que lo sobreesee en algunas de las causas que tiene pendiente a mediados de 2007, habilitándolo a competir electoralmente. Su sobreesimiento el año pasado fue parte de una estrategia de Duarte Frutos para dividir los votos opositores peligrosamente agrupados alrededor de la figura de Fernando Lugo. Autoritario, ególatra, pro-brasileñista y ultraconservador, Oviedo tiene, más por la gracia de sus dotes de *showman* y su discurso demagógico que por otras cualidades, la posibilidad de superar incluso al Partido Colorado en las próximas elecciones, del cual su agrupación (Unión Nacional de Colorados Éticos, UNACE) se desprendió.

Lugo (de la congregación del Verbo Divino) ejerció como obispo de la diócesis de San Pedro hasta el 2005, de donde fue separado por disposiciones directas de la embajada del Estado Vaticano (pomposamente llamada “nunciatura apostólica”), siendo declarado “obispo emérito”. Las razones que motivaron su destitución en San Pedro fue su compromiso con grupos campesinos organizados, la mayoría de ellos resistiendo el avance del monocultivo de la soja. Su condición de emérito no duró mucho, ya que a los pocos meses decide encabezar movilizaciones de protesta ciudadana contra las arbitrariedades de Duarte Frutos. Esto le vale “reprimendas” de la jerarquía y termina renunciando a su condición de obispo a fines de 2006 y durante el año pasado se candidata directamente a presidente de la república.

En las negociaciones previas, logra el apoyo del principal partido de oposición, el Liberal Radical Auténtico, que renuncia a presentar candidatura a presidente y acompañará a Lugo desde la vicepresidencia. Este es un partido conservador que –llegado el momento– hará valer su experiencia electoral y sobre todo, sus vinculaciones con los latifundistas domésticos, de los cuales fue su histórico representante. Acompañan además a Lugo una gran cantidad de grupos, partidos pequeños de izquierda, organizaciones sociales de un amplio espectro ideológico y mayormente hostil unos a otros, presagiando, en la eventualidad (remota por cierto) de un triunfo de su candidatura, de una gobernabilidad poco menos que turbulenta.

Sin garantías

La ciudadanía está atenta y vive en la incertidumbre política. Si bien Lugo mantiene las más altas intenciones de voto, no hay ninguna garantía que vaya a ganar. La maquinaria del fraude será puesta en funcionamiento, tal como se mostrara en las elecciones internas de los colorados. En el caso que ganara, tampoco hay garantías de que podrá gobernar, ya que con un partido tan poderoso como el Colorado en la oposición, más la precaria coalición en la que se apoya su candidatura, generan más preocupaciones que tranquilidad. Ni siquiera hay garantías que, ganando Lugo, el Partido Colorado vaya a entregar el poder, lo cual implicaría una ruptura del proceso desde el punto de vista constitucional.

Así las cosas, a fines de abril el Paraguay asistirá a un acontecimiento político que no tiene antecedentes en su historia contemporánea. Los colorados pueden dejar el poder pero esto no se hará sin grandes penurias. El secular atraso político del país con respecto a los otros de la región podría empezar a disminuir. Pero así como hay signos de esperanza, vuelven –otra vez– a cernirse sobre el horizonte político síntomas de desarreglo.

2009

Comunicación y poder, estadísticas y política*

*“Si te pones de la cintura para arriba en una congeladora
y de la cintura para abajo en un horno,
el promedio dirá que tienes una temperatura agradable”.*

Palabras de un viejo profesor de estadística en su primer día de clases.

Como todo instrumento, la estadística puede usarse bien o mal. Es como el martillo, uno puede usarlo para clavar las tablas de un cercado o para partirle la cabeza a alguien. Depende de quién la usa y para qué la usa.

Quién la usa. No tengo mayor información sobre lo que es la chilénísima Corporación Latinobarómetro o la británica consultora MORI, pero si por sus amigos los conoceréis... empiezan a suscitarse ciertas dudas acerca de las preferencias ideológicas de los que conducen estas tan publicitadas encuestas (téngase en cuenta que toda la prensa empresarial de derechas del continente se hace eco de estas encuestas, lo cual no es un dato menor) cuando uno examina a algunos de sus donantes. Se encuentran entre ellos el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF), todos organismos financieros multilaterales cuyas directrices emanan de Washington. Tiene también apoyo de la OEA (o ministerio de colonias, al decir de un gran líder latinoamericano). Aparece además una ignota United States Office of Research que según Google tiene que ver con el U.S. Department of Health, o sea, el Ministerio de Salud norteamericano (¿?), y la organización internacional IDEA basada en Estocolmo, entre cuyos miembros del Board of

* El sábado 12 de diciembre pasado abc color (¡cuando no!) puso en tapa que “para los latinoamericanos, Lugo es de los peores”. Más discretamente ese mismo día Última Hora también se hizo eco en sus pp. 4 y 5 del reciente informe de una encuesta hecha por una ONG chilena. Sin fuente.

Advisers figura –entre otros– Jermyn Brooks, inglés, miembro también del Board of Directors (¡oh casualidad!) de Transparencia Internacional (organismo financiado por grandes multinacionales) y anterior miembro de Pricewaterhouse Coopers¹.

Resulta obvio que esta ONG chilena tiene donantes importantes, los que –el sentido común me lleva a imaginar– imponen sus criterios cuando de influir sobre la opinión pública se trata. Para ser ecuanímes, entre sus donantes no hay filántropos ni organizaciones de caridad, hay capitalistas fuertes con intereses muy concretos.

Si veo a un malevo con un martillo en la mano, creo saber con certeza en qué va a usar el instrumento

Para qué la usa. La lectura de los “resultados estadísticos” de este latino-barómetro² tienden a esbozar una sonrisa en lectores con algo de sentido común. Evo Morales acaba de ganar con el 63,4% de los votos en Bolivia pero está allá abajo en la “popularidad” asignada por el equipo de la Sra. Marta Lagos³. Resulta curiosísimo que Fernando Lugo es el parte aguas de su encuesta (en una escala de 1 al 10 le dan 5), por debajo están los “malos”; Correa, Morales, Cristina Fernández, Daniel Ortega, Fidel y por supuesto el ogro: Chávez. Por arriba y hacia el cielo, Tabaré, Uribe (¡!), Calderón (de México), Arias, Bachelet, el

¹ PricewaterhouseCoopers (PwC) es la mayor firma de servicios profesionales del mundo. Fundada en 1998 como fruto de la fusión entre Price Waterhouse y Coopers & Lybrand, PwC es la más grande de las llamadas Big Four (Cuatro Grandes), por delante de Deloitte, Ernst & Young y KPMG. PricewaterhouseCoopers está organizada en tres grandes líneas de negocio: Auditoría, Consultoría de Negocio y Financiera y Asesoramiento Legal y Fiscal. Desde el punto de vista jurídico, PwC es una red de firmas independientes y de propiedad local, que comparten una misma marca y una serie de metodologías y estándares de calidad. PricewaterhouseCoopers obtuvo unos ingresos agregados en todo el mundo de 28.200 millones de dólares en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, dando empleo a más de 155.000 personas en 150 países. Wikipedia.

² Barómetro: Instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera sobre la superficie terrestre y los cuerpos que habitan en ella. Deducimos que el barómetro latino mide la presión ejercida por los grandes consorcios multinacionales sobre los pueblos de América Latina.

³ Directora ejecutiva y fundadora de la Corporación Latinobarómetro.

rey Juan Carlos (el de “por qué no te callas”), y obviamente, el ídolo: Barack Obama.

Esto es por tomar sólo un ejemplo de este notable instrumento de medición del “clima político” latinoamericano. Tiene varios otros detalles igualmente inconsistentes como cuando habla del apoyo al autoritarismo, de golpes militares o de apoyo a un gobierno militar.

¿Para qué sirve entonces el Latinobarómetro? Para influir en la opinión pública usando como excusa a la estadística. Un recurso definitivamente prosaico de las elites políticas y económicas para reforzar el pensamiento único. Si MORI-Marta Lagos lo dicen y la prensa chatarra lo difunde, es que es así, independientemente de lo que pase en la realidad.

Sobre el territorio y la desterritorialización*

“Las grandes contradicciones de nuestro tiempo pasan por el uso del territorio”.¹

Que el 85% de la tierra esté en manos del 2,5% de los propietarios² es un dato duro. Es un dato que muestra el interés de las oligarquías agrarias por el control territorial. No importa ahora que casi 300 mil familias campesinas deban debatirse en sólo dos millones de hectáreas, lo que importa es mostrar que la tierra forma parte de un territorio en constante disputa. Vivimos una verdadera guerra por el espacio.

En efecto, para entender el territorio, debe tenerse presente que es un espacio en disputa, la conformación del territorio supone siempre una disputa política. La definición del territorio es por encima de todo, eminentemente política.

“La guerra por el espacio” se dirime entre poblaciones locales y elites transnacionalizadas (pero no sólo contra ellas, también contra la oligarquía ganadera) que portan formas de concebir el territorio (formas de territorialización) sin asumir las responsabilidades de las consecuencias que puedan ocasionar en esos lugares (impactos negativos en lo eco-

¹ Santos, Milton, “O retorno do território”, en Santos, De Souza y Silveira (org.), *Território: globalização fragmentação*, São Paulo, Editora Hucitec, 1994.

² Dato proveído por el último Censo Agropecuario, no publicado.

* En: <http://ea.com.py/campo-territorio-e-intereses-corporativos/>

nómico³, lo político⁴, lo cultural⁵, lo ambiental⁶), y excluyentes de los habitantes que allí viven y permanecen⁷. Con la globalización se instaló el debate sobre el desanclaje territorial logrado por el gran capital, sobre su capacidad adquirida de desterritorializarse, de moverse de aquí para allá. Dentro de esta concepción, el territorio se presenta como realidad estática, aquello que está allí, lo que permanece inmóvil, inmutable, reducido a un dato “geográfico”. Así, cosifica al territorio, como si fuera algo que existe con independencia de los que allí viven y de los que lo configuran cotidianamente.

“El mito de la desterritorialización es el mito de los que imaginan que el hombre puede vivir sin territorio, que la sociedad puede existir sin territorialidad, como si el movimiento de destrucción de territorios no fuese siempre, de algún modo, su reconstrucción sobre nuevas bases. [...] Entendemos que no hay individuo o grupo social sin territorio, es decir, sin relación de dominación y/o apropiación del espacio, sea ella de carácter predominantemente material o simbólico [...]”⁸.

En un territorio, lo que está en disputa es el para qué y el para quiénes de un espacio determinado. El agronegocio o los emprendimientos empresariales de aprovechamiento de recursos naturales (soja, agua, petróleo, gas, minerales, etc.) someten, sin consulta previa, a poblaciones locales y sitios, a los efectos de una explotación que se controla y se dirige desde distantes lugares (por ejemplo: desde centros urbanos nacionales o internacionales). De esto resulta la conformación de territorios excluyentes, es decir, en los cuales las poblaciones locales son expropiadas del acceso a los recursos naturales del lugar o a las riquezas que allí se generan.

³ Por ejemplo control del precio del algodón a productores territorialmente concentrados en una localidad o colonia.

⁴ Por ejemplo, sucesiones familiares en cargos destacados (intendentes, concejales, etc.) que perpetúan un estilo político antipopular.

⁵ Por ejemplo controlando las radios fm y otros medios de comunicación social.

⁶ Por ejemplo, introduciendo monocultivos que degradan el suelo, usando biocidas que contaminan, deforestando, usando material transgénico que contamina variedades locales de semillas, etc.

⁷ Empobreciéndolos u obligándolos a la emigración.

⁸ Haesbeert, Rogerio, O mito da desterritorialização, Brasil, Bertrand, 2004.

El campo sin campesinos, con capataces y tractores. El campo sin Estado, en donde mandan los directorios de las multinacionales. El campo sin bosques ni diversidad, con desiertos verdes. Los productores de alimentos, comprando (cuando pueden) alimentos en los supermercados de las ciudades: es el modelo del agronegocio. Es la desterritorialización del campesinado y la territorialización de los intereses corporativos. Es la lucha por un territorio en disputa.

Extranjerización del territorio paraguayo*

Presentación

Durante los primeros meses de 2009 debatíamos en el equipo de BASE Investigaciones Sociales, futuros temas de investigación que debían ser encarados. Los temas tenían que ser pertinentes, o sea, social, económica y políticamente relevantes para el país, debían tener proyección de futuro, esto es, se harían más graves con el transcurrir del tiempo y debían ser poco conocidos, relativamente invisibles o poco tratados en la escuálida literatura nacional de ciencias sociales.

Ya habíamos tenido la experiencia en el 2003, con el entonces todavía casi desapercibido proceso de implantación de las semillas transgénicas de la soja en el país que, evolucionando, dio como resultado el actual estado de estropicio de la cuestión ambiental y la violenta aceleración del despojo y expulsión campesina e indígena de sus tierras. Aquella apuesta se plasmó en un pequeño librito¹, pionero por cierto, que anunciaba los nubarrones que se cernían sobre el escenario nacional. El tema está hoy en el centro del debate.

¹ Palau, Tomás (comp.). 2004. Capitalismo agrario y expulsión campesina: Avance del monocultivo de soja transgénica en el Paraguay (Asunción: Universidad Católica, CEIDRA, INTERMON-Oxfam).

* Glauser, Marcos, 2009. Extranjerización del territorio paraguayo. Asunción: BASE-IS, FRL.

En este caso, el desafío tenía además la limitante del tiempo, debía estar terminado y listo para entrar a imprenta a fines de diciembre de este año. La idea a investigar fue, cuánto del actual territorio nacional es ya propiedad de personas o corporaciones extranjeras. Encargamos el trabajo a Marcos Glauser, joven antropólogo que ya tenía una experiencia previa en estudios hechos en México sobre los impactos sociales de la minería a cielo abierto, por entonces reintegrándose al país. Él aceptó y el resultado es éste.

No nos estábamos dando cuenta que el Paraguay, nuestro país, que no estaba peleando ninguna guerra, ni contra la Triple Alianza, ni contra la Bolivia de la Shell, estaba sin embargo perdiendo territorio. Ya sabíamos que había perdido hace tiempo soberanía económica, dado que las decisiones en esta materia se toman en los escritorios de organismos financieros multilaterales con asiento normalmente en la capital norteamericana. Ya algo sabíamos, o al menos maliciábamos, que estábamos perdiendo soberanía alimentaria debido a la introducción, por la pseudo modernidad periférica que se apoderó del país, y que estábamos comiendo cada vez peor y alimentos culturalmente degradados (tema que por cierto pretendemos abordar en el 2010), pero no caíamos en la cuenta que sin guerra y sin chistar estamos –poco a poco– siendo anexados por extranjeros. O más precisamente, por un modelo económico que cada vez más basa su crecimiento y rentabilidad en la anexión de “activos” sólidos, tierra, bosques, agua, minerales, territorios, modelo que está propulsado –como es de esperar– por intereses imperialistas de países así llamados “desarrollados”. De esto no había documentación fehaciente en el país.

No es poca cosa que el 19% del territorio nacional esté hoy bajo control directo o indirecto de empresas o ciudadanos extranjeros; de esa quinta parte, casi dos tercios de los propietarios son brasileños. Lo que encontró Glauser es sólo un comienzo, una primera rastrillada con rastrillo grueso; Internet, la prensa, algunas estadísticas de organismos públicos, muy pocas entrevistas... ¡en un trabajo de menos de seis meses! Se pregunta uno con qué nos encontraríamos si el trabajo de recolección hubiera sido más exhaustivo.

El hecho concreto es que las autoridades políticas están vendiendo el país. ¿Cuándo empezó esto? Hace mucho tiempo. En el Paraguay “independiente”, prácticamente con la ocupación extranjera de la Triple Alianza. Los que gobernaron el país después de aquello, hicieron lo que les decía la voz del amo... y se acostumbraron, por eso lo siguen haciendo.

¿A qué se debe? Hoy –nos explica el autor– el capitalismo se ha vuelto extremadamente competitivo. Los márgenes de ganancia de las grandes corporaciones multinacionales se reducen y la supervivencia de ellas depende de esos márgenes. Apelan entonces al expolio, al saqueo de bienes (protegidas por los gobiernos donde se asientan sus casas matrices) en lo que Marx había definido como *acumulación primitiva de capital* y que Harvey redefinió como *acumulación por desposesión*; se apoderan de territorios, bosques, cultivos, minerales, agua, de todo aquello que tiene valor en el mercado. Se apoyan en el poder político de sus embajadas, en la proverbial venalidad de los gerentes del Estado y en el ansia de enriquecimiento de las mendicantes elites económicas, soberbias ante el débil y sumisas ante el poderoso.

Marcos Glauser nos muestra en este texto necesario, cómo opera el capitalismo mundial en las colonias de hecho de su periferia. Sin contemplaciones, con una clara estrategia de dominación que hoy alcanza incluso a la posesión del territorio por vías “legales” y apropiándose de la vida que hay en ellos.

Cuando la mayoría de los gobiernos de América Latina se aprestan a celebrar el “bicentenario” con el apoyo y beneplácito del poder colonial de entonces, este libro nos recuerda que, con otra modalidad y doscientos años después, seguimos siendo colonia, o para decirlo con los términos de Bartomeu Meliá s.j.: “El Paraguay no fue colonizado; está siendo colonizado hoy, con más fuerza y rapidez que en años y siglos anteriores”.²

Diciembre 2009

² Meliá, Bartomeu (2009). “Pueblos indígenas en el Paraguay, ¿esos desconocidos!” en, Acción, N° 300 (Asunción: CEPAG).

La recuperación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay.

En el marco de Políticas de Estado de energía*

Este libro no tiene palabras de más, no tiene ideas demás. Es —entre muchos temas abordados— un compendio político de la política de entreguismo de los gobiernos que, incluyendo al de Stroessner, se sucedieron desde entonces. Ricardo Canese lo dice sin tapujos: “nuestras elites gubernamentales canjean en forma perversa la soberanía hidroeléctrica nacional a cambio de negociados y apoyos políticos suministrados por las elites dominantes de nuestros vecinos más poderosos”. Como principal riqueza nacional, es la principal fuente de enriquecimiento de los políticos corruptos.

El primer capítulo resume en pocas páginas, todo lo que un lector, especializado o no, haya podido leer durante un buen tiempo sobre un porvenir documentadamente anunciado acerca del fin de la era del petróleo. Aunque no es solamente eso. Tiene hasta una utilidad didáctica, es una verdadera historia de la energía en el mundo. Resumida, concreta, hasta se podría decir de lectura amena y coloquial, agradable, si no fuera por el final poco feliz que nos aguarda.

Echa por tierra las frívolas disquisiciones sobre las fuentes de energía alternativa y va directamente al grano: el modelo civilizatorio que ha construido el capitalismo central es inviable a corto plazo (en plazos

* Canese, Ricardo, 2009. La recuperación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay. En el marco de políticas de Estado de energía. 5ª edición. Asunción: CINERGIAS. En: http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=8756

históricos) por su patrón de consumo energético. El problema no es que falte o vaya a faltar energía, el problema es la sociedad de consumo. Este patrón de consumo desperdicia energía hasta tal punto, que en pocos años más, 15, quizás 20, sólo tendrían acceso a la energía los que puedan pagarla a precios que –con suerte– sólo un 15% o 20% de la humanidad podría hacerlo. No es difícil imaginar cómo el restante 80% irá a vivir.

De las fuentes alternativas de energía, la única de relevancia para el país es la de los biocombustibles. No porque vaya a solucionar el problema energético mundial, sino porque en algunos años puede sustituir la importación de hidrocarburos y puede dejar un remanente para la exportación. Canese se cuida muy bien de no incluir a la soja¹ como fuente de biodiesel, aunque sí al mbokajá y a las grasas animales que hoy se desperdician como materias primas principales. El etanol extraído de la caña de azúcar sería también rentable, aunque –como sabemos– el monocultivo de caña de azúcar es igualmente pernicioso para el país, como el de la soja.

En el segundo capítulo del libro, el autor hace un repaso sucinto de la situación energética de los países de la sub región del MERCOSUR, y llega a una conclusión del máximo interés para nuestro país; sólo Bolivia y Paraguay (y más al norte Venezuela) tienen un saldo energético neto positivo, lo que los convierte en potencialmente privilegiados para entablar negociaciones favorables para los intereses nacionales. Se remarca, una y varias veces, que Bolivia ya empezó a hacerlo y que nosotros (bueno, los que nos gobiernan) somos –como siempre– los “olvidadizos” en materia de defensa de soberanía. Canese encuentra que esto es inexcusable. Se trata simplemente de una claudicación política, explicable sólo por la avidez de lucro particular de los negociadores, o sea, de los políticos.

¹ Su ejercicio matemático para mostrar la inviabilidad de la soja como fuente de biocombustible para sustituir a los hidrocarburos es un dechado de humor negro: harán falta 30 millones de kilómetros cuadrados para satisfacer la actual demanda mundial, superficie ésta superior a la superficie total conjunta de Canadá, EE.UU. de América, Brasil y Argentina.

Si todo lo anterior nos ubica en el contexto mundial y regional, el próximo capítulo aborda el objetivo fundamental de este libro; volver accesible el debate energético a todos los interesados, y en particular presentar cuáles son las Políticas de Estado más convenientes en materia energética para el Paraguay. Dentro de ese objetivo fundamental el núcleo del problema es la recuperación de la soberanía hidroeléctrica nacional.

Su razonamiento es contundente. “La humanidad ya nunca dispondrá de energía tan barata como la que tuvo en el siglo XX, por consiguiente, las energías, renovables o no, que también son baratas, como la energía hidroeléctrica ya aprovechada (la energía de Itaipú y Yacyretá) serán cada vez más valiosas”. De ser así, el Paraguay podrá dar un salto cualitativo en calidad de vida desarrollando una política energética acorde a sus intereses y necesidades, “salvo que exista todo un plan de despojo de estos beneficios, como es lo que ocurre, lamentablemente”.

Nos advierte Canese que Brasil y Argentina son importadores netos de gas natural (GN) y electricidad, razón por la cual esto debe tenerse muy en cuenta a la hora de elaborar Políticas de Estado en materia energética. No hay por qué regalarle a Brasil energía a un valor mucho menor al del mercado, lo mismo ocurre con Argentina, obligada hoy a importar grandes cantidades de GN y a mayor precio que el que lo venía haciendo, de Bolivia. Es así obvio que “el Paraguay debe reivindicar un precio justo por su energía hidroeléctrica, tal como Bolivia está alcanzando en relación a su gas (si bien aún por debajo de los precios de mercado)”.

Pensando con la lógica del bien común hay muchos sin sentidos que hacen que estemos como estamos. Siendo un país pródigo en producción de alimentos, estamos exportando forraje e importando hasta tallarines; estando sobre el acuífero Guaraní, tenemos una de las menores coberturas de agua potable en América Latina y casi no existe el riego agrícola; produciendo energía eléctrica como producimos, importamos hasta US\$ 800 millones de combustibles fósiles al año. Con este cúmulo de insensateces tenemos nomás que ser pobres y mendicantes, no queda otra.

Canese agrega más sin sentidos a esta lista en el campo energético. Es curioso, dice él, que teniendo a PETROPAR (una empresa pública paraguaya), una empresa brasileña estatal (PETROBRAS) pueda distribuir y comercializar derivados de petróleo, pero PETROPAR no pueda.

Es llamativo que estemos comprando derivados de petróleo a multinacionales a un elevado precio y no se concrete el crédito blando con Venezuela para la compra a ese país, dice Canese. Para él, “la regulación por la vía de la intervención del Estado, a través de la empresa estatal especializada en el ramo, es una de las mejores opciones a fin de evitar el abuso de los oligopolios, como ha ocurrido en los últimos años”. Lo mismo ocurre con un acuerdo entre PETROPAR y PDVSA para la prospección y exploración de hidrocarburos, ¿por qué no se firma, siendo como es el camino correcto para saltarse el cerco de los oligopolios petroleros multinacionales?

Habla de la conveniencia para nuestro país de resucitar URUPABOL, la unión de los tres países menores de la región para equilibrar en algo las asimetrías que hay en el MERCOSUR. Dos países mediterráneos con excedentes energéticos y otro con costa al mar.

Lamenta también, implícitamente, los conatos de privatización, tercerización o capitalización de la ANDE, empresa pública sin fines de lucro que debería seguir generando, transmitiendo, distribuyendo y comercializando energía eléctrica barata y confiable.

En fin, se lamenta el autor (y muchos de nosotros que si no por especialización, al menos por patriotismo también percibimos) que pese a la enorme importancia de la hidroelectricidad en el Paraguay, se carece hasta ahora de Políticas de Estado al respecto.

Después de un exhaustivo análisis de la matriz energética paraguaya en el capítulo 3, el autor entra de lleno en el objetivo principal del libro, enumerando y detallando los que debieran ser los ejes de una Política de Estado en materia energética.

En resumidas cuentas, tanto por razones históricas, como por una elemental concepción de la soberanía y por razones de equidad y

justicia, nos dice Canese que el país debe reivindicar la soberanía hidroeléctrica, debe trazar e insertarse en una alianza estratégica entre los exportadores de energía de la región, considera que el servicio público de electricidad debe estar orientado a un paradigma productivo y de mejoramiento de la calidad de vida, que evite el derroche, debe asegurarse el abastecimiento seguro de hidrocarburos en condiciones beneficiosas para el pueblo y propugna por un modelo energético que combine diversas fuentes, principalmente renovables, de suministro.

Impecable. No caben contra argumentaciones. Ricardo Canese y los que adherimos a estos planteamientos tienen –tenemos– en mente el interés nacional. Se trata del futuro de nuestro país el que está en juego en los próximos años y décadas que estarán cargadas de turbulencia.

Cuando uno toma en cuenta que hoy día el 19% de la energía producida en el planeta se gasta en agricultura y con ello, en alimentos, la preocupación de hoy por garantizar un abastecimiento energético no es una preocupación minúscula. Cuando el PIB nacional podría aumentar un 25% haciendo una tímida renegociación de la expoliación a que sometieron al país los malos gobiernos y los países socios en los emprendimientos hidroeléctricos. Cuando se piensa en Clave estratégica, la cuestión energética es una cuestión nacional. Desatenderla sólo puede ser propio de quienes están dispuestos a vender, alquilar o hipotecar al país por sumisión o avaricia.

Agronegocios: el control del sistema agroalimentario*

Para decirlo de manera introductoria y todavía muy general, se designa con el nombre de agronegocios al sistema productivo conformado por el conjunto de empresas que obtienen ganancias por realizar actividades directa o indirectamente vinculadas con el agro.

Esto quiere decir que incluye empresas que pueden ser muy pequeñas y de capital nacional, como la forrajera de una cooperativa en Caaguazú, hasta un gran monocultivo de soja como el de la estancia La Golondrina en Caazapá, pasando por agroexportadoras de capital multinacional como Cargill, o cadenas de supermercados, o una consultora que hace análisis de impacto ambiental para la implantación de una agroindustria, o un banco o financiera que presta plata a sojeros o cañicultores.

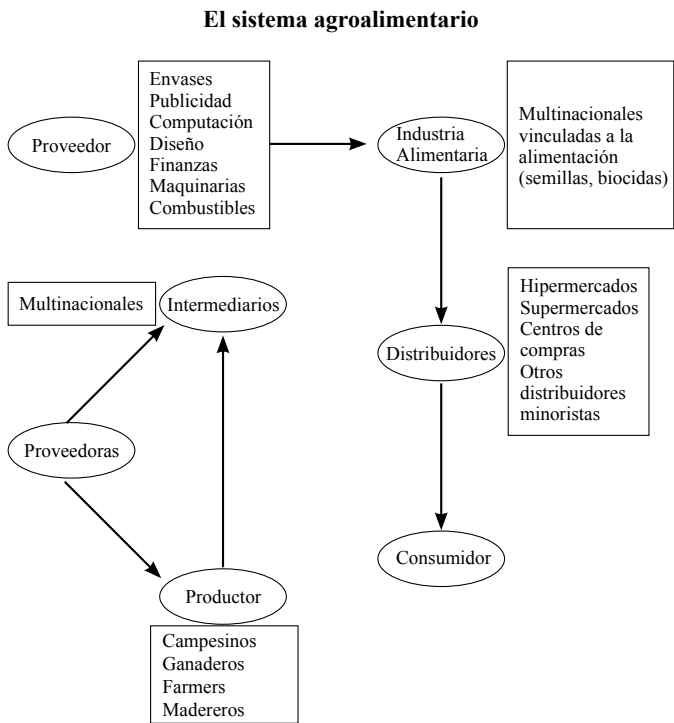
Toda aquella empresa que hace negocios con productos agrícolas, ganaderos, forestales o de sus derivados, forma parte del sistema de agronegocios. Es importante sin embargo tener bien clara la idea que este conjunto empresarial de los agronegocios está controlado por las grandes empresas, normalmente multinacionales, las demás hacen lo que las grandes necesitan o desaparecen.

* Korol, Claudia y Palau, Marielle (comp.). 2009. Resistencias populares y recolonización del continente. Talleres de la Triple Frontera. BASE-IS/Pañuelos en Rebel-día/FRL.

Para entender con más detalle el funcionamiento de los agronegocios hace falta introducir dos conceptos: el de Sistema Agro-Alimentario (SAA) y el de Comercio Agrícola Internacional (CAI).

Agronegocios, componentes del sistema agroalimentario

En el diagrama de abajo, se observa de manera muy resumida el circuito por donde circula el producto de la finca campesina, el producto de los sojeros, el producto de los ganaderos y el de cualquier productor primario.



La producción

En primer lugar está el productor, que puede ser un productor campesino, incluso un productor ganadero, sojero, en algunos casos puede ser productor de la explotación forestal, esta producción de ninguna manera llega directamente al consumidor.

Una vez que el productor entrega su algodón en rama, su poroto o su maíz a un intermediario, o los sojeros su soja a un silo, su producto entra en un sistema que le es ajeno, el circuito de los agronegocios. El primer eslabón es el de los intermediarios (que cumplen la función de acopio, comercialización, agro-exportación) que ya están inscriptos en el circuito capitalista comercial, empresarial. En muchos casos sin embargo, ya el mismo productor (normalmente una empresa) puede ser parte del agronegocio, este es el caso de las grandes empresas que producen ellas mismas soja o carne o lo que fuese, como lo es, por ejemplo el Grupo Favero¹.

Debe tenerse en cuenta que en este eslabón del Sistema, hay –como en los demás– actores dominantes, que controlan. Estos actores son los que se dedican a los monocultivos de exportación, que consiste en un modo de producción agrícola que destina grandes extensiones de tierras a un mismo tipo de cultivo, expulsando de sus tierras a los campesinos con producción diversificada para la subsistencia.

La particularidad de este tipo de producción agrícola (puede ser forestal con los monocultivos forestales, o ganadera con ganadería extensiva o intensiva de *feed lots*²) es que no tiene la función primaria de producir alimentos, sino la de producir *commodities*³, es decir, insumos para las industrias procesadoras, productos que están destinados a abastecer la demanda del mercado mundial y no la demanda interna de los países.

¹ El Grupo Favero está compuesto por 10 empresas relacionadas a la producción, acopio, transporte y exportación de granos, cría y engorde de ganado e industria agroquímica.

² Literalmente ‘ganadería de comederos’, establecimientos en los que el animal no pastorea sino que es alimentado en un pequeño cubículo con forrajes balanceados, principalmente en base a soja.

³ Cualquier producto comercializable y que sirve de insumo para otro producto con mayor valor agregado.

Antes de pasar al segundo eslabón de la cadena del SAA (el de la intermediación), debe tenerse en cuenta que existe otro conjunto de empresas, que hacen parte del Sistema; son las empresas que proveen insumos.

La provisión de insumos

Semillas, agroquímicos, maquinarias, equipos, servicios financieros y otros servicios especializados son los principales insumos requeridos por la actividad agropecuaria y forestal orientada a la exportación.

Actualmente el agricultor compra semillas y vende granos. Esto ha llevado a un control de la agricultura por parte de los proveedores de semillas y otros insumos. Cada vez son menos empresas pero controlan el mercado global de semillas y agrotóxicos.

En semillas, en los años 70 había siete mil empresas semilleras. Cada una de ellas no controlaba más que el 0,5% del mercado mundial. En el 2005, las 10 mayores empresas semilleras controlan la mitad del mercado mundial de semillas⁴.

En agrotóxicos, 10 corporaciones perciben el 84% de las ventas globales. Estas empresas son: BASF, Dow, Monsanto, Dupont, Koor, Sumitomo, Nufarm y Arista. Los entendidos opinan que en pocos años sólo van a quedar tres: Bayer, Syngenta y BASF⁵.

Si se traslada esto al mercado nacional, se puede ver que los intermediarios son muchos; el camionero, el almacenero, la desmotadora, etc., todos esos entran, pero básicamente los que controlan el negocio de la intermediación son las compañías multinacionales dedicadas a la agro-

⁴ Monsanto es hoy día la mayor empresa de venta de semillas comerciales, además del monopolio virtual en la venta de semillas transgénicas (88% a nivel global). En la última década Monsanto compró, entre otras, a empresas como Advanta Canola Sedes, Calgene, Agracetus, Holden, Monsoy, Agrocere, Asgrow, Dekalb Genetics y la división internacional de semillas de Cargill. Dupont es la segunda empresa semillera más grande. Monsanto y Dupont tienen casa matriz en Estados Unidos. Otros gigantes del agronegocio semillero son: Syngenta, Bayer Crop Science, Delta Pine, Nidera, Pioneer y Agrow Science.

⁵ Monsanto no renunció a este lucrativo mercado, pero su rezago relativo –del tercer al quinto puesto– se debe a que está enfocada a la producción de transgénicos como frente de venta de agrotóxicos.

exportación. Hay varias operando en el país, todas ellas conocidas por nuestros campesinos; algunas de las cuales han sido mencionadas más arriba: Cargill, Dreyfus, ADM, el Grupo Estévez, y otras.

La agroexportación

Los intermediarios son muchos; el camionero, el almacenero, la desmotadora, los silos, etc., todos esos entran en este eslabón de la cadena del Sistema Agroalimentario, pero básicamente los que controlan el negocio de la intermediación son las compañías multinacionales dedicadas a la agroexportación. Hay varias operando en el país, todas ellas conocidas por nuestros campesinos.

Los datos del año 2000 mostraban que cinco transnacionales controlaban más del 75% del comercio mundial de granos. Actualmente, tres empresas devoraron a las otras y dominan el mercado: Cargill, Bunge y Dreyfus. Si se suman otras pocas, como ADM, unas pocas transnacionales controlan más del 90% del comercio mundial de maíz, trigo, café, cacao y piña, 80% del té, 70% del arroz y bananas y más del 60% de la caña de azúcar.

Estas grandes exportadoras también venden semillas, agrotóxicos, fertilizantes, procesan los granos, controlan las vías de transporte y puertos y hasta producen forrajes específicos para la industria de la carne. De esta forma tienen el máximo control del mercado alimentario.

Para tener una idea del tamaño y grado de control de este tipo de empresas se dan algunos datos. **Cargill** es una compañía norteamericana. En 1979 tenía 79 mil empleados en más de 1.000 lugares en 72 países y con actividades comerciales en otros 100. Se dedica a la comercialización y procesamiento de granos y oleaginosas, jugos de fruta, productos tropicales y fibras, carnes y huevos, sal y petróleo, alimentos para ganado, fertilizantes y semillas.

Archer Daniel Midland (ADM) es la compañía cerealera más grande de EE.UU. y uno de los mayores exportadores de soja en Brasil, Para-

guay y Bolivia. Tiene el 20% del mercado de molienda de soja en la Unión Europea⁶.

Bunge SA es el exportador más grande de soja a nivel mundial. **Louis Dreyfus**, entró en el año 2004 al Paraguay, según su sitio en internet “Louis Dreyfus Paraguay S.A. adquirió cuatro desmotadoras de algodón ubicadas en las ciudades de Santa Rosa, Tacuara, Campo 9 y Encarnación. Gracias a las inversiones realizadas y a la selección de puntos estratégicos en el país, el Grupo se convirtió en pocos meses en el mayor desmotador y exportador de este producto”.

Todas estas corporaciones (y otras) son visibles en el Paraguay con sus instalaciones de puertos industriales (Cargill en Paraguay posee el 90% de los puertos fluviales del país) y en los gigantescos silos de acopio de grano. La hidrovía Paraguay-Paraná implicará más de 250 obras de ingeniería a lo largo de 3.360 km de río a través de las tierras húmedas tropicales más grandes del mundo más los 350 mil km² del Pantanal.

La siembra masiva de monocultivos se extenderá en los próximos años en el país a medida que el gobierno cierre trato con inversores que deseen expandir la producción de agrocombustibles. La soja para el biodiesel y la caña de azúcar para el alcohol carburante (etanol) son así la próxima amenaza principal para la sociedad campesina.

La industria alimentaria

La industria alimentaria –o más propiamente, las industrias de procesamiento alimentario– está a su vez constituida por las multinacionales vinculadas a la producción de alimentos.

Estas corporaciones de alimentos y bebidas son los mayores compradores de materia prima agrícola, por eso sus operaciones tienen un impacto enorme sobre el desarrollo de la agricultura mundial. Las 10 compañías procesadoras de alimentos más grandes del mundo son Nestlé,

⁶ En Paraguay, ADM trabaja con unos 2.500 productores de casi todo el país. Cuenta con 28 silos, seis puertos y dos convoyes de barcazas propios, además de otros tercerizados.

Philip Morris, ConAgra Inc., Unilever, Coca Cola Co., PepsiCo. Inc., Chiquita Brand Banana, entre otras.

Nestlé mantiene su poderío duplicando o triplicando el volumen de ventas de sus competidores más cercanos: ADM, Altria, Pepsi, Unilever, Tyson Foods, Cargill, Coca Cola, Mars y Danone. Estas empresas juntas controlan el 24% del mercado mundial de alimentos y bebidas.

Un ejemplo del proceder inescrupuloso, mafioso y hasta terrorista de las multinacionales, es el caso reciente que afectó a la norteamericana Chiquita Brand Banana en Colombia⁷. Pero existen muchos otros que involucran a la Nestlé o a la Coca Cola en diversas partes del mundo.

Fernando Krakowiak⁸ muestra en el caso de Argentina que las principales marcas de alimentos y artículos de primera necesidad aceleraron su ritmo de lanzamiento para esquivar los controles de precios con productos que cuestan más caros y quedan fuera de los “acuerdos” firmados con el Gobierno. La Serenísima vende 29 variedades de leche fresca, Fargo 14 tipos de pan lactal, Siempre Libre comercializa 15 toallas femeninas distintas y Unilever dispone de 14 opciones dentro de su línea de limpiadores Cif. En recorridas por supermercados y almacenes, Cash comprobó situaciones similares con yogures, aguas minerales, quesos, arroz, galletitas, desodorantes, jabones en polvo y pañales. Además, los productos se ofrecen en múltiples envases con diferentes formas y ta-

⁷ Chiquita Banana, una de las empresas alimentarias más grandes y poderosas del mundo, admitió haber pagado dinero a cambio de protección a los grupos paramilitares colombianos identificados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas y acordó pagar una multa de 25 millones de dólares para terminar con la investigación federal de tres años. (Página 12, martes 20, 2007, p. 6). El Fiscal General de Colombia anunció planes de solicitar la extradición de ocho empleados de la empresa bananera Chiquita, que supuestamente estaban implicados en el financiamiento de grupos paramilitares de derecha en Colombia. El lunes, Chiquita admitió haberle pagado al grupo Autodefensas Unidas de Colombia, que es considerada una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos una multa de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos con la condición de que no revele los nombres de los ejecutivos involucrados. El fiscal colombiano también acusó a Chiquita de proporcionar armas a grupos paramilitares de derecha, que luego fueron utilizadas para expulsar a los rebeldes de izquierda de una zona del norte de Colombia donde Chiquita tenía sus plantaciones de banana (Pilar Lozano, El “paraempresarismo”. Dinero multinacional para el terror, www.rebellion.org. 22-03-07).

⁸ En un reciente artículo publicado en www.rebellion.org del 10 de abril de 2007 titulado “Cómo las empresas eluden el control de precios”.

maños... Una comparación entre las leches que se ofrecen en sachet de litro permite ver la diferencia en precios: la leche entera La Serenísima incluida en el acuerdo con el gobierno cuesta 1,56 pesos; pero las versiones Infantil y Ser con jugo de frutas, lanzadas en noviembre del año pasado, se venden a 2,40 y 2,99 pesos, respectivamente. Por su parte, la leche Serecol con jugo, ofertada desde mediados de 2005, cuesta 4,35 pesos, lo que eleva la dispersión de precios al 180%. Además, en algunos supermercados estas variedades están desplazando de las góndolas, leches más económicas de segundas marcas⁹.

Con la producción de alimentos y con la complicidad de los hiper y supermercados la industria alimentaria —como se ve— obtiene sobreganancias, siempre en detrimento del consumidor.

Empresas proveedoras de servicios varios

Dentro del sistema agroalimentario participan también otros actores igualmente poderosos o hegemónicos. En efecto, una industria procesadora de alimentos no produce los envases, se los compra a otra empresa que hace envases. Siguiendo la cadena, esta empresa no hace publici-

⁹ Este autor se extiende con otras estrategias que van más allá de la “viveza criolla”, utilizada por las industrias alimentarias: “Las estrategias empresarias diseñadas para incrementar ganancias no sólo contemplan el lanzamiento de nuevos productos sino también la multiplicación de envases con diferentes formas y tamaños. Los yogures cremosos SanCor Yogs con pulpa de fruta se venden en pots de 120 gramos o en un pack que incluye dos envases de 125 gramos. Hay pots de 180 gramos para la versión que incluye copos azucarados, de 190 para los que tienen trozos de fruta y de 200 gramos para los firmes. Además, hay botellas de 200 gramos y sachets y tetras de un litro para los bebibles. La segmentación se justifica argumentando que los envases contemplan las diferentes necesidades del consumidor. Sin embargo, al ofrecer presentaciones con apenas 5 gramos de diferencia lo único que se logra es dificultar la comparación de precios. Lo mismo ocurre con las salchichas Vienissima de Molinos. La oferta incluye paquetes de 5, 6, 8, 10, 12, 20 y 30 unidades. El precio por kilo varía en todos los casos y es mayor en las presentaciones más chicas. Sin embargo, la marca y el supermercado destacan el valor del paquete que, obviamente, es más barato cuanto más pequeño es, aunque se termine pagando más por kilo. Otro ejemplo son las galletitas Criollitas. Cada paquete pesa diferente según la variedad: Originales y Tostadas (105 gramos), Tostadas lacteadas (110 gramos), Lacteadas (118 gramos) y Untables (190 gramos). El pan lactal Fargo también puede marear al consumidor. Hay paquetes de 350, 390, 420, 500, 530, 580 y 690 gramos, pero cada variedad se ofrece en uno diferente, lo que dificulta la comparación. Los supermercados están obligados a poner el precio por kilo, pero lo que destacan en letras grandes es el valor por paquete.

dad, le entrega a una compañía dedicada a esa actividad. Lo que vemos en la televisión, la Coca Cola no tiene una empresa publicitaria, contrata a Biedermann o a Nasta Publicidad y ellos le diagraman la publicidad, las computadoras no las hace Unilever, ni Kelloggs, ni Nestlé, se las compra a las empresas como Hewlet Packard, Toshiba, a Microsoft los softwares, que también son insumos, el diseño gráfico es parte de la publicidad o el diseño industrial para los envases, para la publicidad.

Por otra parte, las multinacionales de alimentos necesitan de dinero, para eso apelan a los bancos, a entidades financieras que les dan el dinero, dinero que tiene un costo, que por supuesto tiene que trasladarlo después a su producto final. Igualmente, requieren de maquinarias que también las compran de empresas productoras de bienes de capital, necesitan combustible, entonces le compran a Shell o a Esso, o a Chevron o a Texaco. De esta manera, las industrias alimentarias están fuertemente vinculadas a este sector proveedor de servicios básicos, esto obviamente tiene un costo, ese costo va al producto de la industria alimentaria que llega finalmente al consumidor.

Como es obvio, este conjunto de empresas proveedoras de servicios no actúa directa ni exclusivamente en el SAA, pero indirectamente forma parte de la cadena del agronegocio al brindar servicios estratégicos para la producción alimentaria.

La distribución

Este es el último eslabón del SAA en el que actúa el agronegocio antes de llegar con el producto final al consumidor. Por cierto, la industria alimentaria no vende los productos, de la venta se ocupan los centros de compra, los hiper y supermercados¹⁰ y —cada vez— en menor medida, los mercados populares y los almaceneros (o panaderos, fruterías, y otros). Estos dos últimos actores están siendo rápidamente desplazados en la mayoría de los países, como en el nuestro, por la desleal competencia de las grandes cadenas de supermercados.

¹⁰ Los hipermercados disponen de una superficie de venta de 2.500 m² como mínimo y más de la tercera parte de su facturación corresponde a productos alimenticios. Los supermercados explotan una superficie de venta comprendida entre los 400 y 2.500 m² y más de dos tercios de su facturación corresponde a productos alimenticios.

A esto se dio en llamar el supermercadismo que viene siendo el proceso en el que tanto la comercialización como la elaboración de productos de uso común en la población se concentra en los hiper y supermercados. El mercado de venta de alimentos (y otros productos) se concentra en megacentros de venta de diferentes y variados artículos de consumo que gradualmente controlan el abastecimiento alimentario y llegan hasta a cambiar el diseño urbanístico de ciudades y pueblos¹¹.

La empresa más grande del mundo es Wal Mart. No entre las cadenas de supermercados, entre todas las empresas, es la más grande del mundo. Su volumen de ventas anual es mayor que el Producto Interno Bruto de Noruega, Arabia Saudita y Austria, y es la vigésima economía del planeta. Entre las 100 economías mayores del globo hay otros supermercados como Carrefour, Home Depot, Metro y Royal Ahold.

Como muchas otras multinacionales, Wal Mart es una empresa oscura y corrupta¹², por ejemplo, presiona a la baja de salarios y la seguridad social de los trabajadores en sus locales en Estados Unidos, situación que se repite en todo el mundo donde se instala, además de liquidar a los pequeños almacenes y otros locales de venta de alimentos.

¹¹ Como ejemplo está el caso de Francia, en ese país el 90% del mercado de alimentos está en manos de cinco centrales de compra: Carrefour tiene el 26,2%; Lucie, central común de Leclerc y Système U, el 23,8%; Opéra, central común de Casino, Cora, Franprix, Leader Price y MonoprixPrisunic, el 15,7%; Intermarché el 14,4% y Auchan el 12,9%. Fuente: *RéférenceSeigne Secodip*, citado por LSA (grupo Usine nouvelle) N° 1.746, 22-11-01.

¹² Wal-Mart acusado de infiltrarse en un grupo contrario a la empresa, y de espiar a sus críticos Un ex empleado de Wal-Mart afirma que la empresa está llevando a cabo una sofisticada operación de vigilancia que espía a empleados, periodistas, accionistas y a quienes la critican. Estas acusaciones fueron realizadas por Bruce Gabbard, quien fue despedido el mes pasado por interceptar y grabar conversaciones telefónicas con un periodista del New York Times. Gabbard dijo al periódico Wall Street Journal que fue parte de una amplia operación de vigilancia dirigida desde la sede de WalMart, en Arkansas. Gabbard también reveló que Wal-Mart se infiltró en el grupo Up Against the Wal el año pasado, enviando a una de sus reuniones a un empleado de pelo largo que llevaba un micrófono. Una camioneta de vigilancia de Wal-Mart estaba estacionada afuera de la reunión, con el objetivo de escuchar lo que estaba sucediendo. De acuerdo a un informe, Wal-Mart también monitoreó de cerca el uso de Internet y del teléfono por parte de los empleados en el trabajo. Los gerentes recibieron una lista de direcciones de correos electrónicos y números de teléfono con los que los empleados se habían comunicado, y una lista de los sitios web que éstos habían visitado. Además, Wal-Mart desarrolló un sistema para leer los correos electrónicos de los empleados enviados o recibidos desde cuentas privadas, como Hotmail o Gmail

En países donde el hipermercadismo está más desarrollado (cosa que nos espera a nosotros en pocos años más) los establecimientos ya no encargan directamente las mercancías a los proveedores/productores, sino que se agrupan en centrales de compras para tener más peso a la hora de las negociaciones con sus proveedores. La era de las fusiones y de las concentraciones desemboca en la constitución de un verdadero oligopolio. Sacando partido de su posición dominante, las centrales establecen un sistema inédito de extorsión, desconocido hasta entonces en los Estados denominados “de derecho”: cada año, por diversos motivos, reclaman entre un 1 y un 2% de descuento suplementario. A veces mucho más. Única en el mundo, esta tasación, más conocida bajo la denominación “negociaciones comerciales” o también “márgenes retroactivos”, no hace más que remunerar la situación casi monopólica que beneficia a los grandes distribuidores respecto a sus proveedores. Dentro de este sistema, los proveedores no sólo deben aceptar precios, sino que también deben pagar por todo: pagar un derecho de entrada; ofrecer a todos los establecimientos de la central mercancías gratuitas en las primeras entregas; pagar para ver sus productos expuestos en una ubicación privilegiada o en cabecera de góndola; pagar para financiar las campañas de promoción; pagar para figurar en los catálogos; pagar cuando se instala un nuevo establecimiento; pagar cuando se refaccionan o mejoran los más antiguos; pagar incluso para hacerse pagar sus propias facturas. Pagar y pagar... Pagar sin saber ya por qué, ya que no hay relación alguna entre el precio pagado y la prestación real provista por el distribuidor a su proveedor. Para los proveedores en esta situación la alternativa es muy simple: someterse o ser excluidos, es decir ¡guardarse las mercancías y cerrar sus fábricas!

En pocas palabras, las condiciones que imponen estas grandes empresas a sus proveedores son inviables para los pequeños y medianos productores ya que la fórmula es: producción a gran escala y precios por debajo de los costos. Esto deja fuera a la mayoría de los productores lo cual supone, a largo plazo, la desaparición de quienes no pueden mantener el ritmo. Así funciona la distribución minorista de alimentos en estas grandes cadenas oligopólicas que forman parte de los agronegocios.

Se considera también parte de los agronegocios las empresas que expenden alimentos preparados, especialmente aquellas cadenas transnacionales de venta de comidas, como Mac Donald, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken (KFC) y otras. Estas cadenas buscan la estandarización de los sabores e imponen sus productos a fuerza de propaganda y bajos precios para que la población las prefiera por encima de las comidas locales tradicionales. Existe un sinnúmero de denuncias en todo el mundo sobre este tipo de empresas¹³.

El consumidor

En las circunstancias antes descritas, el consumidor final queda dependiendo del agronegocio para su alimentación. Al irsele cerrando la posibilidad de acceso directo a los productores, sea por la vía de los mercados locales, de abasto, municipales, sea por la paulatina desaparición de los pequeños establecimientos de venta de alimentos

¹³ La más reciente de ellas proviene de China la cual se transcribe literalmente: McDonald's, KFC y Pizza Hut explotan a su personal en China, Xinhua, www.rebelion.org. 13/04/07. "Las autoridades laborales de la provincia de Guangdong han confirmado que algunos restaurantes de las cadenas McDonald's, KFC y Pizza Hut no firmaron contratos con sus empleados y explotaron a su personal. El Departamento Provincial de Seguridad Social y Trabajo de Guangdong ha afirmado en una nota de prensa que una inspección llevada a cabo después de que se produjesen quejas ha encontrado que las tres compañías de restauración explotaban a los trabajadores de tiempo parcial. El departamento ha instado a los restaurantes a que firmen contratos con los trabajadores a jornada completa y ha señalado que los empleados a jornada parcial no volverán a ser explotados. Sin embargo, no hizo ningún comentario acerca de la violación de la normativa del salario mínimo para estudiantes que trabajan a tiempo parcial en los establecimiento de McDonald's y KFC.

De acuerdo con la Ley Laboral de 1994 y sus enmiendas, los estudiantes universitarios que trabajen a jornada parcial no pueden establecer una relación laboral normal con sus empleadores, por lo que no están protegidos por ley. McDonald's, KFC y Pizza Hut han sido duramente criticados por pagar a los empleados a tiempo parcial cuatro yuanes la hora (52 céntimos de dólar USA), un 40 por ciento menos del salario mínimo establecido por las autoridades provinciales.

Otras ciudades han sufrido problemas similares. En Wuhan, capital de la provincia de Hubei, los salarios de los trabajadores a tiempo parcial se situaban en 5,5 yuanes (71 céntimos de dólar) y 3,9 yuanes (97 céntimos de dólar) por hora, por debajo de los 6, 5 y 6 yuanes (84 y 78 céntimos de dólar) establecidos por ley.

Las inspecciones realizadas en 37 restaurantes de KFC y McDonald's, en los que trabajan 2.450 empleados, más de la mitad de ellos estudiantes o trabajadores a tiempo parcial, muestran que el personal de McDonald's recibe un salario mínimo a la hora de 5,8 yuanes y el de KFC de 6,3 yuanes. Las cifras se sitúan muy por debajo del salario mínimo por hora de 6,5 yuanes de los trabajadores a jornada completa.

antes mencionada (almacenes, panaderías, carnicerías y otras) no le queda otra opción; si quiere comer “tiene que pasar por la caja del supermercado”.

Si se considera que todas las empresas que forman la cadena de los agronegocios persiguen como principal propósito el lucro, la ganancia, y que entre sí dependen unas de otras, y que cada vez son menos empresas pero más grandes, se llega entonces a la conclusión que éstas tienen un formidable poder político: pueden controlar a la población a través del control en el suministro de alimentos. Como además se trata de oligopolios, el consumidor final es impotente ante los controles de precios ejercidos por las mismas.

Si quieres el perro, acepta las pulgas*

La metáfora del presidente Lugo con respecto a su ubicación político-ideológica del *poncho jurú* es probablemente la figura literaria que mejor expresa el escenario de los últimos 15 meses en el país. La pretensión de estar “en el medio” le trajo no pocos sinsabores, quizás no los mismos que si se hubiera definido para uno de los costados del espectro, pero sí otros disgustos, otros problemas y otras dificultades. Y para nosotros, los de a pie, sin duda muchas confusiones.

Por referirnos sólo a la evolución de la situación social (que es producto directo de cómo se maneja económicamente al país), en este año y pico no se han podido encarar de manera seria los principales problemas. El país sigue siendo en la región del cono sur sudamericano el que cuenta con el gasto social más bajo (UH, 23-11). La reforma agraria, que tuvo un tímido inicio hacia fines del año pasado, se detuvo completamente. La responsabilidad sobre estos dos hechos, que tendrían un impacto muy alto sobre las condiciones de vida de la población sin embargo, no tienen del todo que ver con Lugo y su gabinete social, sino con el *parate* que el Ejecutivo encuentra en el Legislativo cada vez que intenta encarar algún problema social. Nótese que este tipo de acciones, a los ojos de la corporación política de la derecha enclavada en el Parlamen-

* Antiguo proverbio español que indica que toda opción acarrea sus consecuencias. Artículo elaborado con Luis Rojas y publicado en diario Última Hora, diciembre de 2009.

to, es visto como un programa de captación de votos¹, es así como debe interpretarse el reciente recorte del Senado a los fondos sociales de varias instituciones del Gabinete Social. Pero el escaso avance en materia social también debe imputarse a la falta de acciones coordinadas del propio Ejecutivo, a sus vacilaciones y a la incapacidad de unir a los miembros de ese gabinete alrededor de objetivos sociales de carácter nacional. El espectro político dentro de ese gabinete abarca mucho y aprieta poco. Con la reforma agraria pasa otro tanto, el INDERT pretende recuperar sus tierras indebidamente ocupadas por no beneficiarios y el hecho se judicializa, el INDERT pretende comprar propiedades y se desata un escándalo mediático mayúsculo, como ocurrió con las tierras de Teixeira². Así pues el gobierno Lugo también tiene el boicot sistemático de un Poder Judicial que defiende los intereses de la gran propiedad y que es además corrupto. De pies a cabeza.

El nuevo sistema de medición de la pobreza adoptado por la DGEEC mostró también la malevolencia de ciertos sectores empresariales mediáticos, que prefieren decir que la pobreza aumentó durante la actual administración cuando, primero, los datos fueron tomados en el 2008 (o sea, antes que el gobierno actual asuma) y cuando segundo, los valores anteriores –por el método utilizado– sub registraban la pobreza. Es cierto que hay más pobreza que la que se decía, pero también es cierto que *había* –desde hace mucho tiempo– más pobreza de la que se declaraba.

La emigración de compatriotas (tanto de ultramar como transfronteriza) continúa, los abusos contra el consumidor son el pan de cada día, las fumigaciones a pueblos indígenas y campesinos son sistemáticamente realizadas y negadas por la gran prensa, la represión se enseñoorea, principalmente en el norte en la lucha contra supuestos guerrilleros, se dise-

¹ Otro dicho del idioma español grafica este comportamiento: Piensa el ladrón que todos son de su condición

² Cuando lo que cierta prensa oculta por detrás del supuesto sobreprecio, es la cola de paja en caso que se inicien mensuras judiciales en diferentes partes del país y esto destaque la olla de los remanentes fiscales apropiados por los grandes propietarios.

ñan planes anticrisis³ que sólo terminan beneficiando a los afortunados. En fin, parecería que seguimos como estábamos.

Para ponerle el moño al paquete, los atorrantes de siempre intentan hacerle “rectificar rumbos” al Ejecutivo esgrimiendo la vaina del juicio político... y mientras, los pobres de esta tierra comen su miseria, reciben FOPE (Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada) y ven desvanecerse al mesías. Y no es que uno sea prejuicioso, es que nunca resultó aquello de pretender estar bien con Dios y con el Diablo.

La opción del *poncho jurú* no es nuestra sino de él.

³ Centrados en aumentar la disponibilidad de recursos financieros a partir del incremento del endeudamiento externo, un relajamiento de los límites en el sistema financiero para dotarlo de liquidez, la iniciativa de concesionar las principales rutas del país a empresas privadas, entre otras medidas. Lo que en la práctica constituye un renovado paquete de estímulos y subsidios a los ricos, postergando sine die las políticas anunciadas de cambios a favor de la población históricamente marginada.

2010

¿Cuál agricultura, la de las máquinas y agrotóxicos o la de las personas?*

La realización del II Seminario Regional de Educación y Agroecología realizado en Santaní la primera semana de agosto, no resultó agradable al paladar de los responsables de *abc color* y de aquellos a quienes el periódico representa. Entre los organizadores figuraban organizaciones no gubernamentales dedicadas hace varios años a la promoción de una agricultura *con* agricultores (Tesai Reká Paraguay, Alter Vida, SEPA, CECTEC y varias otras) y del uso de herramientas y prácticas agroecológicas en la producción de alimentos. Para los señores del agronegocio, esto es herejía. La única agricultura “moderna” es aquella que se mueve en base a petróleo, tractores, transgénicos y agrotóxicos. El resto es el atraso, el anacronismo, es la postura de los que se oponen al “desarrollo” y el progreso. Éste es sin embargo el viejo discurso, tan viejo como el de la revolución verde de los años sesenta, es el discurso de hace 50 años. Hoy las cosas cambiaron y los dueños del país no se han percatado, o no quisieron darse cuenta de las consecuencias que trae el modelo de la agricultura depredadora para el país y el mundo.

El Seminario llevado a cabo en Santaní se enmarca en la conveniencia de darle continuidad a lo debatido en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra,

* Artículo escrito con motivo del II Seminario Regional de Educación y Agroecología realizado en Santaní.

realizada en Cochabamba, Bolivia, a fines de abril de este año. Los temas debatidos en Santaní entre representantes paraguayos, argentinos, uruguayos, brasileños y de otros países de la región enfatizaron, entre otros, los siguientes puntos:

- El agronegocio y su práctica de sobre-explotación de la tierra genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) de varias categorías, aportando entre el 45% y 57% de las emisiones a nivel global, hecho que hace del rubro, un importante factor del cambio climático.
- La lógica mercantilista del agronegocio desatiende el derecho a una alimentación equilibrada alentando prácticas que producen el cambio climático, el cual es un importante factor que afecta negativamente a la soberanía alimentaria, pues hace cada vez más difícil la disponibilidad y acceso a los alimentos y la estabilidad de producción.
- Cuestionar las lógicas y prácticas de producción de alimentos de la agropecuaria convencional que generan el cambio climático, haciendo perder a la Madre Tierra su capacidad productiva frente a la erosión, la salinización, la acidificación, la compactación de los suelos y la destrucción de la diversidad biológica y natural.
- Promover políticas de control estatales sobre los sistemas de producción agropecuaria para evitar el daño a la Madre Tierra.
- Exigir que los gobiernos se comprometan en la defensa del modelo de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ecológicos que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción agroecológica, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

- Censurar cualquier estrategia político-militar que atente contra la soberanía alimentaria de los pueblos.

Como puede verse, este listado de temas que en realidad es mucho más extenso, no constituye precisamente un anacronismo, sino que por el contrario nos está alertando sobre lo que hoy pasa en el planeta y en nuestro país, y es más bien una anticipación de que las cosas nos pueden ir mucho peor si los gobiernos (por necesidad u obsecuencia) insisten en apoyar a los agronegocios y a su lógica de la muerte de la naturaleza.

Disparen contra el SENAVE.

El agronegocio patalea*

Las leyes para los poderosos se acatan cuando convienen. Si no, no. Acostumbrados como estaban los gremios sojeros y sus patrones, las multinacionales agroexportadoras y proveedoras de insumos, a considerar al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) como una dependencia menor de sus centrales corporativas, se encontraron de repente que ciertas leyes existen y que además, debían cumplirlas. El nombramiento de Miguel Lovera, un técnico de nivel internacional, de bajo perfil pero comprometido con la ley, pasó a ser considerado por estos grandes señorones, intolerable.

La normativa existente en este caso (algo raro para nuestro país) es clarísima: está el Decreto 12706/08 de la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (COMBIO) que establece que el MAG debe autorizar el uso de semillas transgénicas en el país. En este momento no está permitido el uso de semillas de maíz transgénico en el país, por lo que el SENAVE está obligado a impedir su cultivo o a destruirlos debido a: i. la Ley 2459, que crea el SENAVE. Específicamente en su Art. 24, referente a las infracciones a las leyes y reglamentaciones que debe aplicar. Más específicamente en su inciso c. que habla de “Decomisar y/o destruir las mercaderías o materiales en infracción y/o elementos

* Sin fuente.

utilizados para cometer la infracción”; ii. la Ley 385, *De Semillas*. En el articulado referente a las infracciones, establece que el SENAVE debe “Decomisar, multar o clausurar lugares donde se depositan semillas transgénicas” y iii. el Decreto N° 7797/00 que en su Art. 54 establece que “Está prohibido producir semillas sin el registro correspondiente”. El SENAVE es el organismo que otorga el registro de semillas en el país.

Bueno, pues entonces ¿qué es lo que quieren los señores y señoras sojeros/as? Lo ideal para ellos sería –y para esto no hace falta ser adivino– derogarlas. Así como los campesinos e indígenas molestan para expandir el área de siembra de los monocultivos, así también ciertas leyes molestan. Pero como por ahora todavía no pueden, entonces intentan reglamentarlas de una manera completamente viciada, entre cuatro paredes, para que pocos se enteren. Como tampoco les resultó esta movida porque apareció el Chapulín Lovera, empiezan a destilar veneno por los medios de prensa, entre ellos *abc color*, el periódico más obsecuente e histérico de la prensa nacional para defender los intereses multinacionales y anti paraguayos.

Una estrategia utilizada es la de invitar a extranjeros, como lo fue la “científica europea” Esperanza Torija, quien tiene el tupé de venir a insultarnos con un desparpajo digno de mejor causa. No sé hasta qué punto la Universidad Complutense de Madrid puede estar, ella sí, defendiendo “ciertos intereses” o acusando a todo aquel que tiene información diferente a la suya de ser “ignorantes”. Esas fueron sus doctorales opiniones. Poco favor le hace a esa casa de estudios.

El otro visitante fue el Ing. Agr. Claudio Zielke de la ciudad de Guairá en Mato Grosso do Sul, Brasil, quien expresó que “es un desatino” destruir cultivos de maíz transgénico. Y claro... cómo no va a serlo si de la destrucción de la biodiversidad es precisamente de donde salen las ganancias de las multinacionales. Hay que ser loco para poner la biodiversidad por encima de las ganancias.

Otra perla informativa del diario “con fe en la patria” fue la aparecida entre los días 18 y 20 de agosto, en la que se nos informa que el gobierno de la provincia de Formosa, Argentina, distribuye oficialmente semillas

transgénicas de algodón a sus agricultores. El día 20, remata con una entrevista al nunca tan bien recordado exministro Raúl Torres quien, por supuesto, defiende a los transgénicos como quintaesencia de la tecnología agrícola.

En respuesta a este acoso genético a la agricultura paraguaya, tres redes de organizaciones no gubernamentales prepararon un acto en el que tomarán posición con respecto a los transgénicos en general y al del maíz en particular. Interpelarán además a las autoridades sobre qué están haciendo para defender a la gente de los desastres que dichas semillas pueden provocar tanto al germoplasma nacional como a la salud de paraguayos y paraguayas.

El valor de un Plan*

Un plan es una intención o un proyecto. Es un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido un plan es también un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.

Puede afirmarse sin mucho margen de error que un Plan en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Su calidad en todo caso dependerá de sus objetivos, pero casi siempre en éstos todos estamos de acuerdo. Es lo que sucede con “Paraguay para Todos y Todas. Propuesta para el Desarrollo Socioeconómico con equidad, igualdad y universalidad. Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020” presentado por el gobierno a comienzos de semana.

La “bondad” de un Plan está en relación directa a la ejecución de las tareas que planificó. Un Plan que no se ejecuta es un documento que suele parar en los estantes de la oficina de quien lo elaboró. La “bondad” de un Plan depende también de si se dan o no las condiciones para que se ejecute. Entre esas condiciones hay tres de la mayor importancia: tener el financiamiento para ejecutarlo, contar con personas idóneas que lo implementen y garantizar la transparencia en su realización (o sea,

* Diario Última Hora, Marzo 2010.

que no haya corrupción). Un buen plan no ejecutado o mal ejecutado termina siendo un mal plan. Un mal plan bien ejecutado termina siendo un buen plan.

Por la escasez de espacio me remito sólo a las metas para el 2013 presentadas en la propuesta del Gobierno. Por cierto, cumple el primer requisito, o sea, las metas que se propone son altamente deseables. Quién estaría en desacuerdo por ejemplo en: aumentar la cobertura de los servicios de salud o reducir las tasas de mortalidad materna e infantil; o reducir el analfabetismo y aumentar la tasa bruta de educación; o mejorar los servicios de agua, saneamiento, identificación civil y seguridad alimentaria; o disminuir la cantidad de niños de la calle y dar tierra a los indígenas; o reducir la pobreza, la desocupación; o empezar a implementar acciones en la línea de la reforma agraria. Hasta los más obsecuentes defensores del neoliberalismo darían su *nihil obstat* a un programa que tiene estas metas. Los peros empiezan cuando se examinan las condiciones para implementarlo. ¿Será suficiente lo que Dionisio Borda aporte para hacerlo viable, o lo que aporte Itaipú o Yacyretá, o habrá que tomar más endeudamiento externo, o se aprobará el IRP para tener nuevas fuentes, o (harán lo mismo que Pepe Mujica) se usará una parte de las reservas internacionales para promover el desarrollo nacional? No está claro.

En color sepia están también, quiénes implementarán un Plan tan completo, tan inter institucionalmente entramado, que requiere de una fuerte centralización para que se pueda hacer una eficiente fiscalización y seguimiento del cronograma estipulado. ¿Habrá suficientes personas idóneas?, ¿suficientes personas comprometidas con el país?, ¿suficiente dosis de patriotismo en sus unidades ejecutoras?

Y por último pero no menos importante, ¿cómo se filtrarán los actos de corrupción que endémica y crónicamente afectan a la administración pública y a la ejecución de proyectos? Porque... las cabezas pueden ser buenas, pero la herencia de los 60 años sigue en los mandos medios e inferiores (suponiendo beatitud en todos los funcionarios altos del actual gobierno).

Luguista de la primera hora*

Tomás Palau es uno de los sociólogos críticos más reconocidos en Paraguay. Es profesor de la Universidad Nacional de Asunción e investigador de BASE Investigaciones Sociales. En entrevista exclusiva, realiza un balance de la primera mitad del mandato de Fernando Lugo.

Nos recibe en su despacho de BASE-IS (BASE-Investigaciones Sociales) donde, con un viejo retrato de Salvador Allende junto a Pablo Neruda a sus espaldas, identifica los temas fundamentales de la actualidad paraguaya.

El centro de Investigación BASE-IS acaba de publicar un libro con la aportación de varios autores, donde se realiza un balance del primer año y medio de Gobierno. ¿Cuáles serían para usted los principales avances del Ejecutivo?

En realidad, debemos dejar claro que se han dado pocos avances en este período en lo que respecta a las principales promesas de campaña. En cuanto a Reforma Agraria, los pasos han sido imperceptibles; en lo relativo a la corrupción, se ha avanzado de manera tibia; donde ha

* Entrevista realizada por Luismi Uharte, Sociólogo y escritor español, Profesor-investigador del Departamento de Antropología Social de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). en: <http://vivapy.wordpress.com/2010/06/29/entrevista-a-tomas-palau-luguista-de-la-primera-hora/>

habido un progreso más notable ha sido en la renegociación con Brasil del Tratado de Itaipú.

Por otro lado, hay que reconocer los logros del Ministerio de Salud gracias a la gratuidad progresiva del servicio y la reducción del cuoteo político en la selección de funcionarios públicos. Sin embargo, debemos señalar también que el bloqueo del resto de poderes contra el Ejecutivo ha sido permanente.

Efectivamente, uno de los comentarios que habitualmente más se escuchan de boca de la ciudadanía es el supuesto bloqueo al que está sometido el Gobierno. ¿Cómo se concreta?

Nadie puede negar que el Gobierno está acorralado por el resto de poderes, públicos y privados. Por un lado, tenemos al Poder Legislativo, donde la derecha tiene mayoría aplastante y actúa como apisonadora contra toda propuesta progresista del Ejecutivo. La amenaza de activar el 'juicio político' es constante y se ha convertido en una de las instituciones más reactivas contra el Gobierno.

Paralelamente el Poder Judicial y el Ministerio Público siguen conformados por los mismos funcionarios de siempre, por lo que pensar en la posibilidad de que puedan acompañar el proceso de cambio es una ingenuidad. A su vez, dentro del propio Poder Ejecutivo hay sectores que obstaculizan la marcha del Gobierno. El vicepresidente, Federico Franco, es actualmente el mayor opositor al presidente Lugo, por muy extraño que pueda parecer.

Paralelamente, en el terreno de los poderes privados, los medios de comunicación están jugando un papel sumamente beligerante contra el Gobierno, defendiendo los intereses de sus mismos dueños, es decir, del poder económico. El objetivo fundamental que todos ellos tienen es demostrar que con este Ejecutivo no hay ningún cambio.

Recientemente, usted fue uno de los firmantes de una carta de apoyo al ministro de Defensa, tras las descalificaciones a las que estaba siendo sometido, producto de su misiva a la embajadora de EEUU, donde le señalaba lo poco conveniente de sus reuniones con sectores opositores. ¿Qué hay detrás?

El actual ministro de Defensa, el general Luis Bareiro, es un militar institucionalista, de corte progresista, que aunque fue formado en la Escuela de las Américas, es sumamente crítico con ésta y con la hegemonía militar de EEUU en la región. En un libro que escribió hace pocos años, se posicionaba a favor de configurar unas Fuerzas Armadas Latinoamericanas, independientes del influjo del Pentágono. Bareiro es un firme defensor de la unión latinoamericana, y por tanto de UNASUR y de la propuesta del Consejo Suramericano de Defensa. En realidad, por todo esto está siendo atacado. Él mismo nos dijo que el Ministerio del Interior estaba lleno de colombianos que se habían quedado tras el secuestro del ganadero Zavala.

Buena parte de la izquierda paraguaya está en un proceso de convergencia en el marco del llamado “Espacio Unitario”. ¿Cómo valora este proceso?

Es un proceso que viene de atrás, que ha supuesto mucho esfuerzo y que empieza a dar sus frutos. De hecho, nunca la izquierda paraguaya había logrado unificarse a estos niveles. De cualquier manera, faltan todavía algunos grupos campesinos importantes como FNC (Frente Nacional Campesino). Recientemente se convocó un acto de masas y teniendo en cuenta la debilidad de la izquierda en Paraguay para congregarse a grupos numerosos, este evento fue un buen indicador para el futuro.

De cara a las próximas elecciones municipales de noviembre, ¿qué previsiones puede compartir con nosotros?

El Partido Colorado está muy fragmentado y el Partido Liberal también está en una situación complicada de rencillas internas. Por eso, la potencialidad del proyecto del ‘Espacio Unitario’ es grande, si sus principales referentes saben manejar con mucho tacto el proceso de convergencia. Si avanzan en el camino de la unidad, es probable que puedan convertirse en el tercer espacio político de referencia. Los resultados en la capital, Asunción, servirán como un termómetro para el resto del país.

¿Usted es del PCC?

Más que eso, yo soy una señal de estos tiempos*

*Cada vez nos es más difícil encontrar las raíces de nuestros propios miedos.
Nuestros miedos difusos están cada vez más desordenados.
Hay toda una maquinaria mediática y de poder que se encarga de
desordenarnos en ese sentido.*

María Naredo. Jurista especializada en Género y Derechos Humanos.

Cuando uno —como yo— conoce poco de un tema, lo mejor es consultar trabajos ya hechos por especialistas. Son sus ideas y hasta sus palabras las que presento en este artículo sobre la percepción de la inseguridad; uno es de la abogada María Naredo Molero, especialista en *estudios* sobre la inseguridad, y el otro de Marcos Camacho (Marcola), del Primer Comando Capital (PCC), especialista en la *práctica* de la inseguridad.

¿Por qué es la señal de los tiempos?

“Antes éramos pobres e invisibles. Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social”, dice Marcola.

¿Dónde sitúa Marcola el origen del (PCC) digamos, la inseguridad? En el crecimiento de la pobreza y la marginalidad. Naredo agrega: “en las aglomeraciones urbanas que cambiaron radicalmente las pautas de la seguridad y el miedo”. Antes los peligros estaban ‘fuera’, refiriéndose a las aldeas del medioevo europeo o los távas de nuestros antepasados guaraníes, ahora están dentro. Ahora, según Foucault al que cita Nare-

* Presunta entrevista a Marcos Camacho (Marcola), uno de los principales jefes de la banda delictiva Primer Comando Capital (PCC) que está encarcelado. Esta entrevista fue hecha supuestamente en mayo de 2007 por el periódico O’ Globo/RECONUR. Ver en [http://www.nodo50.org/tortuga/Escalofriante-entrevista-con-](http://www.nodo50.org/tortuga/Escalofriante-entrevista-con-Maria-Naredo-Molero) María Naredo Molero “Seguridad urbana y miedo al crimen” y una entrevista con ella, “Si la ciudadanía se reapropia de las aceras y las calles, la seguridad vendrá por añadidura” Amador-Fernández-Savater, www.rebelion.org. 24.01.2010.

do, “[...] los mecanismos de combate son dos: la expulsión o el disciplinamiento, que son acciones diferentes pero no incompatibles”.

Agrega esta autora que “[...] en las ciudades la multitud es vista como potencialmente peligrosa; la masa es un problema que hay que dominar”. Las instancias informales de control social preindustriales son sustituidas por las agencias de control formal: la policía¹, los juzgados, las cárceles. El peligro ahora no son las bestias o las catástrofes, sino *otros ciudadanos*. Para ella, el concepto de seguridad se reduce hoy a la protección de la ciudadanía ante la criminalidad, ya no tiene aquel componente de solidaridad o confianza mutua que era un escudo protector más eficiente.

Para Marcola el miedo, que es el principal mecanismo generador de inseguridad, es producto de una agresión a la vida y al patrimonio. Su versión, la de los que están en la vereda de enfrente, es:

“Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera. Nosotros somos hombres-bombas. En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas. Estamos en el centro mismo de lo insoluble. Ustedes en el bien y el mal y, en medio, la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva ‘especie’, ya somos otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte para ustedes es un drama cristiano, en una cama, por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común”.

“Mis soldados –dice Marcola– son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más (solamente agregaría yo) proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad”. Y sentencia: “Están frente a una especie de post miseria. Eso. La post miseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas moder-

¹ En el modelo hegemónico de seguridad, la función protectora se ha delegado a estrategias e instancias formales que ya en su origen no fueron creadas para garantizar seguridad, sino más bien para producir disciplina.

nas. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandados son una mutación de la especie social. Son hongos de un gran error sucio”.

Es la cara de la inseguridad que existe, está en muchas partes, en Pedro Juan, en Ciudad Juárez, en Capitán Bado, en Tijuana, en Némby o en San Lorenzo. Es el producto de la miseria, del *desarrollo torcido* que olvidó a la mitad de la población. Mientras, los *incluidos* empezamos a desarrollar el sentimiento de inseguridad que está –según Naredo– muy vinculado a la incomunicación y al abandono de los espacios públicos. El repliegue de la ciudadanía hacia lo privado –el domicilio, la familia nuclear– hace que se limite el contacto con las personas del entorno y se pierda el control sobre los espacios.

Pero hay también una inseguridad *virtual* diferente a la inseguridad real, que cumple una función no menos importante para el control social. “Los medios de comunicación crean –sigue diciendo Naredo– una criminalidad difusa, con la finalidad de inquietar o fascinar al público, crean con eso la sensación de que la criminalidad está en aumento, lo que lleva a la ciudadanía a tener la necesidad de protegerse”². Basándose así en hechos aislados, se van conformando *entidades* como la criminalidad, la droga, el terrorismo, que a modo de cajón de sastre sirven para explicar o camuflar casi todas las inseguridades sociales.

Aparecen entonces dos formas de respuesta: el refuerzo del sistema represivo-institucional y el incremento de la *defensa privada*. Se pasa del Estado *social* al Estado *penal-policial*. En este Estado, la criminalización y el encarcelamiento de los desheredados sustituyen a la política social. Naredo es muy clara en esto:

Permite canalizar un malestar social más complejo, como simple miedo a la criminalidad, evitando así el cuestionamiento de las relaciones de poder (económicas, políticas, de género, etc.) que lo provocan. Justifica una política cada vez más represora frente a los grupos excluidos, señalados como chivos expiatorios y el mal de todos los males. Y legi-

² Las empresas de seguridad han proliferado en los últimos años. La seguridad pasó a ser un bien que se compra y se vende y que determina la posición social de quien la consume.

tima finalmente la restricción de libertades y derechos ciudadanos en nombre de ese combate contra el crimen.

Esto es, sobre llovido, mojado. No sólo este sucio error, el modelo de desarrollo que se nos impuso, ha creado hongos sino que además ahora, la represión. Obviamente, esto ni los asusta ni los detiene; veamos lo que dice al respecto Marcola:

Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mí. ¡Agarren a ‘los barones del polvo’ (cocaína)! Hay diputados, senadores, hay generales, hay hasta expresidentes del Paraguay (sic) en el medio de la cocaína y de las armas.

Pero, ¿quién va a hacer eso? ¿El ejército? ¿Con qué plata? No tienen dinero ni para comida de los reclutas. El país está quebrado, sustentando un Estado muerto con intereses del 20% al año y Lula todavía aumenta los gastos públicos, empleando 40 mil sinvergüenzas. ¿El ejército irá a luchar contra el PCC? Estoy leyendo Klausewitz ‘Sobre la Guerra’. No hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Tenemos hasta misiles anti-tanque. Si embroman, van a salir unos Stinger. Para acabar con nosotros, solamente con una bomba atómica en las villas miseria. ¿Ya pensó? ¿Ipanema radiactiva?

Naredo le da en parte la razón a Marcola: *“Las instancias represivas pueden en todo caso gestionar algunas situaciones extremas, no procurar nuestra seguridad cotidiana. El modelo hegemónico funciona en espiral: a mayor percepción de inseguridad, más represión, y a mayor represión, más sensación de inseguridad”*³.

El malestar nos viene de otro lado; de la desocupación, del hambre, de la constatación de niños de la calle, de la inmisericorde mortalidad materna, o de las escuelas destruidas y de los hospitales en ruinas, del crecimiento de la pobreza en las villas alrededor de las ciudades. Ese

³ En el caso de la droga la tendencia a la represión se ejemplifica con lo que se dio en llamar “la guerra contra la droga”, que es el biombo que esconde otra guerra, la dirigida contra los componentes de la población percibidos como menos útiles y potencialmente más peligrosos (Wacquant, L. 1998 “La tentation pénale en Europe”, En, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 124, septiembre, 3-6, citado por Naredo, María, ob. cit.).

malestar producido por el sistema, por el *modelo de desarrollo*, necesita ser canalizado. Lo dice Naredo: “*cuanto más malestar necesitemos expresar, más necesidad habrá de un chivo expiatorio y de castigos ejemplares a ese chivo expiatorio*”, que se expresa en el joven inducido a la venta callejera de crack porque le usurparon el futuro, o en campesinos apoyando a un EPP porque no ven salida, o formando parte del PCC o el Comando Vermelho porque ahí por lo menos son “álguienes”. Esos son los chivos expiatorios con los que Rafael Filizzola y una larga lista de dueños de medios masivos de comunicación y empresas dedicadas a la seguridad, nos venden como inseguridad. Que es un gran negocio político y económico.

El modelo hegemónico de seguridad trata de inocular ese miedo. Este modelo no tendría justificación sin el miedo. El miedo del ciudadano es el ingrediente básico que le da sentido. Como dice un amigo, no hay sociedad más disciplinada que la que tiene miedo y está hipotecada. Ciudadanos con hipoteca y con miedo son ciudadanos más fáciles de gobernar. ¿Y para qué sirve todo esto?, se pregunta Naredo, *para mantener el statu quo, las relaciones de poder de género, de clase y de etnia: control migratorio policial, control de los barrios, imposición de nuevas formas de vida urbana que sin ese miedo serían tan aburridas que la ciudadanía las rechazaría... Hay que vivir con mucho miedo para querer vivir en un búnker.*

¿Cuál es la solución?, le preguntaron a Marcola.

“Ustedes sólo pueden llegar a tener algún éxito si desisten de defender la ‘normalidad’. No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero a ser franco, en serio, de su moral. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Sólo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Sólo la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella. Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del problema. Como escribió el divino Dante: ‘Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno’”.

Saque usted, lector o lectora, sus propias conclusiones.

2011

Se aprobó el algodón transgénico*

En un acto de prepotencia institucional, el obediente ministro Enzo Cardozo saltó las competencias institucionales del SENAVE –ente encargado de la aprobación de nuevos “eventos” (o sea, semillas)–, aprovechó la ausencia del país del viceministro de Agricultura y aprobó, con la presión de la Monsanto y sus satélites empresariales locales (o sea, la CAP Cámara de Anunciantes del *Paraguay*), la variedad MON 531 de algodón transgénico.

En la misma resolución de autorización del uso de la nueva semilla transgénica de algodón, el llanista ministro de Agricultura delega a la DEAG (Dirección de Extensión Agraria), organismo dirigido también por otro operador político de esa interna del PLRA, a capacitar a los agricultores “en el uso de la nueva semilla”; al IPTA (Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria), coto privado de los empresarios sojeros, a realizar los “estudios de aplicación” de la variedad; y nada menos que a la propia empresa Monsanto “el monitoreo post comercial”. O sea, encarga a la propia empresa productora de la semilla a que fiscalice el pago de las regalías correspondientes por la comercialización de dicho algodón.

Más allá de la consideración de los daños que la introducción de otro transgénico pueda causar –en este caso– a las variedades nativas de

* Boletín de Derechos Humanos y Agronegocios N° 11, Diciembre de 2011. BASE-IS

algodón y a los estudios de adaptación de esas semillas a las características locales de clima y suelo que viene haciendo el IAN (Instituto Agronómico Nacional), esta decisión ministerial prepotente, sigilosa y sumisa ante el capital multinacional, nos muestra el aprecio y respeto que este ministerio y por extensión este gobierno tiene ante el pueblo en general y los futuros pequeños productores algodoneros del país, que —entre otras cosas— deberán pagar un altísimo costo para la compra de esas semillas, y un impuesto a la multinacional por la venta de su producción en concepto de regalías.

Como dijo el titular de la CAP “es un gran paso tecnológico para el Paraguay”... Es como pasar de la horca a la guillotina, lo cual supuso también un gran paso tecnológico para ciertas naciones y para ciertas cosas.

Pero no hay que echarle toda la culpa a nuestro ilustre ciudadano ministro. No sólo acá se cuecen habas. Países que se dicen democráticos e incluso progresistas, más “avanzados” que nosotros como Brasil y Argentina e incluso Uruguay y hasta Bolivia, han bajado la cabeza ante las imposiciones ejercidas por un nuevo gobierno supranacional, el de las Repúblicas Unidas de la Soja (el de las multinacionales de la soja), que de hecho dirigen las políticas públicas en materia de agricultura, y en el caso paraguayo, de ganadería, de nuestros países.

Con esta medida, el algodón paraguayo, que era un cultivo que significaba ingresos en efectivo para una gran cantidad de pequeños productores, dejará de ser lo que era, ya que ahora la apropiación de los excedentes del mismo, que antes quedaba a los acopiadores, desmotadoras y exportadoras, ahora será apropiado también por la Monsanto, como se dijo, tanto en la venta de semillas, como por el pago de regalías al venderse la producción.

Otro círculo que se achica y que tiende a hacer desaparecer la agricultura campesina en el país.

La chipa y la soja. La pugna gastro-política en la frontera agroexportadora del Este paraguayo

Prólogo*

Cuando hace ya algunos años leía el Documento Santa Fe II, en el que se deja explícito que —en pocas palabras— el alimento es un arma de control político de los pueblos, no tenía los suficientes elementos para imaginar que el futuro vendría tan rápido.

Hoy, algunos autores que analizan el control global sobre las poblaciones del mundo, hablan de armas silenciosas para una guerra tranquila. Son herramientas que no sólo ayudan al disciplinamiento político de grandes masas sociales, sino que tienden a dejarlas sin cultura, sin identidad, que es la forma más segura de garantizar la irreversibilidad de los procesos. Cuando no tienen cultura, los pueblos dejan de tener memoria y son a la postre entidades en disolución. Sin duda alguna, la alimentación es una de esas armas.

Sacarle al pueblo su comida y en compensación ofrecerle otra cosa, por decir lo menos, “comida para pobres”, o basura, o chatarra, es un acto violatorio del más elemental de los derechos humanos de las personas. De esto trata el libro de Richard Doughman, de la guerra geopolítica entre la chipa, emblemático alimento paraguayo y la soja, mercancía

* Doughman, Richard, 2011. *La Chipa y la soja. La Pugna gastro-política en la frontera agroexportadora del Este paraguayo*. Asunción: BASE-IS. AECID.

extraña y global para alimentar ganado en el extranjero o llenar tanques de gasolina con “biodiesel”.

Este proceso de penetración del agronegocio sobre la comida autóctona (aquella que le hace mencionar al autor que “la comida, antes que nada, es un vínculo directo entre quien come y la naturaleza”), casi invisible para la población urbana, es descrito meticulosamente en este libro, pionero por cierto, sobre un tema también invisibilizado en sus repercusiones: la comida. Lo dice el propio autor: “La presente investigación nació de una curiosidad por ver cómo las tensiones entre lo local y lo global se concretan en la comida en un lugar específico, la frontera agroexportadora en el Este del Paraguay, donde una cultura alimentaria local y en gran medida no industrial, colinda directamente con la producción mecanizada capitalista para la exportación”.

La estructura del trabajo guía al lector desde un inicio, en el que se hacen consideraciones teóricas sobre lo que es la cultura alimentaria, sobre cómo se fue estructurando el sistema alimentario industrial, y continúa sobre cómo el conocimiento así llamado “científico” se va imponiendo sobre el conocimiento local, aquel que se construyó desde hace milenios para satisfacer la más elemental de las necesidades humanas.

La descripción que el autor hace sobre la comida campesina paraguaya es a la vez rigurosa y amena, haciendo casi una disección de lo que implica cada plato, sus ingredientes, su vinculación con la cultura de sus comensales, sus prácticas productivas. Nos muestra incluso la estratificación social que desde muy temprano impregnó las prácticas de una gastronomía (paraguaya también) para ricos y otra para pobres. No hay un dejo de romanticismo en las explicaciones que Richard nos da.

Se adentra luego, dado que el trabajo está centrado en las regiones alejadas al norte del río Paraná, en lo que fue el proceso de colonización del eje Este de la región Oriental del país, con el inicio del monocultivo de la soja, la expansión de la ganadería de exportación, la forma en que actuó el Estado en esos (y en estos) momentos y la forma como las organizaciones campesinas enfrentan el despojo de las que están siendo objeto.

Las etapas del proceso alimentario campesino son estudiadas con una profusa información primaria recogida en dos comunidades de la región, luego de largas y reiteradas visitas a las mismas.

La producción, distribución, procesamiento, consumo y hasta la eliminación de los desechos son descritos en detalle. Luego enumera, describe y comenta las presiones que ejerce el otro sistema, el del agronegocio, sobre el sistema alimentario campesino; la expulsión campesina, la pérdida del territorio, la destrucción del ambiente, la contaminación genética, la forma de dominio del sistema alimentario industrial, la progresiva sustitución de alimentos locales por los industrializados, hasta la forma en que se produce esa decisiva interrupción en la transmisión de una generación a otra de esos conocimientos que permitieron el desarrollo de la gastronomía campesina y paraguaya.

En sus consideraciones finales, el autor aborda el tema central del libro: la relación entre el poder y el comer, como él lo llama, para sintetizar nos luego el meollo del trabajo en la explicación de lo que es la “gastropolítica de la sojización”.

Bibliografía sobre alimentación y nutrición existe en buen número en el país. Allí el lector encontrará lo que se produjo hasta ahora, tanto desde el punto de vista de recetarios, relatos costumbristas, informes técnicos sobre datos nutricionales, como sobre los derechos humanos a la alimentación, o informes económicos referidos al tema, pero ninguno –al menos no de mi conocimiento– sobre las implicancias políticas y geopolíticas del proceso de producción y consumo de alimentos identitarios de una cultura. En este sentido, el aporte de nuestro autor es único y pionero.

Richard Doughman cayó, casi se diría por casualidad, en BASE Investigaciones Sociales, referenciado por una colega y amiga de la Universidad de Cuyo en Mendoza (a quien por cierto también agradecemos el buen tino de enviárnoslo), nos mencionó que Richard estaba por empezar su tesis de maestría en sistemas alimentarios y que había elegido venir al Paraguay. Lo recibimos al “gringo” con cierto escepticismo, pero pronto dio muestras de haber acopiado un cúmulo de información y sobre todo de interpretaciones sobre los hechos que estudiaba,

que a la vez de novedosas coincidían con las interpretaciones de esos mismos hechos sociales que solemos hacer en BASE-IS. Este trabajo fue presentado por Richard para optar por la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo en Mendoza, Argentina.

Nuestros sinceros agradecimientos al autor.

Los procesos socioeconómicos determinantes de los movimientos migratorios

La emigración paraguaya a la Argentina *

Mejor quedarse

Al revisar los pocos datos disponibles en el país sobre los movimientos migratorios, especialmente los invisibles, aquellos que se realizan durante los períodos intercensales, se llega a conclusiones simples: el principal flujo está dado por la migración interna y por la información disponible –por lo menos hasta el Censo de 1992–. El mayor caudal se da en el flujo urbano/urbano y en segundo lugar por el rural/urbano. No existe información sobre el comportamiento de la migración a partir de 2002.

En base a datos de una encuesta realizada a fines de 2007, se encontró –contra lo que podría esperarse por la profusa información periodística– que 81,3% de las familias consultadas, de ocho asentamientos campesinos de cuatro Departamentos sojeros del país, no tiene ningún miembro que tenga intenciones de migrar y 9,7% sólo tiene uno que sí desea.

Se encontró asimismo que cuando las familias consultadas habían logrado un cierto nivel de arraigo, diciendo que siempre habían vivido en

* Jornada internacional “Las migraciones actuales en Argentina”, Buenos Aires, 28 y 29 de junio de 2011. Sede Centro Cultural Borges.

ese lugar, el porcentaje de familias que no tenía ningún miembro que quería migrar, ascendía al 88,5% (ibídem).

Estos datos muestran por un lado, que —a diferencia de la opinión más comúnmente admitida— los y las paraguayos estarían mucho más interesados en que se les respete el derecho a NO migrar que a migrar. Por otro lado, muestra que la mayoría de los/as paraguayos/as que emigran, lo hacen por factores de expulsión. Básicamente, por falta de oportunidades laborales, lo que puede obedecer a diferentes factores, aunque también por la desprotección a que se ven sometidos por falta de políticas públicas, especialmente en el caso de poblaciones campesinas que son las que se ven más compelidas a migrar.

Un fenómeno nada nuevo

Resulta confuso tratar de encontrar un patrón que caracterice los desplazamientos espaciales de la población que habitaba el territorio paraguayo hasta por lo menos la independencia del país en 1811, período que podría extenderse hasta la guerra contra la Triple Alianza. La ascendencia de los pueblos guaraní en la región se había encargado de ignorar cultural y prácticamente los límites impuestos por la colonia y luego por las independencias nacionales. Esta “ausencia de límites” en un territorio culturalmente continuo, parecería haber sido introyectado por los mestizos que sobrevivieron a la tragedia de la guerra, marcando el carácter fuertemente migratorio de la población paraguaya que no era en realidad más que movimientos dentro de un único territorio. Obviamente la guerra fue un hecho político que produjo inmediatamente, luego de su trágico desenlace, movimientos poblacionales desde y hacia el país.

En efecto, la población paraguaya después de esa guerra (1865-1870) quedó diezmada; de alrededor de 1.300.000 habitantes antes del conflicto, sobrevivieron aproximadamente 300 mil. El Paraguay se encontró no sólo ante una crisis de población, sino también ante una crisis política y otra económica.

El remanente de la población paraguaya —en su mayoría mujeres, niños y ancianos— no estuvo en condiciones de acceder a los beneficios sus-

critos por la ley de 1872 de venta de tierras públicas; en realidad, fue una ley que impedía a la población campesina del país el acceso a la tierra. Esto constituyó una atracción para los extranjeros, que aprovecharon la oferta de tierras a precios ínfimos.

Como la mayor ocupación laboral fue la de la elaboración de yerba mate, trabajo discontinuo y estacional, la pequeña masa de paraguayos empezó a migrar temporalmente, al comienzo, dentro del territorio nacional, para luego cruzar las fronteras. Los primeros países receptores de paraguayos fueron Argentina y Brasil. Entre 1870 y 1880 entre 4 mil y 5 mil personas (paraguayos, argentinos, bolivianos y brasileños), empleadas directamente en recolección y preparación de la yerba mate, circularon libremente en toda la región del Plata.

El desplazamiento espacial de la población campesina en el Paraguay, si bien respondía en lo inmediato a causas económicas, obedecía más que nada al temor a las revoluciones y a las persecuciones políticas, así como al servicio militar obligatorio, mecanismo normalmente utilizado para reclutar combatientes para las revueltas internas de carácter político.

Por otra parte, la región sur del Paraguay que se hallaba en total despoblamiento, comenzó a nutrirse con inmigrantes provenientes de la provincia argentina de Corrientes. Según los Anuarios Estadísticos del Paraguay, entre 1880 y 1889 ingresaron 4.895 argentinos, y en menor proporción ingresaron los de otros países americanos, teniendo en cuenta que sólo vinieron 530 brasileños y 198 uruguayos.

Acerca de las causas

Al comenzar el siglo pasado, las turbulencias políticas se agudizaron. En 1904 una violenta revuelta sumió al país en permanente inestabilidad; subieron los “liberales” (expulsando a los “colorados” del gobierno) y el presidente que asume, Cecilio Báez (1905-1906) volvió a optar por la inmigración europea dado el desastroso estado económico del país. La emigración paraguaya a la Argentina continuó.

El carácter eminentemente político de la emigración paraguaya al exterior ya era claramente percibido por los analistas de la época: la situa-

ción política durante los primeros años del siglo XX, quedó marcada en la memoria de Saturnino Ferreira con las siguientes palabras: “Va casi medio siglo que vivimos la tragedia de las deportaciones y confinamientos. Antes de 1904 no se conocían esos procedimientos bárbaros, que tuvieron sus períodos de violencia en 1908, 1912 y 1922, provocando la emigración de 300 mil paraguayos...”. Sin embargo, los sucesivos gobiernos nacionales insistieron en suscitar la venida de extranjeros, por lo que seguían expropiando tierras para fundar nuevas colonias de europeos.

Hasta ese entonces, los motivos principales de la emigración fueron principalmente políticos, pero también la desigualdad social, empezando por la ausencia de una distribución equitativa de las tierras y de los productos, la falta de trabajo y los profundos trastornos financieros, entre otros. Pero el temor a las represiones políticas, sobre todo en los albores del siglo pasado, y hasta concluido el régimen de Stroessner en 1989, jugaron un rol preponderante en el éxodo paraguayo.

Desde sus comienzos, la emigración tuvo como destino principal la Argentina. Según Zacarías Arza, las cifras reportadas para la primera mitad del siglo XX son muy variables y poco confiables; las mismas varían entre 40 mil para Genaro Romero (1914), 20 mil para Teodosio González y 200 mil emigrantes para J. Natalicio González.

Durante los primeros años, los paraguayos se instalaron en las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos “en busca de labores que podían ofrecerles una vida mejor”, pero lo que en realidad encontraron no siempre fueron condiciones de vida digna para ellos. “Al presidente (González Navero, 1908-1910) le preocupaba la excesiva facilidad con que son contratados brazos en nuestro país para ser llevados al exterior a dedicarse a industrias peligrosas en regiones malsanas y lejos de todo centro de población civilizada” (Archivo del Liberalismo, 1987). Puede notarse el carácter claramente subalterno de los mercados laborales hacia los que emigraban estos compatriotas.

Reiterando, las razones históricas principales de esta migración deben atribuirse a los problemas políticos que azotaron al Paraguay durante todo el siglo pasado. A un año de haber terminado la guerra contra Bo-

livia, se produjo una oleada de desterrados, a consecuencias del Golpe de Estado de febrero de 1936 encabezado por el coronel Rafael Franco, quien destituyó al presidente Eusebio Ayala.

En años posteriores se produjo otra oleada de emigrantes paraguayos, especialmente entre 1941 y 1946, durante la dictadura de Higinio Morínigo; no menos de 50 mil paraguayos se vieron obligados a abandonar el territorio nacional, aunque sólo se dispone de la cifra de los residentes en las provincias de Misiones, Chaco y Formosa, donde se encontraban 157.385 paraguayos.

En 1947 (marzo-agosto) otro estallido político interno, llegó a concretarse en una guerra civil. Este conflicto fue motivo para que miles de paraguayos emigraran a países vecinos. Ya antes de esa guerra civil, los emigrantes paraguayos ascendían a 200 mil en la Argentina, el éxodo posterior fue “verdaderamente extraordinario, de proporciones jamás vistas, tanto por su cantidad como por su duración”. Efraím Cardozo señala que el éxodo de los opositores al régimen triunfante, se elevó a cerca de 400.000 paraguayos en los territorios limítrofes con el Paraguay.

El mayor porcentaje de emigración a la Argentina se produjo entre 1947 y 1960. Hasta la década del cincuenta, la principal emigración de paraguayos no era definitiva. Es recién a partir de la década del sesenta cuando este flujo tiende a fijar residencia en el país de destino; en esa década, 23,7% del total de paraguayos viviendo en ese país decidieron adoptar la nacionalidad argentina. Un análisis adicional de la migración paraguaya a la Argentina acá es innecesario, toda vez que el lector puede recurrir al trabajo de Halpern en el que encontrará un minucioso y documentado tratamiento del tema.

A partir de comienzos de la década de los años setenta, el patrón habitual de movilidad interna de la población, que estaba principalmente caracterizado por los desplazamientos rurales/rurales para la ocupación de la frontera agrícola, fue cambiando. En efecto, desde que asume Stroessner en 1954, su gobierno empieza a implementar sendos programas de colonización, tanto hacia el Eje Este dirigido hacia lo que luego sería Ciudad Pdte. Stroessner (hoy Ciudad del Este) y hacia el Eje Norte de la región Oriental. Ambos programas se hicieron con un

criterio eminentemente político, tratando de poblar áreas hasta entonces más o menos vacías de población paraguaya (no así de indígenas que empezaron a sufrir una sistemática agresión y expulsión de sus tierras).

La inspiración de estos programas venía de la doctrina de seguridad nacional y estaba inspirada por la escuela brasileña de Golbery de Couto e Silva. Stroessner, fiel discípulo de aquel, ubicó en los puntos clave de esos ejes de colonización, a campesinos de su estricta confianza, que por otro lado provenían en su mayoría de los minifundios de la región central del país, que en 1947 (apenas siete años antes) habían ayudado a la fracción de los colorados que apoyaba Stroessner en la guerra civil de ese año. Estos programas de desconcentración poblacional de zonas minifundiarias, tuvieron así una impronta eminentemente política. Desde luego, los campesinos de la oposición no tenían cabida en este programa de repartición de tierra, lo cual, considerando el período económico recesivo que caracterizó a toda la década de los años sesenta, favoreció la emigración de esta mano de obra que quedaba excluida del acceso a la tierra.

A partir de los primeros años de la década siguiente, se dan cambios productivos de importancia que modifican este patrón migratorio interno. El auge de los precios internacionales del algodón, así como los precios internos, insertan a la familia campesina de manera rápida y desigual a un mercado en esencia oligopólico, el de las agroexportadoras. El simultáneo aumento de los precios de la soja a su vez, estimula —entre otros factores— la migración masiva de brasileños que pasan a ocupar las mejores tierras de la margen derecha del río Alto Paraná. El encarecimiento del precio de las tierras y el prematuro cierre de la frontera agrícola (o “tierras sin dueño”) crea condiciones aún más difíciles para el campesinado. Sumado esto a la iniciación de las obras civiles de la represa de Itaipú y al flujo de capitales que dicha obra atrajo, la migración interna empieza a adoptar la dirección rural/urbana. El Censo del año 1982 registra por primera vez el importante descenso relativo de la población paraguaya residiendo en áreas rurales (de 63% en 1972 a 58% en 1982, a 49,7% en 1992 y a 43% en 2002). Estas cifras reflejan el éxodo migratorio interno a las ciudades del país y una aparente intensificación de la emigración.

A partir del ciclo agrícola 1999/2000, el cultivo de la soja transgénica, introducida vía contrabando al país, se expande rápidamente. Si en los 27 años anteriores se había llegado al millón de hectáreas, al cabo de 10 años, en 2010, se había expandido hasta 2,6 millones de hectáreas. Buena parte de esa expansión se hizo sobre tierras campesinas. Así pues en esta última década, aumenta rápidamente el número de “desplazados” por el modelo agroexportador, en su mayoría pequeños campesinos, los que en su mayoría se refugian en “ciudades” que en la práctica son realmente tugurios. Otros, los menos, optan por la emigración y entre ellos principalmente a la Argentina.

La cuestión de la expulsión del campesino de su comunidad de origen y su posterior desplazamiento a las ciudades, debe entenderse como la consecuencia extrema más visible del complejo proceso de degradación de las condiciones de vida provocado por la expansión del modelo de monocultivos orientados a la exportación, fundamentalmente de soja y el apoyo político que recibe de las autoridades de turno. Así, los emigrados deben ser considerados como desplazados, ya que en una gran proporción, estos movimientos poblacionales no tienen ninguna relación con lo que se suele denominar migración voluntaria, y responden en mayor grado a un proceso de migración forzada.

Existe sobre este punto, de parte del gobierno, una estrategia de negación y silenciamiento de la situación de violencia generalizada que se vive en el campo, y que tiene como principales víctimas a las familias campesinas paraguayas afectadas directa o indirectamente por el modelo agroexportador de monocultivo de soja, a través de fumigaciones indiscriminadas, presiones y otros actos de violencia por parte de grandes productores, capataces, fiscales, policías, funcionarios, paramilitares y demás agentes implicados en el conflicto, cuya consecuencia extrema, es el desplazamiento de estas familias. La situación del migrante paraguayo en la Argentina por su lado, en la mayoría de los casos no resulta necesariamente agradable. Según varios trabajos realizados (Halpern, Maguid) la migración regional a la Argentina fue –al decir de Halpern– “un fenómeno altamente codificado por el Estado”. El discurso sobre ellos “suele estar atravesado por una serie de prejuicios más o menos alentados, producidos y reproducidos por el Estado y sus instituciones”.

Esta migración fue política en su abrumadora mayoría en cuanto a los factores de expulsión, pero también es política en el lugar de destino debido a “la construcción en el país de destino de ese tipo de alteridad que es inseparable de los modos que asume el conflicto social en una sociedad estructurada en base a relaciones de clase y, por consiguiente, de distribución desigual del producto social”.

Para concluir y citando a Halpern, no es casual, nos dice, “que los momentos específicos en que se han desarrollado políticas más o menos explícitas contra los inmigrantes latinoamericanos han sido coincidentes con crisis en el mercado laboral, en los sistemas de salud y educación (desfinanciación estatal de ambas esferas), crecimiento de la inseguridad, crecimiento de la lucha obrera. El sujeto del ‘problema migratorio’ asume así –sin apenas imaginarlo– el papel del chivo que expía –políticamente– los problemas de otros”.

En brevísimo resumen

No es común en América Latina que un país tenga más del 10% de su población nativa viviendo fuera del país y que más del 10% de su población actual lo constituyan personas que no nacieron en el país. Se puede dar una de las situaciones, o la otra, pero las dos juntas no son frecuentes. Un ‘país de fronteras demográficas abiertas’ se lo llamó alguna vez. Muy abiertas por cierto. La razón es muy clara: la falta de compromiso y hasta la agresión de sus gobernantes contra su pueblo. La mediocridad y el fanatismo político, la hiperconcentración de recursos generadores de una pobreza ancestral de las mayorías, la ausencia casi completa de una racionalidad anclada en el bien común y dirigida a fuerza de represión y violencia hacia el bien propio o corporativo. Ahí están las raíces del éxodo paraguayo y de la entrega del mejor territorio y recursos de nuestra tierra, a intereses que nada tienen que ver con la reivindicación de lo paraguayo.

El modelo agrario paraguayo es anticampesino*

1. El presidente Evo Morales dijo hace poco que invitará a técnicos del gobierno paraguayo para que orienten a Bolivia sobre cómo producir alimentos, dijo que Paraguay es un país de seis millones de habitantes y exporta soja, arroz y carne vacuna para sesenta millones de personas, ¿es realmente el modelo agrario paraguayo para los países que buscan el cambio en la región?

El tipo de agricultura que se hace en el país, orientado a la exportación de materias primas para el mercado internacional controlado en su totalidad por corporaciones multinacionales, es la antítesis de lo que puede plantearse para un gobierno que busca un cambio que promueva el bienestar de su población más vulnerable normalmente campesina e indígena.

La soja, la carne y en menor medida el arroz, la caña de azúcar y otros, son cultivos que requieren grandes extensiones de tierra y están altamente mecanizados, lo cual significa que concentran la propiedad y el precio de la tierra y expulsan mano de obra. Por lo demás son grandes depredadores de recursos naturales cada vez más escasos, en el Paraguay se están derribando los últimos bosques, incluso en el Chaco, don-

* Entrevista en: <http://horizontesur.com.ar/radio/index.php/cartas/332-ies-el-modelo-paraguayo-un-ejemplo-para-bolivia-ide-que-habla-evo.html>

de se están expandiendo la ganadería extensiva y la soja, se destruyen y contaminan cursos y espejos de agua y desaparece rápidamente la fauna local.

La soja en particular se implanta con el paquete tecnológico impuesto por la Monsanto; semillas transgénicas, siembra directa en base a la tractorización del suelo y uso indiscriminado de glifosato (potente herbicida que destruye cultivos aledaños de autoconsumo y muerte de animales domésticos, por no hablar de intoxicaciones y muertes en humanos como ya han ocurrido varias en el país).

Quienes controlan este negocio, y digo negocio y no esta agricultura, ya que se trata de una agricultura sin agricultores, son los gremios del agronegocio; la UGP, Capeco, ARP¹ y otros. Por la vía de los insumos el negocio es controlado por multinacionales como Monsanto, Syngenta, y por el lado de la comercialización por corporaciones como Cargill, Bunge, ADM en el caso de la soja y de cinco o seis grandes frigoríficos en el caso de la carne.

Para el Paraguay ese 14,5% de crecimiento del PIB es una burla grotesca al pueblo, significa la ampliación de la brecha social y el crecimiento brutal de la desigualdad.

2. ¿Cómo viven los campesinos paraguayos este boom agroexportador?

Los efectos sobre campesinos e indígenas son múltiples; el primero es la expulsión de sus tierras, son obligados a abandonarlas de múltiples formas; ofreciéndoseles precios atractivos, alquilándoselas, y en caso de no lograrlo a través de fumigaciones con agrotóxicos o directamente apelando a bandas armadas que los amedrentan. La emigración campocidad es altísima y es gente que no puede insertarse a ningún mercado laboral, cae directamente en la marginalidad.

Los afecta también reduciendo su capacidad de producción de alimentos, en su salud por las fumigaciones (casos de muertes, malformaciones en neonatos, abortos espontáneos) y varias otras afecciones documen-

¹ Unión de Gremios de la Producción, Cámara Paraguaya Exportadora de Cereales y Oleaginosas, Asociación Rural del Paraguay, respectivamente.

tadas en la literatura médica. Hay destrucción de sus bosques, de sus fuentes de abastecimiento de agua. Y obviamente, la pérdida creciente y rápida de su capacidad de producir alimentos. En otras palabras, este modelo ha significado para ellos la destrucción de su horizonte de vida.

3. Muchos han criticado la fuerte dependencia del modelo agroexportador paraguayo de Brasil (y de los brasiguayos), ¿qué ha cambiado con la llegada al poder de Fernando Lugo?

Es a través de la migración brasilera desde fines de los años 60s que se introdujo el cultivo masivo de soja en el país. Ellos entraron en ese período (estaba Stroessner en el poder) con grandes privilegios arancelarios, impositivos, de ocupación territorial y otros, se afianzaron y dominan no sólo grandes extensiones de tierra, sino los canales financieros, cooperativos, de comercialización y hasta culturales. Para el campesino paraguayo ellos son la cara visible del modelo y no fueron ni son pocas las expresiones de hostilidad hacia ellos. Sin embargo, se pierde de vista que no son porque sean brasileros sino porque son los operadores del modelo de esta agricultura sin agricultores que actúan como actúan y este modelo no está impuesto por Brasil, está impuesto por el imperialismo (o sea, las corporaciones multinacionales) que asignó al cono sur sudamericano el rol de abastecedor de proteínas vegetales y animales al primer mundo. De ahí el concepto acuñado de las repúblicas unidas de la soja.

Obviamente la llegada al poder de Lugo no modificó un ápice esta situación, hasta me atrevería a opinar que por la debilidad política de su gobierno hizo aún mayores concesiones a estos actores del agronegocio.

4. Algunos analistas en Bolivia elogian al modelo económico de Paraguay por su alto crecimiento, e incluso algunos hablan de un “espectacular salto” y de que es una especie de “diamante secreto”. Dado que siempre conocimos a Paraguay como un modelo de capitalismo de la ilegalidad, alentado por una elite filomafiosa, ¿qué cambió en estos años?

Me apuro en confirmar que el modelo de capitalismo mafioso se afianzó en los últimos años, cada vez más el país es una mezcla en miniatura

de Colombia (por su modelo de “seguridad” y criminalización de las luchas campesinas) y de México (por el control de los narcos sobre las instituciones). Aquel concepto del Pentágono sobre los *estados fallidos* no puede ser mejor aplicado que al caso paraguayo.

En cuanto al crecimiento del PIB por la expansión de la agropecuaria hay que tener en cuenta que el crecimiento del país venía siendo de un 4%-5% durante esta década hasta el 2009, en que por efecto de la sequía que había afectado al país durante el 2008 se tuvo un crecimiento negativo de -5%, de modo que lo que ocurre en el 2010 no es sino una retomada de la tendencia que traía durante la década más un crecimiento real mucho más modesto de un 5% debido a la coyuntura de crisis mundial que elevó durante el último año el precio de las *commodities*.

5. *¿Cómo está hoy Lugo, dada su enfermedad, su aislamiento en el terreno institucional –especialmente el Congreso– y el acoso de la derecha?*

Lugo hace ya un tiempo se “reacomodó”. Se dio cuenta que necesitaba apoyo y empezó pidiéndoselo a la Embajada norteamericana (si es que vamos a dar crédito a Wikileaks). Encontró que no podría franquear la muralla del Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público y del 90% de la administración pública adherida como está al viejo régimen, además de la presión de la prensa empresarial enteramente disponible a los intereses empresariales y políticos de las elites conservadoras. El resultado es un importante proceso de derechización que se manifiesta de múltiples maneras, siendo la principal de ella el freno total que puso a –quizás– la principal de sus propuestas de campaña: la reforma agraria.

6. *El posible asilo político al exgobernador de Tarija Mario Cossío parece mostrar que los sectores conservadores manejan recursos claves del Estado paraguayo, ¿es así?*

El asilo concedido es vergonzoso y hace honor a la tradición del Paraguay, e iniciada en épocas de Stroessner, de dar refugio a cuanto delincuente internacional rondaba por el mundo. No podía esperarse otra cosa de la Conare, de un organismo constituido por representantes de aquellos poderes que representan los intereses de la derecha del país.

Afortunadamente el gobierno boliviano no cayó en la trampa tendida por los servicios de inteligencia norteamericanos de debilitar la relación entre nuestros países, metiendo una cuña más en sus esfuerzos por debilitar la integración latinoamericana.

7. ¿Se ha logrado construir una alternativa progresista en Paraguay o es más pensable que el Partido Colorado vuelva al poder en 2013?

Lamentablemente no. Los partidos de la izquierda paraguaya son muchos, están fragmentados y con históricas rivalidades que denotan una inmadurez política que no se ha logrado superar con esta administración. Algunos de ellos han incluso caído en los viejos vicios de los partidos oligárquicos. No sólo no existen personas, partidos... diría que ni siquiera existen ideas desde el progresismo paraguayo que logren movilizar a la gente o hacer vislumbrar una alternativa para el 2013.

Sobre la cantidad (probable) de campesinos sin tierra en el país*

El día 9 de marzo, el diario *abc color*¹, caracterizado por su sesgada orientación anticampesina, publica una nota sobre la cantidad de campesinos sin tierra en el país. Se basa en datos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). En un párrafo la nota dice textualmente: “Oficialmente el Indert tiene registrados sólo a 74.179 campesinos sin tierra”. Resulta obvio que una cosa es la cantidad de campesinos sin tierra que *registró* el Instituto y otra cosa muy distinta la cantidad de campesinos sin tierra que *existen* en la realidad. Confundir ambas cosas es, o ignorancia, o intención de confundir y mentir a la ciudadanía.

Al respecto, nuestro centro de investigación realizó hace pocos meses un trabajo en el que se intentó hacer estimaciones sobre la cantidad de *sin tierras* en el país. Se reproduce a continuación fragmentos del mismo:

“El cálculo de los campesinos sin tierra es más complicado e impreciso. Se presenta a continuación la forma como se ha procedido para su estimación. La población rural paraguaya, según el Censo de Población

¹ <http://www.abc.com.py/nota/hay-solo-74-179-campesinos-sin-tierra-en-todo-el-pais-segun-indert/>

* En: Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria <http://192.168.1.9/base/leermas.php?noticia=327>

y Vivienda del año 2002, era de 2.234.437, y la cantidad de hogares 454.085, con un promedio de 4,92 personas por hogar. Esta población subió a 2.584.097 en el 2009 y la cantidad de hogares a 600.346 (EPH 2009), un promedio de 4,30 personas por hogar.

El Censo Agropecuario 2008 por su parte censó 288.875 fincas en todo el país. El cruzamiento de datos de las dos mediciones da como resultado que en Paraguay, por cada finca agrícola, existen en promedio 2,07 hogares.

Al hacer la comparación se obtiene:

| Fuente | | Cantidad |
|-------------------------|---------|-----------------|
| EPH 2009 | Hogares | 600.346 |
| Censo Agropecuario 2008 | Fincas | 288.875 |
| Diferencia | | 311.471 |

Este resultado es la diferencia entre la cantidad de hogares rurales que estimó la EPH 2009 y la cantidad de fincas rurales que censó el Censo Agropecuario 2008. La EPH registra la cantidad de hogares, en tanto que el Censo registra fincas, predios o lotes, de ahí que la diferencia en la cantidad de hogares está representando que existen 600.346 hogares en 288.875 fincas o lotes. O sea, habría 2,07 hogares por finca campesina. Así pues, la diferencia de 311.471 es la cantidad de hogares (se supone, familias) integrados por familias que no tienen tierra”.

A quien pueda interesar.

2012

Paraguay puede convertirse en Narco-República si la sociedad paraguaya no toma en serio el peligro de retroceso en el 2013*

Palau seguirá marcando presencia con su pensamiento crítico, profundo y revolucionario, pese a la desaparición física que se da con su muerte.

Advierte con su crítica sobre el grave peligro que se cierne sobre el presente y futuro político del Paraguay. Señaló: “Hay dos grandes riesgos en Paraguay, ser una Narco-República o del Ultra Liberalismo”. Opina que si la sociedad paraguaya no se une, organiza y moviliza, el Paraguay puede terminar en manos del peor de los males la Narco-República y el neoliberalismo en el 2013. Advirtió sobre el plan autoritario que persiste en una minoría con riquezas malhabidas de nuestra sociedad, dijo: “El problema de tierras en Ñacunday busca satanizar al campesinado y los medios conservadores son sólo voces de la oligarquía en Paraguay”.

Palau analizó que: “La situación está muy empantanada; realmente estamos viendo una pugna entre un proyecto como lo es el luguismo, que tuvo mucho empuje en sus comienzos y después de trastabillar durante estos años, ahora está tratando de recuperar presencia. Así pues las perspectivas para el 2013 son las de afrontar dos alternativas aparte del luguismo: convertirnos en una Narco República por un lado, o caer

* Entrevista concedida a la Radio TV Nuevo Paraguay.

en un Ultra liberalismo en que podría convertirse esta fusión que está pidiendo Rafael Filizzola con los liberales”.

Se busca satanizar el problema de tierras en Ñacunday

En una visita por su oficina, el sociólogo Tomás Palau nos comentó sobre su visión acerca de temas relacionados con el problema de tierra en Ñacunday que busca “generalizar y satanizar” la Reforma Agraria, el comportamiento de los Medios de Comunicación sobre el derecho a la tierra de los campesinos y la Situación Política y Social del Paraguay. En cuanto al comportamiento de los medios, con relación a la problemática de la tierra, el sociólogo planteó que “es realmente patético; se supone que el periodismo tiene que ser una labor mínimamente independiente; pero lo que vemos en los medios masivos, es una total sujeción a los intereses de esta oligarquía y de las multinacionales. El pueblo no tiene voz; y ojalá un canal alternativo como el de Tekojoja se sume a esta ingente tarea para denunciar esta sujeción de los medios de prensa empresariales.

Reforma Agraria: Oligarquía no permite avances

El sociólogo Palau dijo: “Es poco o mucho lo que se puede decir de Reforma Agraria; poco en el sentido de lo avanzado, prácticamente la oligarquía nativa no ha dejado resquicios para que se pueda avanzar tanto desde el punto de vista administrativo, como del Legislativo y Judicial. Han sido puras obstrucciones a un proceso de otorgamiento de tierras a más de 200 mil familias campesinas existentes, y de asistencia casi a mil asentamientos repartidos en todas las zonas, ya que la Reforma Agraria tiene un componente tierra y de infraestructura productiva y comunitaria, y un componente de servicios productivos, que han sido otorgados a cuentagotas. En materia de infraestructura es poco también lo avanzado, algo en agua potable, en escuelas, en salud, pero en cuestiones de tierra, nada.

Denunció el bloqueo político al gobierno y le cuestiona a Lugo que le falta más agresividad y profundidad para dar solución al problema del campo, porque los intereses económicos del país y los grandes gru-

pos hegemónicos controlan la renta agropecuaria; estamos hablando de soja, ganadería, de exportaciones, y un conglomerado de grandes propietarios y multinacionales que controlan este negocio. Entonces, en ese terreno, el bloqueo político que ha tenido el gobierno de Lugo ha sido impresionante; pero me atrevería a decir que ha habido poca agresividad de parte del gobierno para satisfacer esta enorme demanda social que es la demanda de tierra”, afirmó.

Tomás Palau refirió: “Este conflicto que estamos presenciando en Ñacunday es un conflicto más de los probables muchos conflictos que estarán viniendo en el país por la irregularidad total de la tierra en el Paraguay; la salida a un problema tan grave como éste, también tiene que ser drástica, lograr un re-empadronamiento completo de la propiedad rural en el Paraguay. Mientras tanto, el INDERT haría mucho si pudiese regularizar la tenencia de la tierra de los asentamientos ya asignados, ver con la Procuraduría General de la República si pueden identificar y actuar de manera judicial y administrativamente con las tierras que fueron adjudicadas en su momento.

Con la muerte de Palau, se pierde una de las mentes más brillantes de este tiempo carente de ideas y de compromiso.

Se terminó de imprimir en diciembre 2013.

Arandurã Editorial

Tte. Fariña 1028

Teléfono: (595 21) 214 295

e-mail: arandura@hotmail.com

www.arandura.pyglocal.com

“En los países democráticos no se percibe la naturaleza violenta de la economía, mientras que en los países autoritarios lo que no se percibe es la naturaleza económica de la violencia”.
Bertold Brecht

El que dos millones de habitantes de un país con seis millones tenga hambre, o coma tarde, mal y nunca, representa un acto de notable violencia. Parecería que somos un país democrático -de acuerdo a Brecht- ya que pocos perciben la naturaleza violenta de la economía al excluir a tanta gente de un derecho tan básico como el del acceso al alimento. Sin embargo, también somos un país autoritario, ya que pocos perciben que el origen de la inseguridad, de la violencia, de los militares en el campo, o de la Fiscalía criminalizando a activistas sociales, o sea, la violencia que impera en el país, es de naturaleza económica.

Querer comer, dentro de pocos años, puede llegar a ser el motivo principal de la represión y los encarcelamientos. Quien no tenga dinero para comprar algo de comer, robará la comida, el que roba es sujeto de penalidades. Diría más, querer comer es ya hoy motivo de apresamiento, desalojos y represión para una parte importante de la sociedad paraguaya, el campesinado.

Tomás Palau Viladesau (2005)